

Editorial

Con la publicación de este décimo número, la revista del Observatorio Social de América Latina y el programa homónimo cumplen tres años de existencia. El desarrollo y la consolidación de este proyecto se dio de manera casi paralela a la intensificación de la protesta social y el fortalecimiento de movimientos y coaliciones populares en América Latina y el Caribe que –desde finales de los años ‘90– pusieron de manifiesto el inocultable fracaso de un modelo societal que durante dos décadas se expandió a casi toda la región, proclamando el fin de la historia y el imperio del pensamiento único.

Durante estos tres años de trabajo el *OSAL* ha intentado contribuir a la reflexión social sobre el conflicto y los movimientos que lo protagonizan, sumando su esfuerzo a una necesaria e impostergable tarea de renovación del pensamiento crítico y al debate sobre las alternativas de cambio y los horizontes emancipatorios. Las numerosas actividades realizadas, así como las colaboraciones publicadas y la elaboración de una cronología del conflicto social en 19 países latinoameri-

canos para todo el período, han procurado –en consonancia con los objetivos institucionales fijados para el programa– promover un necesario y permanente intercambio entre investigadores y protagonistas de las luchas sociales que se despliegan en Latinoamérica.

Cuando iniciamos nuestro trabajo la temática de los movimientos sociales y el conflicto guardaba aún un espacio marginal dentro de las preocupaciones de las disciplinas sociales al que lo había condenado la hegemonía del pensamiento único. Hoy, al calor de los procesos sociales que se viven en la región, estas cuestiones ocupan, cada vez más, la atención de nuestras sociedades, y consecuentemente, también de los investigadores y científicos sociales.

Es, en este sentido, una imagen aceptada públicamente que América Latina se encuentra ante un escenario nuevo, distinto de aquel que entronizó al modelo neoliberal a principios de los '90. Un escenario que, como ya lo señalamos en números anteriores, aparece signado por las esperanzas de un cambio, así como por los riesgos de una nueva frustración y las amenazas de la instauración de un orden más autoritario y represivo, tanto a nivel internacional como regional. En cada uno de nuestros países, de manera diferente, estos presentes posibles interpelan a los movimientos populares, constituidos o consolidados bajo la influencia del ciclo de protestas que emerge a partir de mediados de los '90.

Los cambios en formato y diseño que introducimos en este décimo número de la revista –y que esperamos faciliten la distribución y difusión de la publicación así como permitan una lectura más ágil de la misma– acompañan nuestra intención de abordar las reflexiones y debates sociales que se plantean alrededor de esta nueva realidad regional, a la luz de las experiencias de movilización y construcción de alternativas que gestan cotidianamente los pueblos latinoamericanos. Esperamos dar cuenta de ello conservando la estructura de secciones que caracterizó a la publicación desde su origen.

Así pues, el dossier central de este número está dedicado a analizar la revuelta popular desatada en los primeros días de febrero en Bolivia –particularmente en la ciudad de La Paz– en respuesta a la decisión del presidente Sánchez de Losada de implementar un impuesto sobre los salarios destinado a disminuir el déficit fiscal en consonancia con las exigencias formuladas por los organismos internacionales de crédito. La naturaleza de la movilización social, las dimensiones y raíces de la crisis política abierta durante ese período, el significado del enfrentamiento entre las fuerzas armadas del Estado (el ejército y la policía), la inscripción de este proceso en el ciclo de movilizaciones y luchas anteriores, y el análisis de las alternativas planteadas, sintetizan las principales cuestiones abordadas en los diferentes textos que presentamos. Las contribuciones de Pablo Solón, Claudia Espinoza y Gonzalo Gozalvez, Tania Aillón Gómez y Álvaro García Linera reflexionan sobre ello desde diferentes perspectivas. En la sección siguiente incluimos dos declaraciones elaboradas por lo que ha dado en llamarse el “Estado Mayor del Pueblo Boliviano”, espacio de coordinación multi-

sectorial que reúne a una parte significativa de las organizaciones y movimientos populares de dicho país, la primera del 19 de enero, y la segunda del 16 de febrero de 2003.

Por otra parte, el escenario regional e internacional estuvo signado durante los primeros meses de 2003 por los esfuerzos bélicos y diplomáticos anglo-norteamericanos tendientes a legitimar la agresión imperial en Irak, que se hizo efectiva con el ataque iniciado el 19 de marzo del presente año. La convocatoria lanzada por los movimientos sociales reunidos en el III Foro Social Mundial de Porto Alegre en febrero de este año para oponerse a la intervención imperialista fueron un impulso decisivo a la constitución y expresión de un movimiento internacional contra la guerra que no tiene antecedentes en la historia de la humanidad. La amplitud y envergadura de dicho movimiento quedó de manifiesto en las acciones globales de los meses de febrero y marzo cuando millones de habitantes del planeta recorrieron juntos las calles de numerosas ciudades a lo largo del mundo. Si bien estas movilizaciones no lograron detener la agresión militar, su extensión y masividad fueron sin duda decisivas para deslegitimar la voluntad de Estados Unidos de instaurar un nuevo orden internacional fundado exclusivamente en su interés económico y geopolítico y, en última instancia, en la fuerza.

El segundo dossier, que cierra la revista, está orientado a reflexionar sobre las características que adopta esta "guerra imperial", sus consecuencias en el terreno internacional, y las potencialidades y desafíos que enfrenta el movimiento de resistencia global frente a un contexto de creciente difusión del "neoliberalismo de guerra". Sobre ello recogemos las excelentes contribuciones de José María Gómez, Tariq Ali y Manuel Monereo. Estas consideraciones se acompañan de sendos documentos que dan cuenta de los esfuerzos sociales, tanto en el ámbito internacional como latinoamericano, por denunciar y enfrentar esta política de "guerra global permanente" que caracteriza la fase actual de la mundialización neoliberal. Incluimos así la declaración del Consenso de Paz de Yakarta, resultado de la reunión que tuvo lugar en dicha ciudad del sudeste asiático a fines de mayo del presente año. Asimismo publicamos la declaración del 1º Encuentro Hemisférico contra la Militarización realizado durante los primeros días de mayo en la ciudad chiapaneca de San Cristóbal de las Casas, México. Si bien ambas declaraciones nos remiten a encuentros realizados más allá del período que cubre el presente número, consideramos importante incluirlas a los efectos de presentar las iniciativas que los movimientos y coaliciones sociales impulsan luego de la invasión a Irak.

América Latina, como señalamos en el artículo introductorio a la sección Cronologías del conflicto social, no estuvo ajena a esta movilización internacional contra la guerra. En dicho texto, además de presentar una reseña sobre las características sobresalientes de la conflictividad social del período, puede consultarse un detallado análisis de los procesos de militarización social que trágicamente se despliegan hoy en diferentes países –particular-

mente en relación a Colombia y el área andina— así como respecto de los tratados de libre comercio regionales —pasos hacia la constitución de la iniciativa norteamericana del Área de Libre Comercio de las Américas— y las importantes protestas y convergencias que contra ellos se manifiestan en este período, especialmente en los países centroamericanos.

A continuación incluimos el señalamiento de los principales hechos de conflicto social acontecidos en 19 países de la región a lo largo del primer cuatrimestre de este año. Estas cronologías del conflicto van acompañadas de distintas reflexiones sobre los procesos vividos en Brasil, Ecuador y México. En el primer caso, Roberto Leher nos presenta un detallado análisis del triunfo de Lula en Brasil, desde la conformación de la alianza electoral y los posicionamientos asumidos a lo largo de la campaña hasta el rumbo propiciado en los primeros meses de gestión. A la luz de este proceso, el autor señala los debates y las diferentes perspectivas que al interior del Partido de los Trabajadores (PT) y de la Central Única de los Trabajadores (CUT) y el Movimiento Sin Tierra (MST) se formulan frente a la adopción de una política macroeconómica que privilegia el recetario ortodoxo, profundizando, en el caso de estos movimientos sociales, el análisis de la reforma de la previsión social y la política agraria impulsadas por el nuevo gobierno.

En similar dirección, Ángel Bonilla y Ana María Larrea reflexionan sobre la situación ecuatoriana en relación a la naturaleza de la coalición electoral que llevó a la presidencia a Lucio Gutiérrez y a los desafíos y riesgos que, frente a los rumbos adoptados por el nuevo presidente y a la luz de su experiencia anterior, enfrenta el movimiento indígena —tanto en lo que respecta a su inscripción social sintetizada en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador como en la animación del partido Pachakutik que participa del gobierno.

Finalmente, Armando Bartra analiza la experiencia reciente de movilizaciones y luchas que conmovió al campo mexicano y que cristalizó particularmente en la coalición llamada “El Campo No Aguanta Más”. La que el autor considera la mayor movilización campesina de la posrevolución, motivada fundamentalmente en la oposición al capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, acontece nueve años después del levantamiento zapatista contra la puesta en marcha de este tratado. El “agrocidio” que promueven estas políticas se confronta con una revitalización de los movimientos rurales que no sólo toma cuerpo en México sino que parece proyectarse también a toda el área centroamericana.

En su diversidad tanto los textos como las cronologías del conflicto social aportan elementos empíricos y reflexiones sobre los procesos de lucha social y su relación con la situación política y económica que signa los primeros cuatro meses en la región latinoamericana. Otras contribuciones que por limitaciones de espacio o de tiempo no hemos podido incluir en este número pueden consultarse en <http://osal.clacso.org>.

Análisis de casos

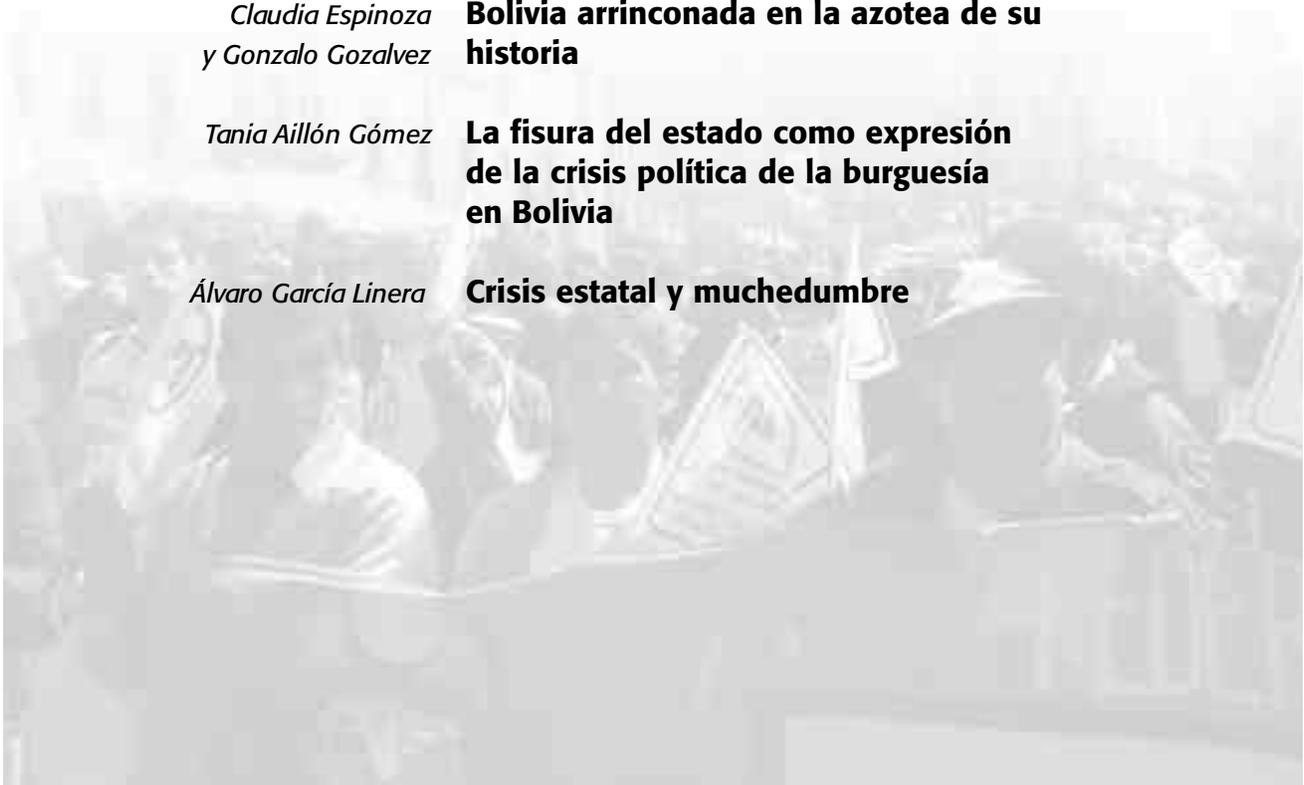
El febrero boliviano Crisis política y revuelta popular

Pablo Solón **Radiografía de un febrero**

*Claudia Espinoza
y Gonzalo Gozalvez* **Bolivia arrinconada en la azotea de su historia**

Tania Aillón Gómez **La fisura del estado como expresión de la crisis política de la burguesía en Bolivia**

Álvaro García Linera **Crisis estatal y muchedumbre**



Radiografía de un febrero

Pablo Solón*

* *Investigador
Fundación Solón*

El palacio de gobierno estaba lleno de humo. En las esquinas del hall principal, que tiene las dimensiones de una cancha de voleibol, ardían pequeñas fogatas con las cuales se intentaba alejar los gases lacrimógenos. Unos treinta soldados estaban de cucullas en los pasillos tratando de escapar de sus nocivos efectos. El ministro de Defensa, Freddy Teodovich, conversaba con Waldo Albarracín, Presidente de la Asamblea de los Derechos Humanos: “nosotros no queremos un enfrentamiento con la policía”. Eran las 12.30 del miércoles 12 de febrero. Los periodistas corrían de aquí para allá mientras los encargados de seguridad los arreaban hacia la sala de prensa para que no siguieran husmeando en las intimidades del Palacio. El ministro de la Presidencia, Sánchez Berzaín, más conocido como “el zorro”, bajó con esa sonrisa de siempre: “La situación está siendo controlada, no hay de que preocuparse, el gobierno no es responsable de nada...Mucho gusto, hasta luego”. Afuera, en la Plaza Murillo, llovían los gases lacrimógenos y se escuchaban los primeros disparos.

El Vicepresidente de Bolivia, Carlos D. Mesa, diría semanas después a la Misión Internacional de Lucha contra la Impunidad que visitó Bolivia que, mientras él miraba los disturbios por la ventana pensando en que así debió ser el colgamiento del presidente Villarroel (1947), el actual presidente Sánchez de Lozada conversaba por teléfono con la embajada americana.

Todo comenzó el 9 de febrero cuando el gobierno anunció el “impuestazo al salario” para reducir el déficit fiscal por orden del FMI. Era “impuestazo o gasolinazo”, decía el presidente. El déficit fiscal había crecido al 8,5% por la privatización del servicio de pensiones de los jubilados, y el FMI exigía que se lo redujera a 3,5% para otorgar nuevos créditos. El gobierno presentó la medida como una gran idea: “en vez del gasolinazo que afecta a todos, sólo vamos a afectar a los asalariados que no son una mayoría. Además, lo haremos en una escala gradual que irá desde un descuento del 4,2% para quienes ganan más de 880 Bs (115 u\$s) hasta un descuento del 12% para los que ganan más de 20.000 Bs (2.630 u\$s).”

La chispa que encendió la hoguera

¿Por qué una medida que en teoría sólo afectaba de forma directa a los asalariados, que representan el 10% de la población en Bolivia, provocó una revuelta generalizada del conjunto de la población? El argumento esgrimido por los empresarios era que la disminución de la masa salarial iba a constreñir el consumo, y por tanto iba a afectar más el ya deteriorado aparato productivo. Esto es cierto, pero insuficiente para explicar la rebelión popular.

Los orígenes del 12 y 13 de febrero vienen de mucho más atrás, y no se pueden explicar sólo por la relación causa-efecto de la coyuntura, sino por una acumulación explosiva de diecisiete años de aplicación del modelo neoliberal.

Bolivia vivió en 1952 una gran revolución obrera y campesina que derrotó al ejército, nacionalizó las minas, conquistó el voto universal y realizó la reforma agraria. Esta revolución, sin embargo, fue contenida en los moldes del capitalismo de estado por la traición de las direcciones de la recientemente constituida COB, que confiaron en el MNR¹ y Paz Estensoro antes que en sus propias fuerzas.

Entre 1952 y 1985 Bolivia vivió bajo un capitalismo de estado en el cual las principales industrias, servicios y recursos naturales estaban en manos del Estado. Fueron treinta y tres años de hegemonía casi absoluta del proletariado minero como vanguardia de las luchas sociales. A pesar de los golpes militares y las derrotas que hubo en ese período,

se mantuvo en esencia la estructura del capitalismo estado y la vanguardia minera. La Central Obrera Boliviana era una de las pocas centrales del mundo que abarcaba a casi todos los sectores sociales y que tenía una disciplina y una unidad muy grandes.

En 1982 comenzó el eclipse de la COB y el movimiento minero, cuando la Unidad Democrática y Popular llegó al gobierno. La UDP era un frente visto como de izquierda por la población. En su seno estaban el MNR-I, el PCB y el MIR², que en ese entonces tenía un pasado "cristiano guerrillero". El ascenso de la UDP despertó grandes expectativas. Había ganado tres elecciones seguidas en medio de tres golpes de estado y tres recuperaciones de la democracia. El PCB y el MIR tenían en sus filas a gran parte de los dirigentes sindicales del país.

Pero el gobierno de la UDP fue un total fracaso, y lo peor de todo, una gran frustración. Quiso contentar a moros y cristianos. Sin romper con el FMI ni suspender el pago de la deuda externa, buscó satisfacer las demandas crecientes de obreros y campesinos. El resultado fue trágico para los trabajadores: en ningún otro período de la historia el poder adquisitivo de los salarios cayó tanto como producto de la hiperinflación. Los obreros y campesinos lograron importantes conquistas en el papel, pero en la práctica no había dinero para hacer realidad esas reivindicaciones. Se imprimían billetes sin respaldo, y la inflación trepaba. En vez de parar la sangría de la deuda externa para contar con recursos frescos, la UDP favoreció "de a de veras" a los empresarios, desdolarizando sus deudas. En otras palabras, el Estado asumió la deuda de los empresarios privados.

Del capitalismo de estado al capitalismo neoliberal

En política los errores se pagan. Y el movimiento obrero pagó los platos rotos de ese gobierno. La UDP tuvo que acortar en un año su mandato. En las elecciones de 1985 ganaron los enemigos de antes, la ADN³ en primer lugar, es decir el dictador Banzer, a quien pocos años antes se había derrocado, y el MNR. Paz Estensoro, del MNR, se hizo elegir presidente en el Congreso con apoyo de casi todos los partidos, y comenzó a estabilizar el país sometiendo a los trabajadores, en particular a su vanguardia minera. Más de 30.000 mineros fueron a dar a la calle por los despidos y 10.000 trabajadores industriales quedaron sin trabajo. El modelo neoliberal empezó a aplicarse y a lograr contener la hiperinflación a costa de los trabajadores. La receta neoliberal era simple: sólo hay que gastar lo que se tiene. En síntesis, para gastar menos hay que achicar el aparato del estado despidiendo trabajadores, recortando las conquistas sociales y deshaciéndose de todas las empresas.

Fueron quince años de aplicación casi ininterrumpida del modelo neoliberal en Bolivia. Todas las empresas estatales fueron privatizadas a través de la llamada "capitalización" y

las concesiones a privados. Los hidrocarburos, los ferrocarriles, las telecomunicaciones, el transporte aéreo, los fondos de pensiones, la electricidad, las empresas mineras, los bosques, casi todo fue privatizado. La banca de fomento vinculada al estado fue declarada en quiebra, las subvenciones a los sectores productivos más desprotegidos fueron suprimidas, la libre importación de productos fue aplicada mucho antes de que entraran en vigencia los acuerdos de la ronda de Uruguay que dieron nacimiento a la Organización Mundial del Comercio. El capitalismo de estado fue desmantelado.

Durante estos quince años hubo muchas luchas de resistencia. Los mineros, los maestros, los trabajadores de la salud, todos a su turno salieron a las calles para oponerse a una y otra medida neoliberal de los gobiernos del MNR, el MIR y la ADN que se sucedieron en el gobierno. Sin embargo, la gran mayoría de esas movilizaciones acabó en derrotas o empates pírricos, en la forma de convenios que nunca se cumplieron.

Todas estas luchas se dieron en medio de una situación de total escepticismo. El fracaso de la UDP, sumado a la caída del bloque de la Unión Soviética y al llamado "fracaso del socialismo", hacía que el pragmatismo y el "sálvese quien pueda" fomentaran la corrupción y el "pasa-pasa" de la gran mayoría de los izquierdistas. El otrora MIR de pasado izquierdista cruzó el río de sangre que lo separaba de la ADN y se puso a cogobernar con el general Banzer. La intelectualidad crítica fue cooptada económica e ideológicamente.

La promesa neoliberal era que el achicamiento del estado y la privatización de sus empresas y recursos iban a atraer a la inversión extranjera. La inversión extranjera directa iba a desarrollar el aparato productivo en crisis y a generar fuentes de trabajo, mejorando el ingreso de todos los bolivianos. Jaime Paz Zamora acuñó el slogan "exportar o morir". Todo el desarrollo del país estaba puesto en manos del mercado y las inversiones externas.

Los años fueron pasando, las empresas se fueron privatizando, pero el anunciado despegue se convirtió en un permanente aterrizaje de panza para la gran mayoría de la población.

El agua es nuestra, icarajo!

La espera se transformó en desesperación. Los partidos del sistema neoliberal (ADN, MIR y MNR) no se dieron cuenta de la situación y siguieron como si nada pasara. Esta vez, buscando privatizar el agua. Presentaron en el parlamento nacional un proyecto de Ley de Agua que privatizaba y mercantilizaba este recurso. Las marchas de protesta co-

“Por primera vez en quince años la población le había ganado al gobierno, había recobrado la confianza y la esperanza en su propia fuerza. A partir de entonces ya nada volvió a ser igual para los neoliberales en Bolivia.”

menzaron desde el campo. El rechazo era muy grande. El gobierno de Banzer dio marcha atrás y pretendió meter por la ventana lo que no había entrado por la puerta. Dio en concesión a una transnacional el servicio de agua potable municipal de la ciudad de Cochabamba, y aprobó en un tiempo record de 48 horas una ley dizque sólo de agua potable y alcantarillado, pero que en su último artículo le otorgaba a la Superintendencia de Saneamiento Básico todas las atribuciones de una Superintendencia de Aguas para todos los usos del recurso hídrico.

La guerra del agua comenzó en enero de 2000. Fue la primera batalla protagonizada sobre todo por los regantes campesinos de Cochabamba. Después vino la segunda batalla en febrero. Una marcha a la plaza principal se convirtió en una verdadera guerra contra la policía y el ejército, que impedían el acceso de los manifestantes a la plaza 14 de septiembre. Dos días enteros duró el combate. Toda la población de la ciudad, la periferia y el campo se movilizó. En cada calle había un bloqueo. Aún en los barrios más acomodados la gente salió a poner algunos trastos viejos en la calle. En las cercanías de la plaza 14 de septiembre se creó en algunas horas toda una red de solidaridad para apoyar a “los guerreros del agua”. De los edificios caían papeles, cartones y maderas para hacer fogatas. En decenas de casas se preparaba comida y refresco. Todas las radios cochabambinas se unieron contra el gobierno. Al cabo de dos días se firmó un convenio muy precario y la multitud entró a la plaza, a “su plaza”.

Para abril de 2000 se fijó la batalla decisiva en Cochabamba. La Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida que había sido creada hacía menos de seis meses exigía la revocatoria del contrato de concesión a Aguas del Tunari y la modificación radical de la ley de agua potable y alcantarillado. Esta vez el conflicto se extendió por nueve días. El gobierno se jugó a quebrar la lucha de la Coordinadora, persiguiendo y deteniendo a sus dirigentes. Declaró un estado de sitio que por primera vez en quince años de modelo neoliberal no se cumplió, porque la gente le per-

dió el miedo. La lucha no sólo fue en Cochabamba. En La Paz y el resto del país se dieron bloqueos de caminos. El país estaba paralizado. Y entonces se produjo el motín de la policía en La Paz. Este fue el primer motín de magnitud de la época neoliberal.

Frente a semejante situación, el gobierno no tuvo más remedio que romper el contrato y modificar la ley en un tiempo record. Por primera vez en quince años la población le había ganado al gobierno, había recobrado la confianza y la esperanza en su propia fuerza. A partir de entonces ya nada volvió a ser igual para los neoliberales en Bolivia.

En septiembre de 2000 se produjo un bloqueo nacional con gran incidencia en La Paz, que dejó aislada a la ciudad por dos semanas. En 2001 y 2002 se repitieron los bloqueos de caminos en el campo, las marchas, las protestas.

Los campesinos, los coccaleros y los indígenas

El modelo neoliberal golpeó a todos. A los asalariados les inflingió una derrota física con los despidos masivos. A los campesinos e indígenas, en cambio, los hizo a veces retroceder pero nunca los venció. Los productores de coca del Chapare de Cochabamba fueron uno de los sectores más golpeados, con más muertos por disparos de bala del ejército que ningún otro sector, pero nunca se rindieron. La erradicación de plantaciones de coca logró avances importantes a fines de los '90, pero a medida que se acercaba el anhelado sueño de "coca cero" más crecía la resistencia y nuevamente aparecían nuevas plantaciones camufladas en medio de la maleza.

La derrota de la histórica vanguardia minera y del conjunto de los asalariados trajo a primer plano las luchas campesinas, coccaleras e indígenas. La recuperación de su identidad aymara, quechua y guaraní, que en otros tiempos era eclipsada por los conceptos del clasismo obrerista, se empezó a desarrollar. Los movimientos campesino-indígenas empezaron a plantearse la lucha no sólo por la tierra sino también por el territorio. El "territorio" en sus múltiples dimensiones. Por un lado como derecho no sólo al suelo, sino también a los recursos naturales que están en el subsuelo y en el "vuelo", como los árboles, las aves y la biodiversidad, que hoy se quieren concesionar a empresas privadas. Por otro lado, como respeto a sus autoridades originarias, a sus formas de autogobierno, a sus usos y costumbres, a su derecho consuetudinario. "Territorio" entendido no sólo como espacio físico sino como soberanía, como derecho a ser y existir, como identidad cultural, como derecho a ser diferente en un mundo que cada vez tiende más a la uniformización por la globalización.

En Bolivia los campesinos son indígenas. Casi no hay agricultor o habitante del campo que no sea aymara, quechua, guaraní o de algún pueblo indígena. Sin embargo, la re-

volución de 1952, que les dio la reforma agraria y la tierra a los aymaras y quechuas, y no así a los pueblos indígenas del oriente, consideró a los primeros sólo en su dimensión económico-social: "campesinos". Por eso, en general, los aymaras y quechuas eran llamados campesinos y se organizaban en sindicatos o comunidades campesinas, mientras los guaraníes, los ayoreos, los yukis y más de treinta grupos étnicos eran considerados indígenas, selvícolas, que no tenían directamente derecho de propiedad sobre la tierra y que necesitaban de la protección del estado o de algún patrón. En las últimas décadas esta separación entre lo campesino y lo indígena se ha roto. La amplia mayoría de campesinos del occidente reivindica su identidad como aymaras o quechuas. El neoliberalismo y la globalización, en su afán de uniformizar y convertir todo en una mercancía, han acabado fortaleciendo las raíces de la diversidad y la identidad cultural en Bolivia.



Esta emergencia de los campesinos, indígenas y cocaleros, y la constatación de que sus demandas cada vez más chocan con el estado, llevó a los sindicatos campesinos a plantearse la organización de un "instrumento político" para intervenir en las elecciones y en la política en general. Esta propuesta se fue extendiendo por todo el país con motivo de los quinientos años del descubrimiento de América, y donde más éxitos obtuvo fue en el Chapare, en la zona cocalera, y posteriormente en Cochabamba, donde conquistaron cuatro diputaciones y decenas de concejales municipales y alcaldías. El Instrumento Político no es un partido político, según las organizaciones campesinas e indígenas, porque está sometido a la comunidad, porque la organización social elige a sus candidatos y define su política. "Es un instrumento, no una agrupación de políticos profesionales".

Este Instrumento Político, cuyo nombre original era Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, trató en varias ocasiones de obtener su personería jurídica para intervenir en las elecciones. Sin embargo, la Corte Electoral nunca los reconoció. Fue así que participaron de las elecciones en frentes o prestándose siglas, hasta que al final determinaron quedarse con la sigla partidaria del MAS (Movimiento al Socialismo), que era una de las pocas que tenía reconocimiento legal y que sus dirigentes aceptaron traspasarles.

Este Instrumento Político, cuyo nombre original era Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, trató en varias ocasiones de obtener su personería jurídica para intervenir en las elecciones. Sin embargo, la Corte Electoral nunca los reconoció. Fue así que participaron de las elecciones en frentes o prestándose siglas, hasta que al final determinaron quedarse con la sigla partidaria del MAS (Movimiento al Socialismo), que era una de las pocas que tenía reconocimiento legal y que sus dirigentes aceptaron traspasarles.

Vísperas de febrero

Hasta las elecciones de junio de 2002 el fenómeno del Instrumento Político era fundamentalmente rural, asentado sobre todo en Cochabamba. En esas elecciones cambió la historia. La acumulación de descontento social, la crisis de los partidos tradicionales, el agotamiento del modelo neoliberal, el descrédito en el sistema democrático, la bronca, la rabia, la impotencia y la soberbia del embajador norteamericano, que llamó abiertamente a votar en contra de Evo Morales, hicieron que el MAS ganara en cuatro de los nueve departamentos, en dos de los tres más importantes departamentos del eje central La Paz-Cochabamba-Santa Cruz, y que casi terminara primero en las elecciones para presidente.

Sánchez de Lozada fue elegido presidente gracias a la embajada norteamericana, que sentó al MIR y al MNR para que cogobernaran juntos. Los dirigentes del MIR, que antes eran sindicados de narcotraficantes y habían perdido la visa a los Estados Unidos, recuperaron la entrada al país del norte. Todo con tal de parar el fenómeno Evo.

Todos los analistas políticos y la prensa advirtieron que el gobierno de Sánchez de Lozada era muy débil, que debía concertar, que no podía gobernar como antes. Por su parte, el MAS planteaba una oposición nunca antes vista: nada de pegas, nada de con-tubernio. Las propuestas del MAS eran y siguen siendo Asamblea Constituyente Popular y de las Nacionalidad Originarias para refundar el país, recuperación del gas y los hidrocarburos de las manos de las transnacionales, rechazo al ALCA, soberanía y defensa de la hoja de coca. Un programa que para algunos podrá parecer insuficiente pero que en la práctica es una muralla china, porque ninguno de esos puntos es aceptable para el sistema, en especial mientras la embajada norteamericana siga gobernando Bolivia.

Durante los primeros meses de su gobierno, Sánchez de Lozada intentó descomprimir la lucha cocalera estudiando la posibilidad de darle algunas concesiones. Inmediatamente la embajada reaccionó diciendo que eso era inaceptable, y Sánchez de Lozada dio marcha atrás. Sobre los otros puntos la situación es aún mucho menos aceptable para el sistema. La propuesta de Asamblea Constituyente es muy resistida porque, según palabras del propio vicepresidente, la posibilidad de que ganen los sectores antineoliberales es muy grande, y en todo caso podría ser una Constituyente de partidos, pero jamás popular y de las nacionalidades originarias.

El segundo semestre de 2002 fue un permanente amague de conflictos entre las fuerzas sociales y el gobierno. Tanto unas como otro sabían que el choque era inevitable, y cada quien buscaba prepararse a su manera. El MAS y Evo Morales buscaban darle or-

ganicidad a su triunfo electoral, transformar el apoyo electoral en fuerza organizada, sobre todo fuera de Cochabamba. El gobierno quería desgastar al MAS con interminables diálogos y estudios que no llevaban a nada.

El inicio del conflicto se fijó para el 13 de enero de 2003. Ese día, diferentes organizaciones sociales convocaron al bloqueo de caminos por un pliego petitorio de demandas estructurales. La vanguardia fueron los cocaleros, que garantizaron el corte de rutas a pesar de la militarización más grande de los caminos que se haya visto. En el resto del país las movilizaciones fueron creciendo lentamente. Sánchez de Lozada, que hasta entonces había instruido a sus ministros para evitar todo conflicto, salió a reprimir con todo. En menos de 48 horas ya había cuatro campesinos muertos. La represión se hizo salvaje, pero el movimiento no se quebró, y logró incorporar a sectores campesinos de Chuquisaca que fueron decisivos para obligar al gobierno a una salida negociada. El gobierno y la embajada se jugaron a aplastar física y militarmente a los movimientos emergentes, en particular a los cocaleros. Quisieron darles una lección y amedrentar al resto del país. El resultado fue que tuvieron que dar marcha atrás. Enero terminó con más de una decena de muertos por bala y una serie de mesas de diálogo para discutir los temas del gas, la capitalización-privatización, el ALCA, la coca, etc.

Febrero

No sabemos qué razonamiento habrá pasado por las mentes de los estrategas del gobierno y la Embajada para lanzar el "impuestazo". Probablemente creyeron que el movimiento estaba desgastado después de enero. Otros dicen que en verdad querían una reacción popular para terminar lo que no habían podido hacer un mes antes. Los más cercanos al gobierno dicen que jamás se imaginaron una reacción semejante. Lo cierto es que en sus cálculos no entraba el motín policial.

El descontento en la Policía siempre estuvo latente, y ya había dado un dolor de cabeza al gobierno de Banzer. Los policías habían aprendido en abril de 2000, en ocasión de la guerra del agua, que el mejor momento para amotinarse o, como ellos dicen, para "replegarse", es cuando hay conflictos sociales, porque ahí es cuando más poder de presión tienen frente al gobierno. En abril de 2000 lograron que el gobierno cediera parcialmente a sus demandas. Ahora esperaban hacer lo mismo con Sánchez de Lozada.

El motín empezó el 11 de febrero. Esa noche el ministro de Gobierno, en vez de negociar con ellos, fue a emplazarlos para que suspendieran sus medidas de presión. ¿Estupidez del ministro? ¿Política de la embajada para sentarles la mano? Difícil saberlo.

Lo cierto es que al día siguiente el motín que empezó en el GES⁴ de La Paz, a cuadra y media de la casa de gobierno, se esparció como reguero de pólvora por todas las guarniciones de la ciudad de La Paz y el interior del país.

El miércoles 12 de febrero el Palacio de Gobierno amaneció sin protección policial. Los estudiantes del colegio Ayacucho no desperdiciaron la oportunidad, y fueron a apedrear la casa de gobierno. Sánchez de Lozada instruyó la movilización de las Fuerzas Armadas para proteger sus oficinas.

A las 13.30 comenzó una balacera de increíbles proporciones. ¿Quién dio la orden de acribillar las posiciones de la policía que estaban justo en diagonal a los de la casa de gobierno? Hasta el día de hoy todos los ministros callan. El resultado de ese día fueron once policías y cuatro militares muertos. A las 16.30 Sánchez de Lozada apareció por la televisión para anunciar que retiraba el "impuestazo" y llamaba a la pacificación. Nadie le hizo caso. La gente asaltó y quemó el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y la Vicepresidencia. Luego siguieron la sede del MNR, el MIR y la ADN, después una serie de negocios.

A las 18.30 Sánchez De Lozada volvió a aparecer junto a los Comandantes de la Policía y las Fuerzas Armadas para que ellos llamaran a la calma a sus camaradas. La Paz anochejó sin canales de televisión porque todos dejaron de transmitir por temor a ser asaltados por la "turba" y los "vándalos", como les gusta calificarlos.



© Pablo Dalence

Al amanecer del jueves 13 de febrero las radios anunciaron que el gobierno había arribado a un acuerdo con los policías, y que este acuerdo estaba siendo consultado en las distintas guarniciones del país. En las calles no había ningún policía. Su lugar había sido tomado por el Ejército, que rodeó de tanques y carros de asalto los alrededores de la Plaza Murillo. Todos los medios de comunicación llamaron a la población a no salir de sus casas. Sin embargo, la marcha convocada por todas las organizaciones sociales y la oposición fue numerosa. El pedido unánime era la renuncia de Sánchez de Lozada y Carlos Meza.

Ese día murieron más de una decena de civiles por impactos de bala. El gobierno dice que fueron francotiradores que no eran del ejército ni de la policía. En todo caso eran tiradores francos del ejército, que dispararon incluso contra una enfermera y una doctora de la Cruz Roja, tal cual lo muestra un video presentado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. En El Alto también murieron varias personas cuando un helicóptero sobrevolaba la fábrica de Coca-Cola.

Las marchas y movilizaciones también se sucedieron en Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Trinidad. Al principio los comentaristas de televisión felicitaban a la marcha de Santa Cruz por su carácter pacífico; luego tuvieron que tragarse sus palabras cuando empezaron a asaltar la casa del MNR. Al final del día la policía volvió a salir a las calles y la situación empezó a calmarse.

Lo que vivió Bolivia durante el 12 y el 13 de febrero no fue fruto del nerviosismo: 33 muertos y 189 heridos no se producen sin que medie orden de autoridad alguna. Y si a estos muertos sumamos los muertos del bloqueo de caminos de enero, resulta que Bolivia, en menos de dos meses, supera el medio centenar de asesinados por balas del ejército.

Tantas víctimas no son casuales, son el resultado de una política de represión y militarización que viene desde el norte y que se expresa en la política guerrillera en Irak, la asonada golpista contra Chávez y el intento de romperle el espinazo a los movimientos sociales y campesinos en Bolivia. Hubo y hay una política consciente de quebrar físicamente el ascenso popular en Bolivia.

Pero de esta contienda quien salió perdiendo fue el gobierno. Muchos dicen que ya es un cadáver político. Puede ser, pero en política los cadáveres aun pueden romperte los huesos. El gobierno no reconoce nada. Han pasado tres meses y nadie ha sido detenido a pesar de las imágenes y evidencias. La razón es obvia: si se detiene a un uniformado, sea del Ejército o de la Policía, su institución saldrá a defenderlo. ¿Cómo? Mejor no averiguarlo.

El gobierno por un lado anda pidiendo plata a la cooperación extranjera para reestructurar la policía, y por otro lado apela a la iglesia para que propicie un pacto social,

reencuentro, matrimonio o concubinato entre las fuerzas de oposición encabezadas por el MAS y los partidos del gobierno. La estrategia es clara, ganar tiempo mientras se recomponen las instituciones del orden para garantizar la continuidad del sistema capitalista. España ya le ha ofrecido dinero al gobierno boliviano para “institucionalizar” la entidad policial.

El mes de marzo estuvo marcado por rumores de golpe. La embajada norteamericana entregó un informe de la CIA diciendo que Evo Morales estaba promoviendo un golpe de estado en el cual iba a morir a manos de un ala de su propio partido, el MAS. Las señales de la embajada eran claras: amedrentar y preparar una asonada no para instaurar una dictadura militar, sino para eliminar a los principales líderes de los movimientos sociales.

Varios intelectuales de oposición salieron a decir que para salvar la democracia y evitar el golpe exterminador había que aceptar el pacto social con el gobierno. Otros dijeron que el pacto social era necesario para ganarse a la clase media, que había quedado espantada por la violencia de febrero. Sin embargo, la propuesta no encontró ningún asidero en los dirigentes y las bases de las organizaciones sociales que no quieren saber de pactos con los verdugos de febrero. Si hay un golpe de estado, será promovido por la propia embajada y sectores del gobierno. Querer evitar este peligro aliándose con ellos es una estupidez.

La sociedad boliviana se ha polarizado después de febrero. La clase media acomodada, que antes podía aceptar un discurso progresista, hoy ha pasado a defender férreamente sus privilegios amenazados por la “turba enardecida”. Querer ganar a esa clase media es imposible.

La clave del futuro está en el desenvolvimiento de la clase media baja, de los sectores populares urbanos. Febrero fue una sorpresa no sólo para el gobierno sino también para las fuerzas del MAS, que fueron desbordadas en las ciudades. Quienes estuvieron en las calles el 12 y 13 de febrero no estaban organizados en ninguna fuerza política ni organización social. Evo Morales era sin duda un referente muy importante en el levantamiento, pero no era la dirección real del mismo.

Febrero ha mostrado que no es suficiente el liderazgo y un programa, sino que también es fundamental una organización capaz de abarcar a esos nuevos sectores que surgieron fruto de diecisiete años de modelo neoliberal y que no están organizados en ninguna estructura sindical o social. La organización de amplios sectores no es tarea que se resuelve de la noche a la mañana. La emergencia social en Bolivia requiere de tiempo, propuestas y mucho trabajo para encontrar su cauce.

La crisis económica y política del país no da tregua. El gobierno no puede dar concesiones populistas. La embajada grita a cada instante “mano dura”, como lo demuestra la última comunicación de la Casa Blanca que alerta contra la “mafia cocalera”. Los conflictos sociales se suceden todos los días. La ciudad de La Paz es un marchódromo institucionalizado. La situación económica de amplios sectores de la población es desesperante. Los integrantes de la coalición gobernante se pelean todos los días. Los movimientos sociales tienen un liderazgo y una organización en el campo, pero aún les falta mucho camino por construir en las ciudades. Y todo esto en medio de una situación internacional extremadamente compleja, donde hay una rebelión en curso contra el modelo neoliberal en América Latina que ha generado el establecimiento de gobiernos que guñan a la izquierda pero siguen por la derecha. Donde el imperialismo se siente ensoberbecido por la invasión de Irak a pesar de las multitudinarias manifestaciones en su contra. En este contexto de polarización, crisis, emergencia y militarización, hay un pueblo que aspira a cambiar la historia.

Notas

- 1 COB: Central Obrera Boliviana; MNR: Movimiento Nacionalista Revolucionario.
- 2 MNR-I: Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda; PCB: Partido Comunista Boliviano; MIR: Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
- 3 Acción Democrática Nacionalista.
- 4 Grupo Especial de Seguridad.

Levantamiento popular del 12 y 13 de febrero en La Paz

Bolivia arrinconada en la azotea de su historia

**Por Claudia Espinoza*
y Gonzalo Gozalvez****

* *Investigadora
del Centro de Estudios
para el Desarrollo Laboral
y Agrario (CEDLA)
La Paz, Bolivia*

** *Integrante
del Colectivo
AsíEs Bolivia*

Era jueves por la tarde, el 13 de febrero. A cinco cuerdas de la plaza Murillo, donde se encuentra el centro del poder constituido, gritos de desesperación e indignación se escuchaban en el puente de San Francisco porque los disparos de los militares apostados en la calle Comercio habían dejado inmóvil el cuerpo de un trabajador que recogía sus herramientas en la azotea del edificio de AGFA. Nadie podía subir a verificar si estaba todavía con vida; llegó una ambulancia y entraron al edificio una doctora y una enfermera de la Cruz Roja.

A pocos minutos se notaba mayor angustia en los gritos de la multitud, pues los disparos del ejército habían herido de muerte a la enfermera y dejaron gravemente herida a la doctora. Pero esta vez era más difícil todavía entrar a rescatarlas al edificio porque los uniformados disparaban a todo lo que se movía. La desesperación de poder hacer poco o nada hacía que la gente gritara con más ira a los militares.

La multitud –en su mayoría jóvenes varones y mujeres desocupadas de 13 a 18 años, familias congregadas en la protesta, estudiantes, adultos desocupados, trabajadores por cuenta propia, y en menor medida trabajadores de sectores organizados– realizó una vez más un cabildo espontáneo en la calle para reafirmar su indignación colectiva frente a la incapacidad del gobierno de dar solución a ese conflicto social, y para condenar la violencia. La lucha se reafirmaba en los gritos y en el acercamiento hasta una cuadra de distancia a los uniformados para tirarles piedras, cayendo heridos o muertos al ser alcanzados por balas de guerra en ese desigual intercambio.

Continuó la gente protestando varias horas; no eran enfrentamientos pues los muertos y heridos estaban sólo del lado del pueblo “armado” con piedras y palabras. Del otro lado, los tanques rodeaban la plaza Murillo, los militares apostados a sus costados disparaban a matar sin respetar a la prensa y ni siquiera a la Cruz Roja. No había ni un solo movimiento social ni partido político liderando la protesta; incluso quizás tampoco había un objetivo explícito en la multitud. ¿Cuál era entonces la fuerza que empujaba a la gente a arriesgar sus vidas en tales condiciones?

Del impuestazo a la ira

Dos días antes, el martes 11 de febrero, el gobierno había decretado el llamado impuestazo como medida para reducir el déficit fiscal, que consistía en un impuesto de 12,5% sobre los ingresos de las personas a partir de los dos sueldos mínimos (880 bs., equivalentes a 115 u\$s). Esa medida provocó un motín de las bases policiales que veían afectados sus salarios. Esa misma noche la protesta se concentró en el Grupo Especial de Seguridad (GES) a una cuadra del Palacio de Gobierno. La mañana del miércoles 12 se realizaron varios intentos de diálogo entre los amotinados y el gobierno, pero la política de la fuerza basada en la autoridad sólo tensionó aún más la situación.

Ante los intentos fallidos, una marcha de policías vestidos de civil llegó frente al Palacio. Minutos después, colegiales de 12 a 14 años del Colegio Fiscal Ayacucho tomaron las calles con otra marcha, por demandas estudiantiles, pero no tardaron en unir las protestas, como aseguraron en ese momento sus dirigentes. Cuando los pocos policías militares (PM) que custodiaban el Palacio los atacaron con gases, los estudiantes reaccionaron con cánticos y devolviendo las mismas granadas de gas; así hicieron retroceder a la guardia y entraron a la plaza Murillo para tirar piedras contra el Palacio, expresando su repudio al gobierno.

Fue entonces cuando la PM salió nuevamente del Palacio de Gobierno disparando gases, e inmediatamente los policías amotinados comenzaron a responder con otro arse-

“...había miles de personas que efectivamente arriesgaban sus vidas por gritar la injusticia (...) por exigir un fin a los atropellos del gobierno y una mayor y más sustantiva participación en la vida política del país.”

nal de lo mismo. Los dos bandos querían defender sus posiciones. Así empezó la agresión armada entre militares y policías, que dejó como consecuencia varios muertos: policías, conscriptos del ejército y también civiles.

La noticia del fuego cruzado corrió por toda la ciudad: la plaza Murillo, centro histórico de La Paz, era un campo de guerra. La gente acudía a las inmediaciones a protestar contra el impuestazo y contra el gobierno, que por su parte –en pocas horas– había desaparecido.

De los enfrentamientos de la plaza, la protesta se volcó a la quema de instituciones-símbolo del Estado, como la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Sostenible. Paralelamente, el repudio alcanzó las sedes de los partidos políticos que han gobernado Bolivia alternadamente en los últimos quince años: MNR, MIR, UCS y ADN¹, y sedes de algunas empresas emblemáticas de las privatizaciones y transnacionalización de la economía.

Ese día, si bien el motín policial marcó el inicio de la protesta, los enfrentamientos terminaron por desatar una ira popular generalizada y contenida de mucho tiempo por los insultos cotidianos de los gobernantes de turno a la dignidad e inteligencia de la gente, por el desempleo, la falta de acceso a servicios básicos y ahora la reducción de los salarios.

Esa combinación de ira y necesidad del pueblo tomó el rumbo de los saqueos a grandes tiendas comerciales y luego también a pequeños negocios, que se extendieron a lo largo de toda la noche. Muchos barrios de comerciantes “mayoristas y minoristas” organizaron grupos de seguridad para impedir los saqueos a sus tiendas.

Para el jueves 13 de febrero por la mañana, entre el olor a cenizas, los escombros y la incertidumbre, la Central Obrera Boliviana había convocado a una marcha. Sin embargo, antes de empezarla el ejército disparó gases, mientras los

helicópteros de la Fuerza Área rondaban altos edificios. El miedo y la inseguridad hicieron que la mayor parte de los trabajadores sindicalizados se retirara y quedara la gente más rebelde protestando contra tanques y munición de guerra.

En la ciudad de El Alto, la gente quemó también instituciones gubernamentales además de empresas que atentan contra la economía familiar, como las transnacionales Aguas del Illimani, Electropaz, financieras de crédito y otras. La participación de la población fue mucho más generalizada que en la ciudad de La Paz, y más organizada: incluso expulsaron a los medios de comunicación.

Mientras eso sucedía, la Policía ya había llegado a un acuerdo con el gobierno, pero no podía salir a cumplir su función de seguridad pública pues los ánimos de la gente estaban muy irritados, haciendo imposible detener las protestas y también los saqueos.

La protesta social fue estigmatizada por los medios de comunicación como saqueos y por tanto “actos vandálicos”. Sin embargo, había miles de personas que efectivamente arriesgaban sus vidas por gritar la injusticia, por decir que ellos también quieren deliberar y decidir sobre los problemas, en fin, por exigir un fin a los atropellos del gobierno y una mayor y más sustantiva participación en la vida política del país.

En medio de la masacre, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, obligado por la situación que había provocado, tuvo que aparecer públicamente con los representantes de ambas instituciones, policial y militar, para anunciar la anulación del impuestazo.

El resultado de la violencia fueron treinta y tres muertos y más de doscientos heridos, según organizaciones de derechos humanos. A dos meses de los acontecimientos, los familiares, ya organizados, siguen mendigando unas cuantas medicinas para los heridos, y ni hablar de las indemnizaciones a los civiles, porque están lejos de cumplirse.

Amenazas de fuerza autoritaria

Y todavía más lejos está la justicia. Ni la Policía ni las FFAA. pretenden coadyuvar al proceso judicial abierto para identificar a los responsables de la “masacre de febrero” aunque existan pruebas materiales, documentales y testigos que confirman la presencia de francotiradores. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia presentó incluso un video y fotografías que dan cuenta de lo sucedido.

El Estado, a través del Ministerio Público, no da señales de esclarecimiento. Encubre la impunidad porque no sólo perdió legitimidad ante el pueblo (por medio de un pacto

partidario, Sánchez de Lozada llegó a la presidencia con un pírrico 22% del voto) sino —y esto es lo peligroso— ante las dos fuerzas coercitivas estatales.

El monopolio de la fuerza pública estuvo a merced de los uniformados sin ningún control civil ni responsabilidad política. Mientras la Policía se amotinaba, las FFAA. chantajeaban al poder político. Por otra parte, quedaron claras la ausencia de un mando único de los uniformados y la incapacidad del gobierno: el Presidente y varios de sus ministros se asilaron en el Cuartel General del Ejército, donde transaron la salida violenta al conflicto. Fuentes extraoficiales militares cuentan cómo minuto a minuto sentían un envalentonamiento al percibir que efectivamente la “estabilidad de la democracia estaba en sus manos” (y en sus armas).

La transacción que dio paso al uso de la violencia incluyó un aumento salarial igual al otorgado a los policías y anexó un tema de vital importancia nacional: la exportación de gas natural a EE.UU. Elementos de las FFAA. han rechazado el negocio vía Chile, y así se lo han hecho saber al Presidente.

De manera que el gobierno “gobernó sobre bayonetas”, como señalaron varios analistas, abriendo un profundo abismo entre poder civil y poder militar. Los militares deliberaron más que en cualquier otro momento crítico en estas últimas dos décadas de democracia representativa en Bolivia. Juan Ramón Quintana, experto en temas de seguridad nacional, identifica dos actores en los sucesos de febrero: la Policía sediciosa y las FFAA., cumpliendo un mandato constitucional, puesto que reprimieron por orden del Capitán General de las FFAA., el Presidente.

Sin embargo, el 12 y 13 sólo fueron la muestra de la punta del iceberg que arrastra una crisis añeja. Comenta Quintana²: “los gobiernos tienen una enorme desconfianza en su capacidad coercitiva. Usan hace años indistintamente a Policía y FFAA. para reprimir porque no cuentan con capacidad disuasiva de las instituciones democráticas. No tienen confianza política ni operativa, por eso utilizan los recursos de los ‘gastos reservados’ (fondos públicos exentos de fiscalización pública) para compensar económicamente esa desconfianza política”. De este modo, advierte Quintana, ambas instituciones de la fuerza se sostienen con fondos grises para “cubrir” un profundo desgaste en su relación con el sistema político.

De ahí surge una preocupación profunda. De hecho, los militares creen que “salvaron la democracia”, mientras varias corrientes internas interpretan eso a su modo: chavistas, constitucionalistas y “golpistas” confluyen incubando sus propios planes e intereses. El rumor de un golpe autoritario al mando de uno de los partidos de oposición (Nueva Fuerza Republicana) o de un autogolpe liderado por el propio gobierno, es comida diaria en los cuarteles. Oficiales de rango medio confirman no sólo un porcentaje de acuartelamiento sino hasta de entrenamiento especial.

Quintana considera que las instituciones del orden están cobrando una factura al sistema político debido a un sistema de corrupción que éste ha creado en los altos mandos en largos veinte años de democracia. En esto, la Embajada de EE.UU. ha jugado un rol divisionista al trastocar funciones de los aparatos coercitivos y al introducir la competencia económica: se han creado la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y contra el Terrorismo, y el Grupo de Acción Inmediata –como parte de la Policía–, y se ha llevado a los militares a reprimir los conflictos sociales.

La protesta tiró por tierra los planes del FMI

Todavía persiste la incertidumbre sobre qué camino tomarán las instituciones del orden, y éste dependerá de cómo el gobierno quiera resolver la crisis económica. Al cabo de más de diecisiete años de fiel aplicación de las recetas del FMI y el Banco Mundial, el Estado boliviano está sumido en una crisis estructural sin precedentes. Habiendo privatizado las empresas que sostenían el Estado –principalmente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)– sufre una crisis fiscal crónica, que busca cubrir con ciclos acelerados de condonaciones de deudas antiguas, contrataciones de deudas nuevas y cambios tributarios para “ampliar” el universo de contribuyentes.



© Clara Algranati

El gobierno requería 3.900 millones de dólares para aplicar su anunciado plan de “Obras con Empleo”, condicionado por el FMI a una reducción del 3% en el déficit fiscal, es decir, del 8,6 al 5,6% respecto del Producto Interno Bruto. En 1999 el FMI ya había sugerido varias medidas para evitar el colapso fiscal: una modificación del sistema tributario boliviano; la anulación del impuesto en cascada IT (Impuesto a las Transacciones) que se compensaría con un incremento del Impuesto al Valor Agregado del 13 al 15%; la incorporación al sistema tributario de los regímenes especiales como el de transporte, el simplificado y el régimen agrícola unificado; y además, la sustitución del actual impuesto de Régimen Complementario (RC-IVA) por un impuesto sobre los ingresos de las personas físicas, “ya es tiempo de que Bolivia considere un cabal impuesto sobre la renta personal (IRP) con una base

amplia". El gobierno boliviano considera que las posibles soluciones a su crisis fiscal son dos: el "gasolinazo", o el "impuestazo". La modificación del sistema tributario se plantea como objetivo reducir la dependencia de los ingresos fiscales del sector de hidrocarburos y reducir la presión sobre la inversión privada de las empresas, aunque ambas cosas ya se han empezado a realizar sin aplicar modificaciones. Señala el FMI: "es posible concluir que Bolivia ha hecho un gran esfuerzo de diversificación de fuentes tributarias al reducir la dependencia del sector petrolero, sustituyéndola con más esfuerzo tributario del resto de la economía".

Fuera de consideración está la reestructuración de las relaciones con las empresas transnacionales en el país, que hoy por hoy controlan más del 65% de la inversión en Bolivia y que desde los programas de privatización que les abrieron las puertas en los '90, han exportado más capital de lo que han invertido. En ese sentido, la concepción del FMI significa que para flexibilizar la economía hacia los posibles inversores –transnacionales que operan en hidrocarburos y en menor medida otras empresas– se debe cargar toda la presión tributaria sobre el pueblo a través de impuestos a sus ingresos, a la economía informal, al transporte y a los agricultores. Es decir, que se deben incrementar los ingresos del Tesoro General de la Nación con impuestos a las personas sencillas.

Lógicamente, el gobierno "optó" por la "sugerencia" del FMI, el "impuestazo", yendo inclusive más allá: la exención propuesta para cuatro salarios mínimos vitales fue reducida por el gobierno a sólo dos, ampliando aún más la base tributaria que proponía el FMI. Pero esta "base amplia", o "el resto de la economía" al que alude el FMI, está consciente de su esfuerzo, y por eso no tardó en responder al impuestazo.

La crisis estatal y el norte político

Los elementos citados muestran una dinámica nacional imposible de sostener por mucho tiempo. A este gobierno le ha tocado la profundización de una crisis estatal política, económica y social que afloró en abril de 2000 con la Guerra del Agua en Cochabamba y en el Altiplano paceño con la irrupción aymara, y que ahora encarna quizás su fase terminal. La "crisis del modelo" es tema de conversación cotidiana y sentido común. Pero, como lo manifiesta el analista Álvaro García Linera (2003), si bien se está frente a una necesaria transición del Estado y la economía, el contenido y posible proceso de esta transición están lejos de resolverse.

Por un lado, las fuerzas de dominación ingresaron a un estado de inercia con amenazas de salidas autoritarias. Pocas semanas después de los eventos de febrero, el presidente Sánchez de Lozada anunció que la peculiar gobernancia neoliberal ("democracia") que preside se defendería con las armas. Por otro lado, los movimientos sociales expresan

un debilitamiento, producto de años de políticas que han flexibilizado sus centros de trabajo, han hecho casi inexistentes los servicios públicos y han socavado sus bases organizativas. Si bien algunos dirigentes de los movimientos sociales cosecharon en las elecciones de 2002 una representación sin precedentes en el Parlamento, la apuesta electoral no ha producido resultados ni copado las expectativas populares, por razones estructurales y burocráticas y por falta de visión política.

Así las cosas, han aflorado propuestas varias para sellar un nuevo "pacto social". Por limitarse a buscar consenso sobre las orientaciones existentes en el gobierno, la propuesta de la Iglesia Católica efectivamente nació muerta, ya que no incorporó temas medulares que emergen de las organizaciones sociales (tierra, defensa de la hoja de coca, trabajo, participación en las decisiones sobre el destino de las riquezas nacionales como el gas, el ALCA y otras). Por su parte, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos intentó organizar una Cumbre Social facilitando el acercamiento entre partidos políticos, Estado y organizaciones sociales, pero fracasó.

En lugar de un pacto o cumbre, un pequeño germen de unificación de los movimientos sociales (nacido en enero durante los bloqueos de caminos de los cocaleros) llamado Estado Mayor del Pueblo lanzó una convocatoria a un Encuentro Nacional de los Movimientos Sociales para los próximos meses, donde se pretende discutir una agenda nacional en la que no se fusionen y confundan las diferencias, sino donde cada sector construya un plan propio en coordinación con los demás. Si bien recoge y plantea claramente el sentido y contenido de las demandas populares, queda por verse si tendrá la capacidad de coadyuvar al proceso deliberativo y resolutivo que propone. La consigna es "democratizar el país".

Bolivia vive un momento muy peligroso. La democracia neoliberal ha cobrado ya impunemente docenas de vidas por encasillarse en las recetas del FMI y los mandatos de la guerra antidrogas de EE.UU. Retornan dudas sobre el sometimiento de las fuerzas represivas al poder civil, mientras la Embajada de EE.UU., persiguiendo sus intereses, juega y manipula peligrosamente estructuras estatales y entornos políticos.

Bibliografía

García Linera, Álvaro 2003 *Pulso* (La Paz) N° 190, 28 de marzo al 3 de abril.

Notas

1 N de la E: MNR - Movimiento Nacionalista Revolucionario; MIR - Movimiento de Izquierda Revolucionario; UCS - Unión Cívica Solidaridad; ADN - Acción Democrática Nacionalista.

2 Entrevista al sociólogo y analista sobre temas de seguridad nacional Juan Ramón Quintana, realizada el febrero de 2003.

La fisura del estado como expresión de la crisis política de la burguesía en Bolivia

Tania Aillón Gómez *

* *Socióloga y economista,
Magíster en Ciencias
Sociales. Docente
e Investigadora del Instituto
de Estudios Sociales
y Económicos de la
Universidad Mayor
de San Simón
en Cochabamba, Bolivia.*

El proceso de aplicación de la política neoliberal en Bolivia es la lucha entre la fracción de la burguesía nativa ligada a los intereses del gran capital transnacional, y los sectores sociales afectados por las medidas de política económica y social, que recortaron los espacios laborales y las conquistas sociales. Se trata de un hecho contradictorio: avances, retrocesos, derrotas y victorias, tanto desde la perspectiva de los intereses de la burguesía, como desde los objetivos de la resistencia popular.

Pese a su complejidad, este proceso encuentra una síntesis de su evolución en la crisis política de la burguesía, que se muestra en la fisura de las funciones del Estado, desde abril del año 2000 (en vísperas de la "guerra del agua") y que se manifiesta nuevamente, en febrero de 2003, luego del anuncio del gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) de que se aplicará el impuesto directo a sueldos y salarios para disminuir el défi-

cit fiscal. Esta fisura del Estado permite identificar las limitaciones económicas y políticas que encara la burguesía nativa para sostener el modelo de acumulación vigente, y es también un indicador de la tendencia de la lucha de clases y de los derroteros por los que transita el proceso histórico boliviano. Ahí radica la importancia de detenerse a analizar las determinaciones que la configuran.

El desgaste de los instrumentos de legitimación del Estado en la etapa neoliberal

El Estado, como órgano de dominación de la clase capitalista, cumple funciones para preservar las relaciones sociales vigentes. Funciones sin las que la reproducción de éstas sería imposible. En términos de los clásicos, el Estado: “[A]l ser la confesión de que la sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables, que es impotente para conjurarlos (...) se hace necesario como poder situado aparentemente por encima de la sociedad (...)” (Engels, 1997: 68-67). Las funciones del Estado pueden ser legitimadoras del régimen imperante cuando utiliza métodos persuasivos para obtener el consenso de las clases subordinadas de la sociedad, o pueden tener un carácter abiertamente represivo cuando los métodos persuasivos no dan resultado. Ambas funciones son realizadas de forma combinada por el Estado, como herramientas de dominación, de acuerdo a la correlación de fuerzas de clase imperante.

La fisura en las funciones del Estado supone el resquebrajamiento de los cimientos de las mencionadas herramientas de dominación. En el caso boliviano (un “eslabón débil de la cadena capitalista mundial”), la política neoliberal a la que recurrió la burguesía nativa acicateada por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional¹ para revertir la crisis del patrón de acumulación de capital vigente de 1952 a 1985 provocó modificaciones profundas en las reglas de generación y distribución del excedente económico. De un patrón de acumulación basado en la presencia gravitante del Estado en los sectores estratégicos de la economía y en la capacidad definitiva de aquél para influir en los circuitos del excedente (Grebe, 1999: 58), se pasó a un modelo de acumulación centrado en los grandes consorcios transnacionales, que son los que ahora influyen de manera decisiva en la forma en que se genera y distribuye el excedente económico.

Con el fin de que las funciones estatales provean las condiciones generales de reproducción del capital más adecuadas al modelo de acumulación puesto en marcha, se procedió a realizar ajustes en la política de redistribución del excedente social (un instrumento de legitimación del Estado) y en las políticas de provisión de condiciones para la producción y realización del capital. Ajustes que, como veremos, favorecieron abierta-

mente a las exigencias de acumulación de la burguesía transnacional a costa de minar los instrumentos de legitimación del Estado.

Cambios en la política estatal de captación y redistribución del excedente económico

Los ingresos fiscales del Estado boliviano, que estaban compuestos sobre todo por transferencias directas de los beneficios de las empresas estatales al Tesoro General de la Nación (TGN)², se vieron drásticamente recortados con la privatización de aquéllas. Para revertir esta situación, con la lógica de continuar favoreciendo al desempeño del gran capital privado, se aplicó una batería de impuestos indirectos, destinados a gravar el consumo de la población. La política tributaria petrolera muestra con claridad los efectos del cambio en la política estatal de captación del excedente: mientras que en 1995 el 96% de la transferencia petrolera al TGN provenía de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y sólo el 4% estaba compuesto por impuestos indirectos, en el año 2001, en plena vigencia de las reformas del sector petrolero, el 62% del aporte petrolero al TGN está formado por impuestos indirectos; sólo el 4% corresponde al impuesto que grava la utilidad de las empresas petroleras, y el restante 34% está constituido por las regalías departamentales y participaciones de YPFB (Villegas, 2002: 108-109). Para consolidar esta política tributaria, el impuesto especial a los hidrocarburos (IEHD), un impuesto indirecto, se utilizó como variable de ajuste de los precios, con la finalidad de que la población absorba el costo de transferencia de excedente a los consorcios petroleros a través de la subida de precios en el mercado. Esta medida provocó un recorte en el poder adquisitivo de los sectores de la población de ingresos fijos (trabajadores, empleados de clase media, etc.), al mismo tiempo que incrementó los costos de producción de la empresa nacional (Villegas, 2002).

La disposición de los ingresos captados por el Estado, indicador de la política de redistribución del excedente asumida por éste, da cuenta de la tendencia a constreñir los gastos sociales y a incrementar los gastos corrientes, mismos que tienen una importante participación en los gastos fiscales totales. Entre los gastos corrientes, los gastos en servicios personales desde 1985, año de inicio de aplicación de la política neoliberal, hasta el 2000, crecieron continuamente hasta constituir entre el 30% y el 40% de los gastos corrientes en todo el período, y entre el 25% y el 35% de los gastos totales, señal del aumento permanente de la burocracia estatal y/o del abultamiento de sus remuneraciones³. En contraste, durante un período de siete años (1995-2001) los gastos sociales apenas significan entre el 13% y 18% de los gastos corrientes (ver Cuadro 1).

Cuadro 1
Comparación de gastos sociales y gastos corrientes del Estado
(en millones de dólares)

Rubros	1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001	
Gasto social	183,9	15%	239,4	18%	246,8	15%	245,1	13%	264,9	15%	285,5	16%	295,4	16%
Gastos corrientes	1.189,0	100%	1.318,0	100%	1.665,0	100%	1.853,0	100%	1.771,0	100%	1.826,0	100%	1.891,0	100%

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE, BCB y UDAPE (1995-2001).

Esta política de captación y de redistribución del excedente aplicada por el Estado generó tensiones entre los intereses del gran capital transnacional y los de la mayoría de la población boliviana. En el mismo sentido, se agudizaron las contradicciones con la burocracia estatal privilegiada que absorbe una importante proporción de excedente económico recaudado por el Estado.

Las políticas estatales de provisión de condiciones generales de reproducción para el capital y sus resultados

El papel del Estado, según el esquema neoliberal, debería reducirse en este aspecto a establecer una amplia libertad de mercados. La liberalización de mercados construiría el espacio en el que florecería la iniciativa individual junto a la distribución más equitativa de oportunidades y recursos. Se incrementaría la inversión privada con efectos positivos sobre la productividad del trabajo, generando un círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo económico (Montes, 1999). En los hechos, la liberación del mercado de productos en Bolivia se resolvió en el relativo estancamiento y caída de la productividad del trabajo pese a la política salarial de reducción de costos laborales. Entre 1988 y 1994 (período de instalación del neoliberalismo en el país), el costo laboral cayó en -1,63 bolivianos por hora trabajada; paralelamente, la productividad del trabajo mostró un virtual estancamiento con una caída en -0,19 bolivianos en el mismo lapso de tiempo (Arze, 1999[a]); es decir, el país fue perdiendo su capacidad de generación de riqueza social.

Con costos laborales decrecientes, el virtual estancamiento de la productividad del trabajo sólo podía relacionarse con el congelamiento o caída de la inversión industrial. La política de apertura de espacios de inversión al capital privado incentivó la concentración de la inversión privada extranjera en sectores estratégicos, como el hidrocarburífero y el de servicios⁴. La inversión extranjera no vino a ocuparse de la generación de mayor valor agregado o del crecimiento de la productividad de la economía boliviana. Le tocó entonces asumir el desafío a la esmirriada empresa nacional, que, desanimada por sus desfavorables condiciones de competencia en los mercados, no respondió con un aumento de la inversión productiva. La caída de la formación bruta de capital fijo entre 1988 y

1994 en una proporción del 50%, paralela a la reducción de las importaciones de bienes difusores de progreso técnico (CEPAL, 1998), da cuenta de la caída de la inversión privada nacional. En el mismo sentido, la composición de la inversión privada en el país en años de auge del neoliberalismo (1992-1998) muestra una disminución importante de la participación de la inversión en relación a la inversión extranjera directa. Mientras que en 1992 la inversión interna constituía el 55% de la inversión privada, en 1998 ya sólo forma parte de ésta en el 14,4% (Pinto de Loza, 1999).

El cambio en el papel estatal de provisión de condiciones para la producción y realización del capital, al favorecer a la acumulación del gran capital externo, incentivó la inversión extranjera directa, mostrando con claridad que el Estado fue puesto al servicio de la burguesía transnacional con efectos negativos sobre la fracción de la burguesía nativa insertada en el aparato productivo del país. En estas condiciones, la capacidad de competir y de exportar de la industria nacional se deterioró continuamente, al punto en que la balanza comercial concluyó arrojando saldos negativos de forma consecutiva (ver Cuadro 2).

Cuadro 2
Bolivia – Saldo comercial
(en millones de dólares)

Años	1980	1990	1995	1998	1999	2000
Saldos	-23	143	-392	-1.347	-1.047	-774

Fuente: CEDLA, INE, CEPAL, 1999

Un importante espacio de realización del excedente de la empresa nacional (por ser el lugar preferido por la población para adquirir los productos necesarios para la reproducción de su fuerza de trabajo), el mercado interno, fue estrechado con medidas como la flexibilización laboral, la cual no trajo, como se decía, ni más ni mejores empleos, sino que se tradujo en el aumento de las tasas de desempleo abierto y en el incremento de la precariedad del empleo, con un índice de subempleo en el país que alcanza al 35% de la población ocupada (INE, 2001). De este modo empeoraron las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo de los bolivianos, al mismo tiempo que se estrecharon los espacios de realización del capital nativo. La misma dinámica limitó el espacio de actividades económicas de pequeña escala de carácter no capitalista, que se constituyó en refugio de la fuerza de trabajo despedida de las empresas estatales privatizadas y/o de las empresas quebradas por la presión del modelo⁵.

Estos resultados de la política de provisión de condiciones generales para la acumulación del capital llevada adelante por el Estado en el transcurso de aproximadamente tre-

ce años terminaron por minar las bases de su legitimación, pero cumplieron el objetivo de la burguesía transnacional: mejorar los espacios de valorización de los grandes consorcios extranjeros. El costo político fue la pérdida de la capacidad integradora del Estado, mediante el discurso ideológico neoliberal, pues los resultados concretos de la política aplicada probaron que el discurso se alejaba de forma tangencial de las ofertas que predicaba y, sobre todo, había provocado que se profundizaran importantes contradicciones entre las clases y las fracciones de clase de la sociedad boliviana. La apertura del mercado de productos no fortaleció a la economía, sino que más bien la debilitó. Así se hizo más notoria la contradicción entre las condiciones necesarias para el desarrollo industrial del país y las impuestas para mejorar la valorización del gran capital extranjero. La flexibilización del mercado laboral empeoró las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo de trabajadores y clases medias, demarcando otro nudo de conflicto entre los intereses de estos sectores de la población y la política de redistribución del excedente económico a favor de los consorcios externos.

Los ajustes en el papel del Estado como proveedor de condiciones generales para la acumulación del capital, en la etapa neoliberal, profundizaron la contradicción entre la producción social y la apropiación privada del excedente que caracteriza al capitalismo. Dicha contradicción se manifiesta, paradójicamente, como crisis de sobreproducción. Los mercados están llenos de productos, pero la mayoría de los bolivianos no tenemos empleo ni ingresos suficientes para satisfacer nuestras necesidades básicas, reproduciéndose el clima de penuria económica, que converge en otro nudo de conflicto, entre el interés de grandes sectores de la población dedicados a actividades económicas de pequeña escala (pequeños comerciantes, artesanos, etc.) por dilatar el mercado interno, y la política que redujo el mercado interno.

Manifestación de la crisis económica en las funciones políticas de dominación del Estado

La acentuación de las contradicciones identificadas devino en el desgaste sostenido, desde fines de los '90, del modelo de acumulación promovido por el neoliberalismo, con tasas de crecimiento del PIB en descenso, el aumento continuo del déficit fiscal, el ascenso de la tasa de desempleo y la caída del ingreso per cápita (ver Cuadro 3).

Cuadro 3
Principales indicadores económicos de Bolivia 1998-2001

Años	PIB (tasa de crecimiento)	Inflación (IPC) Variación acumulada anual	Déficit del sector público no financiero/PIB	Tasa de desempleo	Ingreso per Cápita (u\$s Corrientes)
1998	5	4,4	4,7	4,1	1.068
1999	0,4	3,1	3,8	6,1	1.016
2000	2,4	3,4	4,0	8,0	1.001
2001	1,2	0,9	6,5	11,0	935
Promedio	2,2	2,9	(4,7)	7,3	1.005

Fuente: INE, BCB, UPF

En la medida en que el modelo se desgastó, la crisis económica se estableció en el país: situación propicia para que las contradicciones sociales acumuladas por los efectos de la política económica estallen y se manifiesten como crisis política, hasta provocar fisuras en las funciones del Estado. El inicio del debilitamiento de la función de legitimación del Estado tiene como indicador la pérdida del nivel de eficacia integradora del discurso neoliberal. Este proceso se manifiesta con claridad durante el gobierno de la Acción Democrática Nacionalista (ADN) y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) entre 1997 y 2002⁶, con el aumento en número e intensidad de los conflictos sociales⁷, pero fundamentalmente con cambios cualitativos en el carácter de los mismos. Hay modificaciones en el estado de ánimo de las masas: por una parte están más combativas, y por otra sus movilizaciones tienden a la unidad en la resistencia. Estas tendencias se objetivan en la creación de órganos de poder como la Coordinadora del Agua y de la Vida (Orellana, 2001), que unifica la lucha contra el consorcio transnacional "Aguas del Tunari" en la célebre "guerra del agua" (abril de 2001).

La pérdida de la eficacia integradora del Estado se resuelve en la debilidad política del gobierno ADN-MIR, que no logra "hacer respetar el principio de autoridad". De manera sistemática, el ejecutivo plantea que "el gobierno no negociará con presiones" y termina haciéndolo con presiones sociales, bajo condiciones impuestas por los sectores movilizadas. Una muestra de esta propensión se encuentra en las condiciones en que se firmaron los acuerdos de la "Guerra del Agua", con la presión de toda la población movilizada, tanto urbana como rural, que ocupaba la plaza de armas de la ciudad de Cochabamba. Esta pérdida de autoridad alimenta la debilidad política de la coalición MNR-MIR, en un contexto económico en el que toda promesa de mejorar las condiciones de vida de la población ya no tiene el eco anterior a 1997, cuando el discurso de la capitalización⁸ como solución a problemas de inversión, crecimiento y empleo había mantenido las expectativas. Se acusa al gobierno continuamente de no contar con un plan de acción para superar la crisis. El tema es que dentro de la lógica de la fracción burguesa en

el poder no hay lugar para un giro de timón. De acuerdo a los intereses de sus aliados, los grandes consorcios extranjeros⁹, no existe razón para modificar las pautas de la producción y redistribución del excedente social.

En el marco de una relativa recuperación del movimiento popular y del debilitamiento político de la clase dominante, una fisura empieza a manifestarse en la función estatal represiva. Los efectos de la política de redistribución del excedente social tocan también al “eslabón débil” del brazo armado del Estado (sargentos, oficiales y clases de la policía), creando un ambiente de malestar en sus filas¹⁰.

En abril del año 2000, casi en forma paralela al desencadenamiento de la “Guerra del Agua” en Cochabamba, en la ciudad de La Paz, esposas de policías inician una huelga de hambre pidiendo un aumento del 20% en los salarios mensuales de sus maridos y la dotación de chalecos antibala y equipamiento adecuado¹¹. Al cabo de dos días este conflicto se generaliza en el país, con la amenaza de cerrar las puertas de los cuarteles. Una importante incorporación de policías que pasan por encima de las instrucciones de sus mandos superiores marca el inicio del agrietamiento en la columna vertebral del Estado burgués: la subordinación jerárquica que garantiza la obediencia obsecuente de la tropa a los mandos superiores de su brazo armado (Lenin, 1997: 24-25). El proceso se profundiza con el desacato policial a la orden de intervenir la huelga de hambre de las esposas de policías, al que sigue el amotinamiento policial del Grupo Especial de Seguridad (GES) en apoyo a las huelguistas. Es el inicio de la adhesión masiva de otras unidades, hasta sumar 2.400 policías amotinados (Trigoso, 2003).

El contenido de las reivindicaciones policiales desnuda la debilidad material del Estado boliviano y el carácter regresivo de la distribución de los recursos fiscales, lógica con la que dentro del aparato estatal se reproduce la discriminación que provoca “ira y bronca” en los “rebeldes de uniforme”: “el dirigente de los policías compartió el criterio de

“Los movimientos sociales de desacato al estado de sitio se suceden en todo el país, aún con la vuelta de la policía a las calles. El estado de sitio no consigue poner a los movilizados en su sitio: no funciona como instrumento de control y dominación política...”

que los uniformados que mueren en el servicio diario son de bajo rango, porque arriesgan la piel, el corazón y la vida, por míseros salarios de 480 bolivianos con jornadas de 24 horas; mientras que a los coroneles no les pasa nada, salvo que choquen sus vehículos en estado de ebriedad..." (*Los Tiempos*, 2000)¹². La gravedad de la situación es tal que el motín policial del 8 de abril termina comandando el desacato al estado de sitio dictado el mismo día por el gobierno ante la magnitud de la movilización social (la "Guerra del Agua" en Cochabamba, los bloqueos campesinos de caminos, y paros cívicos en las ciudades de Oruro, Potosí y Sucre). La ruptura de una parte del brazo armado del Estado es un hecho (Orellana, 2001).

El gobierno busca presionar a los amotinados del GES recurriendo a la otra fracción de su aparato represivo, el ejército. Se provoca un enfrentamiento entre ejército y policías, en el que se hace evidente que los policías no están dispuestos a ceder. Dada la correlación de fuerzas, la derrota del gobierno se da en todos los planos. Presionado por la situación, éste concede un aumento de salario a los policías de bajo rango del 50%, significativamente mayor al 20% solicitado. En el otro frente de batalla, el gobierno acepta la ruptura del contrato con la transnacional Aguas del Tunari, causa principal de la "Guerra del Agua"¹³. La autoridad del gobierno queda seriamente afectada, y éste no logrará recuperarla. Los movimientos sociales de desacato al estado de sitio se suceden en todo el país, aún con la vuelta de la policía a las calles. El estado de sitio no consigue poner a los movilizados en su sitio: no funciona como instrumento de control y dominación política, y el gobierno se ve obligado a suspenderlo a trece días de haberlo dictado. La evidencia del agrietamiento de Estado muestra en esta ocasión tendencias que se revelarán con mayor claridad en las jornadas de febrero de 2003, como el crecimiento de la simpatía entre los policías de base hacia las reivindicaciones populares y la emergencia de indicios de ruptura de la unidad de burguesía nativa, con críticas públicas del empresariado privado a la política gubernamental y el pedido del MNR de renuncia al Presidente Hugo Banzer Suárez por la pérdida de legitimidad y autoridad que ha tenido su gobierno. En esta ocasión, el MNR convoca a la población a sumarse a su solicitud, al constituir ésta, según su punto de vista, la única alternativa para evitar la guerra civil y para sacar al país de la crisis política y económica (*La Razón*, 2001).

Esta fisura abierta en el Estado no se soldó, debido a que no cambiaron las condiciones materiales ni políticas que la generaron. Más bien, si el "sufragio universal no es más que el termómetro del estado de ánimo de los electores" (Engels, 1997), los resultados electorales de junio de 2002 mostraron la modificación en la correlación de fuerzas, con la amplia votación obtenida por una opción electoral que criticaba, al menos en apariencia, la política neoliberal: el Movimiento al Socialismo (MAS)¹⁴. Las condiciones económicas y políticas no se presentaban nada fáciles para los partidos de la burguesía que accedieron al poder en agosto de 2002 (la coalición MNR-MIR). Con el discurso de la capitali-

zación desgastado, el déficit fiscal abultado, el enfriamiento de la economía con su secuela de quiebra de empresas nacionales y cierre de fuentes de trabajo, cualquier movimiento en falso pondría a prueba el aparente equilibrio que sostuvo el primer semestre del gobierno de Sánchez de Lozada. La prueba de fuego llegó cuando en el intento de restablecer el equilibrio fiscal se quiso recortar aún más el magro ingreso de los trabajadores, aplicando un impuesto de hasta el 12,5% sobre sueldos y salarios.

La lucha estalló por la grieta que había dejado en el Estado la rebelión policial de 2000. El 11 de febrero de 2003, los policías del GES inician un amotinamiento en la ciudad de La Paz en contra de lo que se vino a llamar el “impuestazo”, pidiendo a la par un aumento salarial del 40%. El movimiento policial se extendió como reguero de pólvora por las ciudades principales. El alto mando policial perdió el control sobre sus subordinados, los oficiales de la Unidad Móvil de Lucha Contra el Narcotráfico se acuartelaron junto a la Policía Departamental en Cochabamba, en Santa Cruz los policías de la cárcel de Palmasola se pertrecharon. Como mencionó un analista del conflicto: “el Estado se halla suspendido en el aire sin poder precautelar la sacrosanta propiedad privada. Así la rebelión policial desbroza el camino para un conflicto abierto entre las clases” (Orellana, 2003). La fisura de las funciones estatales, tanto legítimas como represivas, dejó el espacio para que la población, al expresar instintivamente su descontento y cansancio con el estado de cosas existente, se transformara en turba, en multitud enardecida que destruyó a su paso todos los emblemas del dominio burgués: oficinas de la burocracia estatal, instala-



© Pablo Delance

ciones de empresas transnacionales, oficinas de los partidos de gobierno. La turba relaciona su miseria con toda esta estructura de poder incapaz de resolver sus problemas más apremiantes y envuelta en prácticas corruptas a las que el pueblo culpa del hundimiento del país¹⁵.

La rebelión obligó a frenar el intento de la fracción burguesa en el poder de costear el déficit fiscal con el ingreso de los trabajadores: al día siguiente de la rebelión policial, el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada apareció en televisión deslucido y tembloroso para comunicar que se había decidido retirar el proyecto de Presupuesto General de la Nación en el que se incluía el impuesto al salario. ¡Qué diferencia con el prepotente y burlón "Goni" de tiempos de la capitalización! Este cambio de actitud es la muestra más fehaciente de la debilidad política de la burguesía nativa, que se manifestó en el recrudescimiento de tendencias a la división en sus filas: corren rumores de que existen distintas opiniones dentro del MNR y de que hay parlamentarios de este partido que no están de acuerdo con el "impuestazo". Los empresarios privados se alían al MAS para manifestar su rechazo al "impuestazo", que estrecharía aún más el ya reducido mercado interno¹⁶. La empresa privada nacional, otrora propulsora del modelo neoliberal, pide que "el nuevo presupuesto nacional no sea sólo el resultado de un proceso de manipulación cuantitativa de cifras, sino que refleje un cambio en el modelo económico" (declaraciones a la prensa del representante de la empresa privada Don Carlos Calvo, el 17 de febrero de 2003). Las voces de protesta por el desgobierno y la incapacidad para resolver la crisis son el telón de fondo del pedido de renuncia al Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por parte de la oposición parlamentaria que conforman el Movimiento al Socialismo (MAS) y la Nueva Fuerza Republicana (NFR).

Las posibilidades de la burguesía de amalgamar la fisura en las funciones del Estado

Se ha generado una situación política en la que la agudización de las contradicciones entre las clases y entre las fracciones de clase es tal, que todo intento de restablecer el equilibrio fiscal desemboca en inestabilidad política. La incapacidad de la burguesía nativa en el poder para lograr el equilibrio fiscal sin profundizar las contradicciones inmanentes al modelo emana de su propia naturaleza de clase: su ligazón umbilical a los intereses de acumulación de consorcios transnacionales¹⁷. Esta fracción de la burguesía no hará nada que perjudique al gran capital privado. Más bien volverá a intentar descargar el peso del déficit fiscal sobre los sectores sociales subordinados. En estos días [abril de 2003] alcanza visos de escándalo el anuncio del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada de que se costeará la disminución del déficit fiscal con los fondos provenientes de la condonación de la deuda externa (HIPC II) destinados a la "lucha contra la pobreza"¹⁸.

Debido a las limitaciones de clase que tiene la fracción burguesa en el poder, y a la continua presión que ejerce sobre ella la política imperialista canalizada por instituciones como el Fondo Monetario Internacional, se dificulta la posibilidad de restablecer las herramientas de legitimación e integración estatal devastadas por más de quince años de neoliberalismo en el país mediante reformas destinadas a neutralizar las contradicciones profundizadas por el modelo. La fracción de la burguesía golpeada por el modelo, cuya debilidad económica se expresa en su incapacidad política para imponer un modelo de acumulación centrado en el mercado interno, acorde con sus intereses, encuentra sus limitaciones para resolver la crisis política y económica en la reedición de su fracaso histórico (aunque en un contexto histórico diferente al que rodeó su fracaso dentro del patrón de acumulación 1952-1985) para desarrollar las propias bases de su legitimidad: industrializando el país, creando fuentes de trabajo y estableciendo condiciones mínimas de explotación de la fuerza de trabajo.

Las limitaciones de clase de ambas fracciones de la burguesía muestran que la grieta abierta en el brazo armado del Estado no será cerrada con facilidad. Los nuevos conflictos sociales que se generen por el reparto del excedente social en el país abrirán la posibilidad de que la fisura en el Estado sea parte de la pugna que defina quiénes costearán el déficit fiscal a consecuencia de la crisis del modelo. El resultado de los enfrentamientos dependerá de la iniciativa política y de la fuerza que muestren los sectores en pugna: o la fracción de la burguesía aliada a las transnacionales impone su razón de clase ahogando las movilizaciones populares pese al desgaste de su aparato estatal, o el movimiento popular capitaliza a su favor la fisura del Estado y frena los reiterados intentos de la burguesía de cargar el costo de la crisis sobre sus espaldas.

Bibliografía

- Arze, Carlos 1999[a] *Costos laborales y competitividad en la industria boliviana* (La Paz: CEDLA).
- Arze, Carlos 1999[b] "Empleo y relaciones laborales", en CIDES-UMSA *Bolivia hacia el Siglo XXI* (La Paz: CIDES-UMSA).
- Banco Central de Bolivia 2002 *Boletín del Sector Externo* (La Paz: Ofsett-BCB) N° 27.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe 1998 *Balance preliminar de la Economía de América Latina y el Caribe* (Santiago de Chile: Naciones Unidas).
- Engels, Federico 1997 (1987) *El origen de la Familia, la Propiedad privada y el Estado* (Madrid: Fundación Federico Engels).
- Fundación Milenio 2002 *Informe de Milenio sobre la Economía* (La Paz: Milenio) N° 13.
- Grebe, Horst 1999 "Los Ciclos del Desarrollo Boliviano. Principales Tendencias y Cambios del Siglo XX", en CIDES-UMSA *Bolivia hacia el Siglo XXI* (La Paz: CIDES-UMSA).

- Instituto Nacional de Estadística 2001 *Anuario Estadístico 2001 de Bolivia* (La Paz: INE).
- Laredo, Jaime 2003 "Fuerte oposición de empresarios y trabajadores al nuevo tributo", en *Los Tiempos* (Cochabamba).
- La Razón* 2002 (La Paz) 9 de diciembre.
- La Razón* 2001 "El MNR: Pide Renuncia del Presidente de la República" (La Paz) 21 de abril.
- Larrazabal, Hernándo 1996 "Empleo e ingresos en diez años de reformas estructurales", en ILDIS-CEDLA *Informe Social Bolivia 2* (La Paz: OFAVIM).
- Larrazabal, Hernándo et al 2000 *Ajuste Estructural y Desarrollo Productivo en Bolivia* (La Paz: CEDLA).
- Laserna, Roberto y Villarroel, Miguel 1999 *29 años de conflictos en Bolivia (1970-1998)* (Cochabamba: CERES).
- Lenin, Vladimir 1997 *El Estado y la Revolución* (Madrid: Fundación Federico Engels).
- Los Tiempos* 2003[a] (Cochabamba) 13 de febrero.
- Los Tiempos* 2003[b] "El rechazo al 'impuestazo'" (Cochabamba) 12 de febrero.
- Los Tiempos* 2000 "Indignación policial por discriminación salarial" (Cochabamba) 4 de abril.
- Mandel, Ernest 1987 (1979) *El Capitalismo Tardío* (México: Era).
- Montes, Pedro 1999 (1996) *El desorden neoliberal* (Madrid: Trotta).
- Orellana, Lorgio 2003 "Síntomas del inicio de crisis política en la clase dominante", en *Opinión* (Cochabamba) 16 de febrero.
- Orellana, Lorgio 2001 *El proceso insurreccional de abril: Estructuras materiales y superestructuras organizativas de los campesinos regantes en el Valle Central Cochabambino* (Investigación desarrollada en el marco del Programa de Becas CLACSO-ASDI para investigadores jóvenes) mimeo.
- Pinto de Loza, Carolina 1999 "Bolivia: apertura, empresa y competitividad", en CIDES-UMSA *Bolivia hacia el Siglo XXI* (La Paz: CIDES-UMSA).
- Trigoso, Gonzalo 2003 "Los rebeldes de uniforme", en *Opinión* (Cochabamba) 16 de marzo.
- Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 2001 *Dossier de Estadísticas Sociales y Económicas* (La Paz: UDAPE) Vol. 11.
- Villegas, Carlos 2002 *Privatización de la Industria Petrolera en Bolivia, trayectoria y efectos tributarios* (La Paz: Plural).

Notas

1 Bolivia, al igual que otros países del área, desarrolla sus políticas estatales en estrecha consulta con el Fondo Monetario Internacional con la finalidad de que éste apruebe desembolsos de recursos para enfrentar los desequilibrios crónicos de la Balanza de Pagos o para realizar otro tipo de inversiones. Es dentro de esta lógica que debe entenderse tam-

bién la imposición del Fondo de franjas en las que se debe mantener el déficit fiscal, que en los últimos tiempos ha provocado en el país una seria crisis política.

2 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa estatal más importante en términos económicos en Bolivia entre 1990 y 1996, transfirió al TGN un promedio anual de 302 millones de dólares (65% del total de su ventas internas y externas), que constituían el 40% de los ingresos del Tesoro General de la Nación.

3 Los cargos jerárquicos del Estado, desde el Presidente hasta los superintendentes, pasando por los ministros, tienen sueldos relativamente altos, que oscilan entre los 4.000 y 7.000 u\$s. Por otra parte, la creación de nuevos puestos en la burocracia estatal se convirtió en práctica común de todos los gobiernos como mecanismo para dar cabida a la siempre creciente clientela política.

4 En el período de mayor penetración de la Inversión Extranjera Directa por los procesos de privatización de las empresas estatales (1996-1998) se observa la fuerte concentración de este tipo de inversión en los sectores de servicios y de hidrocarburos. Para 1996 el 70% de la Inversión Extranjera Directa se destina a estos sectores, mientras que al sector industrial apenas se dirige el 17%. En 1997 esta tendencia se profundiza: en los sectores de servicios y de hidrocarburos se concentra el 90% de la inversión, y sólo el 3% se dirige a la industria. Lo mismo ocurre en 1998, cuando el 94% de la Inversión Extranjera Directa se concentra en hidrocarburos y servicios y sólo el 2% se destina al sector industrial (Larrazabal et al, 2000: 96).

5 Investigaciones realizadas por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Arze, 1999[a]) demuestran que el 90% del total de nuevos empleos creados en Bolivia entre 1992 y 1998 ha sido generado por actividades de pequeña escala de carácter no capitalista.

6 En realidad este gobierno fue formado por un grupo más amplio de partidos, por lo que llamaron a esta coalición la "mega-coalición". Junto a los partidos más importantes, MIR y la ADN, se encontraban partidos de menor importancia y peso político, como Conciencia de Patria (CONDEPA) y Unión Cívica Solidaridad (UCS).

7 Una relación del número promedio de conflictos realizada por el Centro de Estudios de la Realidad Regional (Laserna y Villarroel, 1999) muestra que el período de 1993 a 1997, en el que el gobierno de la coalición MNR-MIR, con Gonzalo Sánchez de Lozada a la cabeza, presenta un promedio de 13,15 conflictos nuevos por mes, mientras que en el período 1997-2002, en el que se hace cargo del gobierno la coalición ADN-MIR, con Hugo Banzer Suárez como presidente, el promedio mensual sube sustancialmente a 28,42 conflictos nuevos por mes, un indicador del cambio en la situación política que enfrenta la clase dominante.

8 En Bolivia la capitalización fue el nombre que se dio al proceso de privatización de las grandes empresas estatales, con la promesa de que mediante esta capitalización se generarían 500.000 empleos y tasas de crecimiento de hasta el 11% (Plan de Todos, Programa de Gobierno del MNR de 1993 a 1997).

9 La relación se establece en muchos casos de manera directa. Es el caso del Presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, que es socio del Banco Mundial en la explotación de la mina Mario, sociedad de la que el Banco Mundial participa en el 11% de las acciones.

10 Se trataba de un proceso que se vino gestando desde fines de 1999, cuando explosiones de bomba en la ciudad de La Paz activaron un conflicto en el cuerpo represivo del Estado, desatando acusaciones y contra-acusaciones entre policías y militares. Estos hechos nunca fueron esclarecidos, pero sin embargo constituyeron la señal de un malestar profundo en el seno de la policía, que ya desde meses atrás enfrentaba problemas presupuestarios, hasta el punto de que las instalaciones policiales se quedaron sin luz por falta de pago. Paralelamente la policía enfrentó un problema con el gobierno para retener en sus manos el Registro de Identificación Nacional que le proporcionaba recursos. Era notorio que padecía las consecuencias del déficit presupuestario y del reparto discriminatorio del mismo (Orellana, 2001). Por otra parte, la corrupción también generó malestar en la institución policial. Se habían producido varias destituciones de Comandantes de Policía en el transcurso de los últimos tres años por actos de corrupción relacionados con protección al narcotráfico, compras irregulares de terrenos, manejo indiscriminado de cargos y tráfico de influencias (*La Razón*, 2002).

11 La situación del equipamiento policial es tal que, de acuerdo con declaraciones de los propios policías, sólo se cuenta con trescientos chalecos antibalas para ser usados por 21.000 efectivos. La última dotación de armas data de 1987 y es considerada obsoleta. El Comando General de la Policía debe renovar su arsenal cada cinco años con los remanentes de sus ingresos por recaudaciones. Las balas usadas por los efectivos deben ser pagadas por ellos mismos, ¡si quieren preservar su integridad!

12 Un suboficial con veintiocho años de experiencia declaraba a la prensa que la clase policial siempre ha sido relegada. Los sueldos oscilan entre 800 bolivianos (100 u\$s) y 1.300 bolivianos (170 u\$s): "Yo con mis veintiocho años de experiencia apenas gano 1.300 bolivianos y si a esto se quiere aplicar el "impuestazo", mi salario es mínimo, ¿no?" (*Los Tiempos*, 2003[a]).

13 Esta guerra se desató por el aumento indiscriminado de las tarifas de agua que aplicó la empresa Aguas del Tunari, transnacional que privatizó el servicio de agua potable en Cochabamba, que afectó tanto a la población urbana como rural, sentando las bases para la unificación de los campesinos regantes del entorno rural de Cochabamba y trabajadores y clases medias del área urbana que se expresó en la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida. Este movimiento se caracterizó por la participación masiva de la población urbana y rural y por enfrentamientos sostenidos entre la población y las fuerzas del orden. La unidad en la lucha y la masiva movilización terminaron por vencer al gobierno, consiguiendo la ruptura del contrato con la transnacional.

14 Si bien el Movimiento al Socialismo critica continuamente la política neoliberal, el carácter reformista de sus propuestas ha limitado la posibilidad de que se convierta en dirección real de las aspiraciones del movimiento popular en Bolivia, y más bien se nota un proceso de acomodación por parte de sus dirigentes a las reglas de juego establecidas por el gobierno. Al respecto, fue notorio el escándalo que protagonizaron dos de sus representantes parlamentarios al reunirse con los ejecutivos de gobierno a espaldas de su máximo dirigente, Evo Morales, para negociar la crisis generada por el bloqueo de caminos de campesinos cocaleros del Chapare en enero de 2003.

15 Es emblemático el desmantelamiento de la Casa Rosada, sede del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y del bufete del hombre fuerte del MNR, Carlos Sánchez Ber-

zaín. La destrucción de las instalaciones de grandes empresas privadas como la Cervecería Boliviana Nacional y Coca Cola da cuenta de la identificación que hace la población de la fuente de la que emana su malestar económico y social.

16 Esta tendencia derivó en reuniones entre dirigentes de la empresa privada, la Central Obrera Boliviana y la oposición parlamentaria liderada por el Movimiento al Socialismo (MAS), orientadas al inicio de un trabajo conjunto para reactivar el aparato productivo del país (*Los Tiempos*, 2003[b]).

17 Queda claro que el gobierno no piensa aumentar el impuesto sobre las utilidades de las grandes empresas petroleras. A fines de enero de este año volvió a subir el Impuesto Especial a los Hidrocarburos (Decreto N° 26.926, 25 de enero de 2003), impuesto indirecto que grava a los consumidores y libera de la carga a las transnacionales petroleras.

18 Estos fondos están formados por la política de condonación de la deuda externa, dirigida a aliviar la precaria situación social de los sectores más deprimidos de la población en los países endeudados de menor desarrollo relativo. De ahí que los fondos están destinados a programas de lucha contra la pobreza; sin embargo, el gobierno boliviano parece decidido a destinar dichos fondos a la disminución del déficit fiscal que aqueja al Estado, a costa de disminuir la ayuda a los pobres del país.

Crisis estatal y muchedumbre

Álvaro García Linera*

* *Matemático
e investigador social.
Docente de la carrera
de Sociología
y de la Maestría
en Ciencias Políticas
en la Universidad Mayor
de San Andrés,
La Paz, Bolivia.*

Se ha dicho que todo Estado es el monopolio tanto de la coerción física legítima como de la violencia simbólica. Esto significa que el Estado es una continua producción de creencias e ilusiones bien fundadas, como la de la pertenencia a una "comunidad política" territorializada, la obediencia a la ley, el acatamiento a las decisiones tomadas por determinadas personas denominadas "autoridad", etc. La legitimidad es aquí la naturalización y somnolencia colectivas respecto a unas arbitrariedades, unas pruebas de fuerza que impusieron unos recortes de soberanía específicos sobre el territorio o unos criterios particulares de grupo como ley. En tal sentido, la legitimidad encarnada por el Estado reposa sobre violencias olvidadas y, en tanto eso, consagradas y reproducidas como si no fueran imposiciones. El Estado es, por tanto, una continua *eufemización* de un fondo histórico violento y no en vano ha de monopolizar precisamente la administración de la violencia física imaginada como necesaria para proteger la vida en común.

Por ello, cuando el Estado duda de sus monopolios ante la impronta política de una sociedad desbordante, como ahora viene sucediendo en Bolivia, estamos ante el fin de una forma estatal que, al aceptar un policentrismo de principios de autoridad, ha extraviado la voluntad racionalizada de un poder que sólo podrá ser restaurado mediante la consagración de nuevos discursos de credibilidad gubernativa, nuevas composiciones de fuerzas con capacidad de dirección social y nuevas instituciones que articulen el escenario político. Al fin y al cabo, los estados son modos, exitosos, fallidos o mutilados, de condensación social, y de ello depende su gelatinosidad, perennidad o inestabilidad.

Las fases de la crisis estatal

En el caso de Bolivia, está ya por demás claro que el actual Estado neoliberal, al menos en la forma en que lo hemos conocido hasta ahora, está atravesando un proceso de acelerada declinación y agotamiento. El primer momento de este desgaste sistémico se inició en el año 2000, cuando la emisión de creencias conservadoras que garantizaban el consenso social respecto a las líneas maestras de las políticas públicas (gobernabilidad, privatizaciones, libre mercado) fue interpelada e incluso retrocedió frente a otras ofertas discursivas de organización económica y política alternativas (comunitarismo, autogobierno indígena, estatización, autogestión). Esto afectó el régimen de creencias movilizadoras de la sociedad, descentrando el campo discursivo en múltiples nodos emisores, y dando inicio al ocaso de la certidumbre moral del Estado.

Un segundo momento de la crisis vino a partir de septiembre de 2000, posteriormente ratificado en julio de 2001 y febrero de 2002, cuando el monopolio estatal de las decisiones políticas y de la coerción física comenzó a resquebrajarse.

Desde entonces, y de manera recurrente, sistemas organizativos locales no estatales de administración del poder (los cabildos, los comités de huelga, las federaciones campesinas coaligadas) y de la violencia legítima (comités de autodefensa, cuartel indígena de Q'alachaca), asentados en sindicatos y comunidades del altiplano norte y el trópico, han emergido públicamente y tienen amplia aceptación en esas regiones.

Es cierto que la actuación del Estado en muchas zonas es débil o simplemente existe por la presencia de algún regimiento militar. Precisamente, lo notable de la época actual es que pese a ello, o por ello, la sociedad está comenzando a producir instituciones colectivas de coerción y mando que han canalizado decisiones sociales y la imposición relativa de esas determinaciones. Esto se puede denominar como la coexistencia jerarquizada de dos campos políticos portadores de dos lógicas de soberanía contrapuestas. El Estado está viviendo un cerco de principios de estatalidad que no son los suyos y que

***“La fuerza de la
muchedumbre
radica en su
capacidad de decir
no, esto es, de
resistir, de oponerse,
de destruir; pero a la
vez, acabada su
tarea, se repliega, se
disuelve en el
anonimato de sus
intereses.”***

marcan la potencialidad proactiva de movimientos sociales que portan proyectos de reforma estatal.

Y éste es justamente el antecedente inmediato del último síntoma de la crisis estatal: el enfrentamiento armado entre instituciones coercitivas del Estado el 12 y 13 de febrero pasados.

Durante veinticuatro horas, y a raíz de un motín policial, tropas del Ejército y la Policía, respaldadas por civiles, se enfrentaron con armas de fuego en las inmediaciones de la casa de gobierno y el parlamento en la ciudad de La Paz. Que las organizaciones estatales usen armas para defender su monopolio contra sectores que desconocen este privilegio es algo esperable de un Estado que se precie de tal; pero que las instituciones armadas del Estado usen las armas para detener las pretensiones autónomas de otras instituciones armadas del Estado habla de un derrumbe catastrófico del principio de cohesión y unicidad estatal, que es algo así como el instinto de preservación básico de cualquier organización social. El Estado no puede comenzar a aniquilarse a sí mismo de manera impune, a no ser que, por senilidad histórica o extravío de la razón, haya abandonado las ganas de existir, que es lo que pareciera estar sucediendo cuando vemos a militares y policías matarse a balazos en las calles.

Para que esto pudiera acontecer, hay que tomar en cuenta los efectos de la crisis estatal en el almacén institucional del Estado. Desde el año 2000, la sociedad ha experimentado movilizaciones exitosas, de las que la Policía y el Ejército han salido por lo general desmoralizadas por la imposibilidad de cumplir la misión asignada por el gobierno, que es precisamente la de desmovilizar a los insurgentes movimientos sociales. Que cada conflicto social acabe no con una capitulación de los líderes sindicales sino con una nueva abdicación de autoridad del gobierno no puede menos que generar un sentimiento colectivo de tropa derrotada tanto en el Ejército como en la Policía. Por otro lado, los límites financieros del modelo neoliberal han converti-

do los impuestos sobre el salario en uno de los últimos recursos para ampliar los ingresos fiscales de un Estado en bancarrota; y dado que los policías son el sector laboral peor pagado de la administración pública, no es raro que se trate de una organización permeada por la querrela social en torno al excedente, que es justamente el reclamo inicial que condujo a la tropa antidisturbios de la Policía a amotinarse en febrero y a encontrar apoyo en la población asalariada urbana que iba a ser afectada con un nuevo impuesto del 12,5% sobre el líquido pagable.

En todo este escenario, ciertamente hubo algo así como una memoria institucional de confrontación que se remonta a la revolución de 1952, cuando en la misma ciudad de La Paz la Policía se puso del lado de la plebe insurrecta para derrotar al Ejército. En los años '90, esta conflictividad se desplegó en torno a la administración de los recursos norteamericanos de interdicción contra el narcotráfico, que inicialmente favorecieron a la policía y después, cuando el Ejército incursiona en acciones antinarcóticos, quedó en manos de las FF.AA.

Sin embargo, hubo impulsos que cuestionaron la propia institución y la continuidad estructural de su memoria. En los hechos, entre el 12 y 13 de febrero un mayor mandaba a un general, un cabo o suboficial se colocaba al frente de un capitán, en tanto que todos, sin excepción, desconocían la autoridad civil de los ministros y el presidente. La cadena de mandos y jerarquías que garantizan la cohesión del Estado, y con ello la verosimilitud de su continuidad, comenzó a quebrarse a medida que los policías muertos eran recogidos por sus camaradas. Con las horas, el sentido de autoridad en el mismo Estado se diluía replegándose a su núcleo íntimo y final: las Fuerzas Armadas. De este modo, la legitimidad democrática yacía tendida frente a unas tanquetas convertidas en el último y más seguro refugio de la autoridad presidencial.

El cierre social del Estado

Si bien este colapso temporal del sistema de mandos y jerarquías en la institucionalidad estatal fue el primer elemento que caracterizó esta nueva etapa de la crisis estatal, un segundo componente relevante emergente en febrero fue el derrumbe general de la autoridad ante la población urbana de La Paz y El Alto, y el resurgimiento simultáneo de una forma de acción colectiva correspondiente a este desplome general de la autoridad estatal y social, que denominaremos *muchedumbre*.

Esto significa que toda crisis estatal general produce a su modo procesos de auto-agregación social cuya expansión, densidad y eficacia acompañan a cada una de las etapas de esa crisis. En Bolivia, en los últimos tres años, la crisis estatal ha generado distintas

formas de autoorganización de las clases subalternas. La primera etapa catapultó a la forma *multitud* como sujeto colectivo organizado. Su éxito y eficacia como forma de acción colectiva se sostuvieron sobre sus estructuras flexibles, capaces de articular a diversas organizaciones locales territoriales y no territoriales en torno a una política de necesidades vitales. A su



vez, la crisis de septiembre fue producida por los sistemas comunales del mundo campesino-indígena, que lograron ensamblar una estructura mayor de movilización regional dando lugar a una gigantesca maquinaria indígena de guerra capaz de conquistar caminos, agotar al ejército y asediar ciudades.

En el caso del reciente amotinamiento civil de febrero de 2003 en la ciudad de La Paz, Cochabamba y en menor medida Santa Cruz, el sujeto colectivo que se estructuró y movilizó con una ferocidad sorprendente ha sido la muchedumbre.

En la movilización de febrero, y una vez iniciado el enfrentamiento entre policías y militares, varios miles de personas comenzaron a aglutinarse en torno a la plaza principal, custodiada por los militares, y al cuartel de los policías amotinados. En una especie de articulación de memoria colectiva (la vieja alianza entre policías y plebe frente al ejército) y cercanía social (la tropa policía está compuesta por sectores urbano-populares en gran parte de procedencia indígena), una parte de la población movilizada comenzó a apoyar a los policías que se enfrentaban en desigual combate con armamento policial (lanzagases, pistolas y algunas carabinas) contra las tropas militares leales que resguardaban la casa de gobierno portando armamento de guerra (fusiles automáticos, ametralladoras pesadas, bazucas, miras telescópicas y helicópteros). Otro grupo de la población, en cambio, auto-convocado, pues no hubo ninguna proclama ni llamado público, comenzó a formar un círculo en torno a las calles de acceso a la plaza Murillo, convertida en el epicentro del conflicto, y tomó la iniciativa de actuar por su cuenta. Una parte de ella se dirigirá al Ministerio de Trabajo y le prenderá fuego; posteriormente pasarán por la Vicepresidencia para quemar el edificio y, más hacia la noche, por otros ministerios, casas de los partidos políticos oficialistas y, al final, una vez que el número de muertos hubo roto la economía moral de tolerancias y excesos entre sociedad y Estado, las ofici-

nas de empresas de servicios básicos privatizadas, incluida la fábrica de cerveza. En la noche, en la ciudad aldeaña de El Alto, miles de personas quemaron las oficinas de cobranza de los servicios básicos (agua, electricidad), la alcaldía en manos de uno de los partidos de gobierno, la aduana y sucursales bancarias. En la ciudad de La Paz, grupos más reducidos comenzaron a asaltar las tiendas comerciales lujosas del centro para, al finalizar la noche, dirigirse a los locales comerciales de abasto popular en las zonas altas de la ciudad donde los vecinos levantaron barricadas para cuidar los vecindarios de las amenazas de saqueo y del ingreso de las tanquetas militares.

Durante horas, a la cabeza de una masa de jóvenes provenientes de los más disímiles oficios, todos los sistemas previos de autoridad, tanto estatal como social, se resquebrajaron, dando paso a un actor colectivo portador de una intencionalidad política claramente manifiesta en la quema simbólica de los edificios del poder estatal y de las privatizaciones.

En la constitución de este sujeto urbano, no fueron ni los sindicatos, ni las comunidades, ni los gremios, ni siquiera los vecinos, los que dieron lugar a esas masas plebeyas que se descolgaron hacia las calles, edificios gubernamentales y comercios urbanos. Esto supondría una organización de organizaciones previamente constituidas, que no fue el caso.

Quienes se movilizaron fueron personas que carecen de una filiación organizativa primordial, y que por tanto son capaces de actuar de manera electiva en torno a un objetivo sin rendir cuentas a nadie, sin seguir a nadie y sin tener ningún comportamiento que no emanara de su criterio individual, de sus expectativas individuales, de sus angustias e intereses personales.

Estas personas, carentes de lazos normativos y de anclajes colectivos, son fruto de procesos de modernización bastardeados en la medida en que han dejado atrás las filiaciones colectivas tradicionales de la comunidad y el gremio, pero a la vez no han interiorizado las pautas de la ciudadanía corporativa (el sindicato de asalariados) ni la ética del contribuyente (impuesto a cambio de servicios sociales) propios de la modernidad exitosa.

La muchedumbre es la manifestación colectiva de una individuación vaciada, de un desarraigo de las tradiciones sin sustituto cognitivo, de un porvenir cerrado, sin rumbo y sin más meta que el sobrevivir a como dé lugar. Esta muchedumbre es la coalición temporal y facciosa de individuos provenientes de los más diversos oficios que no le deben nada a nadie, ni al sindicato, ni al gremio ni a la junta de vecinos, y mucho menos a un Estado que los ha abandonado a su suerte o sólo existe para *exaccionarlos*. Son personas nacidas en la precariedad, la exclusión y el cierre a cualquier ascenso social planificable, y están presentes tanto en Los Ángeles como en El Alto, en Caracas como Buenos Aires, en La Paz o Santa Cruz.

Como está asentada en contingentes y volátiles organizaciones previas, la muchedumbre se gatilla por lo general por alguna indignación moral que rompe la barrera de lo tolerable o por vacíos de poder que habilitan la apuesta a la obtención de algún beneficio material particular mediante el uso de la fuerza de masa. Sin embargo, al menos en el caso de Bolivia, este amontonamiento de individualidades está marcado por un tipo de politización, tal vez heredado del pasado sindical y comunal o por influencia de movimientos sociales activos. De ahí que el saqueo, acción típica de la muchedumbre moderna, se combine acá con el asalto a edificios públicos que simbolizan la materialidad del poder arbitrario, en tanto que la quema posterior pareciera exorcizar la presencia de ese poder.

La fuerza de la muchedumbre radica en su capacidad de decir *no*, esto es, de resistir, de oponerse, de destruir; pero a la vez, acabada su tarea, se repliega, se disuelve en el anonimato de sus intereses. Expresa un malestar pero, a diferencia de la forma multitud, de la forma comunidad y la forma sindicato, no abraza vías de resolución de la indignación ni las formas organizativas para alcanzarlas.

Y sin embargo, la muchedumbre está ahí y nuevamente estará ahí como forma descubierta de la presencia de amplísimos segmentos sociales urbanos disconformes con lo existente y portadores de una ambigüedad política. Son una ineludible fuerza de choque contra el Estado, pero también, simultáneamente, de generación de sentimientos conservadores en sectores urbanos identificados en torno al miedo a perder los réditos de su mediana propiedad. Con todo, la muchedumbre, nuevo sujeto social del movimiento social urbano, es también un catalizador de las polarizaciones entre grupos estatales y entre segmentos sociales que pareciera caracterizan a la siguiente etapa de la crisis estatal general que tarde o temprano tendrá que resolverse en la estructuración de una nueva forma estatal capaz de sintetizar a la sociedad.

Documentos

Manifiesto del Estado Mayor del Pueblo Boliviano

El Estado Mayor del Pueblo Boliviano conformado por la Central Obrera Boliviana, Centrales Obreras Departamentales (Cochabamba, Oruro, La Paz, Potosí, Sucre), Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Confederación de Colonizadores de Bolivia, Confederaciones de Maestros Urbanos y Rurales, Confederación de Mujeres Campesinas, Confederación de Trabajadoras del Hogar, Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, Federación de Constructores, Federaciones de Maestros Urbanos, Rurales y del Trópico Cochabambino, Federaciones de Trabajadores Campesinos (Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Centrales Sindicales de Trabajadores Campesinos de La Paz), Federación de Regantes, FUL-UMSS (Federación Universitaria Local-Universidad Mayor de San Simón), Federaciones de Cocaleros, Movimiento Sin Tierra, Federación de Mujeres Campesinas "Bartolina Sisa", Prestatarios, CONALTAVIS (Confederación Nacional de Trabajadores Adjudicatarios de Vivienda de Interés Social), Desocupados, Comité de Defensa del Patrimonio Nacional y delegados de base de todos estos sectores, manifiestan al pueblo boliviano que:

Cansados de la infinidad de diálogos estériles, convenios firmados y nunca cumplidos, organización de comisiones inoperantes;

Cansados de soportar una política antinacional y antipopular que ha creado una situación de miseria jamás sufrida antes;

Cansados de la enajenación sistemática de nuestras empresas estratégicas y de nuestros recursos naturales;

Cansados de tolerar el desmantelamiento de la Seguridad Social;

Cansados de la corrupción e impunidad de los políticos de turno;

Cansados de tolerar una política de traición a la Patria que pretende enajenar nuestro Gas por Chile para los EE.UU. y convertir a nuestra Patria en colonia yanqui a través del Área de Libre Comercio para los Norteamericanos (ALCA);

Cansados de tolerar la masacre gubernamental contra el pueblo boliviano, hemos decidido de manera unitaria y orgánica defender la existencia misma de la Nación boliviana, con total soberanía y con verdadera democracia participativa donde el poder sea del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Esta lucha se expresa en el Pliego Único Nacional que debe ser respondido de manera unitaria, y jamás sectorialmente.

Por tanto, este Estado Mayor del Pueblo, da un plazo de 48 horas manteniendo y masificando las medidas de presión contra el gobierno para que dé una respuesta favorable a todas y cada una de las justas y legítimas reivindicaciones de todos los sectores populares, caso contrario, ante la incapacidad gubernamental, la opción represiva y criminal y la acción de alta traición a la Patria, declaramos la consigna de "FUERA GONI Y CARLOS MESA POR INCAPACES, ASESINOS DEL PUEBLO Y TRAICION A LA PATRIA".

Al mismo tiempo se declara la movilización y masificación del bloqueo en todo el territorio nacional, tanto en el campo como en las ciudades, contra el gobierno y la embajada norteamericana.

En caso de formalizarse el Estado de Sitio, ya impuesto como en las épocas de facto, decretamos la desobediencia civil y la resistencia movilizadora, manteniendo los bloqueos y radicalizando con otras medidas de presión.

Finalmente a tiempo de condenar el uso de nuestros hijos en servicio militar para la represión, convocamos a la tropa y a los oficiales patriotas, tanto de las FFAA. como de la Policía, a no mancharse las manos con la sangre de su propio pueblo y familia.

Es dado en la ciudad de Cochabamba a los diecinueve días del mes de enero del dos mil tres.

Resoluciones del Estado Mayor del Pueblo

Las organizaciones sociales, sindicales y populares, reunidas en la sede de la Federación de Fabriles de Cochabamba, resuelven:

1. Que el Presidente y el Vicepresidente de la República estén en la obligación de renunciar, por haber ocasionado con una medida inconsulta y altamente atentatoria a la economía popular, la muerte de 29 hermanos bolivianos.
2. Continuar con las vigalias y movilizaciones decretadas por todos los sectores para evitar una mayor confrontación social y exigir que las instituciones facilitadoras convoquen a un encuentro nacional y social de alto nivel. En este encuentro deberá acordarse la convocatoria, mediante una ley de la República, a la realización de una consulta nacional ciudadana sobre los temas de la exportación de gas a EE.UU., la capitalización de las empresas públicas y la participación de Bolivia en el ALCA. Esta consulta deberá tener carácter vinculante y estar organizada y conducida por las instituciones facilitadoras.
3. Exigir que las mesas de diálogo sean de cara al pueblo y con participación de todos los sectores sociales. Respaldando la lucha de los trabajadores de la prensa por la libertad de expresión e información, exigimos que los periodistas ingresen a realizar su trabajo en estas mesas de negociación.
4. Nos ratificamos en la idea de revertir los recursos privatizados desde 1985.
5. Convocar al pueblo boliviano, organizaciones sociales y sindicales de todo el país al ENCUENTRO SOCIAL para analizar los temas del GAS, CAPITALIZACIÓN, TIERRA Y TERRITORIO, PRESUPUESTO E INCREMENTO GENERAL DE SALARIOS. Todo esto con el fin de preparar la ASAMBLEA CONSTITUYENTE POPULAR Y DE LAS NACIONES ORIGINARIAS, para cambiar estructu-

ralmente el país. El encuentro nacional se realizará en la ciudad de La Paz, el 25 y 26 de febrero de este año.

6. Poner al gobierno un plazo de 15 días para resolver todos los pedidos de los trabajadores y de las organizaciones del país.

7. Denunciar a la comunidad nacional e internacional la persecución y amenaza de someter a juicios penales a dirigentes de organizaciones sindicales anti-neoliberales.

Domingo 16 de febrero de 2003

**Cronologías
Enero – abril 2003**

Luchas sociales y “neoliberalismo de guerra” en América Latina¹

Por Clara Algranati

Crisis de legitimidad y vientos de resistencia

A diferencia del inicio de la década de los '90, cuando el modelo neoliberal parecía extenderse a toda la región latinoamericana como horizonte único, hoy resulta difícil desconocer la profundidad de la crisis de legitimidad que lo cuestiona. Estos cuestionamientos expresan, y son el resultado, de aquellos procesos de condensación de luchas sociales que, en los últimos años, han enfrentado y resistido políticas concretas que forman parte de este recetario económico-social. Un gran número de pueblos y geografías de la región se han visto sacudidos por estos significativos momentos de confrontación social que, en algunos casos, desencadenaron profundas crisis políticas, haciendo tambalear e incluso hasta derrumbar gobiernos luego de que éstos intentaran llevar adelante privatizaciones, aumentos de precios o recortes salariales. En números anteriores del *OSAL* hemos abordado estas experiencias de conflicto social que claramente

podemos pensar bajo estos términos, entre ellas la "Guerra del agua" en Cochabamba en 2000, la revuelta indígena en Ecuador en el mismo año, y el "argentino" en diciembre de 2001, tan sólo para mencionar algunas.

En estas coyunturas observamos una retirada radical del apoyo pasivo a gobiernos elegidos democráticamente, cuando éstos asumen el recetario neoliberal y se disponen, cada vez de manera más previsible, a dilapidar su capital político en tiempos abreviados y al calor de la manifestación popular. En este sentido, este primer cuatrimestre del año 2003 no se distancia de estas tendencias –que venimos reseñando en esta sección de la revista– respecto a la importancia cualitativa y cuantitativa de las luchas sociales que protagonizan los habitantes de la región de América Latina.

Así, por ejemplo, en febrero de este año una crisis política de inmensas proporciones atraviesa el territorio andino boliviano cuando diferentes sectores sociales organizan su oposición al decreto presidencial de reforma del Presupuesto General de la Nación. El decreto aplicaba un impuesto a los salarios del orden del 12,5% y obedecía al requerimiento del FMI de reducir el déficit fiscal. La reacción popular ante esta medida es inmediata. En primer lugar se expresa el repudio y la resistencia de los sectores campesinos que defienden el cultivo de la hoja de coca, quienes vienen enfrentándose diariamente a una intensa represión por parte del ejército. Rápidamente se suman maestr@s, trabajadores de la salud, estudiantes secundarios, universitarios, comerciantes y las poblaciones pobres de La Paz y otras ciudades del interior. Entre el 11 y 12 de febrero se amotinan los principales destacamentos policiales del país. En masivas puebladas los bolivianos exigen la renuncia del presidente mientras se producen enfrentamientos entre la policía y el ejército. La salvaje represión desatada por el gobierno, que contó con francotiradores apostados en edificios públicos, deja un saldo de 35 personas muertas y más de 200 heridos (ver sección Análisis de casos en el presente OSAL).

Por otra parte, en la misma dirección podemos señalar las dificultades que encuentra el presidente Toledo en Perú para diferenciarse del "fujimorismo" sin variar el rumbo de las políticas económicas que su gobierno promueve. Este caso nos trae a la memoria las circunstancias políticas vividas bajo la gestión del presidente De la Rúa en Argentina cuando –habiendo ganado las elecciones apelando al "antimenemismo" que la sociedad ya había conquistado– continuó, una vez asumido el gobierno, por sobre los pasos de su predecesor, profundizando su política. Similitudes que nos señalan en qué medida estos procesos suelen ser veloces y comienzan a experimentarse rápidamente una vez acabada la fiesta de asunción y cuando las noticias de diarios y televisoras no pueden ocultar la concreción de políticas que discurren en las líneas ya recorridas y que han evidenciado ostensibles fracasos.

En respuesta al rumbo adoptado por el gobierno de Toledo las manifestaciones y huelgas del sector público, sobre todo el docente, son continuas, fundamentalmente en reclamo de un aumento del presupuesto de las áreas sociales. En algunos casos la reivindicación que plantean los sectores movilizados hace explícita su oposición a la política neoliberal del gobierno, mientras que otras veces expresan importantes niveles de convergencia bajo la forma de paros regionales. Sin embargo, el conflicto de mayor extensión en el tiempo durante este primer cuatrimestre del año lo protagonizan los campesinos cocaleros que se oponen a la erradicación de sus cultivos.

Estos hechos brevemente reseñados de Bolivia y Perú dan cuenta del “sobrevolar de una crisis” que, si bien no imposibilita recomposiciones políticas al interior de los estados nacionales en términos de la continuidad del modelo, renueva rápidamente malestares populares que le imprimen a la “governabilidad neoliberal” una dificultad creciente para alcanzar niveles de estabilidad. Por otro lado, al calor de estos procesos, los movimientos sociales más dinámicos de la región han ido forjando un balance crítico sobre las consecuencias sociales de la aplicación del recetario neoliberal así como también respecto de las repetidas formas bajo las cuales éste se traduce en políticas concretas que afectan a las mayorías. Así, esta experiencia social funciona como un límite difícil de sobrepasar cuando se intenta profundizar rumbos contra la voluntad de la población.

En términos de la evolución de la conflictividad social, si nos detenemos en las cifras totales de los conflictos relevados por el OSAL, el aumento más significativo a lo largo de los diez cuatrimestres trabajados (2000/2003) lo encontramos en los períodos enero-abril y mayo-agosto de 2001, cuando los registros aumentan más de un 60%. Luego las variaciones son mucho menores y los hechos de conflicto relevados oscilan entre 1.870 (septiembre-diciembre de 2001) y el promedio de 2.240 registros en el período que va de enero de 2002 a abril de 2003. Si, por otra parte, comparamos este primer cuatrimestre del año 2003 con igual período del año 2001, vemos que los registros obtenidos aumentan un 83,6% en sólo dos años. En este ciclo los hechos de protesta registrados en los 19 países de la región considerados durante el primer cuatrimestre de 2003 alcanzan la cifra de 2.242, superando a los del último cuatrimestre de 2002 en un 7,4%.

En un intento por enunciar algunos de los sentidos que las sociedades latinoamericanas están gestando, pondremos en consideración las principales experiencias que el proceso social delinea durante el primer cuatrimestre del año 2003.

Profundización del ajuste y la ampliación de las coaliciones sociales

Los datos del OSAL para este período muestran un importante aumento de las protestas "multisectoriales", donde más de un sector social articula su acción en base a objetivos comunes. En este tipo de protesta los actores involucrados hacen presentes reivindicaciones de carácter político en más de la mitad de los casos.

Respecto al mundo del trabajo asalariado hay una importante disminución de los conflictos que protagonizan los trabajadores del sector privado. Sin embargo, en el sector público, y especialmente en el sector docente, seguido por el de los trabajadores de la salud, el incremento de las acciones de protestas es significativo, así como también la capacidad que tienen los maestros para rápidamente asumir su forma ampliada de "comunidad educativa" y de esta manera extender su red de solidaridades.

Por ejemplo, en Guatemala, donde los registros de protesta aumentan un 121% respecto al cuatrimestre anterior, los docentes protagonizan un proceso de acumulación de fuerza social sin precedentes en los últimos años, y se transforman en actores capaces de involucrar a toda la sociedad. Comenzando por alumnos y padres –quienes participan desde el principio del conflicto– hasta alcanzar a distintos sectores gremiales, de derechos humanos y campesinos, que van posicionándose a lo largo de los días, todos juntos colocan al gobierno en la situación de ceder a las demandas planteadas. Los maestros alcanzan un aumento salarial y el compromiso de las autoridades de considerar el resto de sus demandas. Pero quizás uno de los rasgos más llamativos –y que por supuesto incide en el resultado del conflicto– es la capacidad del sector docente de impulsar a otros sectores a hacer propia una resistencia cuya fuerza radica en un valor social, en "la defensa de la educación pública". El proceso en Guatemala señala cómo estos conflictos logran importantísimos niveles de adhesión y solidaridad en muy breve tiempo, mostrando una capacidad de articular la defensa de más de un derecho elemental como el derecho al trabajo y el derecho a la educación.

A nivel regional se destacan también las protestas de los trabajadores de la salud que recogen amplios niveles de adhesión, aunque en términos de la cantidad de registros son menores en relación con las mencionadas anteriormente. Un ejemplo notable lo encontramos en El Salvador, donde estos trabajadores realizan una huelga en contra de la privatización del sector impulsada por el gobierno y solicitada por el FMI como condición para la firma de una carta de intención. Luego de enfrentamientos y la detención de activistas de las organizaciones sindicales, la policía nacional ocupa los principales hospitales y restablece el servicio con médicos contratados especialmente para terminar con la medida de fuerza.

En República Dominicana la oposición al ajuste es de tal magnitud que hace retroceder al gobierno en sus intenciones, mientras que en Honduras una serie de medidas que afectan al sistema público de educación y salud –algunas de las cuales son tomadas por el Ejecutivo luego de la visita de una delegación del FMI– produce una seguidilla de manifestaciones. Por otra parte, también en Nicaragua, asalariados del estado y estudiantes convergen en la protesta contra las medidas de ajuste sobre la salud y la educación. La continuidad de las movilizaciones estudiantiles hace retroceder en parte al gobierno.

Por último cabe señalar el aumento respecto al cuatrimestre anterior de las protestas protagonizadas por campesinos o por pequeños y medianos propietarios rurales. Se destaca aquí el caso de México, donde se articulan amplios sectores del campo en la lucha contra los efectos del TLCAN –y particularmente de su capítulo agropecuario– que comentaremos en mayor detalle en el último punto de este artículo.

“Virajes políticos” y Movimientos Sociales

Coincidiendo con los comienzos del año 2003, la asunción del presidente Ignacio Lula da Silva en Brasil señala el inicio de un ciclo de recambio de gobiernos que prometen “virajes políticos” o la adopción de políticas no neoliberales. Ya a fines del año 2002 la elección de Lucio Gutiérrez en Ecuador (ver el artículo de Ángel Bonilla y Ana María Larrea en este número de la revista), contando con el apoyo de una articulación de movimientos sociales de los más dinámicos de la región, como es el movimiento indígena, planteaba un similar horizonte de esperanzas. En el mismo sentido, la tradición del Partido de los Trabajadores (PT) como una herramienta política que ha servido para expresar demandas surgidas de movimientos sociales significativos de la región como la CUT y el MST, da cuenta también de un cuestionamiento al modelo capaz de construir alianzas exitosas en términos electorales. Sin embargo, es importante señalar que siempre estos movimientos han reivindicado su autonomía respecto de los partidos políticos, incluso del PT.

Este nuevo escenario supone la participación de dirigentes provenientes de los propios movimientos sociales en alianzas electorales que llegan a ser gobierno y que presentan importantes niveles de heterogeneidad política. Las tensiones que esta situación plantea repercuten rápidamente en los propios movimientos, impulsándolos a abrir importantes debates en torno a las políticas gubernamentales y su posicionamiento frente al estado. En este sentido cabe destacar que en estos cuatro primeros meses de 2003 el conflicto social en estos países, lejos de disminuir, aumenta un 50% en Brasil y un 98% en Ecuador respecto al último cuatrimestre del año 2002. Es por ello que resulta muy importante examinar atentamente cómo, en estas situaciones, se produce

la relación del movimiento social con el gobierno, la política, la autonomía y la construcción de alternativas.

En Ecuador esta cuestión aparece con claridad en la multiplicación a gran escala del debate que impulsan los movimientos indígenas a propósito de la posición respecto al nuevo gobierno del cual forman parte. Una primera conclusión de ello resulta con la ruptura del Ecuarunari (Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador) con el gobierno, hecho que se produce finalmente el 24 de abril cuando esta organización indígena se declara independiente del mismo. Uno de los detonantes del retiro de la confianza popular es el paquete de medidas económicas que implica un aumento promedio del 35% en los combustibles, el congelamiento del gasto público y una reducción del 20% en los salarios de los empleados públicos, entre otras medidas que Gutiérrez promueve en consonancia con las exigencias del FMI.

Por otra parte, en Brasil, las primeras protestas contra las políticas promovidas por el nuevo gobierno vienen de la mano de los servidores públicos y de los profesores universitarios que se oponen a la reforma previsional impulsada por Lula, así como también a la privatización del Banco Nación, que podría causar 40 mil despidos.

Respecto a esta cuestión, podemos señalar también cómo los discursos que refieren al "suceso político", al "cambio" o la "transición política" en Brasil resuenan y son resignificados en el escenario internacional proyectando un optimismo propagandístico que, ante la ausencia de alternativas políticas efectivas, resulta en la exportación de una referencia ambigua para el resto del cono sur y también para los países andinos.

Por otro lado, en Venezuela encontramos la polarización ideológica y política de expresión más aguda de toda la región, donde los niveles de confrontación ocasionados por el paro cívico nacional impulsado por la Coordinadora Democrática (CD) aún no permiten saldar la grieta abier-

"...en estos cuatro primeros meses de 2003 el conflicto social (...) lejos de disminuir, aumenta un 50% en Brasil y un 98% en Ecuador respecto al último cuatrimestre del año 2002"

ta cuando los mismos sectores planificaron un golpe de estado para derrocar al presidente electo Hugo Chávez. Esta vez los sectores opositores en paro suben la apuesta, instando a la población a que se declare en desobediencia tributaria y deje de pagar los impuestos. Durante enero se suceden manifestaciones a favor y en contra del gobierno que dejan un saldo de tres muertos y varios heridos, para cerrar el ciclo el 1º de febrero, cuando la CD, la CTV y FEDECAMARAS deciden levantar el paro.

Posteriormente el gobierno lanza una ofensiva en varios frentes que se plasma en la creación, a principios de abril, de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNTV), con 56 federaciones regionales y 14 sindicatos nacionales cercanos al gobierno, sumando cerca de un millón de trabajadores. En el mismo sentido, en abril, el presidente Chávez ordena al ejército y a la guardia nacional apoyar la ocupación de tierras pertenecientes al estado por parte de los campesinos, en el marco de la reforma agraria que se lleva adelante.

En el escenario global en el que está instalado el conflicto venezolano, cabe destacar el hecho político que significó el viaje del presidente Chávez a Brasil a fines de enero –cuando aún el paro cívico impulsado por la oposición no había terminado– para participar, buscando y recibiendo apoyos internacionales, del III Foro Social Mundial que se realizó en la ciudad de Porto Alegre, Brasil.

Por último, en América del Sur, en relación a la protesta social, se destacan aquellas protagonizadas los movimientos sociales de base territorial. Los “sin” o “excluidos” producen una vez más las confrontaciones políticas más significativas de la dinámica regional. Esta proliferación de movimientos que se constituyen en clave de su carencia (los “sin”) expresa una de las paradigmáticas secuelas de la debacle social que supuso el neoliberalismo en la región. En Paraguay, los sin techo de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares-Movimiento Sin Techo (CONOP-MST) cierran rutas contra el recorte de fondos destinados a la adquisición de tierras. En Brasil, el Movimiento Sin Tierra (MST) realiza ocupaciones de haciendas en diferentes regiones del país con el objetivo de presionar al gobierno federal en pos de sus reivindicaciones, siendo ésta la primera acción efectuada por el MST desde la asunción del gobierno de Lula. Por otra parte el gobierno federal da a conocer que no va a rever la medida provisoria que considera delito las ocupaciones de tierra y que retira del programa de reforma agraria a las tierras que sean ocupadas por un plazo de dos años.

En Argentina se destacan las luchas encabezadas por los diferentes movimientos de trabajadores desocupados o piqueteros, que significaron más del 53% de las protestas de los asalariados en su conjunto durante el cuatrimestre. Y finalmente, en Uruguay, si bien los hechos de conflicto registrados bajan el 38% respecto del cuatrimestre anterior, se destacan las movilizaciones de la Federación Uruguaya de Vivienda por Ayuda Mutua

(FUCVAM) en reclamo de que el dinero del Fondo Nacional de Vivienda sea destinado a la construcción de las mismas. En este marco, la organización realiza en enero una marcha de tres días de Montevideo a Punta del Este, donde se les prohíbe el acceso y los 169 militantes que encabezaban la movilización son detenidos por unas horas.

El movimiento de “resistencia global” en América Latina Del Foro Social de Porto Alegre a la lucha contra la guerra

Los atentados del 11 de septiembre se volvieron inigualables argumentos para presentificar hasta las más impenetrables geografías, la posibilidad permanente de una guerra constante y de un poder “omnipresente” que el mismo presidente Bush presentó en sociedad con el nombre de “guerra infinita”. Luego de la invasión de EE.UU. a Afganistán, e instalada la propaganda mediática que sus propios monopolios de la información construyeron sobre supuestas “armas de destrucción masiva”, los pueblos del mundo fueron conscientes de la estrategia imperial en pos de apoderarse de los recursos naturales de Irak y supieron prever el inevitable espanto de la guerra.

A pesar de la tragedia en curso, la propaganda, el lobby y finalmente la ruptura de la legalidad internacional –cuando las potencias agresoras deciden la invasión militar sin autorización del consejo de seguridad de las Naciones Unidas– el movimiento social global potenció al máximo sus redes políticas y organizativas hasta alcanzar el grito más fuerte y unitario que se haya dado jamás, pronunciando en cientos de idiomas un conmovedor “No a la Guerra”. El 15 de febrero de 2003 es ya un día histórico para las luchas sociales de la “era global” por ser la primera jornada en que los pueblos del mundo realizan una protesta de tamaño envergadura internacional y multicultural en la cual participan millones de seres humanos de los cinco continentes.

Por otra parte, este día de “acción global” reconoce una organización coordinada y se siente parte de un mismo proceso de lucha que se expande en un tiempo record a partir de la convocatoria a “parar la guerra” surgida del Foro Social Europeo en Florencia en noviembre de 2002 –y retomada por los movimientos del mundo en Porto Alegre– para en sólo dos meses producir esta inigualable movilización de la humanidad contra la barbarie.

Este tipo de manifestaciones vinculadas directamente con la problemática internacional –o bien promovidas por organizaciones que integran “el movimiento de movimientos” de resistencia global– no son nuevas en América Latina y se han venido incrementando fundamentalmente en los últimos tres años en relación con la experiencia del FSM de Porto Alegre y la coordinación de las acciones regionales para la lucha contra el ALCA. Sin embargo, en el primer cuatrimestre del año, y como resultado de la potenciación de la participación de los dife-

rentes sectores sociales para manifestarse contra la guerra de Irak, este tipo de protesta tiene un crecimiento muy significativo en la región, pasando de representar el 0,7% sobre el total de registros en el último cuatrimestre de 2002 al 7,8% para el primero de 2003.

Impulsan estas luchas organizaciones sociales indígenas, sindicales, defensores de derechos humanos, campesin@s, mujeres, ecologistas, partidos de izquierda, etc. También juegan un rol destacado en la producción de estas amplias coaliciones las movilizaciones promovidas por diferentes iglesias y grupos ecuménicos que organizan vigili@s y oraciones por la paz, conformando significativos momentos de participación en clave de amplísimos colectivos que podríamos situar desde el pacifismo al antiimperialismo, y que en muchos casos nacionales confrontan con la política de los gobiernos o bien logran condicionar sus posiciones. En decenas de ciudades latinoamericanas tenemos registro de la manifestación del 15 de febrero, fecha que marca el inicio de este importante movimiento en América Latina. Ese día se realizan significativas movilizaciones en Tegucigalpa, Panamá, Managua, Lima, Quito, Buenos Aires, Puerto Rico, Montevideo, Caracas, San Pablo, México DF, entre otras ciudades, que se dirigen en la mayoría de los casos a las embajadas norteamericanas y culminan, en algunos de ellos, bajo la represión policial.

Confrontados con estas manifestaciones, los posicionamientos de los diferentes gobiernos de la región son disímiles. En el caso de Honduras, Costa Rica, Colombia, El Salvador y Nicaragua éstos expresan su conformidad con la invasión norteamericana e incluso algunos de ellos (Honduras, El Salvador y Nicaragua) ofrecen enviar personal militar a la zona del conflicto.

En este sentido, en Costa Rica, luego del anuncio gubernamental a favor de la guerra, las protestas, además de ser en contra del conflicto bélico, son también en contra de la posición oficial del país y en demanda de la renuncia del canciller. En Nicaragua las protestas obtienen una mayor repercusión, organización y capacidad de convocatoria, ya que se realizan también en rechazo a la política del presidente Bolaños, que apoya el ataque militar. Por otra parte, El Salvador es uno de los casos donde estas movilizaciones se articulan con las marchas contra el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Centroamérica, y donde los trabajadores de la salud incorporan también reivindicaciones propias del conflicto por el que atraviesan. En otro sentido, el impacto político de las marchas explica quizás la reticencia de algunos gobiernos latinoamericanos a alinearse con la política norteamericana: tal el caso por ejemplo de México y Chile.

Si bien este movimiento tiene gran vitalidad y variadas expresiones durante este período, se encuentra ahora ante el desafío de sostener la movilización y articular la protesta en relación a la ampliación del escenario de militarización social que afecta a la propia región latinoamericana.

El territorio latinoamericano y otras “guerras” posibles Militarización social y tropas de los EE.UU. en la región

En los números anteriores del *OSAL* hemos señalado el significativo aumento de la militarización social en la región, en especial con posterioridad a los sucesos del 11 de septiembre. En un escenario internacional que se inclina por la solución armada de los conflictos, problemáticas como la colombiana animan los espíritus de quienes desean una salida de tipo quirúrgico o de descabezamiento, como se denominaron algunas de las operaciones bélicas que los EE.UU. promovieron en Irak para la pantalla global.

En esta línea se inscribe la solicitud concreta del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, de que los EE.UU. encabecen una intervención militar de similar tipo en su país. Por otra parte esta tendencia se articula con la estrategia norteamericana que, anclada en el conflicto armado colombiano, pretende homogeneizar bajo similares parámetros inscriptos en la “lucha contra el terrorismo” la totalidad del conflicto social en la región andina. Desde esta perspectiva, “esta guerra” no busca legitimarse ya tras las denuncias de la existencia secreta de “armas químicas o biológicas” sino de “redes narco-terroristas” articuladas con los movimientos indígenas y campesinos que desde hace varios años protagonizan niveles de confrontación política con el modelo hegemónico en la región y se oponen particularmente a la implementación del ALCA.

Esta estrategia cristaliza, en el período considerado, en diferentes reuniones y acuerdos regionales. Así, los jefes de estado de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Colombia, junto al canciller argentino, firman el 11 de febrero la Declaración de Panamá en la que se cataloga como “terroristas” a las organizaciones armadas colombianas, así como también avanzan en el Acuerdo de Cooperación Policial firmado con Colombia en la reunión de Jefes de Policía de Centroamérica y el Caribe con el compromiso de crear un frente común contra el terrorismo. Por otra parte, en Panamá una misión del ejército estadounidense denominada “Nuevos Horizontes” constituye la primera intervención directa por parte de EE.UU. desde 1993 –cuando ese país finalizó la ocupación de Panamá– y materializa una política de seguridad fronteriza coordinada con el gobierno colombiano. En este sentido leemos también el compromiso del presidente de Ecuador Lucio Gutiérrez de continuar facilitándole a EE.UU. la base de Manta para su “combate contra el narcotráfico” en Colombia. Por último, ya fuera del período que analizamos, la reunión de los Presidentes y Jefes de Estado del Grupo de Río –que convoca a 19 países Latinoamericanos y del Caribe– realizada en Cuzco el 23 y 24 de mayo concluye con una declaración en donde solicitan al secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, impulsar un proceso de paz en Colombia exhortando a los movimientos guerrilleros a deponer las armas.

“En un escenario internacional que se inclina por la solución armada de los conflictos, problemáticas como la colombiana animan los espíritus de quienes desean una salida de tipo quirúrgico o de descabezamiento...”

Los efectos de esta estrategia de poder para la región se combinan también con las políticas de erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca que los EE.UU. recomiendan en especial en países como Bolivia y Perú, donde los movimientos campesinos han recuperado en los últimos años importantes niveles de organización social y política e incluso, en el caso de Bolivia, donde un candidato nacido de las entrañas del movimiento cocalero estuvo muy cerca de ganar las elecciones nacionales.

En Bolivia el Congreso aprueba el ingreso de tropas de EE.UU. al territorio para realizar prácticas y tareas humanitarias, mientras que el 16 de febrero el ministro de Defensa anuncia que durante el transcurso del año las fuerzas de seguridad de Bolivia realizarán cursos y entrenamiento antiterrorista dirigidos y financiados por los EE.UU.

En el caso de Perú, tan sólo una semana después de que la Casa Blanca informara que el cultivo de coca se había incrementado un 23% en el último año, es detenido por apología del terrorismo uno de los dirigentes del movimiento cocalero. Sin embargo, ante la relevancia del conflicto, el presidente Toledo accede a reunirse con representantes del movimiento y firma una resolución por la que aprueba, entre otros puntos, la reducción gradual y concertada de las plantaciones de coca. En este contexto, el 7 de marzo EE.UU. reinicia los vuelos para obtener información actualizada de las zonas de cultivo de coca, así como el gobierno autoriza el ingreso de personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de EE.UU., para realizar ejercicios de capacitación y de destreza médica en varias zonas del interior del país.

El incremento de la presencia militar norteamericana en la región se expresa también en el ingreso de Fuerzas Especiales de EE.UU. a Paraguay para realizar ejercicios contraterroristas junto con las Fuerzas Armadas nacionales entre abril y junio de 2003, y en el arribo a República

Dominicana de 200 soldados norteamericanos en el marco de un programa de asistencia a sus Fuerzas Armadas.

Otra forma que asumen la militarización social y la criminalización de las luchas es el aumento del número de muertos en las protestas, como en República Dominicana, donde quienes pedían el abastecimiento de agua potable son salvajemente reprimidos por la policía. Los asesinatos de dirigentes políticos y militantes populares también se incrementan, especialmente en Guatemala, donde son asesinados el ex presidente del Congreso (de la Democracia Cristiana), un juez, una maestra participante de la huelga docente y un sacerdote maya defensor de los derechos humanos y opositor a las ex Patrullas de Autodefensa Civil (ex PAC).

En México el gobierno mantiene la militarización en la zona del conflicto chiapaneco y luego del inicio de la guerra en Irak lanza una nueva operación denominada "Centinela". Hacia mediados de marzo, tras una serie de ocupaciones llevadas a cabo por los zapatistas, aumenta también el número de patrullajes. En Brasil se propaga la creación de milicias armadas al servicio de hacendados que prometen reaccionar con violencia ante cualquier tentativa de ocupación de tierras por parte del MST, en el estado de Paraná. Cabe destacar también que, durante estos meses, varios militantes de este movimiento son asesinados, muchos de ellos en áreas administradas por el INCRA (Instituto de Colonização e Reforma Agrária). Por otra parte, en Argentina, mientras se desenvuelve una campaña electoral poco ligada con las inquietudes políticas de participación social que desplegaron variadas alternativas durante el último año y medio, se producen distintos desalojos no sólo de fábricas recuperadas por sus obreros, sino también de lugares ocupados por otros movimientos sociales, como por ejemplo las asambleas populares, surgidas a partir de las experiencias de autoorganización social que sucedieron a las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. También se incrementan las amenazas a dirigentes, el encarcelamiento o procesamiento de los mismos y la represión, que tiene su punto de condensación más elevado en la Ciudad de Buenos Aires cuando el desalojo de la fábrica bajo "control obrer@" Brukman.

Frente a este contexto, y con el propósito de delinear alternativas regionales ante los renovados afanes bélicos estadounidenses que marcan las características del escenario con el que se inicia el siglo XXI, representantes de organizaciones y movimientos sociales comprometidos con la construcción de sociedades igualitarias, solidarias, pacíficas y amantes de la diversidad realizan en San Cristóbal de las Casas del 6 al 9 de mayo de 2003 el Iº Encuentro Hemisférico frente a la Militarización (ver sección Documentos en el presente número de la revista).

El ALCA en el recetario neoliberal

La estrategia de EE.UU. para “las Américas”

Durante el primer cuatrimestre del año 2003 las reuniones tendientes a avanzar en los llamados acuerdos de libre comercio (TLC) a nivel regional –que marchan en la perspectiva de la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)– involucran particularmente a los países centroamericanos. Así, en relación a la firma de un tratado entre los Estados Unidos y Centroamérica (El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica) se suceden tres encuentros (dos en Washington y uno en Costa Rica).

Las reuniones se realizan al calor de un creciente e intenso rechazo social. En relación a estas protestas cabe destacar como una característica del período que entre los sectores que cuestionan las políticas de liberalización arancelaria aparecen, en este caso, grandes y medianos productores agropecuarios que –sin cuestionar globalmente estos acuerdos– se oponen a ciertas condiciones que los mismos suponen y que, en algunos casos, cuentan con el suficiente peso como para lograr que su posición influya en los discursos gubernamentales en las negociaciones con los EE.UU.

En este sentido, sectores económicos privados pertenecientes a las élites dominantes en países como Guatemala y Nicaragua manifiestan su oposición respecto a la política arancelaria de los EE.UU. y la integración comercial, exigiendo mayor información a los gobiernos sobre el estado de las negociaciones, productos y condiciones. En el caso de Guatemala, la CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras), órgano que nuclea a las élites locales, critica la actitud proteccionista norteamericana sin cuestionar el acuerdo en general. Por otra parte, en Nicaragua el paquete de propuestas presentado por EE.UU. perjudica a un sector de las industrias locales, particularmente al agro y al textil. En respuesta a ello, el 23 de marzo las empresas privadas nicaragüenses explicitan su demanda de que haya una mayor apertura de parte de los gobiernos de la región en lo que respecta a la información sobre las negociaciones del TLC entre América Central y EE.UU. y piden la exclusión de los lácteos, el frijol y el arroz, lo cual no es aceptado por la contraparte que subsidia a sus productores en esos rubros. Finalmente, el gobierno nicaragüense toma posición en defensa de la protección de la agricultura centroamericana en una reunión con su par norteamericano que se realiza el 10 de marzo.

En Honduras, el denominado Bloque Popular² realiza una protesta para exigir al gobierno una explicación sobre las negociaciones, al tiempo que los productores de arroz, leche, carne de cerdo y de pollo y la asociación de procesadores de embutidos le comunican al gobierno que no seguirán participando de las mismas por la imposibilidad de competir con las prebendas y subsidios que aplica EE.UU. a sus productores.

Por otra parte, en ocasión de la reunión realizada en San José de Costa Rica para avanzar en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y EE.UU. se producen grandes manifestaciones. En el marco de estas protestas, los trabajadores demandan el retiro de la industria de telecomunicaciones de las negociaciones, y defienden el monopolio estatal en dicho sector y en el agua potable y la seguridad social. Al mismo tiempo, la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios marcha en demanda de que sus productos queden excluidos del TLC.

Finalmente en El Salvador las manifestaciones expresan altos niveles de confrontación política, movilizándose en forma conjunta trabajadores, estudiantes, empleados públicos y campesinos que repudian los TLC, el ALCA, el Plan Puebla-Panamá y la continuidad de las políticas neoliberales. Estas movilizaciones se realizan contra el segundo encuentro de la Comisión Ejecutiva del Plan Puebla-Panamá, que tiene lugar en la ciudad de Colón entre el 20 y 21 de marzo.

En México, a fines del año 2002 una coalición social formada por pequeños y medianos productores del campo así como también por una parte del movimiento campesino-indígena organiza sus luchas al grito de "El campo no aguanta más" (véase el artículo de Armando Bartra en el presente *OSAL*). Este movimiento asume como reivindicación la revisión de contratos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), imprimiéndole al conflicto una gran relevancia política nacional e internacional.

Este cuestionamiento al sistema de reglas de este TLC, el primero que entró en funcionamiento en la región el 1º de enero de 1994 y frente al cual se inicia el levantamiento del EZLN en Chiapas, visibiliza las condiciones desfavorables de intercambio que para la economía mexicana y en particular para la producción agropecuaria supone esta desigual apertura. El gobierno abre un período de negociación en el que incluye a los organismos del sector empresarial y a frentes de organizaciones campesinas y de pequeños propietarios –El Campo no Aguanta Más, el Consejo Agrario Permanente, El Barzón y la Confederación Nacional Campesina. La estrategia del gobierno, que se revela exitosa, consiste en el ofrecimiento de subsidios a proyectos productivos y compromisos de restricción a la importación de semillas básicas –maíz blanco, frijol y otras– logrando que la gran mayoría de las organizaciones abandone la pretensión inicial de revisar el TLCAN.

Por otra parte, los movimientos sociales brasileños exigen al nuevo gobierno el reconocimiento de la consulta popular donde más de diez millones de personas se pronunciaron contra el ALCA. En la misma dirección, las coordinaciones regionales y continentales continúan con las actividades de la campaña *No al ALCA* a lo largo y ancho de toda la región latinoamericana, intentando avanzar en la divulgación y la educación popular sobre los efectos sociales que implica dicho acuerdo. Estas campañas promueven fun-

damentalmente la realización de plebiscitos en cada uno de los países que permitan desarrollar estrategias comunes de intervención por parte de los pueblos que se verían afectados por el ALCA, al tiempo que articulan la oposición en base a los principales puntos de convergencia.

Enfrentar este proceso requerirá en primer lugar de la existencia de una importante resistencia social, pero también del desarrollo de reales estrategias políticas alternativas capaces de confrontar de manera exitosa con el rumbo económico sintetizado en el ALCA pero efectivizado mediante la militarización social y la presión constante de la deuda externa que EE.UU. ha trazado para América Latina en esta "nueva etapa" de una vieja historia de subordinación política y explotación económica.

Bibliografía

Bensaïd, Daniel 2003 "La guerra tendrá lugar", en *Cuadernos del Sur* (Buenos Aires) N° 35, Mayo.

Cronologías ampliadas enero-abril 2003 e informe cuatrimestral por país sobre el conflicto social elaborado por el equipo del OSAL.

Sader, Emir 2003 "¿Érase una vez el neoliberalismo?", en *Página 12* (Buenos Aires) 11 de junio, contratapa.

Seoane, José y Taddei, Emilio 2003 "Movimientos sociales, conflicto y cambios políticos en América Latina", en *OSAL* (Buenos Aires) N° 9, Enero.

Notas

1 Agradezco muy especialmente las discusiones, comentarios y sugerencias realizados por José Seoane y Emilio Taddei durante la escritura de estas líneas, así como la dedicada lectura de Ivana Brighenti. También es importante mencionar y agradecer al equipo del OSAL por la realización de los informes cuatrimestrales de cada uno de los 19 países que han sido una gran ayuda a la hora de trazar las líneas principales de análisis sobre lo acontecido en la región en este primer cuatrimestre del año 2003 y han posibilitando que este trabajo sea realmente una breve caracterización colectiva.

2 El Bloque Popular está integrado por la Federación Central de Sindicatos de Trabajadores Libres, la Federación Unitaria de Trabajadores, el Comité de Defensa del Consumidor y diversas organizaciones estudiantiles y de maestros, que agrupan alrededor de 500 mil afiliados.

Región Sur

O governo Lula e os conflitos sociais no Brasil¹

Roberto Leher*

* UFRJ, Pesquisador
CLACSO/Laboratório
de Políticas Públicas
Universidade do Estado
do Rio de Janeiro
(LPP-UERJ)
e Coordenador OSAL-Brasil.

O núcleo sólido da política econômica de FHC partira de um a priori e de uma constatação: a poupança interna não seria capaz de financiar o crescimento do país e as estatais eram ineficientes e demasiadamente custosas. Com base nessas premissas, FHC acelerou o processo de privatização, liberalizou o fluxo de recursos financeiros, removeu barreiras econômicas e, para atrair capitais, reduziu o Estado social, estabeleceu superávits primários crescentes e manteve os juros com uma das taxas reais mais altas do mundo. A sua aposta era que, com essas medidas, a entrada de investimentos diretos estrangeiros seria vigorosa e impulsionaria o crescimento econômico, assegurando um longo período de hegemonia do PSDB e de seus aliados. Após oito anos, o resultado foi catastrófico: crescimento exponencial da dívida², estagnação³, redução da massa salarial, milhões de desempregados, alargamento da disparidade de renda e, até a tão decantada estabilidade monetária esfumou-se devido a seis crises cambiais, apesar dos pacotes do FMI (1998, 2000, 2001 e 2002)⁴.

[ANU IV Nº 10 ENERO-ABRIL 2003]

OSAL 81

Durante os primeiros anos de seu governo, os sindicatos cutistas passaram por mudanças muito profundas, muitos deles optaram pela conciliação e, impactados pela ideologia da globalização, assimilaram a crença de que o desemprego e os baixos salários eram decorrentes da reduzida qualificação dos brasileiros. Assim, no lugar de enfrentamentos e conflitos, a saída seria a cooperação e a qualificação profissional. Com os conflitos atenuados, FHC pôde avançar o seu projeto sem produzir muitas arestas. Nos últimos anos da década passada, o quadro mudou: as lutas foram retomadas, em especial no serviço público, e o MST intensificou as suas ações (Galvão et al, 2002). Setores das classes médias empobrecidos votaram na oposição nas eleições municipais de 2000, surpreendendo as forças tradicionais. Logo a insatisfação chegou ao andar de cima: a opção de Cardoso pelo capital financeiro corroe a base econômica de setores oligárquicos, abrindo grave crise nos partidos governistas, em particular com o direitista Partido da Frente Liberal (PFL) que anunciou o lançamento de candidato próprio a presidência.

Por meio de uma vigorosa guinada ao centro, Lula da Silva capitalizou os anseios de mudanças, elegendo-se presidente com mais de 60% dos votos. Os movimentos sociais iniciaram o ano de 2003 vivendo uma situação inteiramente nova: um governo cuja história se confunde com as lutas sociais das duas últimas décadas, porém empunhando uma política econômica em continuidade com a de Cardoso. Os embates sociais assumem, portanto, novas feições, recolocando a importância da autonomia de classe e a necessidade de perseverar na construção de projeto alternativo ao neoliberal.

Eleição: composição da chapa, programa e a nova coalizão de classes

Em contraste com os processos eleitorais anteriores, o arco de alianças da candidatura Lula foi resolutamente redefinido. Anteriormente, Lula optara por uma aliança de centro-esquerda que abrangia pequenos partidos de esquerda (PCdoB), forças nacionalistas de feição social-democrata, como o Partido Socialista de Miguel Arraes e o Partido Democrático Trabalhista, liderado por Leonel Brizola. Em 2002, a composição da aliança foi não apenas ampliada⁵, mas substancialmente redefinida, contando com a inclusão de setores do grande capital internacionalizado. No período da inscrição da chapa, a coalizão abrangera setores da chamada “burguesia nacional”, periférica em relação aos segmentos mais estreitamente vinculados ao capital internacional, que, majoritariamente, preferiam o candidato do PSDB, José Serra. Entretanto, após a “Carta aos Brasileiros”, em junho de 2002, uma nova realidade foi configurada. Representantes de grandes grupos econômicos –dos setores financeiro, industrial, *agrobusiness*, comunicações– migraram para a candidatura Lula, fato que mais tarde se refletiu no ministério e na agenda do governo.

Pela primeira vez, não foi possível demarcar com precisão a posição dos setores dominantes em relação às candidaturas em disputa. Cada vez mais, Lula assumiu um discurso que contemplava as demandas dos segmentos internacionalizados que, então, passaram a incluir a sua candidatura como uma opção a ser realmente considerada, tendo em vista a fragilidade da campanha de José Serra.

É importante registrar que a aliança prioritária de Cardoso com o capital financeiro, expressa na política de juros altos⁶, produziu crises muito profundas em sua base de apoio, em especial nos setores industrial, comercial e agropecuário, levando o PFL e parte do PMDB a se afastarem do governo. Essas contradições debilitaram gravemente a candidatura Serra, abrindo caminho para a de Lula. Os indicadores econômicos que outrora pareciam atestar o êxito do governo Cardoso sofreram, como visto anteriormente⁷, rápida inflexão. Cardoso transformou-se em um verdadeiro “pato manco”. Apesar de dispor ainda de meio ano de mandato, a Vice-Presidente do FMI, Anne Krueger, sinalizou que somente negociaria com o “compromisso dos principais atores políticos, ou seja, os candidatos com chance de vitória” (*Valor*, 26-28/7/02).

Em um ambiente de forte pressão do “mercado”, a candidatura de Lula sofreu a maior inflexão política dos 20 anos de história do PT: Lula publicou, em 22 de junho de 2002, a “Carta aos Brasileiros”⁸ que, em essência, reafirma o compromisso do futuro governo com os contratos e acordos firmados com os organismos internacionais, implicando: (a) adotar o regime de metas de inflação; (b) manter o câmbio flutuante; (c) praticar superávits primários elevados, e (d) manter altos juros. Em suma, a agenda do FMI. Não é secundário lembrar que, em 1998, o país assinara um vultoso acordo com o Fundo (US\$ 41 bilhões) que exigia, em contrapartida, a regulamentação das reformas de ajuste estrutural, como as reformas administrativa e da previdência e o engajamento na criação da ALCA. A reação do setor financeiro foi imediata: o economista sênior do banco de investimentos ABN-Amro comemorou: “são declarações muito encorajadoras, em especial a declaração-chave de que vai preservar o saldo fiscal primário o quanto for necessário para impedir que a dívida interna aumente e destrua a confiança dos investidores na capacidade do governo de honrar os seus compromissos” (*OESP*, 24/6/02). Outros analistas aproveitaram a abertura da agenda político-econômica de Lula para reivindicar a autonomia do Banco Central, exigência, mais tarde, acatada por Lula. Destarte, Lula parecia querer afastar do cenário político as preocupações de que poderia se converter em um novo Fidel Castro (Paul Krugman) ou mesmo de que “não é louco, mantendo as políticas implementadas por FHC”⁹.

A divulgação da mencionada Carta e a adesão ao novo acordo com o FMI¹⁰ redesenharam o arco de alianças de forma estrutural. O apoio de Lula a um acordo que, segundo o *Wall Street Journal*, resulta exclusivamente da pressão dos bancos credores –*Citibank*,

FleetBoston, J.P. Morgan, Chase e Bank of America (FSP, 9/08/02: B1) fez os agentes do grande capital respirarem aliviados. O diretor-gerente do FMI, Horst Köhler, declarou que a transição política no Brasil seria tranqüila porque os principais candidatos a presidente se comprometeram a continuar mantendo um programa econômico sólido, referindo-se a Lula como se este já estivesse eleito (*O Globo*, 27/09/02: 3). O Instituto de Finanças Internacionais, associação que reúne os maiores bancos do mundo, pediu aos investidores que dessem ao Brasil o “benefício da dívida” (*O Globo*, 19/09/02). O presidente do banco Itaú, Roberto Setúbal, proclamou em Washington: “Lula não é um revolucionário” (*O Globo*, 13/10/02: 38). Nesses posicionamentos, implicitamente, prevalece a “desconfiança calculada” que constrange o comportamento político e a política econômica¹¹. Os elogios, na verdade, são ameaças. Conforme John Williamson: “o próximo governo não terá margens para grandes mudanças na política econômica. Se o futuro presidente quiser evitar que a crise se agrave, terá de manter uma política fiscal rigorosa, fazer as reformas tributária e da previdência e não poderá reduzir os juros drasticamente” (*O Globo*, 13/10/02: 38).

Nesse contexto, pesos pesados da economia passaram a manifestar apoio a Lula, “em benefício da dívida”, subsidiando economicamente a sua candidatura, incluindo os grandes conglomerados da comunicação, em especial o sistema Globo. Também, paulatinamente, forças estabelecidas migraram para a sua campanha, como os ex-presidentes Itamar Franco e José Sarney e sua filha (ex-candidata a presidente pelo PFL), o ex-governador de São Paulo Orestes Quércia, bem como expressões do PMDB, como os candidatos aos governos do Paraná, Paraíba e de Santa Catarina. É um momento em que a trajetória do candidato do PT sofre descontinuidade. O vetor da popularidade de Lula, contagiado pela mudança no tratamento dos meios de comunicação, associado a um competente trabalho de marketing, leva Lula a patamares virtualmente passíveis de assegurar a vitória ainda no primeiro turno, o que, devido a uma pequena quantidade de votos, acabou não se confirmando.

A Carta aos Brasileiros, a adesão ao acordo com o FMI e a hipertrofia dos apoios dos representantes do grande capital estreitaram, ainda mais, a já limitada presença dos trabalhadores e de suas organizações na campanha eleitoral. A década de 1990 foi de relativo refluxo nos movimentos sindicais e, somente no início da presente década, os movimentos recuperaram, parcialmente, sua capacidade de intervenção política, visto que diversas resoluções “propositivas” atenuaram o caráter classista de muitos sindicatos. Com efeito, já na discussão do programa de governo, a direção da campanha manteve apenas uma pequena abertura aos sindicatos e às organizações populares. Distintamente dos pleitos anteriores, o programa de governo não foi elaborado pelas instâncias partidárias do PT e pelo coletivo dos partidos em coalizão. Sua elaboração deu-se no âmbito de uma organização não governamental, o Instituto da Cidadania, por intelectuais de maior ou menor expressão pública. Os parlamentares e os movimentos

sociais foram apenas consultados sobre as diversas matérias. A decisão final sobre o programa foi interna ao Instituto, gerando tensões com setores do PT –o programa colide com encaminhamentos de seu 12º Encontro Nacional, realizado em dezembro de 2001, em especial no que diz respeito à política macroeconômica e à relação com o FMI. Em outros termos, os partidos, os sindicatos e os movimentos deixaram de ser protagonistas e, de certa forma, passaram a ser considerados pela coordenação da campanha como “voto cativo”. A estratégia da campanha objetivava ampliar o apoio dos setores empresariais e, com isso, atrair o voto das classes médias. Isso explica, em parte, a baixa temperatura e a pequena mobilização popular dos atos públicos da campanha, consideravelmente menores do que os do pleito de 1989, por exemplo.

Eleito com 52,7 milhões de votos (61,3%) no segundo turno da eleição, recebendo o dobro dos votos do PT, em um pleito com alto índice de participação (cerca de 80%), a chamada “onda Lula” repercutiu no crescimento da bancada do PT¹². Contudo, o eleitorado foi mais conservador nos governos estaduais, apenas três governadores de estados periféricos foram eleitos pelo PT. Compareceram a sua posse mais de 150 mil pessoas que comemoraram, em Brasília, a vitória da “esperança sobre o medo”.

Equipe de governo: núcleo sólido da economia e políticas sociais

A área econômica do governo Lula “foi buscada no mercado”. O quadro mais relevante buscado nas hostes do capital (*Wall Street*), seguramente, foi o presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, deputado eleito pelo PSDB e ex-presidente mundial do *Bank of Boston*, atual *Boston Fleet*, o 7º maior banco nos EUA e, após o *Citigroup*, a segunda maior instituição credora do Brasil. A despeito das críticas de que poderia haver conflitos de interesses principalmente pelo fato de Meirelles ter presidido um banco credor do país, envolvido em operações obscuras que levaram ao “default” argentino¹³, Lula não apenas o confirmou no cargo, como acatou sua exigência de que o BC teria de ter autonomia em relação ao Executivo. Tendo em vista a sua ação como lobista do setor financeiro, no processo de reforma constitucional (liberalização do setor financeiro) e os seus vínculos com *Wall Street*, o BC brasileiro poderá ser operado a partir dos interesses dos credores, assim como o principal banco de crédito do país, o Banco do Brasil, entregue a um ex-colaborador de Meirelles. O ministério da Fazenda foi entregue a um petista com fortes afinidades com as políticas neoliberais, Antonio Palocci, um ex-prefeito de uma cidade paulista de médio porte, que promovera intensa privatização, incluindo a distribuição da água, e que tornou-se o braço das novas alianças do governo com o capital financeiro. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o Ministério da Agricultura foram confiados ao setor de *agrobusiness*, por meio de dois grandes empresários do setor. O Ministério da Integração Regional, responsável pela

interface da área econômica com as diversas regiões do país, foi entregue ao ex-candidato a presidente Ciro Gomes.

O comando político do governo foi confiado à tendência majoritária do PT, Articulação (responsável pela inflexão estratégica do partido rumo ao centro-esquerda), que ficou encarregada: i) da Casa Civil; ii) da Secretaria Geral da Presidência; iii) da presidência da Câmara dos Deputados; e iv) da presidência do PT e, também, ao PMDB, representado pelo ex-presidente da república José Sarney, eleito presidente do Senado com apoio do novo governo. Setores “desenvolvimentistas” ficaram em postos importantes (BNDES, Energia e Planejamento), porém com reduzida autonomia frente aos “homens do mercado”.

A área social conta com ministros da tendência majoritária (Educação; Previdência e Assistência Social; Saúde; Meio Ambiente), de segmentos da esquerda (Cidades, Desenvolvimento Agrário e Trabalho) e de partidos aliados (Turismo, C&T, Comunicações, Transportes, Esportes, Cultura) – todos esses ministérios tiveram cortes profundos em seus orçamentos por exigência do Ministro da Fazenda.

Uma mudança, de fato, significativa, que requer estudo mais sistemático do que o possível no espaço disponível deste estudo, ocorreu no Ministério das Relações Exteriores. Aqui o governo Lula assumiu um posicionamento mais compatível com a trajetória anterior do PT. O Ministro Celso Amorim e o seu secretário-geral, um diplomata punido por FHC por seu envolvimento na Campanha do plebiscito contra a ALCA, Samuel Pinheiro Guimarães, vêm adotando uma postura incisiva de defesa da soberania (política) do país e dos demais países latino-americanos, como a Venezuela, tendo se posicionado explicitamente contra a intervenção dos EUA no Iraque e se recusado a apoiar o Plano Colômbia. Além disso, o governo não criou obstáculos ao arquivamento do Acordo que previa a instalação de uma Base Militar Americana em Alcântara, estado do Maranhão. Entretanto, questões econômicas, como parte substancial das negociações da ALCA, estão acontecendo em outros *loci*, como os Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Diferente da avaliação do Ministério das Relações Exteriores, o Ministro Palocci, em visita a Washington, avaliou que a ALCA pode ser positiva a longo prazo (*OESP*, 15/4/03): o Brasil ofereceria os seus mercados de serviços, de investimentos, de compras governamentais em troca do mercado agrícola desses países.

Política macroeconômica indica os rumos do governo

O documento do Ministério da Fazenda “Política Econômica e Reformas Estruturais”¹⁴ apresenta as grandes linhas da política econômica dos 4 anos de governo e foi elaborado

“Entre as prioridades, destaca a aprovação das reformas do governo FHC, antes recusadas pelo PT, como a criação de fundos de pensão para os servidores públicos”

por uma ONG auspiciada pelo Banco Mundial (*FSP*, 27/4/03), coincidindo, no fundamental, com o novo documento de Williamson já conhecido como “Consenso de Washington II”¹⁵. O documento sustenta que para retomar o crescimento e promover “a inclusão social” é necessário aprofundar a política econômica do período FHC, mantendo as metas inflacionárias e associando juros altos e grandes superávits primários. Entre as prioridades, destaca a aprovação das reformas do governo FHC, antes recusadas pelo PT, como a criação de fundos de pensão para os servidores públicos. Para júbilo dos credores internacionais, uma mudança na leitura da natureza da crise foi operada, negando todo o pensamento crítico dos anos 90. O problema básico agora é o déficit governamental e não mais o estrangulamento externo advindo do aumento dos passivos externos¹⁶: “O governo tem, como primeiro compromisso da política econômica, a resolução dos graves problemas fiscais que caracterizam nossa história econômica, ou seja, a promoção de um ajuste definitivo das contas públicas”¹⁷.

Para alcançar o equilíbrio fiscal, ficou estabelecida a meta de superávit primário de 4,25% do PIB, índice que a Fazenda se comprometeu com o FMI a manter até o final do mandato¹⁸. A mudança estrutural, em relação a FHC, conforme o documento supramencionado, é fazer o “ajuste fiscal” cortando gastos públicos! Os problemas da dívida e da pesada carga tributária sobre o trabalho¹⁹ saíram de foco. No documento da Fazenda, a principal promessa de campanha de Lula, a criação de 10 milhões de empregos, restringe-se à qualificação dos desempregados, à melhoria da eficiência das empresas e à redução do custo de contratação: a mesma equação que fracassou com Cardoso.

Longe de se restringir a promessas, esses encaminhamentos estão sendo operacionalizados no parlamento e nos acordos com o FMI, gerando forte crise com parcela dos deputados do PT. Trinta e três deputados (entre 92) declararam ser contra a autonomia do BC (*O Globo*,



© Matfin Fernández

3/4/03: 3). Para viabilizar a autonomia do BC, nada menos do que a Constituição terá de ser alterada. Mesmo antes da posse de Lula, em dezembro, o presidente do Fundo, Horst Köhler, pediu a adoção, “o quanto antes”, da autonomia operacional do BC para fortalecer a luta contra a inflação e para restaurar a confiança dos mercados. A pressão pela autonomia seguiu em fevereiro, com o diretor do Banco Itaú, Sérgio Werlang que prevê aumento da inflação e da taxa de juros se a medida não for urgente (*OESP*, 22/2/03: B3). Após ameaça de expulsão dos parlamentares que votassem contra a reforma da Constituição, o projeto de reforma constitucional de autoria do ex-Senador José Serra foi aprovado no Congresso, devendo ainda ser regulamentado por lei específica. Outro projeto polêmico, a reforma da previdência²⁰ para a criação de fundos de pensão, apesar de ainda estar em debate no parlamento, *estará aprovado* (SIC!) até meados de 2003, conforme documento do governo brasileiro ao FMI (28/02/03). Em virtude da resistência da maioria dos deputados do PT, a Executiva Nacional fechou questão na votação da matéria e abriu processo de expulsão de uma senadora e de dois deputados (*FSP Online*, 12/05/03). Outro revés deu-se na agricultura. Mesmo no governo Cardoso, os transgênicos não foram admitidos. Entretanto, interesses do *agrobusiness* levaram o governo a liberar para comércio as plantações clandestinas de soja transgênica.

Para manter o fluxo de capital externo, a taxa de juros foi elevada a patamar explosivo, seguindo a curva ascendente do governo Cardoso: 18% (jul/02), 25% (dez/02) e 26,5% (fev/03), medida criticada pela CNBB e pelos representantes do setor produtivo (*FSP*, 21/2/03: A7). Em contrapartida, o superávit primário igualmente sofreu forte crescimento: de 3,75% do PIB no início do ano (50,3 bilhões) para 4,25% do PIB (68 bilhões), obrigando o governo a contingenciar R\$ 14 bilhões no orçamento de 2003, sendo R\$ 5 bilhões nos orçamentos sociais (*O Globo*, 12/2/03: 3).

O suposto êxito da política macroeconômica é sustentado pela entrada de capital estrangeiro, atraído pelos altos juros. Com isso, o chamado “risco Brasil” caiu acentuadamente em 2003 (-49%), o mesmo acontecendo com o valor do dólar (-20%) e os *C-Bond* valorizaram 37% (*FSP*, 10/05/03). Os elogios do FMI, do Banco Mundial e da Federação dos Bancos têm sido enfáticos. Entretanto, a atração de recursos através de juros elevadíssimos dificilmente pode ser duradoura, como, aliás, já alertam corretoras internacionais “a euforia pode ter ido longe demais” (*FSP*, 10/05/03: B1). Ademais, como acentua o economista Reinaldo Gonçalves (2003), com o “foco na inflação”, a política econômica pode gerar 5 milhões de desempregados adicionais, além dos mais de 7 milhões que Lula encontrou no início de seu mandato, e crises políticas não estão descartadas.

Políticas públicas

A principal ação social do governo Lula, o programa Fome Zero, possui um orçamento estimado em R\$ 5 bilhões²¹. Em seu discurso de posse, Lula afirmou que consideraria seu governo exitoso se todo brasileiro pudesse fazer três refeições por dia. O ambicioso programa tem sido objeto de forte controvérsia sobre o uso de cupons, recibos e cardápios, levando o representante do Banco Mundial na América Latina a criticar o governo: “é preciso confiar nos pobres” (*O Globo*, 01/4/03: 9). Na compreensão de um dirigente do MST, “o governo vende a idéia de que é possível acabar com a fome sem tocar no fundamental: o latifúndio e a reforma agrária” (*O Globo*, 01/04/03: 9). Também setores da Igreja Católica sustentam que “deixa muito a desejar”, especialmente devido à política de doações, “principalmente quando o objeto doado vale menos do que a publicidade faturada pelo doador” (Morelli, 2003). O NYT (3/3/03) observou que, durante a campanha, Lula afirmara que o programa atenderia 50 milhões de pessoas, mas agora as metas do programa foram reduzidas para 18 milhões, um número consideravelmente menor. Os governos estaduais mantêm-se afastados do programa, limitando-se a implementá-lo, sem oferecerem contrapartida financeira. Desse modo, o Programa é uma medida focalizada e, por enquanto, pouco significativa em termos nacionais.

Entrevista da economista Maria da Conceição Tavares (*FSP*, 20/04/03) situou os termos da polêmica sobre as políticas sociais, denunciando que o Ministério da Fazenda, em consonância com o Banco Mundial, propõe políticas focalizadas, em detrimento das políticas universais (educação, saúde), ainda vigentes no país devido as renhidas lutas dos movimentos sociais. Em fevereiro deste ano, o diretor para o Hemisfério Ocidental do FMI, Anoop Singh, enviou um recado ao governo: é preciso desvincular despesas e receitas orçamentárias para que políticas mais eficientes sejam empreendidas sem

comprometimento do equilíbrio orçamentário e macroeconômico (*FSP*, 4/2/03: B3). O próprio Presidente do Banco Mundial, James Wolfensohn, teria “ensinado” a Lula as vantagens da focalização (*FSP*, 27/04/03: A4). Em um contexto de aperto fiscal, a alternativa possível, conclui o Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, é direcionar as políticas para atender aos miseráveis (*FSP*, 26/4/03: A5).

A experiência recente na América Latina e na África ensina que a focalização está inscrita nos programas do Banco Mundial de “alívio” a pobreza: não fortalece as políticas públicas (igualitárias, universais e referenciadas na cidadania), contribuindo para a ampliação da esfera privada (ONGs, Terceiro Setor) e não altera as causas que produzem a pobreza e a miséria²², não escapando, por conseguinte, da lógica neoconservadora que associa pobreza, segurança e governabilidade. Conforme Tavares, “é uma forma de arrebentar de vez o ensino público e a seguridade social”. Esse debate tornou-se mais intenso a partir de abril, com a manifestação de intelectuais historicamente vinculados ao PT que criticaram a nova agenda, como pode ser visto adiante.

Encaminhamentos políticos: um frágil pacto social e a realpolitik

Uma análise clássica da formação histórico-social brasileira, resgatada por Gonçalves (2003), assevera que: “a política de conciliação, de transação, teve como principal objetivo aplinar mais as divergências dos grupos dominantes que conceder benefícios ao povo” (Rodrigues, 1965: 103). Gonçalves avalia: “as medidas de política econômica nos primeiros meses do governo indicam que estamos entrando em mais um período de conciliação e reforma”. A tentativa de firmar um novo contrato social entre o capital e o trabalho, por meio de um Conselho Econômico de Desenvolvimento Social é ilustrativo dessa iniciativa. Trata-se de um Conselho livremente escolhido por Lula, formado principalmente por empresários que apoiaram a sua candidatura, muitos deles sonegadores da previdência, por sindicalistas individualmente convidados, por representantes da sociedade civil (Terceiro Setor e ONGs), entre os quais alguns que gravitam em torno de entidades empresariais, e por membros do governo²³. Os encaminhamentos efetivos do governo sugerem que a estratégia não prevê um lugar de destaque ao referido Conselho. A rigor, não há construção de pacto no país, pois o lócus da política real do Executivo é outro. De fato, enquanto os conselheiros discutiam a reforma da previdência, o Ministério da Fazenda enviou documento ao FMI com “sua” proposta de reforma da previdência, prevendo a aprovação de medidas que, a rigor, nem o parlamento discutira. A seguir, em reunião com governadores de todo o país, Lula assinou um documento com detalhes da reforma, incorporando medidas já rejeitadas pelo parlamento durante o mandato de FHC, como a contribuição previdenciária dos aposentados. O Conselho sequer foi escutado sobre essas medidas.

Contradições, críticas e enfrentamentos

A ausência de espaços de participação tem gerado forte insatisfação entre parlamentares do PT e de partidos aliados, sindicalistas, intelectuais e mesmo de altos dirigentes do Estado. O economista Paul Singer, atualmente no governo, sustentou que não há discussão em profundidade sobre a política econômica do país (*FSP*, 3/2/03: A9). O Conselho, por sua composição estreita e unilateral, seguramente não se afirmou como esse espaço. Muitas medidas são “comunicadas” aos parlamentares e apoiadores como, por exemplo, o acordo com os governadores em torno da contribuição previdenciária dos aposentados. A ausência de fóruns e outros espaços de discussão levou um significativo grupo de intelectuais de expressão pública a recorrer a uma carta aberta ao presidente²⁴, instando-o a convocar um plebiscito oficial sobre a adesão do país a ALCA e a não promover a autonomia do Banco Central.

Já no primeiro encontro formal de Lula com dirigentes da CUT, ao ser comunicado da disposição de servidores públicos promoverem uma greve contra a reforma da previdência, acusou os sindicatos de “corporativistas” (*FSP*, 26/02/03: A5). Embora os servidores tivessem reivindicado uma correção salarial emergencial de 47% e o governo tivesse concedido irrisório 1%, a prioridade dos sindicatos é a luta contra a reforma da previdência. O mote dos sindicatos é: “reforma, sim, mas para universalizar os direitos e para fortalecer o Estado social”, porém essa agenda está descartada pelo governo. De acordo com governadores, Lula chegou a afirmar que, diante da resistência dos servidores, não hesitaria em colocar a sociedade contra eles, posicionamento não assumido formalmente (*O Globo*, 23/2/03), apesar da propaganda oficial afirmar que os servidores têm privilégios que são a causa das baixas aposentadorias do setor privado.

A reforma agrária segue com avanços (maior liberação de créditos para os pequenos agricultores) e recuos: o presidente da Comissão Pastoral da Terra, Dom Tomás Balduino, chegou a afirmar que “o governo evita confronto com o latifúndio para não ferir a lógica da governabilidade” (*FSP*, 02/04/03: A9). Uma das medidas mais repressoras de Cardoso contra o MST²⁵ não será revogada, conforme o ministério da área. Sem conseguir a descriminalização da questão agrária, os conflitos agrários com mortes aumentaram significativamente²⁶ e os latifundiários chegaram a anunciar que fariam milícias privadas para combater os Sem-Terra (*FSP*, 16/03/03: A4).

Diante da inflexão para a centro-esquerda, da assunção da agenda macroeconômica de Cardoso e do FMI e, ainda, da assimilação das políticas sociais focalizadas preconizadas pelo Banco Mundial, os debates sobre os rumos da esquerda e do governo Lula têm sido intensos, conforme pode ser visto no Caderno de Teses do 8º Congresso da CUT (2003). Os posicionamentos podem ser sintetizados em três avaliações:

1) a corrente majoritária do PT (Articulação) tem sustentado que o governo recebeu uma “herança maldita” e que a única alternativa possível é recuperar a confiança dos mercados –assim, gradativamente, os juros vão cair e o crescimento será retomado; enquanto isso, os trabalhadores devem dar um crédito de confiança e aguardar, com paciência, as mudanças futuras. Lutas específicas não estão descartadas, mas a governabilidade deve se antepor às ações políticas que não poderão atingir os fundamentos do governo;

2) as correntes de esquerda do PT, em que pesem suas divergências, adotaram, nos termos de Ricardo Antunes (2003), a “metáfora do pêndulo”: os capitais transnacionais (com a aquiescência dos capitais nativos) procurarão puxar o pêndulo sempre para o centro e a direita, sob a batuta do FMI e do Banco Mundial; no outro pólo, o mundo do trabalho, através de suas ações concretas em seus sindicatos, movimentos e partidos, deverá respaldar, amparar, impulsionar e mesmo exigir do governo Lula a elaboração de políticas que garantam e ampliem os direitos dos trabalhadores contra a lógica destrutiva hoje vigente, desse modo, o pêndulo voltaria para a esquerda, e

3) a de que o governo Lula não “está em disputa”, pois o seu pêndulo já encontrou o seu centro de gravidade na centro-esquerda. Corroboraria esta tese o fato de que o núcleo sólido das políticas macroeconômicas foi confiado às forças de mercado, a agenda de reformas do FMI seguirá até o final do mandato, conforme atestam os documentos governamentais; ademais, o espaço para a controvérsia e a crítica está se reduzindo –o Diretório Nacional do PT abriu processo disciplinar contra os críticos e fechou questão no apoio às reformas (FSP, 13/05/03). Assim, para essas forças minoritárias, constituídas por militantes independentes, por um pequeno número de parlamentares, por sindicalistas e militantes das correntes de esquerda do PT e do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados e, também, por intelectuais, está posta a tarefa de reconstruir uma organização alternativa para esquerda brasileira.

Não é possível fazer juízos definitivos sobre as três alternativas. Embora os fatos pesem contra a primeira leitura, não é possível subestimá-la. Lula dispõe de admirável capital político e grande parte da população mantém uma expectativa positiva²⁷. Ademais, o imperialismo está ciente do peso do Brasil na América Latina, grandes grupos econômicos têm interesses no país e, na prática, vem demonstrando que não deixará de intervir na crise em curso, “salvando” o país do “default”. Lula pode servir de exemplo para a nova esquerda latino-americana, contribuindo para isolar a esquerda marxista e anti-capitalista. Os segmentos mais diretamente atingidos pela manutenção da agenda neoliberal (servidores públicos, por exemplo), bem como as forças que reivindicam transformações econômico-sociais, estão distribuídas nas duas últimas avaliações,

predominando os adeptos da tese do pêndulo. Da ótica dos movimentos sociais e, em especial, dos sindicatos mais combativos e do MST, diante da implementação da agenda neoliberal, a opção que vem sendo adotada é o fortalecimento das mobilizações, das ações diretas e da defesa da agenda da esquerda (sobretudo: “ALCA, Não”, contra a autonomia do BC, em defesa da previdência pública e do regime de repartição, defesa dos empregos e salários, reforma agrária). Os metalúrgicos realizaram importante greve na GM, movimento que foi irradiado para a Renault e a Volvo, no Sul do Brasil, e a Ford na Bahia, no Nordeste do país. Os servidores públicos podem entrar em greve em todo o país contra a reforma da previdência e o MST intensificou as ocupações. Nos congressos estaduais da CUT, a despeito da Articulação confirmar sua maioria, as teses das correntes de esquerda foram aprovadas em diversos estados, como o plebiscito oficial sobre a adesão à ALCA.

O comando político do governo não tem permanecido inerte diante da retomada dos movimentos e do anseio de autonomia dos sindicatos mais combativos. Não se fazem alianças com o grande capital impunemente²⁸. As forças do mercado declaram-se intranquias com a crise no PT e exigem ações enérgicas em favor das reformas previstas nos acordos com o FMI. Uma de suas principais iniciativas foi a ingerência do Palácio do Planalto na sucessão da CUT. O candidato de Lula e José Dirceu foi *oficializado* pela Articulação, impondo uma derrota ao atual presidente, João Felício, também da corrente majoritária. O referido processo de expulsão dos parlamentares “radicais” faz parte dessas iniciativas. A coordenação política também tem investido em campanhas publicitárias para fortalecer a defesa das reformas, ao mesmo tempo em que os críticos são acusados de corporativistas e de defensores de privilégios, insensíveis ao drama dos idosos aposentados no setor privado²⁹.

Mas até mesmo parlamentares moderados têm criticado a tentativa do Planalto de “satanizar” os críticos³⁰. Intelectuais de grande expressão saem em defesa da liberdade de expressão no PT³¹ e, por ocasião dos congressos estaduais da CUT, em algumas regiões, as forças de esquerda atuaram em blocos unitários e mesmo a base da corrente majoritária tem-se pronunciado contra as reformas originalmente encaminhadas por Cardoso. O desfecho desses embates é imprevisível, mas é certo que a questão da autonomia de classe dos movimentos ganhou nova dimensão e que o debate sobre o pós-neoliberalismo será produzido a partir dos movimentos e das manifestações de intelectuais que não ficaram prisioneiros do pensamento único.

Bibliografia

- Amadei, A. 2003 "Tudo azul: do outro lado da moeda", in Fattorelli Carneiro *Auditoria da Dívida Externa: questão de soberania* (Rio de Janeiro: Contraponto/Campanha do Jubileu Sul).
- Antunes, Ricardo 2003 "O pêndulo de Lula", em *Folha de São Paulo* (São Paulo) 26/2/03: A3.
- Carneiro, R. 2002 *Desenvolvimento em crise* (São Paulo: Ed. Unesp/IE-U NICAMP).
- Chossudovsky, Michel s/d *Brasil: neoliberalismo com um "rosto humano"* <<http://resistir.info>>.
- CUT 2003 *Caderno de Teses. Análise de Conjuntura e Balanço* (São Paulo) 1, Março <www.cut.org.br>.
- Galvão et al 2002 "Lutas sociais no Brasil em 2001", em *OSAL* (Buenos Aires) Nº 6, Enero.
- Gonçalves, Reinaldo 2003 *Política econômica e macrocenários nacionais: 2003-2006*, mimeo <[www.lpp.uerj.net/Outro Brasil](http://www.lpp.uerj.net/Outro%20Brasil)>.
- Morelli, Mauro 2003 *O Globo* 31/3: 4, Entrevista.

Notas

- 1 Texto escrito com base em pesquisas e estudos de Mariana Oliveira Setúbal (CUT) e Gleide Banus Barboza (MST) (OSAL/LPP-UERJ).
- 2 Em 1995, a dívida líquida total do setor público correspondia a 30% do PIB, em 2000 a 50% (Carneiro, 2002).
- 3 O crescimento do PIB no período FHC foi o 4º pior dos últimos cem anos (*O Globo*, 28/2/03).
- 4 Entre janeiro de 2002 e julho de 2002, a relação da dívida líquida do setor público passou de 53% para 64% do PIB, somando R\$ 885 bilhões; o chamado "risco Brasil" passou de 800 para 1850 pontos e o dólar de R\$ 2,20 para R\$ 3,00 (*Valor*, 26-28/7/02: C1; *FSP*, 01/11/02: B1).
- 5 A coalizão de Lula incluiu o Partido Liberal, uma pequena agremiação que fizera oposição a diversas medidas de FHC e que indicou o candidato a Vice Presidente, o Senador e empresário do setor têxtil José Alencar (promovendo a união entre capital e trabalho, conforme Lula).
- 6 Entre 1995 e 2002 a receita fiscal do Tesouro Nacional cresceu de 12,6% do PIB para 17,1% do PIB; contudo, o pagamento de juros cresceu, no mesmo período, de 2,9% do PIB para 9,0% do PIB, engordando o capital rentista. Ao mesmo tempo, a contribuição dos salários no PIB decaiu, nos últimos 10 anos, de 45% para 27% (Amadei, 2003).
- 7 Ver notas 2, 3 e 4.
- 8 Ver íntegra em <www.pt.org.br>
- 9 Paul O'Neill, então Secretário do Tesouro dos EUA (*FSP*, 29/11/02).

10 O acordo envolve US\$ 30 bilhões e foi concluído em agosto de 2002 com o aval do então candidato Lula.

11 As medidas canônicas do FMI servem de parâmetro e o “risco Brasil” é o instrumento de constrangimento: bons governos merecem menor risco; governos desobedientes, alto risco.

12 Foram eleitos 10 senadores, com isso a bancada passou de 8 para 14 de um total de 81 senadores. Para a Câmara dos Deputados, o PT elegeu 92 deputados (na legislatura anterior 58) de um total de 513.

13 Em entrevista de 1998, Meirelles afirmou: “O acontecimento mais fundamental [na América Latina] foi o lançamento do plano de estabilização na Argentina [sob Domingo Cavallo]. Foi uma abordagem diferente, no sentido de que não era um controle de preços ou um controle do fluxo de moeda, mas sim um controle da oferta monetária e das finanças governamentais” (*Latin Finance*, 6 August 1998). Vale a pena notar que o chamado “controle da oferta monetária”, referido por Meirelles, significa essencialmente o congelamento da oferta de crédito aos negócios locais (através da dolarização), levando ao colapso da atividade produtiva. As operações obscuras estão relacionadas a compra de instituições financeiras pelo FleetBoston e a maciça fuga de capitais (Chossudovsky, s/d).

14 <www.fazenda.gov.br> Disponibilizado em 10/04/03.

15 Ver documento em <[www.lpp.uerj.net/Outro Brasil](http://www.lpp.uerj.net/Outro%20Brasil)>.

16 Tavares, M.C. Entrevista, *FSP* 21/4/03. Ver íntegra em <[www.lpp.uerj.net/Outro Brasil](http://www.lpp.uerj.net/Outro%20Brasil)>.

17 O documento da Fazenda aparentemente desconsidera estudo do Banco Central que informa que a instabilidade do mercado financeiro acarretou perda de R\$ 17 bilhões apenas em 2002 (*O Globo*, 28/2) e secundariza o fato de que, em 2003, o setor público irá aumentar em 24% os gastos com juros (que deverá alcançar o valor recorde de R\$ 141,6 bilhões, *FSP*, 8/3/03: B4).

18 Carta ao Presidente do FMI, Brasília, 28/2/03.

19 Um trabalhador que recebe um salário mínimo gasta 1/4 de sua remuneração em impostos. De outra parte, a taxação da riqueza no país é irrisória, assegurando aos bancos e às grandes fortunas uma das maiores margens de lucro do mundo (*FSP*, 16/2/03: B1). Enquanto os salários participam com 27% da renda nacional, o fator trabalho responde por 55% da carga tributária (Amadei, 2003).

20 Um estudo abrangente sobre os fundamentos e objetivos da reforma da previdência solidamente amparados em dados que refutam os argumentos governamentais, pode ser encontrado em Granemann e Bendrao Saldanha (2003), disponível em <[www.lpp.uerj.net/Outro Brasil](http://www.lpp.uerj.net/Outro%20Brasil)>.

21 Sendo que R\$ 650 milhões já foram contingenciados pela área econômica.

22 Os relatórios sobre o Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD/ONU são eloqüentes sobre a precariedade dessas políticas.

23 Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) é composto por 82 membros, dos quais a metade é constituída de empresários: 23 da indústria, 7 do setor financeiro (inclusive de bancos estrangeiros, como Citibank e Santander), 5 agropecuaristas, 4 do Setor de serviços e 2 do comércio. Os sindicalistas chegam a 13 (os

convites foram pessoais, não havendo representação formal da CUT, por exemplo). Fazem parte também 10 "personalidades" como uma grande acionária do Itaú. Este Conselho vai opinar sobre previdência, entre outros assuntos (Fonte: BOLETIM DA FENAFISP).

24 Carta ao Presidente Lula, Brasília, 1 de maio de 2003 (ver íntegra em <[www.lpp.uerj.net/Outro Brasil](http://www.lpp.uerj.net/Outro_Brasil)>).

25 A Medida Provisória 2027/2000 interdita, por dois anos, para fins de reforma agrária as terras ocupadas por movimentos sociais.

26 A estratégia atual do Ministério do Desenvolvimento Agrário não tem conseguido diminuir a violência dos conflitos pela terra. De acordo com dados da CPT, o número de assassinatos no primeiro trimestre deste ano aumentou em 31,2% em relação ao mesmo período de 2002, o que também não é diferente em relação às ocupações, elas aumentaram em 42,3% (*O Globo*, 18/04/03: 8).

27 Pesquisa IBOPE: Lula tem 75% de aprovação, 51% ótimo/bom, 36% regular, 7% ruim/péssimo. As principais preocupações são a inflação e o desemprego (*O Globo*, 3/4/03: 8).

28 Um pequeno livro, escrito em 1513, *O Príncipe*, dá alguns sábios conselhos aos novos governantes. Valeria a pena recordá-los: a) ao fazer alianças não as faça nunca com os poderosos que mais tarde irão te trair, procure sempre fazê-las com os mais fracos que terão sempre em você um aliado a defender; b) quando se instaura um principado novo ele terá sempre contra si os antigos dominantes porque estes precisam retomar as rédeas do poder e, o que é mais preocupante, os novos "beneficiados" ainda não tem suficiente confiança em você para aderir com segurança (Contribuição de Edmundo Fernandes Dias/Unicamp, 16/05/03).

29 Juiz da 5ª Vara da Justiça Federal de Curitiba proibiu a veiculação da propaganda oficial do governo sobre a reforma da previdência. As entidades entraram na Justiça acusando o governo do presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva de "desvio de finalidade, lesão ao patrimônio público e ameaça de quebra do princípio da moralidade administrativa", ao veicular as peças consideradas ofensivas aos servidores federais (*Folha Online*, 15/05/03).

30 Pelo menos 8 dos 14 senadores já teriam assinado documento de apoio aos radicais. O documento redigido pela bancada pedia que se abrisse processo de negociação com radicais, ao invés de um processo na comissão de ética. Contudo, o presidente e o líder do PT no Senado, ambos da corrente majoritária, ameaçaram renunciar a seus postos caso o documento fosse divulgado, levando os signatários a recuar (*Folha Online*, 15/05/03).

31 O senador Eduardo Suplicy (SP), o advogado Dalmo Dallari e o sociólogo Emir Sader são algumas das testemunhas de defesa convidadas pela senadora Heloísa Helena (AL) e pelos deputados federais Luciana Genro (RS) e João Batista Oliveira de Araújo, o Babá (PA), no processo disciplinar movido pela direção do PT contra os três parlamentares (*Folha Online*, 15/05/03).

[cronología enero-abril 2003]

ENERO

SÁBADO 4 Más de 3 mil personas de asambleas barriales, ecologistas, agrupaciones indígenas, comerciantes y estudiantes marchan desde la Plaza San Martín hasta la Municipalidad de Esquel (Chubut) en contra del proyecto minero de la empresa canadiense Meridian Gold de explotar a cielo abierto y durante 10 años un yacimiento de oro y plata en esa ciudad.

MARTES 7 Piqueteros del Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive (MST) realizan una jornada nacional de cortes de ruta en reclamo de un subsidio universal para desocupados y que se regularice la situación de 7 mil beneficiarios que siguen sin cobrar el Plan Jefes y Jefas de Hogar. En la Provincia de Buenos Aires (PBA), en la Ciudad de Buenos Aires (BA), Bariloche (Río Negro), Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Neuquén y Santiago del Estero también se realizan protestas.

Un grupo de vendedores ambulantes de la peatonal Florida (BA) es desalojado por un fuerte operativo ordenado por el gobierno de la ciudad. Por la noche realizan una protesta en demanda de un lugar donde vender sus productos.

JUEVES 9 Los docentes de Paraná, agrupados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), protestan frente a la Casa de Gobierno provincial en reclamo del pago de sueldos atrasados. También realizan movilizaciones en las localidades de Victoria, Villaguay y Concordia.

Llega al país una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para firmar un acuerdo con el gobierno que contempla sólo la refinanciación de vencimientos hasta julio. Los delegados del organismo imponen como condición la revisión mensual de las metas.

El presidente veta la extensión del Fondo de Incentivo Docente (FONID). Así, sólo se pagará el remanente del incentivo correspondiente a 2001, pero no se extenderá el beneficio hasta el 2002.

VIERNES 10 Los piqueteros de Barrios de Pie y del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón realizan una protesta frente al Hotel Sheraton (BA)

para repudiar la misión del FMI que allí se aloja. Luego marchan hasta el Ministerio de Trabajo en reclamo de la continuidad de los planes de empleo y un aumento de 150 pesos de los mismos.

Durante todo el día, los artesanos y vendedores ambulantes de Florida intentan instalarse en sus puestos pero son continuamente desalojados por la policía.

JUEVES 16 El gobierno y el FMI alcanzan el acuerdo que permitirá reprogramar vencimientos por 11.712 millones de dólares de aquí al 31 de agosto del corriente año.

MIÉRCOLES 22 Unos 4 mil piqueteros del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), del Polo Obrero y del Movimiento Barrios de Pie inician una doble jornada de protesta nacional en demanda de la restitución de 10 mil planes de empleo, la ampliación de los beneficios a todos los desocupados del país y la duplicación de los montos que perciben. Marchan desde Puente La Noria hasta el Puente Saavedra, donde acampan para continuar al día siguiente.

JUEVES 23 Piqueteros continúan la marcha dirigiéndose hasta la embajada de Venezuela para expresar su solidaridad con el presidente de ese país y luego hasta la embajada de Estados Unidos para rechazar la guerra contra Irak y el acuerdo alcanzado con el FMI. Finalizan la protesta con una marcha hasta el Ministerio de Trabajo (BA) en donde se reúnen con la titular de esa cartera, quien les garantiza que en febrero cobrarán todos los beneficiarios.

DOMINGO 26 Como todos los días 26 de cada mes, unos 1.000 manifestantes del MTD Aníbal Verón, asambleas vecinales y organizaciones de derechos humanos cortan el Puente Pueyrredón y realizan un escrache frente a la estación de trenes de Avellaneda (PBA) para recordar los siete meses de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

LUNES 27 Durante una semana, grupos de piqueteros cortan en siete puntos la ruta nacional 34 en Tartagal y General Mosconi (Salta) para reclamar la recuperación de 500 planes de Jefas y Jefes de Hogar. Levantan la medida ante la promesa de que llegarán representantes del gobierno nacional para analizar la situación.

MARTES 28 La Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) realizan una jornada de protesta nacional con marchas en todo el país en reclamo de la reincorporación de 250 mil planes Jefas y Jefes de Hogar, planes de empleo para jóvenes y ancianos y la reactivación económica de las fábricas recuperadas por sus obreros.

MIÉRCOLES 29 El presidente Eduardo Duhalde firma un nuevo decreto que permite el aumento de 7,2% para el gas y 9% para la electricidad.

JUEVES 30 Unos 400 integrantes de la Asociación Nacional de Ahorristas Unidos de Mar del Plata (PBA) realizan la marcha N° 100 en reclamo de la devolución de sus depósitos en dólares.

FEBRERO

LUNES 3 El Bloque Piquetero Nacional, integrado por el Movimiento Territorial Liberación (MTL), el MIJD, el Polo Obrero, la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Anibal Verón y el Movimiento Barrios de Pie, comienza un nuevo plan de lucha, que se extenderá a lo largo de todo el mes, con cortes de rutas y calles, marchas y asambleas en los lugares de protesta, en reclamo de un aumento en los subsidios de 150 a 300 pesos y la restitución del beneficio a aquellos que lo perdieron en enero. Los piqueteros marchan hasta la sede de Repsol-YPF en Dock Sud, donde realizan un acto. Al mismo tiempo, otros grupos realizan cortes en los ingresos a las fábricas Firestone y Coca Cola. La protesta abarca 35 piquetes a fábricas en todo el país.

MARTES 4 Unas 2 mil personas de Esquel (Chubut) se movilizan para impedir la instalación de una mina de oro por parte de la empresa Meridian Gold, la cual podría provocar daños ambientales. Realizan escraches frente al domicilio de la firma, la intendencia y el Consejo Deliberante local.

Los integrantes de la CCC de Tucumán llevan a cabo 10 cortes de ruta a lo largo de toda la provincia, en reclamo de 3 mil subsidios de 150 pesos, 5 mil bolsones de comida y 30 mil pesos para abastecer comedores comunitarios.

MIÉRCOLES 5 Manifestantes del MIDJ cortan durante 4 horas los puentes Pueyrredón, Uriburu, La Noria, Saavedra y Nicolás Avellaneda, dejando aislada a BA en reclamo de la restitución de 9 mil planes sociales, la ampliación de los mismos a jóvenes y mayores de 60 años sin hijos y el aumento del subsidio de 150 a 300 pesos.

En la capital de Tucumán, representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) irrumpen a la fuerza en el recinto de la legislatura para rechazar la aprobación de una ley que prorroga el pago del 20% de los salarios de los empleados públicos con vales alimentarios y la suspensión de su escalafón. Logran hacer fracasar la sesión y postergar el tratamiento de la ley.

JUEVES 6 Piqueteros de la CCC y de la FTV cortan rutas en los accesos a BA y en el interior del país en demanda de la reincorporación de los beneficiarios dejados fuera del programa Jefas y Jefes de Hogar y un aumento en el monto actual del subsidio, entre otros reclamos. Levantan la medida tras anunciar un principio de acuerdo con el gobierno.

SÁBADO 15 Detrás de una bandera blanca con la inscripción “No a la guerra imperialista contra Irak” alrededor de 50 mil personas convocadas por el Comité del Foro Social Mundial en Argentina y el Comité de Solidaridad con Irak, con la participación de organizaciones de derechos humanos, piqueteros y partidos políticos, marchan hasta la embajada de EE.UU. (BA) para sumarse a las manifestaciones en contra de la guerra que se realizan en todo el mundo.

MIÉRCOLES 19 Alrededor de 20 mil manifestantes convocados por el Bloque Piquetero Nacional se concentran en Av. San Juan y 9 de Julio (BA) para marchar hasta el Ministerio de Desarrollo Social y luego dirigirse a la Casa Rosada para entregar un petitorio al presidente Eduardo Duhalde en el que exigen la duplicación del monto de los subsidios, la creación de puestos genuinos de trabajo y el esclarecimiento de los asesinatos de los piqueteros Kosteki y Santillán. Unos 400 policías les impiden avanzar. Luego de 4 hs de negociación con funcionarios del gobierno, los manifestantes entregan el petitorio y acuerdan una reunión para la semana próxima. Realizan un acto simbólico en el lugar y desconcentran de forma pacífica.

VIERNES 21 Los trabajadores del Banco Nación realizan una huelga de una hora en todo el país en reclamo del pago de los 130 pesos de aumento salarial dispuestos por el gobierno nacional para el sector privado y para rechazar la privatización de los bancos estatales acordada con el FMI.

MARTES 25 La jueza Claudia Rodríguez Vidal hace lugar a la medida cautelar presentada por el Foro de las Asociaciones de Consumidores en contra del decreto presidencial 146/03 mediante el cual se aprueban los aumentos en las tarifas de electricidad y gas.

Las 89 familias que ocupan el edificio del ex Patronato de la Infancia (PADELA), en BA, son desalojadas por un violento operativo policial con gases lacrimógenos y balas de goma. Los ocupantes amenazan con detonar garrafas de gas y apedrean a los policías. Los enfrentamientos dejan un saldo de 16 personas heridas y 52 detenidas.

El gobierno de BA decreta el fin de la concesión de la Autopista Arturo Illia a la empresa COVIMENT y ordena el traspaso a la municipal Autopistas Urbanas SA (AUSA).

VIERNES 28 Deudores hipotecarios convocados por la Federación de Cámaras y Centros Comerciales de la República Argentina (FEDECÁMARAS) se concentran frente a la Corporación de Rematadores (BA) para exigir la inmediata suspensión de los remates de viviendas y comercios.

MARZO

DOMINGO 2 Se producen incidentes en el transcurso de las elecciones para gobernador y legisladores de Catamarca. Ante la inhabilitación de Luis Barrionuevo como candidato a gobernador por el Partido Justicialista (PJ) –por no cumplir con el requisito constitucional de haber residido en la provincia en los últimos 4 años–, militantes de ese partido rompen e incendian urnas y arman piquetes para impedir el acceso de votantes a las escuelas. Los comicios son suspendidos.

LUNES 3 La Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), entre otras 30 organizaciones de toda la cadena agrícola, comienzan un lock-out que durará toda la semana y que paraliza por completo el mercado de granos. Los productores demandan, entre otras cuestiones, que se les permita ajustar por inflación los balances para el pago de ganancias. Las grandes cerealeras exigen también que el gobierno se ponga al día con las deudas que mantiene con el sector, las cuales sumarían unos 600 millones de dólares.

MARTES 4 En San Miguel de Tucumán los docentes instalan carpas en la plaza Independencia frente a la casa de gobierno y amenazan con no iniciar las clases el lunes 10 si el gobierno provincial no establece un aumento salarial.

MIÉRCOLES 5 Unos 400 ahorristas se concentran frente a los tribunales en BA para festejar el fallo de la Corte Suprema a favor de la redolarización del depósito bancario de la provincia de San Luis, que podría extenderse al resto de los depósitos.

JUEVES 6 Militantes de Greenpeace protestan frente a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación (BA) en contra del proyecto minero de la empresa Meridian Gold en Esquel y reclaman al presidente Eduardo Duhalde que retire su apoyo a la firma canadiense.

Ex trabajadores de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) cortan la ruta nacional 34 a la altura de General Mosconi (Salta) al no ser recibidos por el ministro de Economía para tratar el pago de la propiedad participada, deuda salarial que debería haber sido cancelada cuando la empresa fue privatizada a comienzos de los años '90.

LUNES 10 Unos 200 manifestantes se concentran frente a los tribunales en BA para festejar la condena a prisión perpetua al policía Juan de Dios Velaztiqui, quien asesinó a tres jóvenes en el barrio de Floresta en diciembre de 2001.

Docentes de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) realizan un paro por 24 hs y un acto en la plaza San Martín en reclamo de una

mejora salarial. En Tucumán y Santa Fe también hay paros docentes. En Santiago del Estero los maestros realizan distintas movilizaciones.

MIÉRCOLES 12 Uno 500 docentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) se concentran frente al Congreso Nacional para exigir la aprobación de un proyecto que garantice los recursos necesarios para el pago del FONID de los años 2002 y 2003.

JUEVES 13 El Senado de la Nación convierte en ley el financiamiento para la continuidad del FONID, a través de la recaudación del Impuesto al Cheque.

SÁBADO 15 Unas 30 mil personas convocadas por el Comité del Foro Social Mundial en Argentina marchan a la embajada de EE.UU. en BA, bajo la consigna "no a la guerra", en una jornada de movilización en numerosas ciudades del mundo.

MIÉRCOLES 19 Militantes del MTD Aníbal Verón realizan nueve cortes en la PBA en reclamo de un aumento de 300 pesos en los planes de trabajo y la apertura de la inscripción a los trabajadores que todavía no pudieron acceder a ninguna prestación social, entre otros puntos.

El directorio del FMI aprueba los compromisos de la primera revisión del acuerdo y anuncia un desembolso de 307 millones de dólares para que el gobierno pueda cubrir los compromisos con el propio organismo.

JUEVES 20 Cerca de 1.000 manifestantes de partidos de izquierda, entre otros, se concentran frente a la embajada de EE.UU. en rechazo a la guerra contra Irak. Un grupo arroja piedras contra la sede diplomática y en la desconcentración ataca varias sedes bancarias y negocios de capitales estadounidenses. La policía reprime a los manifestantes de la protesta. En Córdoba, Rosario (Santa Fe) y Neuquén también se realizan manifestaciones.

VIERNES 21 Piqueteros de la FTV y de la CCC realizan una marcha y concentraciones de protesta frente a comercios de origen norteamericano ubicados en La Matanza (PBA) para repudiar la guerra.

DOMINGO 23 La Asociación Madres de Plaza de Mayo realiza un acto en la Plaza de Mayo en el que participan 4 mil personas para repudiar el golpe de estado de 1976 y la invasión a Irak por parte de EE.UU.

En Esquel (Chubut) se realiza un plebiscito popular para votar Sí o No al proyecto de explotación de una mina de oro utilizando cianuro por parte de la empresa Meridian Gold. El 85% vota por el No.

LUNES 24 Alrededor de 100 mil personas, convocadas por las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, otras organizaciones de de-

rechos humanos, sociales, estudiantiles, piqueteros, asambleas y partidos de izquierda, marchan desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo (BA) al cumplirse 27 años de la última dictadura militar.

MIÉRCOLES 26 El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) cierra las puertas de todas las universidades del país en rechazo al último recorte de 57 millones de pesos para el presupuesto universitario efectuado por el Poder Ejecutivo.

VIERNES 28 El presidente Eduardo Duhalde firma el decreto que permite la apertura voluntaria del corralón, por lo cual desde el 8 y hasta el 21 de abril próximo los ahorristas podrán retirar sus fondos o renegociar nuevos plazos fijos.

ABRIL

VIERNES 4 Piqueteros del MTL, del Movimiento Barrios de Pie y del MTD 17 de Julio cortan la ruta de acceso al aeropuerto de Resistencia (Chaco) para repudiar la presencia del candidato presidencial Carlos Menem. Así, impiden que lleve a cabo una caravana desde esa ciudad hasta Corrientes. Por la noche, unas 60 personas realizan un escrache en la puerta del hotel donde se aloja.

DOMINGO 6 El Bloque Piquetero Nacional culmina la cuarta Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados en el miniestadio de Lanús (PBA). Participan más de 2.500 personas y se decide una marcha contra la guerra, un acto en la Plaza de Mayo en el Día Internacional de los Trabajadores, una marcha nacional para reclamar la expropiación de las empresas ocupadas por sus trabajadores y una manifestación en el Puente Pueyrredón el 26 de junio, a un año de los asesinatos de Kosteki y Santillán, entre otras medidas.

MARTES 8 Más de 2.500 personas se concentran frente a Zanón (Neuquén) para evitar que se efectúe el desalojo de la fábrica ordenado por la Justicia. Los trabajadores nucleados en ATE realizan un paro por 24 hs para apoyar a los trabajadores que desde hace 17 meses mantienen la fábrica tomada, de los cuales los últimos 13 fueron de producción bajo control obrero. Después del mediodía llegan al lugar los síndicos para realizar un inventario general y tomar posesión de la planta, pero no pueden llevarlo a cabo y se retiran. El gobernador Jorge Sobisch anuncia que la policía no participará del desalojo.

Cuatro piqueteros de Salta son detenidos por orden de la Justicia Federal por haber cortado la ruta nacional 34 en reclamo del pago de las acciones del Programa de Propiedad Participada a los despedidos de YPF. La CCC realiza una manifestación en la plaza de Mosconi y la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) mantiene cortada la ruta en demanda de la liberación de los compañeros.

JUEVES 10 Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), el Movimiento Barrios de Pie y la Asociación por una Tasa sobre las Transacciones Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC), entre otros, marchan hasta la plaza Houssay donde realizan el acto de apertura del Encuentro Regional por la Soberanía y la Integración de los Pueblos, contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la deuda y la guerra. Dicho encuentro se desarrollará en BA desde hoy y durante todo el fin de semana bajo las consignas "No al ALCA" y "Otra América es Posible".

VIERNES 11 El proyecto minero en Esquel es suspendido por tiempo indefinido por existir riesgos sin cubrir sobre probable contaminación, según anuncia el gobernador de Chubut, José Luis Lizurume.

SÁBADO 12 El Encuentro Regional por la Soberanía y la Integración de los Pueblos, contra el ALCA, la deuda y la guerra, culmina con la Asamblea de la Auotconvocatoria No al ALCA. Deciden impulsar la realización de una consulta popular entre el 4 y 11 de octubre próximos en todo el país. Al finalizar marchan hasta la casa de gobierno para repudiar la guerra de EE.UU. a Irak.

DOMINGO 13 Los piqueteros que mantienen cortada la ruta nacional 34 en Gral. Mosconi deciden levantar la medida ante la posibilidad de que liberen a sus dirigentes detenidos.

LUNES 14 Los trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inician un paro por tiempo indeterminado en reclamo por la devolución del 13% a los jubilados y por la libre opción jubilatoria.

La policía desaloja a la asamblea Lezama Sur del ex Banco Mayo (BA), que había sido tomado por los vecinos del lugar el 14 de julio de 2002, y decomisan los equipos de los periodistas de Indymedia, que tienen allí su lugar de trabajo. Asambleas barriales, el MTD Anibal Verón, trabajadores de Brukman y estudiantes, entre otros, se acercan al lugar para rechazar la medida.

MIÉRCOLES 16 Piqueteros del MTD Anibal Verón, del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y de la Federación de Trabajadores Combativos (FTC) marchan desde el puente Pueyrredón hasta la Casa de Salta y luego al Ministerio de Justicia en reclamo de la liberación de los manifestantes de esa provincia detenidos.

Empleados de la empresa Líneas Aéreas Privadas Argentinas (LAPA) comienzan un paro por tiempo indeterminado ante el eventual cierre de la compañía. Levantan la medida luego de que el Ministerio de Trabajo dictara la conciliación obligatoria entre las partes.

VIERNES 18 Unos 300 efectivos de la Guardia de Infantería, de la Policía Montada y la División Perros desalojan, bajo la orden del juez Jorge Rimondi, a los trabajadores que mantenían ocupada y produciendo bajo control obrero a la fábrica textil Brukman tomada en diciembre de 2001, luego del cierre declarado por los propietarios. Centenares de vecinos, estudiantes, piqueteros del MTD Aníbal Verón, el Bloque Piquetero Nacional, la CCC, asambleas barriales y partidos de izquierda se concentran durante todo el día en la avenida Jujuy (BA) para apoyar a los trabajadores que reclaman su fuente de trabajo. Por la noche, un grupo de legisladores de la ciudad, representantes de organismos de derechos humanos y trabajadores de la fábrica firman un acta en la que reclaman al juez que deje sin efecto la orden de desalojo, y exigen el repliegue de la policía. Los manifestantes deciden mantener una vigilia. A lo largo de todo el día, la policía despliega celulares y unas 20 motos con personal armado en las calles adyacentes de la fábrica.

LUNES 21 Más de 7 mil personas de asambleas barriales, organizaciones piqueteras, estudiantiles y partidos políticos de izquierda, entre otros, marchan hasta Brukman. Las trabajadoras tomadas del brazo hacen caer una de las vallas policiales que mantenían la fábrica cercada y caminan hacia la planta. Algunos manifestantes arrojan piedras y se desata una feroz represión policial con gases lacrimógenos, balas de goma y de plomo. Se producen incidentes en la puerta de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en el Hospital de Niños Garrahan, a más de 20 cuadras de los hechos, donde se resguardan algunos manifestantes. La represión deja decenas de heridos y más de 100 detenidos. Por la noche, se concentran frente a las comisarías de la zona para exigir la libertad de los mismos.

MARTES 22 Unas 25 mil personas acompañan a las obreras de Brukman en una nueva movilización hasta la fábrica para repudiar la brutal represión y en reclamo de su fuente de trabajo. Instalan una carpa de la resistencia en el lugar. Rechazan la convocatoria a dialogar del Ministerio de Trabajo hasta que no se retire la policía.

Cientos de trabajadores del Frente de Gremios Estatales de Jujuy son dispersados por la policía con gases lacrimógenos y balas de goma cuando protestan frente a la casa de gobierno en reclamo de un aumento salarial. Son detenidos siete manifestantes, entre ellos el secretario general de ATE y CTA Jujuy.

Los trabajadores de LAPA cortan la pista principal del Aeroparque Jorge Newbery y la avenida Costanera y protestan frente al Ministerio de Trabajo (BA) en rechazo al eventual cierre de la empresa.

La Legislatura de BA aprueba la Ley 992, en la que se acepta y regula la actividad de los cartoneros.

JUEVES 24 Piqueteros del MTD Aníbal Verón, MIJD, Barrios de Pie y Polo Obrero, entre otros, cortan el Puente Pueyrredón, marchan por BA y concluyen su protesta en la Plaza de Mayo en rechazo a la represión contra los trabajadores de Brukman y la detención de dirigentes piqueteros en Salta.

Comunidades indígenas de diversas provincias convocadas por la CTA marchan hasta la Plaza de Mayo bajo la consigna "Dignidad para los pueblos originarios" y por el fin de remates de tierras en la Patagonia y en otras regiones del país.

DOMINGO 27 Se realizan las elecciones presidenciales. Carlos Menem, del Frente por la Lealtad, obtiene el 24,45% de los votos. Néstor Kirchner del Frente para la Victoria, alcanza el 22,24%. Estos dos candidatos disputarán la segunda vuelta el 18 de mayo. Ricardo López Murphy, del Movimiento Federal Recrear, obtiene el 16,37%. Adolfo Rodríguez Saá del Movimiento Nacional y Popular, el 14,11% y Elisa Carrió, de la Alternativa por una República de Iguales (ARI), el 14,05%. Diferentes organizaciones populares se reúnen en los alrededores de Brukman (BA) para repudiar las elecciones. También se realizan elecciones a gobernador en La Rioja y San Luis. Alberto Rodríguez Saá y Ángel Mazza, respectivamente, ganan las gobernaciones de sus provincias.

GLOSARIO DE SIGLAS

ATE	Asociación de Trabajadores del Estado
ATTAC	Asociación por una Tasa sobre las Transacciones Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos
ARI	Alternativa por una República de Iguales
AGMER	Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos
ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
ANSES	Administración Nacional de la Seguridad Social
AUSA	Autopistas Urbanas Sociedad Anónima
BA	Ciudad de Buenos Aires
CCC	Corriente Clasista y Combativa
CIARA	Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina
CIN	Consejo Interuniversitario Nacional
CRA	Confederaciones Rurales Argentinas
CTA	Central de los Trabajadores Argentinos
CTD	Coordinadora de Trabajadores Desocupados
CTERA	Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina
FAA	Federación Agraria Argentina
FEDECÁMARAS	Federación de Cámaras y Centros Comerciales de la República Argentina
FMI	Fondo Monetario Internacional
FONID	Fondo de Incentivo Docente
FTC	Federación de Trabajadores Combativos
FTV	Federación de Tierra y Vivienda

FUBA	Federación Universitaria de Buenos Aires
LAPA	Líneas Aéreas Privadas Argentinas
MIJD	Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados
MST	Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive
MTD	Movimiento de Trabajadores Desocupados
MTL	Movimiento Territorial Liberación
MTR	Movimiento Teresa Rodríguez
PADELAJ	Patronato de la Infancia
PBA	Provincia de Buenos Aires
PJ	Partido Justicialista
SRA	Sociedad Rural Argentina
UBA	Universidad de Buenos Aires
UEPC	Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba
UTD	Unión de Trabajadores Desocupados
YPF	Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Realizada por María Celia Cotarelo (PIMSA – Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina) y el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de Florencia Ayala.

Fuentes: diarios Página 12, Clarín, La Nación y Crónica.

[cronología enero-abril 2003]

JANEIRO

- 4 a FEIRA 01** Posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), e de seu vice, José de Alencar, do Partido Liberal (PL). Houve grande mobilização popular, e segundo as polícias civil e militar, mais de 70 mil pessoas compareceram para assistir à posse do novo presidente.
- 3 a FEIRA 07** Paralisação de 23 empresas do sistema de ônibus do município de São Paulo (região sudeste), que atendem cerca de 1 milhão de pessoas. O protesto é devido ao atraso do pagamento dos salários do mês anterior e as horas extras devidas pelas empresas. Durante o dia, 21 empresas realizaram o pagamento e cobradores e motoristas de ônibus retomaram o trabalho.
- 5 a FEIRA 09** Aproximadamente 230 trabalhadores rurais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) ocuparam e fecharam a agência de um banco federal do estado de Sergipe (região nordeste), reivindicando a liberação de crédito para pequenos investimentos nas terras dos assentados. Os militantes do MST saíram da agência após a promessa de que o dinheiro seria liberado pelo governo do estado, sem data definida.
- 2 a FEIRA 13** Rebelião de menores infratores em uma unidade da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM) da cidade de Franco da Rocha, estado de São Paulo (região sudeste) deixou a unidade parcialmente destruída. Este foi o maior motim dos cinco ocorridos em apenas nove dias. Os menores protestavam contra o atraso no julgamento de mais de 900 processos de internos e contra os maus tratos de funcionários (o Ministério Público denunciou 65 funcionários que estariam torturando os jovens). A tropa de choque da Polícia Militar (PM) foi acionada e a rebelião foi controlada. Durante o confronto, dois funcionários ficaram feridos.
- 5 a FEIRA 16** Início de greve geral de servidores docentes e técnico-administrativos do estado do Rio de Janeiro (região sudeste) por tempo indeterminado. Na área da saúde, 12 unidades hospitalares já paralisaram suas atividades, atendendo apenas casos de emergência. Funcionários das universidades estaduais mantiveram a paralisação, iniciada no último dia 10. A paralisação acontece

em protesto contra o atraso no pagamento do salário de dezembro e ao não pagamento do 13º salário aos servidores; Os servidores participaram de uma passeata e um ato público no centro da cidade.

- 4 a FEIRA 22** Um sindicalista e líder garimpeiro da região de Serra Pelada, no Pará (região norte) foi assassinado. A Polícia Civil suspeita que o crime esteja relacionado à disputa pelo comando da Cooperativa dos Garimpeiros de Serra Pelada (COOMIGASP) e trabalha com a hipótese de crime por vingança ou por encomenda. Três facções disputam o comando da cooperativa desde setembro de 2002, quando o Congresso autorizou a exploração do ouro em cem hectares da área. A aprovação do decreto gerou a “segunda febre do ouro” na região com a volta de 5 mil garimpeiros. Este é o segundo sindicalista assassinado em Serra Pelada em menos de três meses.
- 5 a FEIRA 23** Início da 3ª edição do Fórum Social Mundial (FSM) em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul (região sul) foi marcado com uma marcha pelo centro da cidade contra a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) e a provável guerra ao Iraque e ao conflito no Oriente Médio. O seu lema era: “A construção de um outro mundo possível contra a militarização e a guerra”. Segundo estimativas da PM, cerca de 110 mil pessoas participaram da marcha, que terminou no Anfiteatro do Pôr do Sol, área aberta de Porto Alegre onde foram realizadas apresentações de capoeira, shows de música de diversos países latino-americanos e representantes do Acampamento Intercontinental da Juventude confeccionaram com flâmulas variadas coletadas durante o caminho a “bandeira das bandeiras”, símbolo da multiculturalidade do Fórum.
- 6 a FEIRA 24** O MST ocupou uma fazenda no Piauí (região nordeste) que estava em processo de desapropriação, a espera da vistoria do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), com o objetivo de pressionar o governo federal. Foi a primeira ocupação feita pelo MST no governo Lula.
- 3 a FEIRA 28** Marcha contra a ALCA e pela paz no mundo encerra o 3º FSM. A Comissão Nacional da Campanha contra a ALCA produziu um manifesto que pretende recolher entre 10 e 15 milhões de assinaturas até junho, pedindo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convoque um plebiscito oficial contra o bloco comercial e realize uma auditoria pública sobre a dívida externa. O FSM contou com a participação de 100 mil pessoas de 125 países e mais de 1.500 atividades propostas, em sua maioria por organizações não-governamentais (em torno de 5.500), além de 30 mil jovens no acampamento da juventude. O 3º FSM não produziu um documento final, conforme consta na Carta de Princípios do Fórum. Segundo seus organizadores, a declaração final seria a soma da diversidade presente nas várias propostas que surgiram ao longo do evento e que foram afixadas no Mural do Fórum.

FEVEREIRO

- DOMINGO 02** Greve de 48 horas de motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo. A paralisação coincide com um momento de mudanças no modelo de transporte coletivo, que está sendo gerenciado pela administração da prefeita Marta Suplicy, do PT. Setores da prefeitura consideram que a paralisação tem a interferência de empresários de ônibus e trabalhadores de São Paulo, que tentam adiar a licitação por discordarem do novo modelo.
- 3 a FEIRA 04** Cerca de 400 integrantes do MST bloquearam uma estrada em Alagoas causando grande congestionamento e segundo fontes governamentais, mantiveram como refém o Secretário Estadual de Agricultura, Reinaldo Falcão, por aproximadamente cinco horas. Os trabalhadores reivindicam a instalação de infra-estrutura básica em dois assentamentos criados recentemente no Estado, desapropriação de terras para acomodar cerca de 500 famílias que estão acampadas há dois anos na região, além do fornecimento de cestas básicas pelo governo. Após 3 horas de negociação a rodovia foi desbloqueada e o governo estadual se comprometeu a receber os representantes do movimento no dia seguinte tendo um representante do INCRA como mediador. Contudo, a coordenação estadual do MST afirma que Reinaldo Falcão não foi feito de refém; ele simplesmente foi impedido de levar seu carro.
- 4 a FEIRA 12** Reunião entre integrantes do MST e governo do novo presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, prometeu estudar meios de negociar a dívida de famílias assentadas que receberam financiamento agrícola, e anunciou ainda a distribuição imediata de cestas básicas para os 80 mil sem-terra acampadas no campo e nas estradas e garantiu mais crédito para as 200 mil famílias assentadas.
- 5 a FEIRA 13** Protestos de funcionários públicos do Estado do Rio de Janeiro contra a governadora Rosinha Matheus do Partido Socialista Brasileiro (PSB). Durante aproximadamente três horas, dois movimentos rivais de funcionários hostilizaram-se na frente do Palácio Guanabara. Ambos reivindicavam o pagamento imediato do 13º salário, do adicional de férias e respeito ao calendário de pagamento. Sendo que um grupo, de 300 militantes, provavelmente ligado ao PSB era a favor da governadora e atacava verbalmente a ex-governadora Benedita da Silva e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a quem responsabilizavam pela falta de dinheiro para o pagamento do funcionalismo público. O outro, de aproximadamente 3 mil pessoas, representando 32 sindicatos e associações de servidores estaduais, entre eles, das áreas de saúde, educação e justiça responsabilizavam a atual governadora pelo não pagamento de salários.
- 6 a FEIRA 14** Cerca de 50 índios pataxó hã-hã-hãe encontraram-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedi-lo que interceda junto ao Supremo Tribunal

Federal, pelo julgamento da ação para anular títulos concedidos a fazendeiros no sul da Bahia. Há mais de 20 anos, eles vêm brigando na justiça pela posse de terra na região.

DOMINGO 16 Professores de rede estadual de educação do Rio de Janeiro, em greve desde o dia 10/02, protestaram em frente ao prédio da Secretaria Estadual de Educação contra o não pagamento do 13º salário e do adicional de férias. A categoria ainda está sem receber as gratificações do Programa Nova Escola, lançado em 2000, na gestão do governador Anthony Garotinho (PSB) e exige que a governadora Rosinha Matheus (PSB) volte a pagar o benefício.

2a FEIRA 27 Durante o Carnaval, 3 mil militares do Exército, Aeronáutica e Marinha vão patrulhar as principais vias expressas do Rio, como a Avenida Brasil e as linhas Amarela e Vermelha, e nos acessos aos túneis da cidade. Tal operação ira possibilitar o aumento de efetivo de militares das Polícias Civil e Militar na ocupação dos morros e favelas da cidade.

MARÇO

5a FEIRA 06 O governo federal divulgou que não irá rever a medida provisória que considera crime as ocupações de terras e que retira do programa de reforma agrária as terras que são ocupadas pelo MST pelo prazo de dois anos. A medida provisória foi editada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e diminuiu drasticamente o número de ocupações no país.

DOMINGO 16 Cerca de 2 mil trabalhadores sem-terra e assentados montaram acampamento na sede do INCRA de Marabá, no sul do Pará (região norte), em protesto contra falta de ações de reforma agrária por parte do governo nesta região. Em Sorocaba, interior de São Paulo (região sudeste), a Procuradoria Regional entrou com pedido de reintegração de posse de uma área de 20 hectares que pertence ao governo do Estado, e que desde o dia 13/04 está ocupada por 400 famílias sem-terra.

4a FEIRA 19 No Estado do Paraná (região sul), especificamente, foi criada uma milícia armada denominada Primeiro Comando Rural (PCR), em uma alusão à maior facção que atua nos presídios de São Paulo, o Primeiro Comando da Capital (PCC). O PCR promete reagir com violência a qualquer tentativa de ocupação do MST no Paraná.

A sede do INCRA de Belém, capital do Pará (região norte) foi ocupada por 24 horas pelo Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA). De acordo com a Comissão Pastoral da Terra (CPT), que apoiou a ação, os cerca de mil agricultores reivindicavam a anistia das dívidas de financiamentos, liberação de créditos e regularização dos títulos definitivos das glebas dos

assentamentos. A CPT alegou que a ocupação se deu pela falta de diálogo com os representantes do órgão.

Quinze organizações não-governamentais indígenas e indigenistas e setenta e cinco organizações que representam 200 mil índios realizaram um seminário na capital federal (região centro-oeste), onde criticaram a decisão do presidente Lula de continuar submetendo ao Conselho de Defesa Nacional os processos de homologação de terras indígenas.

6 a FEIRA 21 O Governo Federal decidiu recorrer à Polícia Federal (PF) para fiscalizar fazendeiros que estão contratando seguranças armados para defenderem suas terras contra as ocupações do MST, chegando a montar uma milícia armada com o nome de PCR. A PF é responsável por autorizar o funcionamento de empresas de segurança privada e fiscalizá-las. No caso das fazendas, ela será chamada para verificar se seus proprietários estão contratando empresas que funcionam segundo a lei.

5 a FEIRA 27 Mais de quinhentas famílias do MST ocuparam três fazendas no município de Pedra, Estado de Pernambuco (região nordeste), com a intenção de pressionar o INCRA a realizar vistoria na área, visando a desapropriação. Foi a primeira ocupação realizada este ano em Pernambuco, estado que possui o maior número de ocupações no país. O líder do MST no Estado disse que a ocupação é a primeira de uma série que deverá ocorrer até o dia 17 de abril, que marca o sétimo aniversário do massacre de Eldorado de Carajás.

DOMINGO 30 Trabalhadores do MST ocuparam uma fazenda no município de Unai, noroeste de Minas Gerais (região sudeste). Houve confronto entre os sem-terra e os funcionários da fazenda, e dois integrantes do MST foram baleados.

A B R I L

3 a FEIRA 01 A estação do tremzinho do Corcovado, um dos pontos turísticos mais visitados no Rio de Janeiro, foi vítima da ação do crime organizado. O ataque à estação foi feito por oito homens armados de fuzis e pistolas. A fachada foi atingida por pelo menos dez balas de grosso calibre e a réplica do tremzinho foi perfurada por vários tiros. Algumas horas antes do atentado, o diretor da empresa Trem do Corcovado, recebeu um fax anônimo, dizendo que o ataque seria uma represália à prisão de Jorge Alexandre Cândido, o Sombra, braço direito de Fernandinho Beira-Mar, um dos líderes do tráfico de drogas do Estado.

2 a FEIRA 07 Greve de motorista e cobradores de ônibus de São Paulo. De acordo com a São Paulo Transportes (SPtrans), a paralisação teve 100% de adesão e prejudicou cerca de 3,5 milhões de pessoas. Todas as viagens de ônibus foram

paralisadas e a prefeitura não conseguiu acionar o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE).

3 a FEIRA 08 Fim da greve dos motoristas e cobradores de São Paulo após um acordo com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Ele exigiu a volta imediata ao trabalho e obrigou a administração a pagar por 15 dias os salários dos 10.800 funcionários das viagens descredenciadas pela prefeitura. O TRT ainda garantiu estabilidade de 60 dias para os grevistas e pagamento dos dias parados.

Primeira paralisação dos servidores públicos federais no governo Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo do comando de greve era fazer uma paralisação de 24 horas para protestar contra a reforma da previdência, em especial o projeto de lei PL-9, que propõe um teto único para a aposentadoria dos novos funcionários públicos e permite que União, estados e municípios criem fundos privados de pensão complementar para os servidores.

4 a FEIRA 09 Mais uma noite de ações criminosas no Rio de Janeiro promovida por traficantes da facção Comando Vermelho (CV). Os ataques atingiram vários bairros e cidades da região metropolitana do Rio. Traficantes queimaram nove ônibus, um carro particular, lançaram granadas contra dois shoppings, metralharam uma universidade, uma lanchonete e uma igreja. Dois policiais militares foram mortos e outros dois, feridos. De acordo com a cúpula de Segurança Pública do estado, o motivo dos atentados seria a adoção de novas regras no presídio de Bangu I. Entre elas, a de que cada preso só poderá receber um advogado em visitas de 20 minutos marcadas previamente.

DOMINGO 13 Um militante do MST foi assassinado no assentamento Brejo em Tamandaré, a 100 quilômetros de Recife. Em menos de dois meses esse é o segundo assassinato em áreas do MST administradas pelo INCRA em Pernambuco.

3 a FEIRA 15 Um trabalhador rural foi executado e outro foi baleado no assentamento Mato Grosso em Pernambuco. Os dois eram ligados à Federação dos Trabalhadores de Agricultura de Pernambuco (FETAPE) que, juntamente com o MST e a CPT, reúne o maior número de assentamentos no estado.

Fim da greve de dois meses dos professores e servidores públicos estaduais do Rio de Janeiro. Eles decidiram voltar ao trabalho após a governadora, Rosinha Matheus (PSB), anunciar o calendário de pagamento do 13º salário de 2002. Os funcionários que ganham até 500 reais receberão 13º salário integral em maio e os demais servidores vão receber o salário parcelado em cinco vezes, de agosto a dezembro. O novo calendário do 13º não agradou aos funcionários, uma vez que não será pago integralmente a todos.

SIGLAS

ALCA	Área de Livre Comércio das Américas
COOMIGASP	Cooperativa dos Garimpeiros de Serra Pelada
CPT	Comissão Pastoral da Terra
CV	Comando Vermelho
FEBEM	Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor
FETAPE	Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Pernambuco
FSM	Fórum Social Mundial
INCRA	Instituto de Colonização e Reforma Agrária
MPA	Movimento dos Pequenos Agricultores
MST	Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra
PAESE	Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência
PCC	Primeiro Comando da Capital
PCR	Primeiro Comando Rural
PF	Polícia Federal
PL	Partido Liberal
PM	Polícia Militar
PSB	Partido Socialista Brasileiro
PT	Partido dos Trabalhadores
SPTrans	São Paulo Transportes
TRT	Tribunal Regional do Trabalho

Equipe: Coordenação: Prof. Dr. Emir Sader (LPP/UERJ); Prof. Dr. Roberto Leher (LPP/UERJ); Profa. Dra. Silene de Moraes Freire (PROEALC/UERJ).

Coleta e Sistematização dos Dados: Fernanda Ribeiro Rohem (PROEALC/UERJ); Gleide Banus Barbosa (LPP/UERJ); Maria das Graças Garcia e Souza (PROEALC/UERJ); Mariana Oliveira Setúbal (LPP/UERJ).

Fontes: Jornal O Globo, Jornal do Brasil, Jornal Folha de São Paulo, Jornal O Estado de São Paulo, Agência de Notícias Carta Maior, Letra Viva.

[cronología enero-abril 2003]

ENERO

- VIERNES 3** Medio centenar de estudiantes abandona junto a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) las dependencias de la rectoría tomadas el 17 de diciembre pasado sin haber logrado un acuerdo con las autoridades en torno al alza de los aranceles de estudio.
- MIÉRCOLES 8** Un centenar de trabajadores desocupados se manifiesta en la comuna de Lota de la ciudad de Concepción para exigir al gobierno el mantenimiento de 200 plazas del Programa Pro Empleo que fueron dadas de baja. La medida finaliza con 1 detenido y 4 heridos tras un enfrentamiento con carabineros.
- JUEVES 9** Los trabajadores desocupados de Lota acuerdan con el gobernador el mantenimiento de los 200 planes de empleo.
- MIÉRCOLES 15** En la IX Región, mapuches de la comunidad José Miguel Cheollelleo, ubicada en la comuna de Ercilla toman junto a la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco el fundo Mopanque, propiedad de la empresa forestal Bosques Arauco, en reclamo por la devolución de tierras ancestrales.
- LUNES 20** Una veintena de mapuches encapuchados ingresa al fundo Poluco Pidenco en la comuna de Ercilla, e incendia 3 habitaciones de operarios de maquinaria de tala de árboles que trabajan para la empresa Forestal Mininco. La Corporación Chilena de la Madera (CORMA) pide al gobierno medidas para sofocar a los mapuches movilizados.
- JUEVES 23** Desocupadas de la comuna San Pedro de la Paz bloquean una ruta que une Concepción con la provincia de Arauco para exigir el mantenimiento de 120 planes de empleo que fueron reducidos a 40. La medida es reprimida por carabineros, quienes detienen a 16 manifestantes.
- VIERNES 31** La Corte de Apelaciones de Concepción otorga la libertad bajo fianza a José Huenchunao, líder de la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco.

FEBRERO

- SÁBADO 1** Entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) alcanzado entre Chile y la Unión Europea (UE) que contempla el establecimiento de regulaciones conjuntas de los gobiernos respectivos en materia de comercio, industria, energía, inversiones, servicios, transporte, producción agropecuaria, pesca, turismo, minería, telecomunicaciones y combate al terrorismo entre otros.
- JUEVES 6** El ministro subrogante de Planificación se reúne con las cuatro familias pehuenches que se oponen a permutar sus tierras a la empresa eléctrica Endesa para la construcción de la hidroeléctrica Ralco. Las partes firman un acuerdo de trabajo en conjunto.
- SÁBADO 15** Un millar de personas junto a la Coordinadora por la Paz realiza una protesta frente al Palacio de La Moneda en el marco de la jornada mundial de oposición a la guerra en Irak lanzada en el III Foro Social Mundial (FSM). Los pacifistas piden al gobierno su oposición al ataque en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
- MIÉRCOLES 26** Delegados del gobierno y de los pehuenches de Ralco se reúnen en Washington ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sin alcanzar acuerdo alguno.

MARZO

- LUNES 10** El presidente Lagos descarta viajar a los Estados Unidos para participar de las sesiones del Consejo de Seguridad de la ONU.
- El consejo directivo nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) acepta la renuncia presentada por su vicepresidente socialista y resuelve por 24 votos a 20 el mantenimiento del comunista José Ortiz durante el lapso para el que fue electo como presidente del gremio.
- LUNES 17** Doscientas personas acuden junto a los partidos Humanista y Comunista a protestar frente a la embajada estadounidense luego de que Bush anunciara un ultimátum de guerra de 48 hs.
- DOMINGO 23** La Juventud del Partido Socialista (PS) y la Agrupación de Detenidos Desaparecidos se manifiestan frente a la embajada de los Estados Unidos e intentan bloquear una calle, luego de lo cual 25 militantes socialistas son apresados por carabineros. Otra movilización se realiza ante el consulado español.

ABRIL

- MARTES 1** Medio millar de personas junto a la Agrupación de Centros de Alumnos de Santiago, la Federación Cordillera y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) se manifiesta frente al Ministerio de Educación y los alrededores de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) exigiendo información sobre las pruebas de ingreso a la enseñanza superior.
- JUEVES 3** Se inicia en Angol el primer juicio público a militantes mapuches por violación a la Ley Antiterrorista en el que se permitirá la presencia de testigos encapuchados cuya identidad será conocida sólo por el juez de la causa. Los enjuiciados son Pascual Pichún, lonko de la comunidad Didaico, Aniceto Norin, un dirigente de la comunidad Pantano, y la activista Patricia Troncoso Robles, a quienes se acusa por la autoría intelectual y material de 2 incendios ocurridos en los fundos Nanchahue y San Gregorio.
- LUNES 7** Se inicia en el país la CVIII Conferencia Interparlamentaria Mundial cuyos participantes piden que las Naciones Unidas se hagan cargo de la administración de Irak una vez finalizada la guerra.
- MIÉRCOLES 9** El tribunal de Angol absuelve a los 3 acusados de haber incendiado fundos particulares y ordena su liberación.
- MARTES 22** La federación de estudiantes de la Universidad de La Frontera, situada en la ciudad de Temuco, ocupa la rectoría y 2 edificios del plantel en reclamo de presupuesto educativo y por becas de alimentación.
- MIÉRCOLES 23** Estudiantes de la Universidad Católica de Concepción y de la sede de Santa María, en Talcahuano, inician una huelga y realizan barricadas en reclamo por una partida de 2 mil millones de pesos para crédito universitario.
- JUEVES 24** Estudiantes de la Universidad de La Frontera realizan protestas para reclamar por presupuesto en los alrededores de dicha casa de estudios. Son reprimidos por carabineros, quienes detienen a 59 manifestantes durante el operativo.
- LUNES 28** Nueve comunidades mapuches de Panguipulli y 2 de Futrono inician ocupaciones en una treintena de terrenos en las zonas de la Araucanía y Los Lagos para reclamar la entrega de cerca de 2.300 has. Exigen además la instalación de una mesa de negociación con el gobierno, los partidos políticos y los propietarios de los fundos.

GLOSARIO DE SIGLAS

ACES	Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios
CIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
CORMA	Corporación Chilena de la Madera
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
FECH	Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile
FSM	Foro Social Mundial
ONU	Organización de Naciones Unidas
PS	Partido Socialista
TLC	Tratado de Libre Comercio
UE	Unión Europea
USACH	Universidad de Santiago de Chile

Paraguay

[cronología enero-abril 2003]

ENERO

DOMINGO 19 Los vendedores informales de la calle Palma en la capital se instalan frente a la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) para oponerse a los constantes desalojos de los que son objeto.

FEBRERO

MARTES 11 La Cámara de Senadores vota a favor de la inocencia del presidente González Macchi en el juicio político por corrupción y mal desempeño de sus funciones iniciado el 23 de enero. Sin defender su gestión, argumentan la no conveniencia de cambio de gobierno a 2 meses de los comicios generales.

JUEVES 13 Los médicos de Misiones inician un paro escalonado en solidaridad con 5 profesionales del hospital regional de San Juan Bautista imputados por homicidio culposo. El gremio médico de salud pública sostiene que la carencia de insumos y medicamentos básicos expone a todo el personal de salud a ser demandado por mala praxis.

SÁBADO 15 Debido a que no les permiten avanzar hasta la embajada norteamericana, unas 20 organizaciones sociales y políticas de izquierda se manifiestan en Asunción sobre la Av. Mariscal López contra la inminente invasión de Estados Unidos a Irak.

LUNES 17 Comienzan las clases en las instituciones educativas de todos los niveles de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Educación. Numerosos maestros de la Federación de Educadores (FEP) se resisten a esta imposición y anuncian que comenzarán el ciclo lectivo el 3 de marzo, tal como lo indica el calendario académico.

MARTES 18 Las gasolineras ponen fin al desabastecimiento de gasoil que habían comenzado el 12 de febrero, luego de que el Poder Ejecutivo establece un nuevo sistema de bonificaciones para la venta de combustible.

MIÉRCOLES 26 Integrantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares-Movimiento Sin Techo (CONOP-MST) cierran la ruta Mariscal Estigarribia, km 10, tras un recorte gubernamental a los fondos para la adquisición de tierras y viviendas de personas de la CONOP. Se enfrentan a la Policía, hasta que ésta logra dispersarlos. Cierran la ruta Acceso Sur a la altura de la embotelladora Coca-Cola, donde también son reprimidos, tras lo cual marchan hasta el Ministerio de Hacienda.

VIERNES 28 La Central Sindical de Trabajadores del Estado (CESITEP) y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud (SITRAMIS) decretan una jornada de brazos caídos para reclamar aumento salarial.

MARZO

MARTES 4 Los camioneros fleteros del departamento de Paraná levantan el paro iniciado el día anterior a la espera de un acuerdo por el precio del flete con los empresarios aglutinados en la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO).

MIÉRCOLES 5 Los principales colegios nacionales de Capital y área metropolitana no dan clases durante la jornada, en reclamo de mayor presupuesto para educación. Docentes, padres y alumnos se manifiestan frente al Ministerio de Hacienda.

Los camioneros fleteros y la COPACO acuerdan un precio de flete de 86 mil toneladas, por la cual la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN) suspende hasta el 30 de marzo el límite al ingreso de los fleteros brasileños.

JUEVES 6 Bajo una fuerte presión de los sectores educativos, la Cámara de Diputados aprueba el pedido de ampliación presupuestaria para el sector.

SÁBADO 8 La Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI) y el Foro Social Regional de Itapúa encabezan una manifestación por las calles de Encarnación, en coincidencia con el Día Internacional de las Mujeres, para exigir la suspensión de las fumigaciones de plantaciones cercanas a comunidades campesinas y la atención de los problemas sanitarios para la población afectada por agrotóxicos en la zona de Edelira.

MARTES 11 Los docentes de la mayoría de los colegios públicos paran durante la jornada, y los agremiados a la Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay (OTEP) realizan una manifestación frente al Ministerio de Hacienda en reclamo del pago de los salarios adeudados.

DOMINGO 16 La población de Puerto Casado, departamento de Alto Paraguay, Chaco, decide en asamblea rechazar un anteproyecto de ley para expropiar a la empresa

Victoria SA, propiedad de la secta Moon, y devolverle a la comunidad 50 mil hectáreas de tierra. Piden que el Congreso apruebe el proyecto que está en Senadores, por el cual la expropiación debería ser de 158 mil hectáreas. Cierran la entrada de la ciudad para que los empleados de la firma no puedan ingresar a su trabajo.

MIÉRCOLES 19 Unos 7 mil campesinos de la Federación Nacional Campesina (FNC) de todo el país realizan la décima manifestación anual “del campesinado pobre” por las calles de Asunción. Marchan hasta el Congreso, donde piden al gobierno que aplique un plan de industrialización del algodón y que la banca pública otorgue créditos a los sectores productivos.

LUNES 31 La Unión de Camioneros del Paraguay comienza un paro indefinido ante la falta de respuesta a sus reclamos por parte del gobierno. Piden que se respete el precio de 86 guaraníes por kilo para una distancia de 320 km acordado con los exportadores.

A B R I L

JUEVES 10 Indígenas de la comunidad Enxet, que viven desde hace años a la vera de la ruta Transchaco, marchan desde la Plaza Italia hasta la Plaza de la Democracia, en Asunción, para exigir la recuperación de sus tierras ancestrales en el Chaco Paraguayo, que permanecen en manos de una familia del departamento de Presidente Hayes.

LUNES 14 Los funcionarios del Hospital Materno Infantil San Pablo, Asunción, comienzan una huelga de 72 hs en reclamo de aumento salarial y bonificaciones familiares y de la destitución de la directora del instituto, a quien acusan de maltrato y discriminación.

MARTES 15 Tras la resolución del ministro de Salud Pública de rescindir el contrato de 9 empleados y descontar el sueldo a 31 personas que participan de la huelga, los funcionarios del Hospital San Pablo levantan la medida iniciada el día anterior a cambio de la recontractación de 6 de los 9 afectados.

DOMINGO 27 Los paraguayos eligen Presidente para los próximos cinco años. Gana Nicanor Duarte Frutos, de la Asociación Nacional Republicana (ANR o Partido Colorado, en el poder desde 1947) con el 37,3% de los votos. Le siguen Julio César Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), ex vicepresidente de González Macchi, con el 23,85%, y Pedro Fadul, del movimiento Patria Querida, con el 21,72%.

GLOSARIO DE SIGLAS

ANR	Asociación Nacional Republicana
CAPECO	Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas
CESITEP	Central Sindical de Trabajadores del Estado
CONAMURI	Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas
CONOP-MST	Confederación Nacional de Organizaciones Populares-Movimiento Sin Techo
DINATRAN	Dirección Nacional de Transporte
FEP	Federación de Educadores
FNC	Federación Nacional Campesina
OTEP	Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay
PLRA	Partido Liberal Radical Auténtico
SENATUR	Secretaría Nacional de Turismo
SITRAMIS	Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud

[cronología enero-abril 2003]

ENERO

- VIERNES 3** La Comisión de Defensa de la Administración de Nacional de Combustibles Alcohol y Pórtland (CDA), acompañada de miles de personas, entrega a la Corte Electoral más de 650 mil firmas para habilitar un referéndum que derogue los artículos de la Ley de Rendición de Cuentas que permite la asociación de la empresa estatal con capitales privados. En este marco, se realiza un acto del que son oradores representantes del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), de la Federación de Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Pórtland (FANCAP), de la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE) –en nombre de la Comisión de Defensa del Agua– y de la Unión Ferroviaria (UF).
- MARTES 7** La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT) realiza un paro de 24 hs en rechazo a un aumento del boleto decretado por la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), que regirá a partir del día siguiente, sin el correspondiente incremento salarial según lo acordado con las autoridades. Como contrapartida, los trabajadores se habían comprometido a no exigir que se cumpla el convenio por el cual sus salarios se ajustarían según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- DOMINGO 19** Más de 160 militantes de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) que el jueves iniciaron una manifestación desde Montevideo a Punta del Este –en reclamo de que unos 100 millones de dólares recaudados por el Ejecutivo mediante el Fondo Nacional de Vivienda se destinen a la construcción de viviendas, entre otras cosas– detienen su marcha ante un bloqueo policial en el acceso a ese balneario. Allí los cooperativistas realizan un acto, acompañados de miles de vecinos de Maldonado, en el que habla por teléfono celular el presidente de la organización, que se encuentra en la Plaza Artigas de Punta del Este colocando una ofrenda floral en el monumento a Artigas. Mientras habla para los manifestantes el dirigente es detenido, al igual que 169 militantes cooperativistas y 1 periodista que acompaña la movilización. Más tarde, por orden judicial, todos los detenidos recobran su libertad.

LUNES 20 Tras la aprobación en el Parlamento en septiembre del año pasado del otorgamiento de una megaconcesión a manos privadas para el mantenimiento de las rutas nacionales, comienzan a funcionar 8 peajes nuevos. En rechazo a esto, unos 3 mil residentes de Paso de los Toros, junto a una caravana de 500 autos, marchan por la ruta hasta el peaje ubicado en Durazno. Allí leen una proclama exigiendo la eliminación del nuevo puesto, y que mientras tanto no se cobre peaje a los habitantes de la zona.

MARTES 21 La UNOTT realiza un paro de 8 horas y una caravana de ómnibus y taxis por las calles de Montevideo. Exige que los ajustes en el precio del boleto se traduzcan en aumentos salariales y se solidariza con los trabajadores de la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos SA (CUTCSA) en conflicto con la empresa. Además exige el cese de los envíos de trabajadores al seguro de paro, rechaza el pago de parte del salario en vales de alimentación y solicita la renuncia de las autoridades de la División de Tránsito y Transporte de la IMM.

FEBRERO

VIERNES 7 Unas 200 personas de la Coordinadora de Ollas Populares y de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) marchan por Montevideo, desde la Plaza Libertad hasta el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), en protesta por el retraso en la entrega de alimentos y en reclamo de puestos de trabajo. Acuerdan con el director de la cartera la entrega de los productos para 10 ollas que ya eran asistidas, además del aprovisionamiento para otras 8.

VIERNES 14 Unas 70 mil personas convocadas por el EP-FA y el Nuevo Espacio (NE) marchan por Montevideo desde la Plaza Libertad hasta la explanada de la Universidad de la República, donde realizan un acto en repudio a la guerra que el gobierno estadounidense impulsa contra Irak. También cientos de personas realizan manifestaciones en las ciudades de San José y Libertad.

SÁBADO 15 En el día de acción global contra la guerra impulsada por EE.UU. y sus aliados contra Irak, se realizan movilizaciones en distintas ciudades del interior del país de las que participan miles de personas. En Maldonado, convocadas por el Foro Social Maldonado, más de mil personas se concentran en la Plaza de la Torre del Vigía y marchan por las principales calles de la ciudad. En Salto, más de un millar de personas –convocadas por el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), la Coordinadora de Deudores en Dólares, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), la Comisión de Defensa del Agua y la Vida y la FFOSE, entre otras organizaciones– realizan una marcha desde la Plaza Treinta y Tres hasta la Plaza Artigas. Además, se realizan movilizaciones en Colonia del Sacramento y en la frontera con Brasil, en la ciu-

dad de Rivera, en coordinación con habitantes de la ciudad brasilera de Livramento.

MIÉRCOLES 19 Funcionarios del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) agrupados en AEBU –que desde el viernes pasado mantienen ocupada una sucursal de la entidad en Montevideo en reclamo de que los trabajadores tengan participación en la discusión sobre la reestructuración de la institución– paran durante la jornada para realizar una asamblea. Deciden levantar la toma y realizar un paro de toda la banca la próxima semana que viene.

DOMINGO 23 Unos 600 jubilados, convocados por la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, realizan una caravana de ómnibus y automóviles desde el viejo edificio de la Caja de Jubilaciones, en Montevideo, hasta Punta del Este, en reclamo de un aumento en sus retribuciones. En el acceso al balneario recorren 4 km a pie hasta el centro, acompañados de 1.500 vecinos de Maldonado y representantes del Encuentro Progresista (EP), la AEBU, el Foro Social Maldonado y el Movimiento Ciudadano por la Dignidad del País.

MIÉRCOLES 26 El Centro de Obreros y Empleados de Salud (COES) determina en asamblea dejar de envasar cerveza Norsteña hasta que se solucione la situación de unos 100 trabajadores de la planta de Paysandú tras el anuncio del consorcio brasilero AmBev –propietario, además, de las cervezas Patricia y Pilsen– de trasladarla a Minas.

VIERNES 28 Miles de personas del interior del país participan de una jornada nacional de protesta contra la reciente instalación de 8 peajes en el marco de la megaconcesión. En la ciudad de Santa Lucía más de 2 mil personas exigen la exoneración del pago para los que residen en un radio de 20 km del puesto. Unas 3 mil personas de Paso de los Toros se manifiestan frente al peaje instalado en la entrada de la ciudad, entre los departamentos de Tacuarembó y Durazno. Además, un millar de personas de Mercedes y Fray Bentos se movilizan en unos 400 vehículos hasta el peaje de Mercedes. También se realizan manifestaciones en Lavalleja, Paysandú y Colonia.

El Banco Central del Uruguay (BCU) oficializa la liquidación del Banco de Crédito (BDC) –tal como lo propuso el Fondo Monetario Internacional (FMI)–, intervenido desde mediados de 2002. Tras el anuncio, la AEBU ocupa por tiempo indefinido las 41 sucursales de la entidad y realiza un paro parcial, impidiendo la acción de los liquidadores y reclamando respuestas para los más de 1.000 trabajadores bancarios que podrían perder su fuente de trabajo. Durante todo el día, centenares de ahorristas se suman a los locales tomados. Hacia fin de la tarde, centenares de bancarios y ahorristas se concentran en la puerta de la sede central del BDC, cortando la avenida 18 de Julio.

MARZO

VIERNES 7 Trabajadores del suspendido BDC nucleados en la AEBU, que ocupan la sede central de la institución en Montevideo, levantan la toma y realizan un acto frente a esa sucursal, movilizándose por la Avenida 18 de Julio hasta la Ciudad Vieja.

MARTES 11 El gobierno informa que se acordó con el FMI la reprogramación de la deuda externa como forma de impedir la cesación de pagos en los próximos años. Según los anuncios, la reprogramación afectaría a los tenedores de deuda emitida por el estado en moneda extranjera y consistiría en un canje voluntario de bonos por otros que vencerán luego del año 2010.

LUNES 17 El FMI anuncia la aprobación de un programa crediticio para Uruguay. Junto al Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) liberarían 1.300 millones de dólares este año y 1.200 millones de dólares el año próximo. En la Carta de Intención el gobierno se compromete a una reestructuración impositiva ampliando la base del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a reducir el BHU y a otorgar algunas concesiones de servicios públicos a manos privadas.

MARTES 18 Más de 8 mil personas convocadas por la FUCVAM marchan por Montevideo, desde la Plaza Libertad hasta el Palacio Legislativo, donde realizan un entierro simbólico del Fondo Nacional de Vivienda. Reclaman la entrega de unos 100 millones de dólares para la construcción de viviendas. Además, se manifiestan contra la guerra que impulsa el gobierno estadounidense contra Irak. Simultáneamente, en Montevideo, el prosecretario de la organización, junto a 11 mujeres cooperativistas, ocupa la sede del Ministerio de Vivienda (MIVI). Mientras tanto, integrantes de la organización realizan actos en las ciudades de Mercedes, Paysandú y Salto.

Tras las sucesivas protestas de días atrás de miles de personas que viven en las proximidades de los nuevos peajes instalados en el marco de la mega-concesión, las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTO) se reúnen con legisladores de todos los sectores políticos y acuerdan ofrecer un abono por un precio menor para los residentes en zonas cercanas a los puestos de cobro.

JUEVES 20 Miles de personas, convocadas por el PIT-CNT, FUCVAM, Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y el EP-FA, entre otras organizaciones, marchan por Montevideo, desde la Plaza Libertad hasta la Embajada de EE.UU., pasando por el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde leen una proclama manifestándose contra la guerra iniciada hoy por el gobierno estadounidense contra Irak y denunciando al gobierno local por no condenar el ataque en sus declaraciones. También se realizan manifestaciones en ciudades del interior.

SÁBADO 22 Integrantes de la Comisión de Defensa del Agua realizan un acto en la Explanada de la Universidad de la República, en Montevideo, para conme-

morar el Día Mundial del Agua. Allí se manifiestan contra la mercantilización de ese recurso natural y las privatizaciones del servicio ocurridas en el interior del país. Además, presentan una propuesta de reforma constitucional en la cual establecen que el servicio público del agua y el servicio de saneamiento sean prestados exclusiva y directamente por el estado, entre otras cosas.

LUNES 24 Luego de casi 8 meses de suspendidos los bancos Comercial, Montevideo y Caja Obrera, abre el Nuevo Banco Comercial, producto de la liquidación y fusión de esas entidades. En la apertura de la casa matriz, en Montevideo, un grupo de ahorristas del Banco de Montevideo irrumpe denunciando que parte de los responsables del vaciamiento de la institución continúan trabajando en el nuevo banco, y gritando consignas contra el presidente Batlle. Tras ser desalojados por la policía y continuar con la protesta puertas afuera, un grupo de deudores en dólares de los bancos liquidados llega a la zona en rechazo a las ejecuciones judiciales.

VIERNES 28 Miles de personas convocadas por el PIT-CNT, la FEUU y la FUCVAM, entre otras organizaciones –acompañadas por el intendente frenteamplista, Mariano Arana, y otros representantes políticos– marchan en Montevideo, desde el Obelisco hasta la embajada estadounidense, haciendo un alto en la Explanada de la Universidad de la República, donde realizan un acto en repudio a la invasión de EE.UU. a Irak.

ABRIL

JUEVES 10 Luego de dos años y medio de investigación, la Comisión para la Paz hace entrega al presidente Batlle del informe final sobre el destino de los detenidos-desaparecidos durante la dictadura militar. Así, se confirman 26 denuncias sobre personas desaparecidas, asumiendo que fueron torturadas en centros clandestinos de detención y fallecieron, y reconociendo por tanto que hubo violaciones a los derechos humanos por parte del estado y una coordinación entre las fuerzas uruguayas y argentinas en la detención de personas.

MIÉRCOLES 16 El gobierno aprueba un decreto por el cual se respalda el informe final de la Comisión para la Paz, añadiendo que con el mismo se cumple con la Ley de Caducidad, que refiere a una investigación oficial sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Tal cosa podría significar la finalización de las investigaciones sobre el tema.

VIERNES 18 La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprueba la moción copatrocinada por Uruguay, por la cual se solicita al gobierno cubano que acepte una inspección del Alto Comisionado de esa organización sobre la situación de los derechos humanos en la isla.

LUNES 21 La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos emite un comunicado en el que rechaza el decreto firmado por el gobierno el martes pasado, sosteniendo que el Poder Ejecutivo no cumplió con el artículo 4 de la Ley de Caducidad, lo que implica un “punto final” a la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. También señala, entre otras cuestiones, que no puede considerarse tal cosa cuando sólo hay 26 casos de desapariciones esclarecidos de un total de 222 denuncias.

MIÉRCOLES 23 Unas 3 mil personas –convocadas por el PIT-CNT, FUCVAM, FEUU, Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU), Frente Amplio (FA) y NE– marchan por Montevideo desde la Plaza Libertad hasta la Plaza Independencia, donde realizan un acto en rechazo al encuentro del presidente Batlle y su par estadounidense en EE.UU. Además repudian la agresión que lleva a cabo ese país, junto a Inglaterra y España, contra Irak. En tanto, el mandatario ofrece a Bush enviar ayuda humanitaria a Irak y le informa –entre otras cosas– que el año próximo, cuando Uruguay presida el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), promoverá un acercamiento entre el bloque regional y EE.UU. Como contrapartida, Bush adelanta que se acelerarán las resoluciones para el ingreso de carne uruguaya a su país.

DOMINGO 27 Tras llegar el viernes a un acuerdo con las autoridades de AmBev, el Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña (SOEN) –en conflicto desde mediados de febrero, cuando la empresa anunció el cierre de la planta de Paysandú– resuelve en asamblea aceptar condicionalmente una propuesta que incluye la jubilación anticipada de 32 trabajadores, la absorción de personal de la planta por parte de la empresa en horarios reducidos, la instalación de microempresas para terciarizar servicios y rotaciones en el seguro de desempleo.

MIÉRCOLES 30 Tras un preacuerdo entre la UNOTT y las empresas de transporte por un aumento salarial, el gobierno decreta un aumento del 7% en las tarifas del transporte interdepartamental, que regirá a partir del viernes próximo.

GLOSARIO DE SIGLAS

AEBU	Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay
ANCAP	Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Pórtland
BCU	Banco Central del Uruguay
BDC	Banco de Crédito
BHU	Banco Hipotecario del Uruguay
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BM	Banco Mundial
CDA	Comisión de Defensa de ANCAP
COES	Centro de Obreros y Empleados de Salus
CUTCSA	Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos SA

EP-FA	Encuentro Progresista-Frente Amplio
FA	Frente Amplio
FANCAP	Federación ANCAP
FEUU	Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay
FFOSE	Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado
FMI	Fondo Monetario Internacional
FUCVAM	Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua
IMM	Intendencia Municipal de Montevideo
INDA	Instituto Nacional de Alimentación
IPC	Índice de Precios al Consumidor
IVA	Impuesto al Valor Agregado
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
MIVI	Ministerio de Vivienda
MTOP	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
NE	Nuevo Espacio
ONAJPU	Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PIT-CNT	Plenario Intersindical de Trabajadores-Convenión Nacional de Trabajadores
SOEN	Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña
UF	Unión Ferroviaria
UNOTT	Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte
UTD	Unión de Trabajadores Desocupados

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
 Relevamiento y sistematización a cargo de Gustavo Gibert.
 Fuentes: diarios La República, El País, semanario Brecha e Indymedia Uruguay.*

Región Andina

La ficción democrática: paradojas en las trincheras del poder¹

Ángel Bonilla y Ana María Larrea*

* *Antropólogos
e investigadores
del Instituto
de Estudios
Ecuatorianos*

Cada momento histórico está revestido de su propia dinámica, de su propio tejido, y resulta complejo en sí mismo. Cada momento es un continuo entre el pasado y el futuro: es condición del presente y se vuelve precondition del porvenir.

El momento histórico actual en el Ecuador está encuadrado entre dos hechos fundamentales: la recomposición del bloque dominante y la emergencia de nuevos sujetos políticos.

En un libro reciente, Immanuel Wallerstein (2001) ha argumentado que el moderno sistema-mundo está aproximándose a su fin, y que está entrando en una época de transición hacia un nuevo sistema histórico, cuyos perfiles no podemos conocer por adelantado, pero cuya estructura puede ser construida de manera activa.

En los últimos años parece notorio el agotamiento del modelo neoliberal. Sin embargo, como cualquier cons-

trucción histórica, el revertir las políticas neoliberales constituye un proceso complejo que depende del realineamiento de fuerzas políticas y sociales en un corto y mediano plazo. Significa ante todo la constitución de sujetos sociales con un programa contra-hegemónico que modifique la correlación de fuerzas y construya un nuevo poder.

En el Ecuador, la emergencia del movimiento indígena, la llegada del Movimiento Pachakutik al “poder”, la figura nacional-reformista de los “jóvenes coroneles”, y la “crisis” del sistema de partidos, dieron pie para creer que se vive un escenario de lucha social similar al de otros países de la región. Se creó en el imaginario de una sociedad desmovilizada la “fuerza de lo indio” como estandarte de la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo.

En apenas tres meses de gobierno parecen escasas las posibilidades de generar cambios sociales desde dentro en vista a construir un modelo de transición. La política internacional impulsada por el régimen, los escándalos por corrupción, la adscripción acrítica al programa fondomonetarista, la proforma presupuestaria presentada al Congreso Nacional y las constantes prácticas populistas del nuevo presidente son algunas muestras de esta ficción.

Las veleidades de la victoria

La última contienda electoral da cuenta del profundo fraccionamiento social y político que vive el Ecuador. Nueve de los doce candidatos a la presidencia de la República no son parte de los partidos políticos tradicionales y capitalizan el 60% de la votación. Los tres primeros puestos son para aquellos candidatos que construyeron su plataforma electoral basados en un discurso anti-partidos (Cfr., Ortiz, 2002: 7).

En este contexto, cabe preguntarse sobre los alcances y el significado profundo del triunfo electoral de la alianza Sociedad Patriótica-Pachakutik en el Ecuador. Un lugar común para explicar esta “victoria” ha sido situarla como resultado de la crisis del modelo de partidos² instancias de representación de la sociedad civil en el seno del sistema político ecuatoriano y la búsqueda por parte de la sociedad de cambios profundos que impliquen una transición en el modelo de desarrollo vigente.

Aunque los movimientos sociales contribuyeron para el triunfo de la alianza, no creemos que se trate de la victoria de una tendencia de izquierda en el país, pues por un lado la candidatura de Gutiérrez aglutinó a una serie de tendencias bastante heterogéneas, con intereses y apuestas políticas también diversas, muchas de ellas con un fuerte corte populista, que con el devenir de los acontecimientos ha marcado gran parte

del accionar del nuevo gobierno; y por otro lado, los movimientos sociales en general y el movimiento indígena en particular también están permeados por una serie de tendencias a su interior.

Por último, no se puede desconocer el rol de algunos sectores de las Fuerzas Armadas en el triunfo electoral del actual presidente.

La izquierda ecuatoriana y las organizaciones populares han sido incapaces de levantar un programa político de transformación, y al cobijo de éste, presentarse como una misma fuerza electoral. Sus representantes han constituido, en el mejor de los casos, votos de protesta, pero no han logrado articular una presencia claramente anti-neoliberal.

Los movimientos sociales –especialmente el movimiento indígena– se han insertado, sin beneficio de inventario, en la lucha de poder democrático bajo las reglas de juego diseñadas por los grupos dominantes y, dentro de ese escenario, han mantenido una regularidad política en los espacios locales que les ha permitido dar saltos cuantitativos dentro del sistema.

Sin embargo, esa continuidad electoral no ha podido construir liderazgos nacionales con formación, que representen a todos los sectores subalternos de la sociedad, y menos ha permitido construir un programa –o al menos una plataforma– política que los represente: “Esto significa que carecen del suficiente peso simbólico en la sociedad como para mantener un discurso autónomo que les permita disputar espacios a la hegemonía conservadora y diferenciarse, aún cuando deba actuar en conjunto, de la denominada centro-izquierda y los liderazgos de la rebeldía momentánea” (Ayala, 2002: 4).

De ahí que situemos el triunfo electoral como una consecuencia impensada del mismo sistema de partidos, gerenciada por los grupos de poder y no como producto de la lucha popular.

No obstante, el triunfo de la alianza Sociedad Patriótica-Pachakutik expresa un nuevo momento en la irrupción del movimiento indígena en la esfera política ecuatoriana iniciado en la década pasada. La presencia del movimiento indígena y de los movimientos sociales en el Estado ha convulsionado a la sociedad ecuatoriana, en la medida en que cuestiona las representaciones simbólicas del poder, pone al descubierto los profundos compartimientos racistas de diversos sectores de la sociedad, y devela la realidad profunda de un país diverso, en el que grandes grupos poblacionales han sido excluidos durante siglos.

Por otra parte, esta nueva irrupción también ha puesto al descubierto las fortalezas, debilidades y tensiones al interior de los movimientos sociales y del movimiento político.

Una de las grandes fortalezas de Pachakutik, que no ha sido lo suficientemente explotada frente a la opinión pública nacional, es sin duda el proceso colectivo de toma de decisiones, y sus afanes democratizadores tanto al interior del movimiento como hacia la sociedad ecuatoriana. En efecto, Pachakutik es uno de los pocos movimientos políticos que no gira alrededor de un caudillo e intenta expresar la diversidad social a su interior, pues no se trata del movimiento político de los indígenas, sino que pretende cobijar a un sinnúmero de grupos sociales excluidos del quehacer económico, social y político del Ecuador. De ahí las estrategias descentralizadas y democratizadoras del movimiento político, que han entrado en contradicción con las expresiones caudillistas y concentradoras de poder de Sociedad Patriótica.

Sin embargo, esta fortaleza del movimiento indígena cobija en sí misma una de sus principales debilidades. Se trata de la construcción de una base programática dentro de unas fuerzas sociales heterogéneas. El proceso electoral se enmarca en una coyuntura de profundas tensiones al interior de Pachakutik y entre el movimiento político y sus bases sociales. La estrategia política del movimiento de construir desde abajo una propuesta de país se ve obligada por el triunfo electoral, poco previsto según nuestro criterio, a cambiar de escenarios y enfrentar la esfera nacional sin contar aún con una propuesta programática sólida. Esto no significa sin embargo la falta absoluta de un programa político. El salto demasiado apresurado hacia el gobierno ha demostrado la necesidad del movimiento de afinar sus planteamientos estratégicos de cambio social.

El movimiento ha tenido el mérito histórico de apostar sus fichas a la acción directa, de cuestionar a la institucionalidad del actual "estado de derecho", de detectar que el cambio social tiene que venir de abajo. Tiene también el mérito innegable de apostar a la conformación de un doble poder. Su programa persigue una "revolución democrática" en los marcos del capitalismo.

"...Pachakutik es uno de los pocos movimientos políticos que intenta expresar la diversidad social a su interior, pues no se trata del movimiento político de los indígenas, sino que pretende cobijar a un sinnúmero de grupos sociales excluidos del quehacer económico, social y político del Ecuador."

Por otra parte, el Estado ecuatoriano se ha caracterizado por una tendencia a la resolución del conflicto social bajo los términos de la salida “negociada”. Esto ha implicado no sólo la permanente reconstitución de los grupos de poder sino la disminución de la eficacia de los grupos subalternos en su afán de constituir espacios de transformación política efectiva. El movimiento indígena ha actuado constantemente en “función de la oferta política, institucional y simbólica del Estado” (Ramírez, 2003: 1).

El resultado de ello ha sido una correlación donde las diferentes fuerzas sociales, incluidas las clases subalternas, se encuentran enfrentadas pero sin capacidad de imponer un programa político. En los últimos años, las dificultades del modelo neoliberal han girado alrededor de disputas por alcanzar la supremacía política dentro del bloque hegemónico y la resistencia intermitente de las clases subalternas organizadas.

Otro factor, no menos importante, para explicar la victoria electoral, es la ineficacia de las tendencias hegemónicas regionales para unificarse en torno a un mismo “programa” electoral.

La disputa programática

La Sociedad Patriótica, movimiento electoral formado a raíz de la insurgencia del 21 de enero de 2000, no cuenta con una base programática ni una estructura partidaria consolidada. Sus planteamientos se esbozan a la luz de la contienda electoral y giran alrededor de su caudillo, el Coronel Gutiérrez, actual presidente del país.

Al no lograr una alianza amplia del Centro-Izquierda, los contenidos programáticos de Sociedad Patriótica-Pachakutik quedan en manos de su candidato presidencial y de propuestas construidas desde Pachakutik y los movimientos sociales. Estas dos vertientes entran en una disputa que se evidencia en la segunda vuelta electoral y que se ha profundizado durante los primeros meses de gobierno.

El nombramiento del nuevo gabinete mostró claramente esta disputa, cruzada por múltiples presiones. Por una parte, al interior de Sociedad Patriótica, los militares, ex-militares, parientes y amigos del Coronel; por otro lado, las fuerzas sociales y políticas que apoyaron la candidatura de Gutiérrez; y finalmente, los sectores económicos de la sierra que requerían participar en el régimen.

La conformación de un gabinete plural y democrático en el que están representados varios sectores de la sociedad parecía ser una fortaleza del gobierno y una oportunidad para los movimientos sociales de incidencia directa en las políticas gubernamentales. El acuerdo para resolver las múltiples tensiones al interior del gobierno fue la coparticipación



ministerial entre Pachakutik y Sociedad Patriótica entre ministros/as y subsecretarios/as. Esta estrategia podía ser válida si se contaba con un acuerdo programático mínimo desde el cual se pudieran fortalecer las complejas relaciones entre las dos tendencias gubernamentales. Si la base programática está en disputa, se evidencia la dificultad de generar políticas de

cambio social cuando cada mínima acción emprendida está sujeta a múltiples negociaciones incluso al interior de cada ministerio.

Por otra parte, es necesario preguntarse si la participación ministerial de los movimientos sociales implica una verdadera posición de poder. En efecto, el poder está cada vez más centralizado en el presidente y su grupo de aliados más cercanos. Pese a que Pachakutik encabeza cuatro ministerios y cuenta con varias subsecretarías, es evidente que su poder de decisión dentro del gobierno es mínimo. Las grandes decisiones se toman por fuera de los planteamientos promovidos y defendidos por Pachakutik durante años. Los casos más ilustrativos en este sentido han sido la implementación del programa fondomonetarista y el vaciamiento de poder del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde los temas fundamentales, como la relación con el gobierno norteamericano y el ALCA, han sido transferidos a otras instancias.

La estrategia de trinchera ha sido una práctica de los indígenas durante siglos, que en el '95, con la conformación del Movimiento Pachakutik, se expresó en la decisión de acceder a los poderes locales y desde allí ir construyendo su base programática y política. En la actual coyuntura, esta estrategia se repite: plantear reformas "posibles" desde cada espacio de gobierno.

La primera pregunta que cabe hacerse es si efectivamente estas reformas son posibles, dado que los movimientos sociales, además de no contar con poder real dentro del régimen, han perdido gran parte del poder que han ido acumulando durante décadas a través de la lucha social organizada. Por otra parte, cuando se dan contextos favorables para plantear reformas "posibles" y de gran importancia para la sociedad ecuatoriana, se pierden estas oportunidades, como se demostró en el Ministerio de Educación frente al caso de los emba-

razos de adolescentes. Con todo el apoyo de la opinión pública, era el momento oportuno para implementar una sanción ejemplarizadora a las autoridades de las instituciones educativas que han ejercido prácticas discriminatorias con las adolescentes mujeres.

Una segunda pregunta, y quizá la fundamental, tiene que ver con la pertinencia de agruparse en las trincheras cuando las políticas macro y el modelo vigente de desarrollo en el país se construyen en otros ámbitos. En efecto, la participación de Pachakutik y el MPD (Movimiento Popular Democrático) en el régimen ha avalado y consolidado el proyecto neoliberal en marcha, pues el actual gobierno, pese a su debilidad³, no enfrenta una oposición organizada que pueda detener en alguna medida el programa fondomonetarista.

Una estrategia de trincheras efectiva supone una acumulación real de poder y la construcción de sujetos sociales críticos que lleven adelante un proyecto contrahegemónico. No obstante, los acontecimientos vividos durante los primeros meses de gobierno dan cuenta de los riesgos de pérdida de horizonte político, pues los movimientos sociales han caído en la trampa tendida por el mismo poder y la democracia procedimental.

Estado, sociedad civil y sistema político

Uno de los problemas más significativos de la democracia ecuatoriana es la falta de autonomía entre estado, sociedad civil y sistema político. Estas tres esferas se entrecruzan y mezclan, debido en gran parte a que los procesos y el modelo de desarrollo del país no son endógenos. Touraine, en su estudio sobre la democracia, analiza los problemas generados por esta falta de autonomía, señalando el riesgo de creación de un orden político-jurídico que reproduce los intereses económicos dominantes. Para el autor, en este caso la democracia no tiene lugar (Cfr., Touraine, 2000: 64-65).

La falta de límites entre la CONAIE y el movimiento Pachakutik, presente desde la misma conformación del movimiento político, se ha tornado cada vez más explícita en los últimos meses, trayendo varios riesgos consigo. El primero, la pérdida de autonomía de la CONAIE frente al régimen, provocando una pérdida de legitimidad del movimiento social frente a sus bases y frente a la sociedad ecuatoriana, y coartando las posibilidades de contar con una resistencia organizada. El segundo, el vaciamiento de las organizaciones sociales, y los debilitamientos profundos que se expresan en las esferas regionales y locales.

Las últimas resoluciones de la CONAIE constituyen una apuesta por enfrentar este problema. No obstante, los vínculos Pachakutik-CONAIE "son más complejos, profundos y se soportan en difusas y elaboradas formas de control y contrapeso que no permitirían su muto (y rápido) desanclaje" (Ramírez, 2003: 1).

Negociación y confrontación

En esta coyuntura, cabe preguntarse qué perspectivas de acumulación de fuerzas tiene el movimiento social a futuro para generar una propuesta contrahegemónica. Los movimientos sociales tienen una responsabilidad histórica con el país. La lucha desde dentro y la estrategia de trincheras pueden ser una posibilidad interesante, de ser adecuadamente conducidas. Sin embargo, es indispensable generar la autonomía del movimiento social y del movimiento político, con una doble estrategia: negociación y confrontación abierta. Franklin Ramírez propone la figura de “gobernar resistiendo y resistir gobernando”:

“Resistir gobernando desde las políticas –y no ya, por ahora, desde la política–, y gobernar resistiendo desde una específica orientación de las políticas agrícolas, educativas, ambientales, turísticas, diplomáticas, desde los diálogos y la resolución democrática de los conflictos, permitiría no sólo evidenciar públicamente el choque de orientaciones políticas divergentes al interior del ejecutivo sino, además, profundizar el proceso de aprendizaje, ampliar los tiempos y mecanismos para el fortalecimiento del campo social del movimiento y, desde allí, reconstruir su vocación hegemónica en la política nacional” (Ramírez, 2003: 3).

Bibliografía

- Ayala, Gustavo 2002 “Ecuador después de las elecciones presidenciales”, en *Rebelión*, edición digital, noviembre. <www.rebellion.org>
- Ortiz, Santiago 2002 *Pistas para analizar la coyuntura* (Quito) mimeo.
- Ramírez, Franklin 2003 *Resistir gobernando, gobernar resistiendo* (Quito) mimeo.
- Touraine, Alain 2000 *¿Qué es la democracia?* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- Wallerstein, Immanuel 2001 *The End of the World as We Know It: Social Science for the Twenty-First Century* (Minnesota: University of Minnesota Press).

Notas

- 1 El presente artículo fue publicado en la Revista *ICONOS* de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, mayo de 2003.
- 2 Hay que señalar sin embargo que, si bien es evidente la crisis del sistema de partidos en las elecciones presidenciales, esto no se refleja en las elecciones parlamentarias, donde los partidos siguen jugando un rol predominante en las opciones del electorado.
- 3 No hay que olvidar que Gutiérrez en la primera vuelta alcanza apenas un 20% de votos válidos y en la segunda un efímero 55%, “siendo el candidato ganador que menor votación ha tenido en la segunda ronda desde el ‘79” (Ortiz, 2002: 19).

[cronología enero-abril 2003]

ENERO

JUEVES 9 Representantes de diversas organizaciones sociales, entre las que se cuentan mineros, comerciantes minoristas de hoja de coca, la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz (STPLP), estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas, se reúnen en la ciudad de Cochabamba y acuerdan con las federaciones de cocaleros de la región conformar la Coordinadora Nacional de Movilizaciones y participar activamente del inicio de la jornada de protesta con bloqueo de rutas programada para el lunes 13 de enero. Las demandas planteadas por la Coordinadora están centradas, entre otras, en el rechazo al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), a la venta del gas y al ingreso de tropas norteamericanas a territorio boliviano. Al mismo tiempo, el gobierno moviliza unos 3.500 efectivos de la policía y del ejército hacia la zona del Chapare para evitar el corte de caminos.

Alrededor de 5 mil jubilados de todo el país, nucleados en la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia, inician una marcha de 100 km desde Patacamaya hacia La Paz en demanda de la anulación del artículo 3 de la Ley de Mantenimiento de Valor, el cual elimina el dólar como parámetro de referencia para el pago de sus rentas mensuales.

DOMINGO 12 Miles de jubilados que iniciaron el pasado jueves una marcha desde Patacamaya hacia la ciudad de La Paz se detienen en la localidad de Calamarca y anuncian que no continuarán con la caminata debido a problemas de salud, por lo que deciden realizar un plantón en la ruta e iniciar una huelga de hambre hasta que el gobierno atienda sus reclamos.

LUNES 13 Un grupo de cocaleros de la zona del Chapare bloquea en horas de la madrugada la ruta que une Cochabamba con Santa Cruz a la altura de la localidad de Shinahota en lo que constituye el inicio de las acciones de protesta programadas para el día de la fecha. Otro grupo de campesinos bloquea la misma ruta, a la altura de la localidad de Cesarzama, y se enfrenta con efectivos de la policía y el ejército, quienes intentan disolver el bloqueo.

Como consecuencia de la represión, un campesino resulta herido de bala. En este marco unos 3 mil efectivos de la policía y el ejército, que se movilizan por el trópico de Cochabamba y ocupan puestos en diversos caminos y carreteras de la región, detienen a 168 personas, mientras que otras 6 resultan heridas.

Estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) realizan una marcha por el centro de Cochabamba en apoyo al movimiento cocalero y a las acciones de protesta llevadas adelante por este sector. Unos 50 efectivos del Grupo Especial de Seguridad (GES) de la policía paceña reprimen a los manifestantes, quienes se refugian en el establecimiento educativo. La policía ocupa las instalaciones de la Universidad y detiene a varios estudiantes.

Miles de personas pertenecientes a la Central Obrera Boliviana (COB) y a otras organizaciones marchan por la ciudad de La Paz en solidaridad con las demandas de los jubilados y de los productores de la hoja de coca. Al mismo tiempo, decenas de desocupados marchan por el centro paceño y se concentran frente a las oficinas del Ministerio de Trabajo en rechazo de los empleos temporarios asignados por el Plan Nacional de Empleo (PLANE) y demandan que el gobierno cumpla con la entrega de trabajos permanentes.

MARTES 14 Cocaleros del Chapare se enfrentan con efectivos de la policía y el ejército en diversas localidades de la región, en el inicio del segundo día de bloqueos de rutas. Como consecuencia de la represión resultan muertos cuatro campesinos y varios periodistas. Dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) son detenidos.

Alrededor de 600 efectivos de la policía y el ejército intervienen el plantón y la huelga de hambre llevados adelante por unos 8 mil jubilados en la ruta que une Patacamaya con La Paz, a la altura de Calamarca, y los transportan a diversas ciudades. Uno de los micros sufre un accidente en la ruta y mueren 7 jubilados.

MIÉRCOLES 15 Cerca de 12 mil jubilados de todo el país, nucleados en la Confederación Nacional de Rentistas y Jubilados de Bolivia, reanudan la marcha hacia la ciudad de La Paz en reclamo de que el gobierno anule el artículo 3 de la Ley de Actualización y Mantenimiento del Valor.

Los cocaleros de los Yungas del departamento de La Paz y los colonizadores, nucleados en la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, inician una serie de bloqueos de los accesos a la capital boliviana para repudiar la represión y expresar su apoyo a los cocaleros del Chapare y los jubilados de todo el país. El gobierno ordena el despliegue de más de mil militares y policías en toda la región para evitar el bloqueo de rutas.

Alrededor de 11 mil padres de familia, pertenecientes a unos 150 centros educativos de la ciudad de El Alto, marchan hacia La Paz para exigir la designación de 850 profesores para las escuelas de la ciudad alteña, puesto que la cantidad actual es insuficiente para garantizar el normal desarrollo de las clases.

VIERNES 17 Trabajadores de la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba, regantes y estudiantes de la UMSS realizan diversos bloqueos en el centro de la ciudad en apoyo a las protestas encabezadas por los coccaleros del Chapare y son reprimidos por efectivos de la policía mediante el disparo de balines y gases lacrimógenos. Como consecuencia de los enfrentamientos, 2 personas resultan heridas mientras que otras 11 son detenidas. Los comerciantes de la zona se movilizan para repudiar el accionar de las fuerzas de seguridad.

Los trabajadores de la salud de todo el país inician un paro de 24 hs en repudio a la violenta represión a diversos sectores sociales ordenada por el gobierno y en apoyo a los coccaleros del trópico de Cochabamba. El secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores en Salud expresa que se recolectarán insumos y medicamentos para socorrer a los heridos.

Miles de jubilados y rentistas llegan a la ciudad de La Paz en lo que constituye el final de la marcha iniciada el pasado 9 de enero. En las siguientes horas se reunirán con el vicepresidente de la República con el objetivo de encontrar una solución al conflicto.

SÁBADO 18 Trabajadores mineros de Oruro se enfrentan con miembros de la policía y del ejército luego de que estos últimos intervinieran una movilización realizada en las afueras de la ciudad en apoyo a los sectores sociales en conflicto con el gobierno. Tras la represión, un trabajador es asesinado.

DOMINGO 19 Representantes de diversas COD, de la COB, trabajadores fabriles y de los sectores de salud y educación, integrantes del Movimiento Sin Tierra (MST) de Bolivia, campesinos, colonizadores de los Yungas, comerciantes, estudiantes y coccaleros se reúnen en el Complejo Fabril de Cochabamba y conforman el Estado Mayor del Pueblo (EMP), organización cuyo objetivo es resistir a las políticas adoptadas por el gobierno. En el marco de la reunión, las organizaciones dan un plazo de 48 hs para que el presidente resuelva todos los problemas planteados, caso contrario exigirán su renuncia.

MARTES 21 El gobierno y la Federación de Jubilados de Bolivia firman un acuerdo que pone fin al conflicto por el cual los jubilados decidieron movilizarse hacia la ciudad de La Paz provenientes de diversos puntos del país. Según el documento, el pago de rentas para el sector pasivo sigue fijado al dólar estadounidense.

MIÉRCOLES 22 El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Felipe Quispe, anuncia su adhesión al EMP y el apoyo a las acciones de protesta coordinadas con diversos sectores sociales.

DOMINGO 26 Dirigentes de diversos sectores sociales, entre ellos Evo Morales y Filemón Escobar del MAS y Felipe Quispe, se reúnen con el Presidente de la República y representantes del Poder Ejecutivo en la ciudad de Cochabamba y acuerdan la conformación de 7 comisiones de trabajo para abordar los temas de la coca, de la exportación del gas y del ALCA, entre otros. Como parte del acuerdo, los dirigentes se comprometen a desbloquear las rutas mientras el gobierno procede a su desmilitarización.

FEBRERO

LUNES 3 Maestros de La Paz marchan hacia la sede de gobierno en el centro de la ciudad para exigir un incremento salarial para el presente año.

Integrantes del Movimiento Único de Trabajadores Desocupados (MUTD) realizan una marcha por el centro de la ciudad de Tarija y bloquean el ingreso al edificio de la Prefectura local para exigir fuentes de trabajo.

MARTES 4 Los trabajadores administrativos de la Alcaldía de Cercado, nucleados en el Sindicato de Trabajadores Municipales, inician un paro de actividades y realizan una marcha en los alrededores del edificio legislativo para exigir un aumento salarial del 16%.

DOMINGO 9 El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada presenta al Congreso un proyecto de reforma impositiva en el marco del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el presente año a partir del cual se buscará reducir el déficit fiscal por medio de la aplicación de un impuesto directo y gradual a los salarios. El tributo será aplicado a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se efectuará a partir de los sueldos superiores a los 880 bolivianos.

La COB, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la comunidad universitaria y los dirigentes de los principales partidos de oposición al gobierno, Evo Morales del MAS y Manfred Reyes Villa de Nueva Fuerza Republicana (NFR), expresan su rechazo al impuesto a los salarios anunciado por el gobierno y a los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y anuncian que resistirán la medida.

MARTES 11 Cientos de jefes, oficiales y efectivos de la Policía Nacional de las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz se amotinan en reclamo de un incremento del 40% en sus haberes a la vez que rechazan el impuesto a los salarios aprobado por el Poder Ejecutivo. El presidente de la Asociación

Nacional de Suboficiales, Sargentos y Clases de la Policía (ANASSCLAPOL) expresa que otro de los problemas es el incumplimiento por parte de las autoridades de las 19 demandas planteadas por el sector.

Funcionarios y trabajadores administrativos, nucleados en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Mayor de San Andrés (STUMSA), se movilizan por el centro de la ciudad de La Paz en rechazo al impuesto a los salarios aprobado por el gobierno y para exigir el incremento del presupuesto de la institución.

MIÉRCOLES 12 Cientos de efectivos de la Policía Nacional, quienes se encuentran amotinados, se movilizan en horas de la mañana por el centro de La Paz junto a sus esposas para exigir que el gobierno derogue el decreto que modifica el sistema tributario y brinde solución a las demandas planteadas por el sector. Al promediar la marcha, efectivos de las Fuerzas Armadas reprimen a los policías al mismo tiempo que un gran contingente de estudiantes del Colegio Nacional San Simón de Ayacucho se suma a las acciones y apedrea el frente del Palacio de Gobierno. Se producen disparos de gases lacrimógenos y balas de plomo, lo que provoca 16 muertos y cerca de un centenar de heridos. Ante los hechos de violencia producidos, el Ministro de Trabajo dispone la suspensión de actividades de la administración pública y privada en todo el país.

Sargentos, oficiales y efectivos policiales de las unidades de Tarija, Potosí y Cochabamba se amotinan en apoyo a las demandas planteadas por sus colegas de La Paz.

Unas 200 personas ocupan e incendian, en horas de la tarde, las instalaciones del edificio de la Vicepresidencia de la República y las del Ministerio de Trabajo para exigir la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a quien acusan de ser el responsable directo de los hechos de violencia sucedidos en el centro de La Paz.

El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada anuncia, a través de un mensaje televisivo, el retiro del proyecto del PGN que establece el impuesto a los salarios, y convoca a iniciar el diálogo entre los diferentes sectores sociales.

Diversos sectores sociales del trópico de Cochabamba, entre ellos trabajadores, estudiantes, cocaleros y campesinos convocados por el EMP se movilizan por el centro de la ciudad para rechazar el impuestazo y exigir la renuncia del presidente Sánchez de Lozada. Un grupo de manifestantes intenta ingresar al edificio de la Prefectura en el momento en que miembros de la policía militar irrumpen en la marcha disparando gases lacrimógenos. Los manifestantes se dispersan y proceden al bloqueo de las calles céntricas. Se producen enfrentamientos con efectivos militares, saqueos, destrozos y el incendio de edificios públicos y de la sede del Movimiento Nacionalista

Revolucionario (MNR). En horas de la noche grupos del ejército boliviano retoman el control de la zona.

Un grupo de 9 trabajadores fabriles de La Paz se declaran en huelga de hambre para exigir la anulación del decreto gubernamental que establece el impuesto a los salarios.

JUEVES 13 El gobierno y las principales autoridades del Comando General de la Policía Nacional firman un acuerdo por el que se pone fin al conflicto y al amotinamiento iniciado el pasado martes por diversas unidades de todo el país. Los efectivos policiales retornan a las calles con la orden de controlar la ola de saqueos registrados en diferentes instituciones públicas y privadas. Así detienen a 180 personas, las cuales son puestas a disposición de la Policía Técnica Judicial (PTJ). El saldo del segundo día es de 19 personas muertas y 34 heridas, tanto en La Paz como en varias ciudades del interior.

La COB cumple con el paro de labores por 24 hs y realiza una movilización en la que miles de personas recorren el centro paceño junto a otros sectores entre los que se destacan campesinos, mineros, maestros, trabajadores de la salud y partidarios del MAS y del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), ante la presencia de numerosos efectivos militares que custodian el acceso a la Plaza Murillo. Los oradores, entre ellos Evo Morales y el secretario ejecutivo de la central, reiteran el pedido de renuncia del Presidente y Vicepresidente de la Nación.

En las ciudades de Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Beni se realizan diversas manifestaciones en repudio a la política del gobierno y para exigir la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. Las acciones, convocadas por diversas organizaciones sociales y políticas, desencadenan una ola de saqueos e incendios de edificios públicos y privados, entre ellos las sedes de los partidos de gobierno MNR y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Se producen enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, con varias personas heridas y detenidas.

LUNES 17 Cientos de personas convocadas por la COB, junto a comerciantes informales, la Federación de Gremiales y la COR de El Alto, se movilizan por la ciudad de La Paz en la primera jornada del paro nacional de 48 hs declarado por la central para rechazar la actual política económica del gobierno.

LUNES 24 Alrededor de 100 ex-trabajadores y trabajadoras del PLANE marchan por las calles de La Paz para exigir que el gobierno les garantice la asignación de puestos de trabajo.

MIÉRCOLES 26 La Federación Departamental de Trabajadores de la Educación Urbana de La Paz (FEDETEULP) realiza una movilización por el centro de la ciudad para exigir un incremento en el presupuesto de educación. La marcha, a la cual se

suman otros sectores, como universitarios alteños, trabajadores cuentapropistas e integrantes de la generación intermedia, marca el inicio de la primera jornada del paro nacional por 72 hs declarado por el sector.

Alumnos y autoridades de la Universidad Pedagógica Mariscal Sucre (UPMS) se movilizan por la ciudad de Sucre en demanda de un aumento del presupuesto, ya que el mismo se encuentra congelado desde hace 6 años.

MARZO

MIÉRCOLES 5 Los maestros de Santa Cruz comienzan un paro de 72 hs en reclamo de que el gobierno atienda sus demandas, centradas en un aumento salarial.

JUEVES 6 Cocaleros del Chapare marchan por las principales calles de Cochabamba y amenazan con volver a los bloqueos desde el próximo lunes si las autoridades gubernamentales no continúan con el proceso de diálogo.

La Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, la APDHB y la Coordinadora de la Mujer, junto a otras organizaciones sociales, realizan una jornada por la paz mundial y en rechazo a la guerra declarada por Estados Unidos contra Irak.

MARTES 11 Alrededor de 12 mil profesionales de la salud de todo el país cumplen la primera jornada de un paro de actividades por 48 hs convocado por el Colegio Médico de Bolivia (CMB) para exigir que el gobierno atienda sus reclamos, centrados en la asignación de recursos referentes a la aplicación del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) y la dotación de insumos y medicamentos para los centros de salud.

JUEVES 13 Estudiantes de la Universidad San Francisco Xavier, convocados por la Federación Universitaria Local (FUL), marchan por el centro de Sucre en demanda de un aumento presupuestario para la institución. Al promediar la movilización, la policía reprime con gases lacrimógenos y balas de goma, dejando como resultado 2 estudiantes heridos y 4 detenidos.

Integrantes de la Asociación de Desempleados de Sucre se movilizan junto a los trabajadores sin jubilación por el centro de la ciudad para exigir a las autoridades departamentales la atención a sus demandas, centradas en la necesidad de conseguir puestos de trabajo.

MARTES 25 Alrededor de 60 mil cocaleros de la Federación Carrasco Tropical del Chapare se concentran en Ivirgarzama y marchan por esa localidad hacia las oficinas que administran los proyectos de desarrollo alternativo en la región para rechazar la erradicación forzosa de los cultivos por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

MIÉRCOLES 26 La Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia inicia un paro nacional de actividades por tiempo indefinido en reclamo de un aumento salarial del orden del 33%. La medida incluye a unos 50 mil docentes de todo el país.

JUEVES 27 Miles de campesinos, convocados por la CSUTCB, marchan desde El Alto hacia la embajada de los Estados Unidos en La Paz en repudio a la guerra declarada por ese país contra Irak. Al promediar la movilización, la policía dispersa a los manifestantes disparando gases lacrimógenos.

El CMB y el gobierno llegan a un principio de acuerdo sobre los puntos planteados por los médicos referidos a la revisión del SUMI y a una mejora en la oferta de incremento salarial cercana al 4%.

LUNES 31 Cientos de personas se movilizan por la ciudad de La Paz, convocadas por la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) y cerca de 500 juntas vecinales de los distintos barrios de la ciudad, para protestar contra el permanente aumento de las tarifas de los servicios básicos y exigir la devolución al estado de las empresas capitalizadas.

ABRIL

MARTES 1 El magisterio urbano de Chuquisaca realiza una movilización por el centro de la ciudad de Sucre para reclamar al gobierno la atención de sus demandas y en rechazo a la propuesta oficial de fijar en un 2,45% el incremento salarial.

Padres de familia y dirigentes de la Junta Escolar de Distrito de Sucre marchan por las calles de la ciudad para exigir el reinicio de las clases en dicho departamento.

JUEVES 3 Integrantes de la Federación Departamental de Trabajadores en Educación Urbana marchan por el centro de La Paz en demanda de un incremento salarial de 6.500 bolivianos y en apoyo a la huelga del sector. Al promediar la manifestación algunos maestros eluden el vallado policial e ingresan a la plaza Murillo, ubicada frente a la sede de gobierno. La policía reprime con gases lacrimógenos y despeja el lugar.

DOMINGO 6 Unos 3.000 desocupados inician una marcha desde Oruro hacia la ciudad de La Paz para exigir al gobierno la creación de puestos de trabajo permanentes. El secretario de conflictos de la Asociación de Desocupados afirma que buscarán la mediación de la Iglesia Católica, de la Defensoría del Pueblo y de la APDHB para reanudar las negociaciones con las autoridades.

SÁBADO 12 Representantes del gobierno y de la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia firman un acuerdo de 18 puntos en el cual se

establece un incremento salarial del orden del 4% del haber básico y un bono adicional de 400 bolivianos.

- LUNES 14** Alrededor de 500 desocupados de diversos distritos del país llegan a la ciudad de La Paz en lo que constituye el punto final de la marcha iniciada 8 días atrás. Los manifestantes, nucleados en la Asociación de Desocupados, advierten que si el gobierno no cumple con la entrega de empleos permanentes con salarios dignos adoptarán medidas radicales.
- VIERNES 18** Un grupo de integrantes de la Asociación de Desocupados de La Paz marcha por el centro de la ciudad para reclamar al gobierno la creación de puestos permanentes de trabajo y en protesta por los retrasos en el pago de los subsidios estatales otorgados en el marco del PLANE.
- LUNES 21** Un grupo de ex trabajadores del PLANE bloquea la entrada de la Prefectura de la ciudad de Cochabamba para exigir a las autoridades la implementación de un plan de obras públicas para generar puestos de trabajo.
- LUNES 28** Maestros jubilados se movilizan por el centro de la ciudad de Cochabamba y se concentran en las puertas de la Prefectura local para protestar contra el Presidente de la República y exigir al gobierno la creación de una mutualidad para el sector.
- MARTES 29** El gobierno y la Confederación de Maestros Jubilados de Bolivia (COMAJUB) firman un acuerdo por medio del cual se establece la creación de la Mutual del Magisterio Nacional (MUMANAL), hecho que permite la suspensión de las medidas de presión llevadas a cabo por los docentes del sector pasivo.

GLOSARIO DE SIGLAS

ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
ANASSCLAPOL	Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos y Clases de la Policía
APDHB	Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bolivia
CEPB	Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
CMB	Colegio Médico de Bolivia
COB	Central Obrera Boliviana
COD	Central Obrera Departamental
COMAJUB	Confederación de Maestros Jubilados de Bolivia
COR	Central Obrera Regional
CSUTCB	Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
EMP	Estado Mayor del Pueblo
FEDETEULP	Federación Departamental de Trabajadores de la Educación Urbana de La Paz
FEJUVE	Federación de Juntas Vecinales
FMI	Fondo Monetario Internacional

FTC	Fuerza de Tarea Conjunta
FUL	Federación Universitaria Local
GES	Grupo Especial de Seguridad
IVA	Impuesto al Valor Agregado
MAS	Movimiento Al Socialismo
MIP	Movimiento Indígena Pachakuti
MIR	Movimiento de Izquierda Revolucionaria
MNR	Movimiento Nacionalista Revolucionario
MST	Movimiento Sin Tierra
MUMANAL	Mutual del Magisterio Nacional
MUTD	Movimiento Único de Trabajadores Desocupados
NFR	Nueva Fuerza Republicana
PGN	Presupuesto General de la Nación
PLANE	Plan Nacional de Empleo
PTJ	Policía Técnica Judicial
STPLP	Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz
STUMSA	Sindicato de Trabajadores de la Universidad Mayor de San Andrés
SUMI	Seguro Universal Materno Infantil
UMSS	Universidad Mayor de San Simón
UPEA	Universidad Pública de El Alto
UPMS	Universidad Pedagógica Mariscal Sucre

Colombia

[cronología enero-abril 2003]

ENERO

- VIERNES 3** Los empleados del Hospital San Juan de Dios, de Magangue, agremiados a la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios y Clínicas (ANTHOC), se declaran en cese de actividades para exigir a la gerencia el pago de las mesadas.
- LUNES 6** El Ejército de Liberación Nacional (ELN) realiza incursiones armadas en El Pesebre, municipio de Tame, Cauca.
- MARTES 7** El ejército y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) combaten cerca del puerto petrolero de Barrancabermeja, Santander. Además, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se enfrentan con las fuerzas represivas en un área rural de Nariño, en Antioquia.
- JUEVES 9** Las FARC y las AUC se enfrentan en las periferias de Cucutá por el control territorial de la zona.
- VIERNES 10** El ELN levanta el paro armado que mantiene desde el pasado 30 de diciembre en las poblaciones de San Luis, Cocorná y Granada, en Antioquia, luego de reunirse con una comisión humanitaria integrada por funcionarios de ese departamento, los alcaldes de la zona y la Iglesia. Dicho paro fue iniciado para que los paramilitares se vayan de los cascos urbanos y en reclamo de la conformación de una comisión de acercamiento para analizar la situación del oriente antioqueño.

Las fuerzas represivas realizan un allanamiento en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Cali. Recientemente fueron hostigadas las sedes de la Federación Nacional Sindical Unitaria de Agricultores (FENSUAGRO) y del Sindicato de Trabajadores Oficiales de Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI), y fueron detenidos el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Bavaria SA (SINALTRABAVARIA) y un miembro de la Unión Sindical Obrera (USO), acusados de terroristas. Además aumentan las amenazas, atentados y allanamientos contra activistas de derechos humanos, dirigentes del Partido Comunista Colombiano (PCC) y de otras organizaciones.

- LUNES 13** Cientos de habitantes del corregimiento La Playa bloquean por segunda vez la vía principal del lugar para exigir a Electrocaribe la pronta restauración del servicio de energía eléctrica. Grupos antimotines reprimen la protesta y se producen enfrentamientos. Quince personas son detenidas.
- MARTES 14** El gobierno colombiano pide a su par estadounidense que se inicien las negociaciones para establecer un acuerdo bilateral de libre comercio. Además, durante la asunción de Lucio Gutiérrez, en Quito, Uribe propone crear una fuerza multinacional antidrogas y pide a Estados Unidos que despliegue fuerzas sobre el Caribe y el Pacífico semejantes a las que utilizará contra Irak.
- MIÉRCOLES 15** El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprueba un crédito de 2.100 millones de dólares para apoyar al gobierno de Colombia hasta fines del año 2004.
- JUEVES 16** Aproximadamente 3.500 trabajadores de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), agremiados a la USO, realizan un paro de 24 hs en protesta por la detención de su ex presidente, acusado por el estado de tener vínculos con el ELN, y contra el despido de 12 obreros.
- VIERNES 17** El Ejército y las FARC combaten en Gachetá y en La Cruz, departamento de Nariño.
- Las AUC y las fuerzas militares se enfrentan en La Hormiga, Putumayo.
- DOMINGO 19** Paramilitares realizan incursiones armadas en 2 comunidades indígenas cerca de la frontera panameña.
- MIÉRCOLES 22** El ELN ratifica la suspensión de las conversaciones exploratorias con el gobierno por considerar que Uribe no quiere una salida negociada al conflicto y le da prioridad al diálogo con los paramilitares.
- JUEVES 23** El FMI exige al gobierno colombiano la implementación de reformas estructurales y una mayor flexibilidad laboral.
- SÁBADO 25** Las FARC y el ELN combaten con el Ejército en diversas localidades del departamento de Antioquia.
- MARTES 28** En Barranquilla, jubilados y pensionados realizan un cacerolazo frente a la casa del rector de la Universidad del Atlántico (UDEA) para exigir que la institución pague las 5 mesadas que les deben.
- El gobierno emite un decreto que contempla el indulto para los paramilitares que se desmovilicen en el marco de los diálogos que se llevan adelante entre ambas partes.

JUEVES 30 El presidente Uribe sanciona la reforma pensional que contempla un aumento en 2 o 3 puntos de los aportes jubilatorios y un incremento en la edad de jubilación a partir del año 2014, entre otras cuestiones.

Tres mil habitantes de El Viñedo, Presidente, Pueblo Nuevo y Pantanillo, en el Valle, bloquean la doble calzada Buga-Tuluá para exigir la construcción de un nuevo acueducto.

VIERNES 31 Presuntos miembros de las FARC asesinan a 8 líderes comunitarios en la población de Piamonte, Cauca.

FEBRERO

SÁBADO 1 El ELN entrega al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a los periodistas de Los Angeles Times secuestrados en Arauca el pasado 23 de enero.

LUNES 3 Profesores toman las instalaciones de la sede norte de la UDEA, en Barranquilla, para exigir al rector el pago de los salarios y primas adeudados, entre otras cuestiones.

El ELN propone iniciar contactos con diferentes sectores sociales, sindicatos, académicos, eclesiásticos y organismos internacionales, entre otros, para buscar una salida política al conflicto armado.

Las FARC realizan incursiones en Zambrano, Bolívar, e instalan un retén en Carmen de Bolívar. Por otra parte, el ELN se enfrenta con el ejército en Pelaya, en Norte de Santander.

MARTES 4 Habitantes de Planeta Rica, Córdoba, bloquean la Troncal del Caribe en protesta por el mal servicio de energía eléctrica prestado por Electrocosta. La policía intenta desalojarlos, produciéndose enfrentamientos que dejan varios heridos y detenidos.

MIÉRCOLES 5 Las FARC se enfrentan con el ejército en Lejanías, Meta, y dinamitan el oleoducto Caño Limón-Coveñas, a la altura de La Ceida, en Arauca.

JUEVES 6 El gobierno prorroga por segunda vez la Ley de Conmoción Interior.

Las FARC combaten con el ejército en Cocorná y atacan junto con el ELN la estación de Policía del municipio de Saravena, Arauca.

Los trabajadores y pensionados de la Caja Nacional de Previsión (CAJANAL) y de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (CAPRECOM) marchan en Bogotá contra la liquidación de estas entidades.

DOMINGO 9 Cerca de 10 mil personas marchan en Bogotá en protesta por el atentado ocurrido el pasado viernes contra el Club El Nogal, en esa ciudad, que dejó un saldo de más de 30 muertos y 160 heridos. El gobierno adjudica a las FARC la responsabilidad del mismo.

El ejército combate con las AUC en el municipio de Dagua, en Valle del Cauca.

LUNES 10 El ELN decreta un paro armado de 7 días en Arauca contra el presidente Uribe, que declaró esta zona como de rehabilitación y consolidación.

MIÉRCOLES 12 El presidente colombiano pide a los mandatarios de Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela que declaren terroristas a las FARC, lanzando una ofensiva internacional contra la guerrilla.

Más de 500 personas de la Asociación de Educadores de La Guajira realizan un mitin de protesta frente al palacio de la gobernación, en Riohacha, para exigir el pago de los salarios atrasados.

LUNES 17 Las FARC y el ejército se enfrentan desde el pasado fin de semana en los límites entre los departamentos orientales colombianos de Arauca y Casanare.

MARTES 18 Jubilados agremiados a la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico (ASOJUA) toman las instalaciones de la misma en reclamo del pago de cuatro mesadas, mejoras en el servicio de salud y la firma de un convenio de concurrencia.

MIÉRCOLES 19 Miles de trabajadores de ECOPETROL, agremiados a la USO, realizan una huelga de 24 hs contra la concesión de pozos de petróleo a la multinacional Texas Chevron, el despido de un trabajador de Cartagena y la demora en el inicio de las negociaciones del pliego de peticiones y el contrapligo anunciado por la empresa, entre otras cuestiones.

VIERNES 21 En Barrancabermeja, obreros de ECOPETROL ingresan a las instalaciones de la empresa y son reprimidos con gases y balas de goma cuando esperaban la llegada de sus dirigentes para dar inicio a una marcha contra la concesión de pozos de petróleo a una multinacional. Los empleados responden con la suspensión del suministro de energía eléctrica y vapor y con el intento de ocupar el principal centro industrial. Tropas del ejército reprimen la medida y detienen a 15 trabajadores.

DOMINGO 23 El ejército, junto con la Fuerza Aérea, miembros del Federal Bureau of Investigation (FBI) y aviones norteamericanos, atacan a las FARC en el sitio El Danubio, en la vereda Año Nuevo. Estas exigen la suspensión inmediata de los operativos militares en Caquetá y admiten tener en su poder a tres estadounidenses.

LUNES 24 Tropas de la IV Brigada y las FARC combaten en la vereda Las Pavas, en Alejandría, Oriente antioqueño.

JUEVES 27 El ejército combate con las FARC y el ELN en los departamentos de Bolívar, Magdalena, Meta, Santander, Antioquia, Casanare, Cauca, Nariño, Quindío y Caquetá.

MARZO

LUNES 3 Habitantes de Cartagena bloquean la Vía al Mar en protesta por los constantes cortes de energía, la falta de acueductos y alcantarillados y de transporte.

JUEVES 6 Los cerca de 29 mil docentes agremiados a la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) inician un paro de 48 hs y marchan en Medellín para exigir al gobierno que cumpla con el pago de los salarios y la vinculación definitiva en condiciones dignas de los educadores nombrados en provisionalidad o contratados bajo la modalidad de Órdenes de Prestación de Servicios (OPS).

LUNES 10 Las FARC y el ELN dinamitan un tramo del gasoducto Ballenas-Barrancabermeja, en zona rural del municipio de Villanueva, La Guajira.

Las FARC niegan ser autoras del atentado contra el Club El Nogal, en Bogotá.

MARTES 11 El ELN declara un paro armado en el municipio de San Luis, en el departamento de Antioquia, en rechazo a la presencia de paramilitares en esa localidad.

Cientos de estudiantes de la Universidad Nacional de Bogotá marchan por la ciudad contra las medidas de control y los allanamientos realizados en instituciones educativas, las violaciones a la autonomía universitaria y a los derechos humanos, y el referendo que pretende implementar el gobierno que contempla reformas políticas, económicas y penales. La policía reprime a los manifestantes, produciéndose enfrentamientos durante 2 horas y media.

Estudiantes del Instituto Pestalozzi, en el Atlántico, toman las instalaciones de la Escuela de Bellas Artes en protesta por el posible traspaso del colegio a manos del distrito y para exigir a la universidad que le pague al instituto los 30 mil millones de pesos adeudados.

MIÉRCOLES 12 En Barranquilla la CUT realiza una marcha en respaldo a los estudiantes, trabajadores y pensionados de la UDEA y del Instituto Pestalozzi en reclamo de mayor presupuesto y para denunciar el chantaje del rector de la misma, que amenaza con cerrar la institución si continúan las protestas. Además, repudian el referendo y las reformas tributaria y laboral promovidas por el presidente Álvaro Uribe.

- SÁBADO 15** Tropas del ejército combaten con las FARC, en Carmen de Atrato, Chocó y en una zona montañosa al sur de Antioquia.
- LUNES 17** El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprueba un préstamo de emergencia social de 1.250 millones de dólares a Colombia.
- MARTES 18** El Banco Mundial (BM) aprueba un préstamo de 300 millones de dólares para apoyar los ajustes económicos y la estabilidad macroeconómica en Colombia.
- JUEVES 20** Las FARC se enfrentan con el ejército en un área rural del municipio de San Luis y en el sur y noroeste del país.
- SÁBADO 22** Colombia recibirá 100 millones de dólares de Estados Unidos como “premio” por apoyar la guerra en Irak.
- MARTES 25** Tropas del ejército combaten con el ELN en una zona rural de Vegachí, noroeste de Antioquia, y en Los Laureles, Curumaní.
- JUEVES 27** Cerca de 10 mil estudiantes, trabajadores, sindicalistas, activistas de derechos humanos y artistas, convocados por algunas ONGs, realizan una protesta frente a la embajada de Estados Unidos en Bogotá contra la guerra de ese país y sus aliados contra Irak y para repudiar el apoyo del gobierno de Uribe a la misma. La policía reprime con balas de goma y gases lacrimógenos, produciéndose enfrentamientos.
- Más de mil indígenas Waya Wayúu que trabajan en charcas del municipio salinífero de La Guajira, ubicado en Manaure, realizan un paro por tiempo indeterminado y toman las instalaciones de la empresa Salinas, impidiendo el ingreso de los funcionarios, para exigir al gobierno nacional que defina la explotación de la primera cosecha de sal que ya debería haber comenzado.
- En Cartagena, más de 4 mil personas, trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, junto con trabajadores de la salud y de ECOPETROL, entre otros, marchan contra la privatización de los servicios de dicho instituto y las políticas neoliberales del gobierno. La protesta culmina con un repudio a la guerra de Estados Unidos contra Irak y al apoyo de Uribe al ataque militar.
- Más de 5 mil indígenas del Departamento de Arauca bloquean la vía Panamericana para denunciar los problemas que sufren sus comunidades en la región y contra la guerra en Irak.
- VIERNES 28** Cerca de mil estudiantes y docentes de diversas universidades del país marchan en Bogotá contra el ataque estadounidense en Irak y el respaldo de Uribe al mismo.

El ELN levanta el paro armado iniciado hace 18 días en San Luis, Cocorná, San Carlos, Granda y San Francisco.

SÁBADO 29 Las FARC y el ejército se enfrentan en la localidad de Corinto.

ABRIL

MARTES 1 Comienza a regir la reforma laboral que contempla la disminución del recargo nocturno y la ampliación de la jornada ordinaria, la disminución en un 25% de los recargos dominicales y festivos, exenciones a los empleadores que contraten personas menores de 25 años, mayores de 50, reinsertados y madres jefas de hogar, así como la rebaja en las indemnizaciones, entre otras cuestiones.

Habitantes de los barrios de Santa María y San Francisco bloquean el acceso a la avenida Santander, en Cartagena, contra los apagones. La policía reprime, produciéndose enfrentamientos.

MIÉRCOLES 2 Profesores, estudiantes y trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Bogotá se declaran en asamblea permanente y anormalidad académica, y realizan una marcha dentro de las instalaciones de la misma en rechazo a la elección del nuevo rector y en defensa de la autonomía universitaria.

JUEVES 3 En Barranquilla, más de 2 mil personas pertenecientes a la Asociación de Educadores de Barranquilla (ADEBA), ANTHOC, la CUT, Federación Comunal (FEDECOMUNAL), miembros de las colonias árabe, libanesa y palestina, jubilados y estudiantes, entre otros, marchan para condenar el ataque bélico norteamericano al pueblo iraquí y contra el apoyo de Uribe a la guerra.

VIERNES 4 Los indígenas Wayúu levantan el paro en la empresa de Salinas de Manaure luego de que el gobierno nacional asigna 2.800 millones de pesos para invertir en la primera cosecha.

Las FARC y el ejército combaten cerca del municipio de Quinchía, en Risaralda.

DOMINGO 6 Manuel Marulanda, jefe de las FARC, envía una carta a las fuerzas militares en la que las llama a que se nieguen a “servir de verdugos a su propio pueblo” y les propone entablar un diálogo directo para buscar una salida al conflicto armado.

LUNES 7 Cerca de 500 pobladores de Palmar de Varela bloquean la carretera Oriental en protesta por la falta del servicio de agua. La policía intenta desalojarlos con gases.

Las AUC y el ejército se enfrentan en un área rural de Medina, en Cundinamarca y en cercanías a la población de Convención, en Norte de Santander.

MARTES 8 Transportistas de 28 municipios de Córdoba se suman a las protestas que iniciaron el día anterior los de Montería, paralizando sus actividades, en reclamo de que el gobierno municipal prohíba en forma indefinida el uso del parrillero y la prestación de servicio público de pasajeros por parte de vehículos particulares, entre otras cosas.

Las AUC realizan incursiones armadas en veredas de Silvana, en las zonas de Loma Alta, Silencio, Panamá, Yayatá y La Honda, entre otras, donde disputan con las FARC el dominio del lugar. Más de 300 personas se desplazan.

MIÉRCOLES 9 El FMI rechaza la petición del gobierno colombiano de permitirle un mayor espacio fiscal para incrementar la inversión social.

Cientos de estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Nacional de Bogotá realizan una marcha de antorchas para manifestar su repudio a la designación de Marco Palacios como rector de esa institución.

JUEVES 10 El ELN libera al cantante de la agrupación vallenata Los Diablitos y a 13 personas más que fueron secuestradas en un retén en la vía Valledupar-Bosconia el pasado martes.

Los trabajadores de la salud, convocados por ANTHOC, entre otras organizaciones, realizan un paro nacional contra las medidas del gobierno para el sector, que contemplan un plan de reestructuración y el posible cierre de algunas clínicas del Seguro Social.

El alcalde de El Roble, Sucre, es asesinado por un grupo de hombres armados.

Los transportistas de Córdoba levantan el paro iniciado el martes pasado luego de la firma de un acta por parte del gobierno que contempla restricciones para el transporte en motocicleta y un control permanente para impedir la prestación de servicio público por parte de vehículos piratas, entre otros.

DOMINGO 13 Las FARC combaten con el ejército en el municipio de Silvia. Además, el ejército se enfrenta con el ELN en San Francisco, al noroeste de la capital.

MARTES 15 A menos de 24 hs de conocerse la carta del jefe de las FARC, en la que éstas reiteran sus exigencias para el acuerdo humanitario, el presidente Uribe pide a los colombianos no “creer más en las falsas promesas de paz” de ese grupo y confiar en la acción de las fuerzas militares, acusando a las FARC de “cateriva de bandidos”.

Un grupo de las AUC secuestra a dos líderes universitarios de Cucutá, Norte de Santander.

MIÉRCOLES 16 El ELN instala un retén en Curumaní, César, y detiene a 8 personas que son posteriormente liberadas por la presión del ejército.

JUEVES 17 Miembros de las FARC atacan a la policía y al ejército durante la celebración del Vía Crucis en la población de Dolores, Tolima.

SÁBADO 19 Las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) afirman que el silencio del gobierno indica el rompimiento de los acercamientos de paz que llevaban adelante. Otros grupos que se encuentran fuera de las negociaciones exploratorias de paz con el gobierno son el Bloque Metro, de Antioquia, y el Bloque Élmer Cárdenas, de Urabá, que rompió los diálogos con el gobierno el 31 de enero pasado.

LUNES 21 El presidente de Colombia descarta la posibilidad de un canje o acuerdo humanitario con la guerrilla en un futuro cercano y dice que todo su empeño está puesto en derrotar al terrorismo. Además, invita a las ACC a continuar con la fase exploratoria de un proceso de negociación.

Las FARC asesinan a un concejal del municipio de Dolores en la vereda San Andrés, días después de que atacaron sin éxito a la alcaldesa del lugar.

MARTES 22 El ejército se enfrenta con las FARC en Filo Gringo, en Tibú, y en la vereda Corrales, Puerto Concordia, Meta. Además, combate con las AUC en Mesetas, Meta, y con el ELN en Valdivia, Antioquia.

MIÉRCOLES 23 El presidente Uribe y su colega venezolano Hugo Chávez se reúnen en Puerto Ordaz, Venezuela, para discutir sobre la seguridad fronteriza y la forma de revertir la caída del intercambio comercial entre ambos países.

JUEVES 24 El BM aprueba un préstamo para Colombia de 150 millones de dólares que serán destinados a respaldar reformas y fortalecer al sector financiero.

VIERNES 25 En Cartagena, el secretario del Tesoro de Estados Unidos anuncia que Colombia es el primer país en realizar canje de deuda externa por bosques, y ratifica el apoyo de su gobierno a la política económica de Uribe.

DOMINGO 27 El Secretariado del Estado Mayor de las FARC envía una carta a 3 ex presidentes de la Nación en la que nombra a Carlos Antonio Lozada, Simón Trinidad y Domingo Bihojó como sus voceros en los diálogos con el gobierno de cara a un intercambio humanitario.

Las FARC y el ejército combaten en Arauquita, departamento de Arauca.

LUNES 28 Sicarios asesinan a 2 periodistas, uno en la localidad de Maicao, Guajira, y otro en Neiva, Huila.

Las FARC decretan un paro armado en el oriente de Caldas, y en Samaná y la zona urbana de Pensilvania, para provocar la salida de las AUC de la zona.

En el marco de la clausura de la X Reunión de la Comisión de Vecindad Colombo-Panameña, en Cartagena de Indias, la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso y Uribe establecen un acuerdo de cooperación aduanero.

Los trabajadores de la salud inician una jornada nacional de protesta de 72 hs, con asambleas, charlas y mitines en hospitales públicos, clínicas y centros de atención ambulatoria y del Seguro Social, en rechazo a las políticas neoliberales que afectan al sector, como los ajustes presupuestarios, posibles cierres de hospitales, los miles de despidos, y contra el referendo.

MARTES 29 La gobernación de Antioquia llama nuevamente al Comando Central (COCE) del ELN para que se responsabilice del asesinato cometido por esta organización de una profesora de la vereda El Jordán, en Cocorná, ocurrido el pasado viernes.

El ELN y el ejército combaten en Las Falditas, municipio de Granada.

Paramilitares realizan incursiones armadas en 5 veredas de Silvana, ubicadas en los límites de Tibacuy y Viotá, produciendo el desplazamiento de cientos de habitantes.

MIÉRCOLES 30 Frente a la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexecutable la segunda prórroga de la Conmoción Interior, el gobierno afirma que la fuerza pública no abandonará los 31 municipios que conforman las zonas de rehabilitación y consolidación en Sucre, Bolívar y Arauca.

GLOSARIO DE SIGLAS

ACC	Autodefensas Campesinas del Casanare
ADEBA	Asociación de Educadores de Barranquilla
ADIDA	Asociación de Institutores de Antioquia
ANTHOC	Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios y Clínicas
ASOJUA	Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico
AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BM	Banco Mundial
CAJANAL	Caja Nacional de Previsión
CAPRECOM	Caja de Previsión Social de Comunicaciones

CICR	Comité Internacional de la Cruz Roja
COCE	Comando Central
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
ECOPETROL	Empresa Colombiana de Petróleos
ELN	Ejército de Liberación Nacional
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FBI	Federal Bureau of Investigation
FEDECOMUNAL	Federación Comunal
FENSUAGRO	Federación Nacional Sindical Unitaria de Agricultores
FMI	Fondo Monetario Internacional
OPS	Órdenes de Prestación de Servicios
PCC	Partido Comunista Colombiano
SINALTRABAVARIA	Sindicato Nacional de Trabajadores de Bavaria SA
SINTRAEMCALI	Sindicato de Trabajadores Oficiales de Empresas Municipales de Cali
UDEA	Universidad del Atlántico
USO	Unión Sindical Obrera

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.

Fuentes: diarios El Tiempo, El Colombiano, El Heraldo, Indymedia Colombia y Rebelión.

Ecuador

[cronología enero-abril 2003]

ENERO

JUEVES 9 Los trabajadores y profesionales de los hospitales de Guayaquil inician un paro y marchan junto a maestros desde el Hospital del Niño Francisco de Ycaza Bustamante hasta la Defensoría del Pueblo. Exigen al gobierno el pago de sus sueldos de diciembre y otras bonificaciones. Se dirigen a la gobernación, donde un piquete policial les lanza gases lacrimógenos. Paralelamente los docentes de Guayas suspenden sus actividades en varias escuelas.

LUNES 13 Los integrantes de la Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores de la Salud vuelven indefinido el paro que vienen realizando los hospitales públicos en demanda del pago de los sueldos de diciembre. En Quito los trabajadores se concentran en las afueras del Ministerio de Economía exigiendo una respuesta a sus demandas. En Guayaquil médicos y enfermeras del Hospital Francisco de Ycaza Bustamante queman llantas al grito de consignas contra el presidente saliente Gustavo Noboa.

MIÉRCOLES 15 El ex coronel Lucio Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero, asume la presidencia de la nación, y Alfredo Palacio la vicepresidencia, ante la presencia de 1.300 invitados. Se hacen presentes en la ceremonia presidentes de distintos países, entre ellos Brasil, Cuba y Venezuela. En las afueras del Congreso seguidores de Gutiérrez provenientes de varias provincias esperan para participar de la asunción. Luego, unos 30 mil ecuatorianos se concentran en el estadio Atahualpa en Quito, donde Gutiérrez pronuncia un discurso en el que promete nuevas medidas económicas, como la reducción de su sueldo de gobernante, y un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas por mayor seguridad.

SÁBADO 18 El gobierno anuncia por cadena nacional un paquete de medidas económicas que incluye, entre otras, el aumento promedio en un 35% de los combustibles, la reducción del 20% de los sueldos de los empleados públicos con sueldo superior a los 1.000 dólares, y el congelamiento del gasto público.

LUNES 20 Los trabajadores de la salud suspenden el paro para dar una tregua al gobierno por 15 días para que busque una solución definitiva al sector luego de que

las autoridades cancelaran una parte de la deuda salarial. Los primeros en suspender el paro son los salubristas de Guayas, Manabí, Orellana y Esmeraldas. En el resto del país se realizan asambleas.

JUEVES 23 Alrededor de 3 mil estudiantes de Quito pertenecientes a la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) y a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) protestan en las afueras de la Universidad Central (UC) y en otros colegios al sur de la ciudad contra el esquema económico de Gutiérrez y el aumento del precio del combustible y del transporte. Se producen enfrentamientos con la policía, resultando en varios heridos y detenidos. En Riobamba unos 200 estudiantes del Colegio Maldonado protestan frente a la gobernación.

Decenas de docentes de Pichincha pertenecientes a la Unión Nacional de Educadores (UNE) toman las instalaciones del Ministerio de Educación, al norte de Quito, demandando al gobierno el pago de los sueldos de diciembre.

MARTES 28 Los alumnos de varios colegios nacionales de Riobamba marchan contra el alza de los pasajes, el alto costo de vida y el paquete económico. Dirigentes de la FESE y la FEUE dialogan con Gutiérrez en el Palacio de Carondelet. Piden que se reduzca el pago del pasaje en un 50% –según Gutiérrez el carnet que habilita el descuento estará listo en un mes– a cambio los estudiantes realizarán campañas de alfabetización, entre otras cosas.

MIÉRCOLES 29 Más de 5 mil estudiantes integrantes de la FESE marchan en Quito desde el Instituto de Seguro Social (IESS) hacia el Palacio de Carondelet en apoyo a Gutiérrez. Se desvían hacia el Congreso demandando a los diputados que aprueben las reformas propuestas por el presidente.

JUEVES 30 Los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) dialogan con Gutiérrez en el Palacio de Carondelet sobre el alza de las tarifas, que ambas organizaciones repudian. El dirigente de Pachakutik indica que el apoyo al gobierno se terminará si el presidente continúa acatando las medidas que determina el Fondo Monetario Internacional (FMI).

FEBRERO

LUNES 3 El bloque legislativo de Pachakutik le exige a Gutiérrez la renuncia de los ministros del equipo económico como requisito para continuar con la alianza política.

Los dirigentes de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE), la Organización de Pueblos de Pastaza, la Federación Kichwa de Pastaza y la Federación Interprovincial de

Nacionalidades Achuar de la Amazonia Ecuatoriana debaten con el gobierno las razones de su oposición a la explotación petrolera en Pastaza por parte de la Compañía General de Combustible (CGC). Más tarde la Compañía General de Geofísica (CGG), subcontratista de la CGC, anuncia la suspensión de los estudios que venía realizando en el bloque 23 de Pastaza por falta de garantías ante la oposición de la Comunidad de Sarayaku.

LUNES 10 El ministro de Economía y el presidente del directorio del Banco Central firman en EE.UU. la Carta de Intención con la que el FMI avala el programa económico de Ecuador, luego de que Gutiérrez realizara una reunión con el director del organismo internacional. Pachakutik se distancia verbalmente de esta política.

Unos 7.500 maestros azuayos agrupados en la UNE realizan un paro en demanda del pago de los sueldos adeudados.

JUEVES 13 Más de 2 mil maestros pertenecientes a la UNE marchan hacia el Congreso Nacional en Quito y exigen un aumento para alfabetización e infraestructura. En Tungurahua suspenden las clases y marchan hacia la gobernación. En Cuenca unos 8 mil maestros realizan un acto de protesta. En Guayaquil marchan por el centro del lugar. En Carchi marchan desde el Instituto Superior Tulcán hasta la gobernación, donde intentan ingresar al despacho del ejecutivo provincial y se generan disturbios.

VIERNES 14 Los maestros de Loja comienzan un paro indefinido como medida de presión para que el gobierno pague los sueldos y el aumento del presupuesto para la educación.

MARTES 18 Los integrantes de la CONAIE resuelven insistir con que Gutiérrez adopte medidas que beneficien a los sectores más perjudicados y que fortalezcan el sector productivo como requisito para mantener la alianza de Pachakutik con el gobierno. Esto es resultado de una reunión iniciada el día anterior en Guayaquil en la que participan ECUARUNARI, la CONFENIAE y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana (CONAICE).

JUEVES 20 Más de 250 personas entre miembros de Pachakutik de las 22 provincias, CONAIE y ECUARUNARI realizan la "marcha de la esperanza" desde el parque El Arbolito hacia Carondelet en protesta contra las medidas económicas y la poca participación de los indígenas en la toma de decisiones. Paralelamente, miembros de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas y Negras del Ecuador (FENOCIN), la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) entre otras, distanciados del gobierno, realizan la marcha de la "desesperanza" hasta el Congreso Nacional para exigir la derogación de las medidas económicas. Presentan una demanda de inconstitucionalidad para derogar dichas medidas.

- LUNES 24** Los docentes de la UNE comienzan un paro de 72 hs y alrededor de 1.000 personas marchan hasta el Ministerio de Economía en reclamo de que el gobierno pague los salarios atrasados de enero, eleve el presupuesto de 2003 para educación y aumente los sueldos. Una comisión de los manifestantes dialoga con las autoridades y acuerdan que los sueldos se pagarán en los primeros días de cada mes.
- MARTES 25** Más de 2 mil jubilados integrantes de la Confederación de Jubilados y Pensionistas de Montepío y de la Confederación de Jubilados del Ecuador, junto a diputados de la Comisión de lo Laboral y Social del Congreso y docentes de la UNE, que demandan el pago de sus sueldos y mayor presupuesto, marchan desde el parque El Arbolito hasta la Plaza de la Independencia en contra del congelamiento de las jubilaciones y de la carta de intención firmada entre Gutiérrez y el FMI. Algunos manifestantes dialogan con Gutiérrez, quien se compromete a no congelar las pensiones.

MARZO

- JUEVES 6** Los trabajadores penitenciarios y los empleados administrativos de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) de las cárceles de todo el país comienzan un paro de actividades por 48 hs para exigir la derogación de la Ley de Terciarización de Servicios Carcelarios y el pago de 850 mil dólares que el Ministerio de Economía le adeuda a la entidad, entre otras cosas.
- VIERNES 7** Los empleados administrativos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en Quito, inician un paro de actividades en demanda de un aumento al sueldo básico.
- LUNES 10** Los integrantes de la Asociación Nacional de Empleados del Ministerio de Obras Públicas (ADEMOP) y los empleados y trabajadores públicos de los Ministerios de Salud, Bienestar Social y Agricultura inician un paro indefinido coordinado por la Federación de Servidores Públicos del Ecuador (FEDESEP) junto a empleados y trabajadores del MEC que profundizan la medida. Demandan al gobierno estabilidad laboral y la homologación de sus salarios.
- MIÉRCOLES 12** Los servidores públicos levantan el paro luego de la firma de un acta transaccional en la que el Ejecutivo se compromete a nivelar los sueldos de los cinco ministerios a la escala 14, cuyos salarios básicos van desde 70 hasta 210 dólares.
- JUEVES 13** Los empleados de la Dirección de Educación de Pichincha, en desacuerdo con la resolución adoptada en el día de ayer por los servidores públicos, se declaran en huelga.

VIERNES 14 Los empleados administrativos y conserjes de los colegios y escuelas fiscales del país, integrantes de la Confederación Nacional de Servidores Públicos (CONASEP), inician un paro en rechazo al acta de compromiso realizada entre la FEDESEP y las autoridades nacionales. Argumentan que la FEDESEP no está autorizada a acordar con el gobierno por ser una organización de tercer nivel y local (de Quito).

SÁBADO 15 Organizaciones Indígenas como la ECUARUNARI, activistas por los derechos humanos, ecologistas, mujeres y miembros de otros movimientos sociales del país realizan un plantón frente a la Embajada de EE.UU. en rechazo a la guerra que este país intenta llevar adelante contra Irak.

DOMINGO 16 Los trabajadores de los ministerios de Agricultura, Educación y Obras Públicas paralizan nuevamente sus actividades por suspenderse la reunión del Consejo Nacional de Remuneraciones (CONAREM), cuya realización era condición para que se levantara definitivamente el paro. Los empleados administrativos de varios colegios fiscales de Pichincha se suman a la medida suspendiendo las clases.

LUNES 17 Los integrantes de la Federación Nacional de Madereros del Ecuador, en el marco del paro que vienen realizando desde hace 3 semanas en rechazo a la terciarización del control forestal por parte de la empresa Société Générale de Surveillance Holding SA (SGS), obstruyen en la madrugada la vía Quinindé-Santo Domingo, en Esmeraldas, impidiendo el acceso al resto de la provincia. Por la mañana, y tras un diálogo con el gobernador, sólo se obstaculiza a los camiones que transportan madera. En San Lorenzo y Muisne realizan la misma medida.

MARTES 18 Los empleados administrativos del Colegio Mejía en Quito y los trabajadores de la salud se suman al paro iniciado por los empleados de colegios y escuelas fiscales de Pichincha en protesta por el incumplimiento del CONAREM.

JUEVES 20 Cientos de jóvenes, estudiantes secundarios y de la FEUE, la agrupación de teatro "Convergencia" y jóvenes de otros países como EE.UU., Canadá, Australia, Bélgica y Suiza se concentran en la Universidad Católica del Ecuador y marchan hasta la Embajada de EE.UU. en rechazo a la guerra contra Irak. La policía dispersa a los manifestantes con gases lacrimógenos.

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un acuerdo "provisorio" de 13 meses con Ecuador, con un crédito de 205 millones de dólares para respaldar los programas económico y financiero del gobierno ecuatoriano hasta marzo de 2004.

MARTES 25 La Federación Nacional de Madereros del Ecuador levanta el paro por 30 días y comienza a transportar la madera que tenía retenida en espera de los dictámenes de la Contraloría, del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal de

lo Contencioso Administrativo sobre la empresa terciarizadora SGS, contratada para controlar la explotación de la madera en el país. Los madereros se niegan a pagar los altos montos establecidos para realizar esta actividad.

MIÉRCOLES 26 Más de 700 personas entre estudiantes e integrantes de partidos de izquierda se concentran en la plaza Indoamérica, en Quito, y marchan a la Embajada de los EE.UU. en contra a la guerra contra Irak. La policía les impide el paso, lo que provoca forcejeos y enfrentamientos a puños, y lanza gases lacrimógenos.

JUEVES 27 Representantes nacionales y provinciales de los servidores públicos se reúnen con el presidente Gutiérrez y los ministros de Economía, Trabajo, Gobierno, Educación y Bienestar Social. Las autoridades se comprometen a equiparar los sueldos de los empleados de los cinco ministerios en conflicto a escala 14 y a realizar el pago respectivo a partir del mes de julio de 2003. La CONASEP se compromete a reanudar las labores y a colaborar con el proceso de reestructuración institucional.

ABRIL

VIERNES 4 Los ministros de los 5 países que integran la Comunidad Andina de Naciones (CAN) –Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia– realizan una reunión en Quito donde coinciden en que es necesaria la eliminación de subsidios al sector agrícola por parte de los países desarrollados para que pueda llevarse adelante el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

LUNES 7 Los trabajadores de consulta externa pertenecientes a la Organización Sindical Única de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública (OSUNTRAMSA) y a la Federación de Trabajadores de la Salud (FETSAE), entre otras, inician un paro preventivo de 48 hs en todas las casas de salud del sector público, alrededor de 1.500 a nivel nacional, en demanda del cumplimiento del octavo contrato colectivo, el pago del retroactivo desde el 1º de enero de 2002 hasta la fecha y la actualización de los sueldos básicos.

MARTES 8 Los huelguistas de los hospitales públicos del país levantan el paro luego de que el total de los trabajadores aceptara el acuerdo al que se arribó entre la dirigencia y los ministros de Salud y de Gobierno, que implica el pago en una sola cuota y con plazo hasta el 20 de mayo de los 16 millones de dólares que el estado les adeuda.

LUNES 14 Los dirigentes de Pachakutik y de la CONAIE se reúnen con el presidente Gutiérrez en el Palacio de Carondelet y deciden continuar en la alianza. Entre los requisitos se encuentran el formar parte de la toma de decisiones y que no se aumente el precio del gas de uso doméstico.

JUEVES 24 La ECUARUNARI declara su independencia del gobierno y consecuentemente de Pachakutik. Rechazan la obediencia del gobierno a las recetas del FMI. Esta es la resolución acordada por los integrantes del movimiento en la Asamblea Nacional realizada en Cacha, Riobamba. También resulta electo Humberto Cholango como el nuevo presidente del movimiento.

Los agricultores inician una huelga para reclamarle al gobierno la condonación de las deudas de los campesinos y políticas de estado que ayuden a reactivar la producción, entre otras cosas.

GLOSARIO DE SIGLAS

ADEMOP	Asociación Nacional de Empleados del Ministerio de Obras Públicas
ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
CAN	Comunidad Andina de Naciones
CGC	Compañía General de Combustibles
CGG	Compañía General de Geofísica
CMS	Coordinadora de Movimientos Sociales
CONAICE	Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana
CONAIE	Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONAREM	Consejo Nacional de Remuneraciones
CONASEP	Confederación Nacional de Servidores Públicos
CONFENIAE	Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
DNRS	Dirección Nacional de Rehabilitación Social
ECUARUNARI	Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
FEDESEP	Federación de Servidores Públicos del Ecuador
FENOCIN	Federación Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas y Negras del Ecuador
FESE	Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador
FETSAE	Federación de Trabajadores de la Salud
FEUE	Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador
FMI	Fondo Monetario Internacional
FUT	Frente Unitario de Trabajadores
IESS	Instituto de Seguro Social
MEC	Ministerio de Educación y Cultura
OSUNTRAMSA	Organización Sindical Única de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública
SGS	Société Générale de Surveillance Holding SA
TC	Tribunal Constitucional
UC	Universidad Central
UNE	Unión Nacional de Educadores

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.

Fuentes: diarios Hoy, La Hora y El Comercio.

[cronología enero-abril 2003]

ENERO

SÁBADO 4 El gobierno autoriza el ingreso a Perú de personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos, para realizar ejercicios militares de capacitación de destreza médica en Trujillo, Iquitos y Tarapoto.

DOMINGO 5 Unos 2 mil pobladores de Nazca, Ica, prestatarios del Banco de Materiales (BANMAT), bloquean la Panamericana Sur entre los km 436 y 447 y los puentes Ajá y Nazca, reclamando al Ejecutivo la condonación de las deudas que mantienen con esta entidad crediticia. Se enfrentan a la policía, que intenta dispersarlos, resultando 12 personas heridas, 1 muerta y 19 detenidas.

Campesinos de 88 comunidades de la región de Pasco y el sur de Huanuco bloquean la Carretera central, entre Lima-Huánuco-Pucallpa, Yanamante y San Rafael en una distancia de 55 km, exigiendo al gobierno la ejecución de las obras del Pequeño Sistema Eléctrico Huariaca II Etapa.

MARTES 14 Unos 400 trabajadores de la empresa agroindustrial Cayaltí, de Chiclayo, intentan desalojar a unos 40 agricultores que un mes atrás habían invadido los predios El Examen y Miraflores, donde realizan labores agrícolas. Ambos grupos se enfrentan durante aproximadamente una hora, tras lo cual 13 personas resultan muertas y unas 10 heridas.

Los pobladores aguarunas de las distintas comunidades de Bagua y Condorcanqui, en huelga indefinida desde el día anterior, toman las estaciones petroleras 5 y 6 de Petro Perú y la central térmica de energía del sector El Muyo de la provincia de Bagua. A su vez, cientos de aguarunas y mestizos llegan hasta Bagua, donde permanecen varias horas en la plaza, tras lo cual bloquean las vías de acceso a las ciudades de Bagua, Imaza y Condorcanqui. Reclaman la rehabilitación de la carretera que une a todos los pueblos indígenas con las capitales provinciales y mayor apoyo en salud y educación.

MIÉRCOLES 15 Los transportistas de la Asociación de Empresas de Transporte Urbano Masivo (ASETUM) y de la Asociación de Empresas de Transporte Urbano Público (ASETUP) paran durante la jornada en reclamo de la postergación del Seguro

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) debido a que ya cuentan con un seguro privado. Doce personas son detenidas por quemar neumáticos y bloquear pistas.

JUEVES 16 Los pobladores de las provincias de Pasco y Daniel A. Carrión paran durante la jornada para oponerse a la privatización de la hidroeléctrica de Yuncán II. Realizan piquetes en varios tramos de la Carretera Central y participan de una marcha por las principales calles de Cerro de Pasco.

La empresa belga Tractebel, que en junio de 2002 obtuvo la concesión de la Empresa de Generación Eléctrica del Sur (EGESUR) y de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (EGASA), desiste de ejercer su derecho a la propiedad, luego de largos meses de espera, debido a varios recursos de amparo presentados por organizaciones y autoridades locales para detener el proceso de privatización.

VIERNES 17 Mientras en los puertos de Lima y Callao se realiza un paro de forma coordinada, integrantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos (FENTENAPU) y del Sindicato de los Trabajadores de la ENAPU (SITENAPU) realizan un plantón en la explanada del Congreso para exigir la aprobación de la Ley de Puertos, que pondría fin a los intentos de privatización.

SÁBADO 18 Los nativos aguarunas y huambisas suspenden las protestas que desde hace 5 días mantienen paralizada la ciudad amazónica de Bagua luego de suscribir un acta con representantes del gobierno central por la cual las autoridades se comprometen a asfaltar la carretera de penetración a esa zona.

LUNES 20 Los trabajadores de Telefónica del Perú realizan un plantón frente a la sede central de la empresa para reclamar la reposición de los trabajadores despedidos el año pasado.

MIÉRCOLES 22 El alcalde metropolitano declara zona rígida el Centro Histórico de Lima, por lo cual quedará totalmente prohibida cualquier manifestación dentro de esa área.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) realiza manifestaciones en distintas ciudades del país para oponerse al recorte presupuestario de educación y exigir, entre otros puntos, mejores sueldos y pensiones, y el pago a los maestros contratados.

JUEVES 23 En desafío al decreto de alcaldía que prohíbe las movilizaciones en el centro histórico de Lima, las principales centrales sindicales, encabezadas por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), marchan hacia el Palacio de Gobierno argumentando que la medida es inconstitucional.

MARTES 28 Los trabajadores de la construcción civil inician una huelga nacional indefinida y unas 10 mil personas marchan hacia el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para que éste intervenga en la discusión sobre la negociación por rama que mantienen con la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). Diecisiete personas son detenidas, acusadas de producir desmanes.

VIERNES 31 Alrededor de 18 mil habitantes de los pueblos del valle de San Lorenzo y de las ciudades del Medio y Bajo Piura realizan una marcha hasta el centro de Piura para oponerse a la explotación de la mina local y pedir a las autoridades que se respete el resultado de la consulta popular de junio de 2002, donde más del 98% de la población se pronunció a favor del agro.

FEBRERO

SÁBADO 1 En asamblea general los obreros de la construcción civil levantan la huelga nacional indefinida que vienen acatando desde el 28 de enero pasado, debido a que el Ministerio de Trabajo establece un aumento salarial.

MIÉRCOLES 12 Los maestros del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) marchan hasta el Ministerio de Economía (MEF) para reclamar mayor presupuesto para el sector, el pago de bonificaciones establecidas legalmente, el respeto a la Ley del Profesorado y aumento de sueldos y pensiones.

SÁBADO 15 Cientos de limeños llegan hasta la embajada norteamericana para oponerse a la inminente guerra de Estados Unidos contra Irak.

MARTES 18 La CGTP marcha hasta el 44 juzgado penal de Lima, donde realiza un plantón para exigir la liberación de 17 trabajadores de la construcción civil presos a raíz de desmanes ocurridos durante las últimas marchas de protesta del sector.

Unos 10 mil cocaleros de la provincia de Padre Abad-Aguaytía inician una huelga general indefinida para denunciar el atropello por parte del Programa Especial de Control y Reducción de Coca en el Alto Huallaga (CORAH) y de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) a los agricultores productores de hoja de coca. Bloquean la carretera Federico Basadre, entre los km 140 y 150, aislando al departamento de Ucayali.

JUEVES 20 Mientras por tercer día consecutivo cientos de agricultores cocaleros de la provincia de Padre Abad-Aguaytía bloquean la carretera Federico Basadre, los cocaleros de Tingo María y del Valle del Monzón se suman a la huelga indefinida, exigiendo el retiro de las ONGs de Estados Unidos, del personal del CORAH y de DEVIDA. Afirman que sólo accederán a la erradicación si los países cooperantes abren sus mercados a los productos propiciados por los programas alternativos.

VIERNES 21 El secretario general de la Confederación Nacional de Cocaleros, Nelson Palomino La Serna, es detenido por la policía en la ciudad de Huamanga, Ayacucho, acusado de apología del terrorismo, luego de convocar en un programa radial a la movilización de los cocaleros.

DOMINGO 23 Cientos de campesinos del valle del río Apurímac inician una marcha hasta Ayacucho para demandar la libertad del dirigente cocalero Nelson Palomino. Los cocaleros de las cuencas del Huallaga, en tanto, se suman a la huelga indefinida.

LUNES 24 Un millar de cocaleros de la provincia de Padre Abad-Aguaytía se enfrentan con la policía cuando intentan acercarse a los hoteles donde están alojados 140 funcionarios de DEVIDA y CORAH. Son atacados con gases lacrimógenos y 20 personas resultan heridas. Se dirigen luego a la oficina de DEVIDA, donde rompen escritorios y computadoras.

Los trabajadores de la empresa agroindustrial Pucalá, de Chiclayo, inician una huelga general exigiendo el pago de sus haberes adeudados desde 4 meses atrás.

MIÉRCOLES 26 Unos 4 mil cocaleros llegados desde Tocache, Aucayacu, Madre Mía, Uchiza y Monzón realizan una manifestación en la Plaza de Armas de Tingo María para reclamar la presencia del presidente Toledo. A su vez, unos 2.500 productores de coca agrupados en la Federación de Productores Agropecuarios del Valle del Río Apurímac y Ene (FEPA-VRAE) llegan a la ciudad de Huamanga para exigir la inmediata liberación de su dirigente Nelson Palomino.

VIERNES 28 Los productores cocaleros de los valles del Monzón y del Alto Huallaga levantan por 72 hs la huelga y los bloqueos que mantienen desde hace más de una semana para que el gobierno conforme una Comisión de Alto Nivel que aporte soluciones a los reclamos que vienen formulando, y acceden a formar una Comisión Mediadora que se dirija a Lima para dialogar con el presidente Toledo. A su vez, un grupo de cocaleros del valle del Monzón inicia una marcha de sacrificio hacia Lima. Por otra parte, cerca de 3 mil productores agropecuarios del valle del río Apurímac y Ene continúan concentrados en la Plaza de Armas de Huamanga-Ayacucho en reclamo de la libertad de su líder, Nelson Palomino La Serna.

MARZO

VIERNES 7 El gobierno de Estados Unidos reinicia vuelos de prueba sobre territorio nacional para obtener información actualizada de las cuencas cocaleras, de la producción y trasiego de drogas y de las pistas clandestinas que utilizarían los traficantes.

LUNES 10 Los habitantes de La Convención realizan un paro de 24 hs para reclamar al gobierno la promulgación de la Ley de Legalización del Cultivo de la Hoja de Coca y la asignación de 20 millones de soles por el estado de emergencia declarado en esta provincia. Organizaciones sindicales, instituciones públicas y agricultores salen a las calles para protestar por la falta de atención del gobierno central y realizan un mitin en la plaza de armas de Quillabamba.

MIÉRCOLES 12 Centenares de afiliados al SUTEP y al Sindicato Intersectorial de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (SITASE) realizan un plantón frente al Ministerio de Educación en San Borja para pedir, mayor presupuesto para el sector y la cancelación del pago de los haberes atrasados de los docentes contratados, entre otros puntos. En Iquitos marchan por las calles de la ciudad y realizan un plantón frente a la Unidad de Gestión Educativa (UGE).

MIÉRCOLES 19 Cien mil trabajadores asistenciales de la seguridad social y del Ministerio de Salud comienzan un paro de 48 hs y cientos de ellos se movilizan hacia la sede del Poder Judicial y el Congreso para pedir mejores sueldos y el nombramiento de más personal, y para conseguir la autonomía de EsSalud.

LUNES 24 Vladimiro Montesinos es condenado a 5 años y 4 meses de cárcel y al pago de 500 mil soles de reparación civil por corrupción de funcionarios y tráfico de influencias.

Los más de 500 trabajadores despedidos de Telefónica del Perú en junio pasado son reincorporados por la empresa, que debe acatar una resolución emitida por el Tribunal Constitucional (TC), el cual consideró que estos despidos eran inconstitucionales.

JUEVES 27 El gobierno de Japón informa que no acatará la orden de detención del ex presidente Alberto Fujimori difundida el miércoles por la Policía Internacional (INTERPOL).

ABRIL

MARTES 1 Las enfermeras de EsSalud comienzan una huelga nacional indefinida en reclamo de que se nivelen sus sueldos con los de otras profesiones del ramo. Realizan un plantón frente al Ministerio de Trabajo y una protesta en el frontis de EsSalud.

JUEVES 3 Miles de trabajadores y militantes de organizaciones sociales y políticas, encabezados por la CGTP, se movilizan por las calles de Lima y realizan un mitin frente al Congreso en reclamo de un cambio en la política económica, aumento de sueldos, la restitución de todos los derechos laborales, la liberación de los 17 trabajadores de la construcción civil y la eliminación de la renta básica

de la telefonía, entre otros puntos. La protesta se convierte también en un masivo repudio a la guerra desatada por Estados Unidos contra Irak. Los habitantes de Piura, Cusco, Iquitos y Talara realizan grandes manifestaciones con las mismas reivindicaciones.

MARTES 8 Más de 5 mil cocaleros de los valles de Ene y Apurímac comienzan un paro indefinido en rechazo al programa de erradicación de cultivos de coca y en reclamo de la liberación del dirigente Nelson Palomino. Numerosos campesinos que protestan en las calles de Huamanga son reprimidos por la policía, que hiere a 17 personas.

MIÉRCOLES 9 Al no ver voluntad de solucionar sus problemas por parte de las autoridades, los cocaleros de Tingo María, Aguaytía y otras cuencas cocaleras del Alto Huallaga se suman a los campesinos de los valles de Ene y Apurímac y retoman la huelga indefinida, suspendida semanas atrás para otorgarle una tregua al gobierno.

Los choferes de transporte de carga, interprovincial de pasajeros y del pasaje urbano comienzan un paro nacional de 48 hs y bloquean los 4 accesos a la ciudad de Lima en protesta por el alza del precio de los combustibles y para lograr, entre otras medidas, la eliminación del SOAT. Pese a que no se registran actos violentos, 103 personas son detenidas.

Encabezados por el Frente de Defensa de Alto Amazonas (FREDESAA), los pobladores de Yurimaguas comienzan una huelga indefinida para pedir soluciones a los problemas de Alto Amazonas y la región de Loreto, especialmente el asfaltado de la carretera Yurimaguas-Tarapoto. Realizan piquetes en el aeropuerto, puertos fluviales, mercados y todas las vías de acceso a la ciudad.

JUEVES 10 Luego de 10 días de huelga nacional, las enfermeras de EsSalud levantan la medida tras un acuerdo con las autoridades de la institución por el cual recibirán un aumento de sueldos.

Convocada por el Frente Patriótico de Loreto (FPL), la población de Iquitos para durante la jornada para protestar contra la política económica del gobierno. Reclaman la reactivación del agro y declarar en emergencia la educación, la salud y la seguridad social, y se pronuncian contra la privatización de las empresas públicas. Miles de personas realizan una manifestación por las calles de la ciudad.

SÁBADO 12 Unas 1.500 personas, convocadas por la coordinadora Otro Mundo es Posible, Amnistía Internacional y Alianza Humanista, se manifiestan contra la ocupación de Estados Unidos del territorio iraquí, marchando hasta las embajadas de Gran Bretaña y España y la residencia del embajador norteamericano.

- LUNES 21** Luego de varios días de marcha de sacrificio, cerca de 10 mil campesinos de todas las cuencas cocaleras del Perú llegan a Lima, donde se concentran frente al Palacio de Justicia para reclamar la liberación de su líder Nelson Palomino y oponerse a los planes gubernamentales de erradicación de coca.
- MARTES 22** Los internos del penal de San Jacinto del Guayabamba, Iquitos, se suman a la huelga de hambre iniciada el día anterior por los detenidos del penal de Lurigancho, en Lima, en demanda de celeridad en sus procesos judiciales y beneficios penitenciarios.
- MIÉRCOLES 23** Dirigentes cocaleros se reúnen con el Presidente, tras lo cual Toledo firma una resolución por la que aprueba, entre otros puntos, la reducción gradual y concertada de plantaciones de coca y el reconocimiento de la existencia de una demanda sobre el consumo legal de coca. Respecto de la liberación de Nelson Palomino, expresa que no se trata de un problema político, sino del Poder Judicial.
- JUEVES 24** A pesar de los acuerdos a las que se llegó con el Presidente, unos 2 mil cocaleros deciden quedarse en Lima frente al Palacio de Justicia hasta lograr la libertad de su dirigente, Nelson Palomino.

Los médicos de la Federación Médica del Perú (FMP) paran durante la jornada y realizan una marcha desde el Palacio de Justicia hasta el Congreso para reclamar mayor presupuesto para el sector de salud y el nombramiento de 4.500 médicos contratados por servicios no personales, entre otros puntos.

- MARTES 29** Las 13 provincias de la región de Puno realizan un paro total de actividades, reclamando al gobierno que inicie la construcción de la carretera Transoceánica por la ruta Ñapari-Puno-Ilo. Piquetes de huelguistas bloquean las principales vías que unen a las provincias fronterizas de Puno y Juliaca, y miles de afiliados a las organizaciones más representativas de la región marchan hasta la plaza principal, donde realizan un mitin. Los pobladores de las provincias de San Román y Juliaca llevan a cabo marchas simultáneas.

GLOSARIO DE SIGLAS

ASETUM	Asociación de Empresas de Transporte Urbano Masivo
ASETUP	Asociación de Empresas de Transporte Urbano Público
BANMAT	Banco de Materiales
CAPECO	Cámara Peruana de la Construcción
CGTP	Confederación General de Trabajadores del Perú
CORAH	Programa Especial de Control y Reducción de Coca en el Alto Huallaga
DEVIDA	Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
EGASA	Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa

EGESUR	Empresa de Generación Eléctrica del Sur SA
ENAPU	Empresa Nacional de Puertos
FENTENAPU	Federación Nacional de Trabajadores de ENAPU
FEPA-VRAE	Federación de Productores Agropecuarios del Valle del Río Apurímac y Ene
FMP	Federación Médica del Perú
FPL	Frente Patriótico de Loreto
FREDESAA	Frente de Defensa de Alto Amazonas
INC	Instituto Nacional de Cultura
INTERPOL	Policía Internacional
MEF	Ministerio de Economía
SITASE	Sindicato Intersectorial de Trabajadores Administrativos del Sector Educación
SITENAPU	Sindicato de los Trabajadores de la ENAPU
SOAT	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
SUTE	Sindicato Único de Trabajadores de la Educación
SUTEP	Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú
TC	Tribunal Constitucional
UGE	Unidad de Gestión Educativa

Venezuela

[cronología enero-abril 2003]

ENERO

- MIÉRCOLES 1** Miles de opositores acuden a la denominada Fiesta por la Paz, convocada por la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (FEDECAMARAS), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Coordinadora Democrática (CD), en la autopista Francisco Fajardo, donde reciben las primeras horas de 2003 y manifiestan su apoyo al paro nacional y su rechazo al gobierno del presidente Chávez. Por su parte, los simpatizantes chavistas demuestran su apoyo al presidente recibiendo el nuevo año en la entrada de la sede de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) en La Campiña.
- JUEVES 2** El presidente de la CTV, Carlos Ortega, conjuntamente con la CD, insta a la población a que se declare en desobediencia tributaria y deje de pagar los impuestos.
- VIERNES 3** Miles de opositores al gobierno marchan desde diversos puntos de Caracas hasta las inmediaciones del Paseo Los Próceres en la denominada marcha de la Gran Batalla, convocada por la CD, la CTV y FEDECAMARAS para pedir la libertad del general de división de la Guardia Nacional (GN) Carlos Alfonso Martínez. Al finalizar la marcha se producen enfrentamientos con grupos oficialistas y con las fuerzas de seguridad, dejando un saldo de 2 simpatizantes del gobierno muertos y más de 80 heridos.
- SÁBADO 4** Miles de manifestantes chavistas realizan una marcha por todo el suroeste de Caracas hasta la Comandancia General de la GN en El Paraíso para mostrar su apoyo al presidente Chávez y repudiar las muertes de los 2 jóvenes que perdieron la vida en los sucesos del día anterior en Los Próceres.
- DOMINGO 5** Amigos y familiares de las muertes en el Paseo Los Próceres del último viernes marchan junto con el vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, ministros, diputados oficialistas y miles de simpatizantes del gobierno, cargando los féretros de las víctimas desde la funeraria hasta la puerta del hotel Meliá, para exigir a los representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) apoyo internacional para que se lleven a cabo las investigaciones necesarias.

LUNES 6 La Gerencia de Prevención y Control de Pérdidas de PDVSA interviene las instalaciones de las sedes de Chuao, Los Chaguaramos, Barinas, Punta de Mata y Matanzas, prohibiéndoles la entrada a empleados y obreros de la compañía.

Una multitud opositora convocada por la CD marcha desde la urbanización Los nuevos Teques, el distribuidor de Carrizal y la redoma de San Antonio de los Altos, hasta La Rosaleda, municipio Los Salias, para exigir la salida del presidente Hugo Chávez. Por otro lado, cerca de 40 mil opositores se concentran en la Plaza de la Libertad, en Barquisimeto, para protestar contra el gobierno.

MIÉRCOLES 8 Exigiendo el reinicio de las actividades escolares, padres y representantes de alumnos realizan diversas marchas y asambleas en Los Teques, Vargas, Guatire y Guarenas, y en Valles del Tuy, donde llegan a ocupar la sede del Distrito Educativo Número 3.

La CD inscribe ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el Bloque por el Sí para el referendo consultivo del próximo 2 de febrero que busca acortar el período presidencial de Hugo Chávez.

Unas 3 mil personas protestan frente a la planta distribuidora de Tropigas Ferrygas, en Raúl Leoni, por la escasez de gas doméstico.

JUEVES 9 Según lo confirman las estadísticas presentadas por la Federación de Trabajadores Bancarios (FETRABANCA) y las que recibe la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), en su primera jornada del paro convocado por 48 hs, el sector bancario registra un 80% de suspensión de labores.

LUNES 13 Por sexta vez en el mandato del presidente Hugo Chávez es designada una nueva junta directiva de PDVSA.

Unos 5 mil comerciantes, indígenas, campesinos, estudiantes, obreros independientes y buhoneros marchan en Maracaibo hasta las puertas de la sede del gobierno local para hacer entrega de una carta en la que solicitan públicamente el cese del paro y denunciar lo que califican como la intención subversiva de reprimir al pueblo y dejarlo sin la posibilidad de trabajar. Unos 200 efectivos de la brigada antimotines retienen la marcha para luego desalojarla a fuerza de gases lacrimógenos y perdigones.

MARTES 14 La CD organiza 3 marchas en Caracas hasta la redoma de La India para dar comienzo a la campaña por el Sí en el referéndum consultivo. Por su parte, alrededor de 3 mil simpatizantes del gobierno se reúnen en ese lugar para evitar la llegada de las marchas opositoras, produciéndose un enfrentamiento que es dispersado con gases lacrimógenos por efectivos de la policía de Caracas.

MIÉRCOLES 15 En el Día del Maestro, cerca de mil docentes de Caracas, Vargas y Miranda realizan una marcha hasta la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, Caracas, donde representantes sindicales ratifican que el sector continuará con el paro.

La opositora Federación de Centros Universitarios (FCU) realiza una marcha hasta la plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, donde en la cesión del Consejo Universitario se decide, por 14 votos a favor y 10 en contra, el inicio de manera progresiva de las actividades académicas.

JUEVES 16 Padres y representantes de alumnos protestan en distintos sectores de la ciudad de Maracaibo contra la paralización de los centros educativos y exigen la intervención inmediata de la Defensoría del Pueblo, la Dirección Regional de Educación y representantes de la Fiscalía del Ministerio Público.

VIERNES 17 Más de 500 productores agropecuarios marchan con tractores, caballos y distintos animales desde la plaza de la Meritocracia en Chuao hasta el Parque Cristal en Caracas, en protesta contra el gobierno de Hugo Chávez, exigiendo su renuncia y la convocatoria a elecciones.

SÁBADO 18 Unas 15 mil personas (según los organizadores) participan de una marcha en las ciudades gemelas de Acarigua y Araure, estado de Trujillo, en defensa de la revolución, por la limpieza de PDVSA y por el derecho a la educación.

DOMINGO 19 Una multitud participa en la denominada marcha "Venezolanos del Mundo" por la autopista Prados del Este, en el sureste de Caracas, portando banderas de diferentes países, pidiendo la renuncia del presidente Chávez, por la libertad, por la paz y por la unión.

LUNES 20 Militantes opositores se concentran en el puente Chupulún y la Flecha de Copei para marchar hasta la Redoma de Santa Rosa, en la denominada Gran Marcha del Tuy. Cuando los manifestantes atraviesan Los Samanes se enfrentan con simpatizantes chavistas que les impiden el paso, resultando una persona muerta y 18 heridas.

MIÉRCOLES 22 Haciendo lugar a una medida cautelar solicitada por los diputados del Movimiento V República (MVR), la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspende el referéndum consultivo convocado por el CNE para el próximo 2 de febrero.

A través de un decreto, el gobierno faculta al ministro de Finanzas para que limite o restrinja la convertibilidad de la moneda nacional y la transferencia de fondos del país hacia el exterior, suspendiéndose así la venta de divisas por un período de 5 días hábiles.

JUEVES 23 Tres millones de chavistas (según los organizadores) provenientes de todo el país se unen en la denominada “Marcha por la paz y la Constitución”, por las calles de Caracas, expresando su apoyo al ejecutivo.

En las ciudades de Maturín, Maracaibo, Coro y Punto Fijo y Barquisimeto, la CD, junto con distintas organizaciones sociales, representantes de los ejecutivos provinciales y partidos políticos, realiza multitudinarias marchas en rechazo a la decisión del TSJ de anular el referéndum consultivo.

VIERNES 24 Ochenta y dos funcionarios de la Policía Municipal de Urdaneta, estado de Miranda, se declaran en huelga de brazos caídos en protesta por los sueldos adeudados desde el 15 de diciembre.

LUNES 27 Los partidos políticos Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), Unión y Primero Justicia, se muestran a favor de que algunos sectores de la economía como los centros comerciales, las franquicias y la educación comiencen a funcionar, manteniendo la paralización en el sector petrolero.

Jubilados del Seguro Social cierran por más de una hora la avenida Urdaneta a la altura del Ministerio de Finanzas en reclamo por el retraso del pago de la pensión correspondiente al mes de enero.

MARTES 28 El Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela (BCV) acuerdan prorrogar hasta el 5 de febrero la suspensión de la venta de divisas.

VIERNES 31 Centenares de miles de personas marchan desde 6 puntos de la ciudad de Caracas hasta la autopista Francisco Fajardo, donde se concentran frente al Hotel Meliá Caracas para manifestar su apoyo a la libertad de expresión y a los medios de comunicación.

FEBRERO

SÁBADO 1 El secretario general de la CTV, Manuel Cova, anuncia que en atención a una propuesta hecha por la comunidad internacional y como una señal de la buena disposición a negociar la CD resuelve la suspensión del paro y exhorta a empresarios y comerciantes a que voluntariamente decidan si se plegan al horario restringido de actividades.

DOMINGO 2 Según los primeros cálculos de los voceros de la CD, en 12 hs de El Firmazo (recolección de firmas para solicitar la enmienda constitucional que acorte el mandato constitucional de Hugo Chávez, la realización de una Asamblea Nacional Constituyente y los revocatorios de 7 diputados del oficialismo, entre otras cosas) se logra reunir más de 4 millones de firmas en los 3.600 centros

de acopio instalados en el país. A su vez, la CD acuerda extender una semana más la jornada para recoger firmas en nuevos centros situados en las plazas del país para atender a las personas que no hayan podido expresarse.

- LUNES 3** Empleados del Hospital Universitario de Caracas manifiestan en las puertas del centro asistencial su rechazo a las deudas de salarios correspondientes al mes de enero y los dos meses y medio de cestatickets impagos.
- MIÉRCOLES 5** El presidente Hugo Chávez decreta la aplicación de un control de cambio sobre las compras de moneda estadounidense y anuncia que el precio oficial del dólar será de 1.600 bolívares. Por su parte, el Consejo de Ministros decreta además el control de precios de bienes y servicios declarados de primera necesidad.
- SÁBADO 8** Una multitud se congrega en las adyacencias del distribuidor Santa Fe de la autopista Francisco Fajardo y las sedes de PDVSA en Chuao, La Floresta y Los Chaguaramos para marchar en apoyo de los empleados despedidos de PDVSA y entregar a la Mesa de Negociación y Acuerdos la carta de respaldo a los trabajadores de la petrolera estatal, con 2,7 millones de firmas recogidas durante El Firmazo del último domingo.
- DOMINGO 9** Más de 40 mil ciclistas se concentran en la plaza Francia de Altamira, desde donde parten en un recorrido de 18 km para manifestar su apoyo a los empleados de la industria petrolera.
- LUNES 10** Cerca de 2 mil empleados de la empresa Fospuca paralizan sus labores, dejando de recoger mil toneladas de basura en 12 parroquias de la zona este del municipio Libertador, en reclamo del pago de deudas salariales, cestatickets y la reanudación de la tarjeta del seguro.
- Unos 6 mil trabajadores de 10 hospitales metropolitanos se declaran en paro indefinido hasta que se les pague todo lo que se les debe en concepto de compromisos contractuales desde hace 2 años.
- VIERNES 14** Circa 1.180 internos de la Cárcel Nacional de Maracaibo, Sabaneta, inician una huelga de hambre por la inexistencia de alimentos en los depósitos y la carencia de recursos económicos por parte de la dirección del penal para adquirirlos.
- SÁBADO 15** Como parte de las protestas organizadas alrededor del mundo en contra de una guerra en Irak se realiza una movilización encabezada por jóvenes desnudos por las calles de Caracas hasta el Hotel Meliá, en la que se hace un llamado para evitar la guerra y abogar por el respeto a la soberanía del pueblo iraquí.
- MARTES 18** El gobierno y la CD suscriben luego de 102 días y 43 sesiones de trabajo de la Mesa de Negociación su primer acuerdo formal: la Declaración contra la Violencia, por la Paz y la Democracia.

Los trabajadores de los municipios Camatagua, San Sebastián, San Casimiro y Urdaneta, junto con los respectivos alcaldes, cierran durante 7 hs la carretera que comunica el sur de Aragua con el oriente del país en protesta porque desde 2001 no reciben los recursos que estipula la Constitución.

Unidades de transporte colectivo urbano y extraurbano bloquean los 4 puntos cardinales de Valencia, capital de Carabobo, en protesta por el incumplimiento del suministro a las estaciones de servicio que fueron destinadas especialmente para el sector por la 41 Brigada y Guarnición Militar de Valencia.

MARTES 25 Procesados y penados de 6 cárceles del país se declaran en huelga de hambre en protesta por la decisión del gobierno de centralizar los presupuestos del sistema penitenciario, lo cual genera deudas con los proveedores y escasez de comida en las prisiones. También denuncian la falta total de atención médica, los retrasos en los traslados a tribunales y maltratos a sus familiares de parte de la GN. Además exigen la presencia inmediata de las autoridades del Ministerio del Interior y Justicia, Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial y de representantes de los medios de comunicación, amenazando con convertir la protesta en una huelga de sangre.

MIÉRCOLES 26 La oposición realiza una marcha desde la sede de PDVSA Chuao hasta el edificio de la CTV en la Candelaria en apoyo a Carlos Fernández, presidente de FEDECAMARAS, quien se encuentra con arresto domiciliario imputado por los delitos de rebelión civil e instigación a delinquir; a Carlos Ortega, máximo dirigente de la CTV, actualmente en la clandestinidad; y a los 7 gerentes despedidos de PDVSA.

JUEVES 27 Profesores y estudiantes de la UCV recorren todas las facultades y se concentran en la plaza del Rectorado para marchar hasta la sede del Ministerio de Educación Superior y la Oficina de Planificación del Sector Universitario, exigiendo la autonomía universitaria y manifestando su descontento por la intervención administrativa y el atraso en la entrega de recursos para el funcionamiento de las instituciones públicas.

MARZO

DOMINGO 2 Más de 5 mil ciclistas y motorizados inician una marcha que parte de la sede de PDVSA Chuao y termina en la embajada de Estados Unidos, convocada por la organización Rueda Libre y la CD para condenar los actos terroristas y la persecución política.

JUEVES 6 Después de que el ministro del Interior y Justicia, Lucas Rincón Romero, los visitara e hiciera varias promesas, entre las que está la de terminar con los

retrasos procesales en tribunales, los presos de las cárceles de La Planta, El Rodeo y Yare suspenden la huelga de hambre que mantenían desde hace 9 días.

VIERNES 7 Un grupo de 75 reos de la cárcel de Carúpano se flagelan, dando así inicio a una huelga de sangre en protesta por las precarias condiciones sanitarias y alimentarias y reclamando la agilización de los procesos judiciales.

VIERNES 14 En una asamblea en la que participan los representantes de 65 líneas de transporte público afiliadas a la Cooperativa de Transporte Público, Central Unica de Autos Libres y por Puestos, Federación Nacional de Trabajadores del Transporte (FEDETRANSPORTE) y la Cámara Nacional de Transporte, los transportistas de la rutas urbanas y suburbanas de la ciudad capital acuerdan declararse en "Hora 0" para presionar por la derogación del decreto que congela las tarifas del servicio.

MIÉRCOLES 19 Los líderes de la revuelta del Internado Judicial de Barcelona liberan a un grupo de 280 visitantes que estaban retenidos desde el domingo 9 de marzo luego de que se otorgaran durante el conflicto 59 beneficios de libertad y de negociar con el jefe del destacamento 75 de la GN, con el director del penal y con el fiscal penitenciario que tras la liberación de los familiares y visitantes no habría represalias por parte de la GN ni traslados de reos.

JUEVES 20 La Sala 7ª de la Corte de Apelaciones concede la libertad plena al presidente de FEDECAMARAS, Carlos Fernández, en el juicio que se le sigue por los presuntos delitos de rebelión civil e instigación a delinquir.

MARTES 25 Miembros de la comunidad musulmana, partidarios del presidente Chávez y activistas pacifistas se concentran en la Plaza Venezuela de Caracas como gesto de repudio a las acciones militares que las fuerzas angloamericanas llevan adelante en territorio iraquí. En Maracaibo, más de mil personas de la comunidad árabe y dirigentes del MVR marchan hasta el Consulado de España y queman las banderas de ese país y de Estados Unidos.

Médicos, enfermeras y personal obrero del hospital Pariata, junto con docentes y todos los empleados del gobierno regional, cierran la Av. Soublette de Maiquetía para presionar a la gobernación de Vargas para que les cancelen sus salarios adeudados y demás derechos contractuales.

LUNES 31 Más de 2 mil conductores de las 7 líneas de transporte colectivo que operan en las rutas troncales de La Vega cierran por varias horas la redoma de La India en protesta por la inseguridad que se ha incrementado en las últimas horas.

Dos grupos de alrededor de 500 desempleados que aspiran a los puestos en las Unidades de Mantenimiento de la gobernación y el Plan Bolívar del

Aeropuerto de Maiquetía protestan porque no salieron seleccionados en las listas publicadas, cortando la Av. Intercomunal de Macuto y la calle interna del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

ABRIL

MARTES 1 Centenares de estudiantes de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho cierran la Av. Intercomunal de Barcelona, frente a la sede de la facultad de Derecho, para protestar contra el cobro compulsivo de las mensualidades y la prohibición de entrar a clases para quienes estén atrasados en sus pagos.

Más de 2 mil conductores de 17 líneas de rutas urbanas del municipio Libertador realizan una caravana contra la inseguridad hasta el Parque Central de Caracas, donde una comisión de conductores entrega un pliego de peticiones a las autoridades del Ministerio de Infraestructura. Los choferes protestan también contra los altos índices de desempleo, las condiciones de vialidad en la ciudad, el uso de los tickets estudiantiles, las invasiones de rutas y el cobro exagerado de impuestos municipales, al tiempo que demandan la implantación de sistemas de seguridad social y de tarifas ajustadas a los costos operacionales.

MIÉRCOLES 2 La presidencia de PDVSA anuncia oficialmente el despido de 828 empleados más, con lo cual el número de cesantes asciende a cerca del 46% del total de empleados que tenía la empresa estatal antes de iniciarse el paro cívico convocado por la CD, FEDECAMARAS y la CTV.

SÁBADO 5 Con un total de 56 federaciones nacionales y regionales y 14 sindicatos nacionales afectos al gobierno del presidente Hugo Chávez se crea la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNTV), agrupando de esta manera a cerca de 1 millón de trabajadores.

LUNES 7 Médicos, odontólogos, bioanalistas, farmacéuticos, psicólogos clínicos, nutricionistas, profesores y estudiantes de la UCV y del hospital Universitario de Caracas marchan hasta la plaza del rectorado en protesta por la deuda que mantiene el gobierno nacional con ambas instituciones y que asciende a 100 mil millones de bolívares.

JUEVES 10 Los médicos de los hospitales del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) del estado Lara inician un paro indefinido, atendiendo sólo las emergencias. Argumentan que prestan atención en condiciones de guerra por falta de materiales y equipos y que sufren una retención del 40% de sus salarios al no cobrar la bonificación.

VIERNES 11 La Mesa de Negociación y Acuerdos da a conocer un documento de 22 puntos en el que oficialismo y oposición manifiestan, entre otras cosas, que la

solución definitiva de la crisis debe pasar por la realización del referéndum revocatorio a activarse a partir del 19 de agosto.

- DOMINGO 13** Miles de partidarios del presidente copan la Av. Bolívar de Caracas para asistir al acto que recuerda el aniversario del 13 de abril de 2002, cuando terminó el interinato de Pedro Carmona y retomó el poder Hugo Chávez. Tras el acto, algunos simpatizantes oficialistas emboscan y hieren a 3 funcionarios de la Policía Metropolitana (PM).
- MARTES 22** Los presos de la cárcel del Rodeo I realizan un motín con un saldo de 2 reclusos muertos y 22 heridos para presionar a las autoridades y lograr que sus compañeros trasladados a Yare II y luego a la Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de los Morros, y a Puente Ayala, en Barcelona, sean devueltos al penal.
- MIÉRCOLES 23** Más de 700 conductores de las 72 líneas que operan en el Municipio Sucre paralizan sus actividades en demanda de acciones gubernamentales concretas que pongan un freno definitivo a la criminalidad en esa jurisdicción del área metropolitana de Caracas.
- DOMINGO 27** Internos del sector La Torre de la cárcel del Rodeo en Guatire, estado Miranda, de los pabellones 1, 2 y 3 del internado Judicial Carabobo y del Internado Judicial de Falcón, en Coro, entre otros centros carcelarios del país, inician una protesta a nivel nacional junto con sus familiares y allegados, en la que éstos se autosequestran reclamando la presencia de autoridades para que revisen los expedientes y otorguen los beneficios correspondientes, celeridad en los retardos procesales, que se decrete la emergencia carcelaria y que cesen los traslados arbitrarios. Además exigen que se termine la falta de recursos para el traslado de los internos a los tribunales y la carencia de alimentos y medicinas. En algunos casos piden también la remoción de las autoridades de los internados.

GLOSARIO DE SIGLAS

AD	Acción Democrática
BCV	Banco Central de Venezuela
CD	Coordinadora Democrática
CNE	Consejo Nacional Electoral
COPEI	Comité de Organización Política Electoral Independiente
CTV	Confederación de Trabajadores de Venezuela
FCU	Federación de Centros Universitarios
FEDECAMARAS	Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción
FEDETRANSPORTE	Federación Nacional de Trabajadores del Transporte
FETRABANCA	Federación de Trabajadores Bancarios

GN	Guardia Nacional
IVSS	Instituto Venezolano de Seguros Sociales
MVR	Movimiento V República
OEA	Organización de Estados Americanos
PDVSA	Petróleos de Venezuela SA
PM	Policía Metropolitana
SUDEBAN	Superintendencia de Bancos
TSJ	Tribunal Supremo de Justicia
UCV	Universidad Central de Venezuela
UNTV	Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.
Fuentes: diarios El Nacional, El Universal y Últimas Noticias.*

Región Norte

De rústicas revueltas

Armando Bartra*

* *Director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya A.C. Miembro del Comité Editorial de la revista Chiapas.*

Invierno caliente

Cuando menos lo esperábamos nos echaron montón. Los daban por muertos, pero el último viernes de enero los rústicos se saltaron las trancas y en número de cien mil tomaron el centro de la capital. Venían de todos los rumbos: desde el sur profundo del “vos” y el Comiteco, hasta el norte en vilo del “usted” y el Sotol, pasando por el tuteo pulquero del altiplano. En la marcha se entreveraban la queda sutileza maya, la alzada prestancia zapoteca y el sobrado cosmopolitismo nahuatl con la ruda franqueza hispano-chichimeca de los hombres del norte y el bullanguero desparpajo africano de los costeños. La fiesta campirana de enero documentó la prodigiosa diversidad fisonómica, lingüística y de indumentaria de los labriegos, al tiempo que testimoniaba su cólera unánime. Fue la airada protesta del mundo rural, primer damnificado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y víctima propiciatoria de nuestro presunto ingreso al primer mundo.

La mayoría había viajado varios días desde su ranchería o paraje: cientos o miles de kilómetros en ruta para trotar por cinco horas al grito de "¡El campo no aguanta más!". Y en verdad el agro tocó fondo: murmuran las mazorcas del maíz, conspira la erizada nopalera, las huertas remontadas se amotinan. Se secó la paciencia de la patria profunda.

En los últimos dos años arreciaron las muestras de hartazgo rural: protestas de maiceros y frijoleros golpeados por la entrada de granos estadounidenses a precios de *dumping*, de cañeros a quienes los industriales del azúcar no pagan la materia prima alegando que el dulce no tiene precio porque Estados Unidos no compra lo prometido y por la competencia de la fructosa elaborada con maíz amarillo de importación, de piñeros arruinados por la entrada al país de fruta en lata más barata que la fresca, de cafetaleros bocabajeados por las ínfimas cotizaciones del aromático en la bolsa de Nueva York. Pero a fines de 2002 tres chispas sincronizadas incendiaron la pradera: el 1ro de enero del año siguiente se desgravarían casi todas las importaciones agroalimentarias de los países del TLCAN, al tiempo que Estados Unidos promulgaba una nueva Ley Agrícola que incrementa en alrededor de 80% sus subsidios al campo y el presidente Fox mandaba al legislativo para su aprobación un presupuesto agropecuario 2003 inferior en 7%, en términos reales, al de 2002.

Y ante la triple amenaza, los que iban cada quién para su santo se percataron de que desbalagados marchaban al despeñadero, y optaron por hermanarse en torno a una plataforma común, *Seis propuestas para la salvación y revalorización del campo mexicano*, cuyo corazón es la moratoria al capítulo agropecuario del TLCAN y una nueva política rural, pero que también demanda más presupuesto para el campo, adecuado financiamiento, seguridad e inocuidad alimentarias y reconocimiento de los derechos de los pueblos indios.

De arranque se suman doce agrupaciones, entre coordinadoras nacionales multifrentistas, organizaciones regio-

"Y todos eran pobres: unos pobres viejos y otros nuevos pobres, pero todos arruinados por un sistema excluyente y emparejador que acabó con las ilusiones de la enorme mayoría de los campesinos medios; de los llamados "transicionales", que en verdad transitaron, pero a las filas de la miseria rural."

nales y convergencias sectoriales de cafetaleros, cerealeros, silvicultores y organismos de crédito popular. El 2 de diciembre, bajo el lema *El campo no aguanta más*, inician movilizaciones a las que se incorporan de inmediato otras dos organizaciones, entre ellas una de deudores llamada El Barzón. Ese mismo día se realiza un mitin, y al siguiente tres mil campesinos exponen sus propuestas en el Palacio Legislativo, donde dejan un simbólico corral con veinte vacas. De ahí se encaminan a la Embajada de los Estados Unidos, país cuyas políticas comerciales causan mortandad rural. Una semana después miles marchan de nuevo por calles de la capital, y al atardecer los jinetes de El Barzón irrumpen al galope en las instalaciones del Palacio Legislativo. Simbólica carga que fue en realidad innecesaria, pues ocho días antes los diputados se habían mostrado bien dispuestos ante sus demandas, y la incipiente convergencia tenía fuerza sobrada para abrirse paso en la agenda nacional.

Las jornadas de diciembre logran que los diputados incrementen en más de trece mil millones de pesos el mermado presupuesto agropecuario propuesto por Fox, y consiguen acuerdos para reducir los costos del combustible y la energía eléctrica empleados en el campo. En cambio, los senadores, a quienes incumbe la política exterior, que ante el requerimiento de los campesinos habían acordado demandar al Poder Ejecutivo la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN, regulan a la postre cediendo a las presiones combinadas de los enviados de la presidencia y los personeros del gobierno estadounidense.

Así las cosas, la demanda central sigue en vilo, y el 2003 empieza a tambor batiente: el 1ro de enero veinte mil indígenas zapatistas reivindican en Chiapas la vigencia de su causa proclamada nueve años antes, mientras que en el otro extremo de nuestra geografía, en Chihuahua, dirigentes del movimiento que ya se llama *Movimiento el campo no aguanta más* (MCAM) inauguran la campaña *Salvemos al campo para salvar a México* cerrando simbólicamente el puente internacional de Ciudad Juárez, por donde entran importaciones ruinosas. Días después, dirigentes y militantes inician una huelga de hambre en el Ángel de la Independencia de la ciudad de México, parte de una intensa campaña de información.

La fuerza de las acciones hace que desde diciembre el Congreso Agrario Permanente (CAP), una devaluada coordinación paragubernamental inducida en 1989 por el entonces presidente Carlos Salinas, trate de montarse en el movimiento. Y lo mismo la Confederación Nacional Campesina (CNC), pilar agrario de la revolución hecha gobierno, de capa caída desde que el PAN le ganara al PRI la presidencia de la República.

El 6 de enero, al iniciarse el diálogo con el gobierno, el MCAM entra en terreno minado. El jefe del Ejecutivo y sus secretarios de Estado ofrecen promesas vacuas y morralla pre-

supuestal, emprenden campañas mediáticas para engatusar a la opinión pública y tratan de quebrar la incipiente alianza campesina, mientras del lado gremial la CNC intenta negociaciones bilaterales y la fracción priísta del CAP oferta con descuento sus devaluados servicios de esquirol. Pero los tiempos han cambiado: el nuevo gobierno no dispone como los anteriores de solícitas clientelas rurales, el corporativismo aún no logra acomodarse a las nuevas circunstancias, y esta vez los campesinos están de veras enojados. Con todo, para fines de enero el proceso se empantana, pues una unilateral y estrecha propuesta gubernamental de diálogo amenaza con hacer un desangelado parto de los montes del promisorio movimiento.

Para destrabarlo, el MCAM llama a una gran marcha al Zócalo capitalino el 31 de enero, cuya convocatoria testimonia la compleja coyuntura mexicana: en primer lugar firma el MCAM, seguido por El Barzón y el CAP. Sin embargo, también figuran dos grandes convergencias obreras: la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), donde se alinea el poderoso Sindicato de Telefonistas, y el Frente Sindical Mexicano (FSM), animado por el combativo Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Sintomáticamente, la decadente pero aún poderosa CNC no firma el llamado, alegando que no hace falta marchar pues ya hay acuerdo con el gobierno para conversar. En realidad, la CNC, acostumbrada a la negociación en corto y el chantaje político, se resiste a entrar en el terreno societario del MCAM. Pero todo anuncia una gran asistencia, y a última hora la CNC tiene que sumarse para no perder figura e interlocución.

Con sus cien mil participantes, que emplean cinco horas en entrar todos al Zócalo, la marcha fue la mayor movilización campesina de la posrevolución. Protagonizada por los nutridos contingentes de la veintena de grandes organizaciones convocantes, contó también con las módicas pero entusiastas representaciones de centenares de agrupaciones estatales, regionales y locales. Había productores comerciales y autoconsuntivos; exportadores y de mercado interno; trabajadores del surco, de la huerta y del bosque; organizaciones de crédito popular y deudores organizados; indios y mestizos; hombres y mujeres. Y todos eran pobres: unos pobres viejos y otros nuevos pobres, pero todos arruinados por un sistema excluyente y emparejador que acabó con las ilusiones de la enorme mayoría de los campesinos medios; de los llamados “transicionales”, que en verdad transitaron, pero a las filas de la miseria rural. El inicuo capítulo agropecuario del TLCAN dotaba de rostro al enemigo, pero los agravios de los marchantes remitían a la política agraria y agrícola, al estragado sistema rural en su conjunto y en última instancia al orden social marginante y empobrecedor que a todos atosiga.

La jornada del 31 es el punto más alto de las jornadas rurales iniciadas dos meses antes. En sesenta días los campesinos pasan del archivo muerto de la historia al horario AAA de las televisoras y al centro de la agenda nacional. Pero no sólo ganan la batalla de la opi-

nión pública. También obligan al gobierno rejego a negociar con seriedad, construyendo una inusitada convergencia donde sólo falta el movimiento autonomista indígena, que desgastado por sus infructuosas campañas para reformar la Constitución declina por el momento iniciar junto con los campesinos una nueva lucha con el mismo objetivo.

En febrero arranca la segunda etapa del movimiento, cuyo hilo conductor son ocho mesas de trabajo públicas y sucesivas donde representantes de las organizaciones campesinas, del gobierno federal, y expertos, abordan cuestiones comerciales, presupuestales, financieras, sociales, agrarias, medioambientales, legislativas y de gobernabilidad, y englobándolo todo debaten sobre el papel del campo en el proyecto de nación. Las mesas sirven para que las organizaciones sistematicen más sus propuestas y mantienen el tema rural en los medios de comunicación, pero no avanzan en la construcción de consensos, pues los secretarios de estado se limitan a discursar, evadir el debate y escapar al linchamiento. Además son anti-climáticas y desgastantes para los campesinos, quienes en dos semanas pierden el impulso y el ritmo que les habían dado las movilizaciones.

Pero aún en esta pastosa etapa hay dos logros notables: el 27 de marzo, el MCAM, la UNT, el CAP, El Barzón y otras fuerzas constituyen una inédita convergencia obrero-campesina, el "Frente sindical-campesino y social para impulsar la soberanía alimentaria, el empleo, la vida digna y el desarrollo sustentable"; y en el mismo lapso el MCAM, la CNC, el CAP y El Barzón consensúan una propuesta común de Acuerdo Nacional para el Campo, plausible no sólo por su contenido sino porque días antes una plataforma compartida por las organizaciones campesinas independientes y la ex oficialista CNC hubiera parecido cosa de locos. Robustecen igualmente al movimiento las tomas de posición favorables de la iglesia católica, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), algunos legisladores, y los mandatarios estatales agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores.

El movimiento entra al *spring* final fuera de ritmo y con mermadas energías. Sin embargo, en tres meses de desgastante activismo acumuló fuerzas y respaldos que le darán alguna ventaja a la hora de negociar en corto los términos del Pacto Nacional para el Campo. La ponencia del MCAM a la Mesa sobre asuntos comerciales lo resume bien: "2,2 millones de mexicanos se pronunciaron a favor (de renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN) en la Consulta sobre Prioridades Nacionales realizada el pasado 19 y 20 de noviembre. Cien mil votos a mano alzada se pronunciaron por la renegociación del TLC en la histórica marcha campesina del 31 de enero. La totalidad de las auténticas organizaciones campesinas y de productores agropecuarios y forestales del país hoy se encuentran unificadas por primera vez en torno a esta demanda central. 82% de los mexicanos opina que el gobierno... debe buscar la renegociación del apartado agropecuario del TLC, de acuerdo con la encuesta de GEA-ISA... de febrero pasado".

Pero el de Fox es un gobierno de derecha que compró íntegro y copeteado el proyecto neoliberal, de modo que la negociación es cuesta arriba: el secretario de la Gobernación actúa de "policía bueno", pues son inminentes las elecciones para renovar la diputación federal y le urge un acuerdo lucidor, mientras que los de Economía y Agricultura se desempeñan como los golpeadores y fanáticos del libre mercado que son. En auxilio de los negociadores campesinos llega el aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, y el 10 de abril el Frente Sindical Campesino y Social realiza una marcha capitalina con unos veinticinco mil manifestantes, en su mayoría obreros: telefonistas, tranviarios, trabajadores universitarios, del Seguro Social y del Monte de Piedad y pilotos aviadores, acción que esta vez tiene réplicas en los diferentes estados de la República dado que desplazarse masivamente al DF es algo que los campesinos no pueden hacer todos los días. Así, decenas de miles marchan en Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Chihuahua, Chiapas y otros estados. Al mismo tiempo los telefonistas realizan un paro nacional solidario, y el discurso de su sempiterno líder, Hernández Juárez, expresa con claridad el sentido de la convergencia entre trabajadores urbanos y rurales: "Si la sociedad no se moviliza y no está dispuesta a presionar a este gobierno, cosas peores pueden ocurrir para el sector laboral... ¡Viva la unidad obrera y campesina!"

Menos de una semana después, la comisión redactora campesino-gubernamental arriba a un documento de consenso para el Acuerdo Nacional; texto profuso, confuso y difuso, que el presidente de la República deberá firmar el 28 de abril, pero que previamente las organizaciones llevan a consulta de sus bases. Como era de suponer, CNC lo aprueba de buen grado, mientras que el CAP y El Barzón lo ven apenas como un punto de partida, pero signan; en cuanto a las doce organizaciones del MCAM, ocho firman y cuatro no, pero unas y otras respetan las decisiones de las bases y coinciden en seguir luchando juntas por el programa común, pues demandas fundamentales como los derechos de los pueblos indios, la revisión del TLCAN, el artículo 27 constitucional y una verdadera política rural de estado comprometida con la soberanía alimentaria y los campesinos no están en el acuerdo.

Así, la firma del documento en Palacio Nacional resulta un acto menos lucido de lo deseado por Fox, pues mientras el presidente echa las campanas al vuelo —"estamos haciendo una reforma estructural"— los campesinos abuchean al secretario de Agricultura y sus discursos coinciden en lo "limitado" del acuerdo, anunciando nuevas movilizaciones por las demandas de fondo. Y el grito unánime: "¡Zapata vive, la lucha sigue!"

En ciento cuarenta días de intenso trajín los campesinos consiguieron lo que a los pueblos indios les ha costado una guerra que aún no termina. Lograron ser mirados, no sólo vistos de reojo como parte del paisaje, y se incorporó a los sentimientos de la nación un nuevo apotegma: *la salvación del campo es la salvación de México*. En este contexto

“En ciento cuarenta días de intenso trajín los campesinos consiguieron lo que a los pueblos indios les ha costado una guerra que aún no termina. Lograron ser mirados, no sólo vistos de reojo como parte del paisaje...”

sentaron al gobierno a negociar una agenda campesina que, al poner en cuestión el destino del agro, implícitamente pone a debate un nuevo proyecto de nación.

Periciales de un agrocidio

¿Pero quién mató al campo mexicano? Desde principios de los '80, cuando arrancan las políticas neoliberales de “ajuste estructural”, México deja de crecer en términos reales, disminuye porcentualmente el empleo en el sector formal (sólo la maquila crea nuevos puestos de trabajo), y se polariza dramáticamente el ingreso debido a mecanismos de exclusión que engrosan la pobreza extrema. Hay también intensos procesos de desindustrialización y desnacionalización del conjunto de nuestra economía. Pero el sector más dañado es la agricultura, y dentro de ella la producción de mercado interno y los campesinos llevan la peor parte.

Vamos para dos décadas con déficit en la balanza comercial agroalimentaria –salvo en 1986, 1987 y 1995, cuando hay fuertes devaluaciones de la moneda–, saldo negativo que en los nueve años del TLCAN arroja un promedio anual de 1.200 millones de dólares. Así, pasamos de ser autosuficientes y exportadores de alimentos básicos a importar el 40% de los granos y oleaginosas que consumimos. Por ello, en los últimos ocho años se han perdido un millón ochocientos mil empleos agrícolas y se disparó la migración rural: la de temporada dirigida a los campos irrigados, pero también a las ciudades y sobre todo a los Estados Unidos. En el arranque del milenio tenemos veintidós millones de compatriotas en EE.UU., de los cuales poco menos de la mitad nació en México y la mitad de esa mitad es indocumentada.

Los campesinos siempre sufrieron penurias económicas, pero hoy son miserables. Mientras que en las ciudades 84% de los mexicanos son pobres y 35% muy pobres, en el campo 98% son pobres y 81% extremadamente

pobres. Así, con un cuarto de la población total, el campo concentra cuatro quintas partes de la miseria nacional. Esto también significa que si en las ciudades los pobres no indigentes abarcan cerca de la mitad de la población, en el campo son menos del 17%, es decir que el *agrocidio* de los últimos tres lustros diezmó a las capas medias rurales.

En estas condiciones, la sobrevivencia de las familias campesinas depende cada vez menos de la producción agropecuaria comercial y cada vez más del autoconsumo, el trabajo a jornal, las remesas en dólares de los migrados y los subsidios gubernamentales. En particular, las remesas crecieron 1.300% en once años y hoy son las mayores del mundo sólo superadas por las que recibe la India. Su monto anual, de diez mil millones de dólares en 2002, únicamente lo rebasan el ingreso petrolero, el de la maquila y el de las inversiones extranjeras directas. Y dado que el valor total de las importaciones agroalimentarias mexicanas es de once millones de dólares, y la mayor parte proviene de EE.UU., a uno se le ocurre que el dinero que envían los trasterrados todos los años, todos los años lo enviamos de regreso para comprar comida; unos alimentos que si no se hubieran ido, ellos mismos estarían produciendo aquí. Se dirá que el intercambio es intrínsecamente virtuoso, que así la comida sale más barata, que allá el trabajo de los mexicanos es más productivo... Quizá, pero en la operación perdimos la soberanía alimentaria, extraviamos la soberanía laboral y se degradó severamente la convivencia en las regiones expulsoras. Para algunos, la dispareja integración con el norte sigue siendo un buen negocio. Para los campesinos, no.

Cuando empezó la negociación del TLCAN, México ya había eliminado precios de garantía y suprimido permisos de importación para la mayoría de los productos agropecuarios, de modo que para regatear sólo nos restaban ciertos subsidios agropecuarios, y en cuanto a nuestro mercado interno, la apertura a las importaciones de maíz, una de las pocas cosechas que aún se protegían con aranceles y precios de garantía. Y no era poca cosa, pues el maíz es el principal producto agrícola, tanto en México como en Estados Unidos. Pero siendo importante para ambos, la sensibilidad es muy distinta, pues mientras que para nosotros es un bien alimentario directo, generalizado y básico, para ellos es insumo forrajero e industrial.

A principios de los '90 todos los pronósticos coinciden en los impactos agropecuarios que tendría el tratado: reducción de la tasa de crecimiento de la producción agropecuaria mexicana, incremento absoluto y relativo de las importaciones agropecuarias, progresivo déficit nacional en bienes de consumo básico manifiesto en el creciente saldo rojo de la balanza alimentaria, estancamiento absoluto y contracción relativa de la producción cerealera, pérdida abrupta o paulatina de puestos de trabajo en la agricultura, aumento de la migración rural a las ciudades y a los Estados Unidos, y mayor desigualdad, polarización y concentración del ingreso rural. El propio Fondo Monetario Internacional, garganta profunda del salinismo, anunciaba en un Boletín del 10 de agos-

to de 1992 que el libre comercio con Estados Unidos significaría para nosotros el retiro del cultivo de más de diez millones de hectáreas y un éxodo rural de alrededor de quince millones de mexicanos. Así pues, el asesinato del campo mexicano fue un plan con maña; un *agrocidio* minuciosamente calculado.

Por eso, en el arranque del milenio los rústicos se rebelan. Por eso el MCAM demanda un cambio de rumbo y la “exclusión definitiva del maíz y frijol del proceso de liberalización comercial del TLC”. Y argumenta: “razones sobran: seguridad nacional, soberanía alimentaria, preservación del empleo rural... respeto a la diversidad étnica, social y cultural de la nación; contribución multifuncional de la producción maicera y frijolera y, por las asimetrías insalvables entre los sistemas de producción, financiamiento, subsidios, investigación, comercialización, transporte, etc. de México, Estados Unidos y Canadá”.

Veamos algunas de las asimetrías: con 7 veces más tierras agrícolas y una productividad por trabajador 19 veces mayor que la nuestra, el vecino del Norte es un gran exportador de sus cosechas, cuya balanza comercial agroalimentaria arroja un superávit del orden de los 12 mil millones de dólares, mientras que nosotros tenemos un déficit por el mismo concepto de 1,7 miles de millones. En el caso del maíz, los rendimientos medios estadounidenses son de 8,5 toneladas por hectárea, mientras que los nuestros son de 2,5; y si a esta productividad técnica casi cuatro veces mayor le agregamos que gracias a los subsidios ellos exportan a precios 20% por debajo de los costos de producción, no debe extrañarnos que en los años del TLCAN la cosecha maicera nacional se haya estancado en 18 millones de toneladas, mientras que importamos del Norte un promedio anual de 5 mil. Y con la nueva Ley de Seguridad e Inversión Rural estadounidense de 2002, la iniquidad se profundizará, pues supone un subsidio adicional del orden de los 250 mil millones de dólares –80% más que los previstos por la Farm Bill de 1996– destinados principalmente al arroz, algodón, trigo, cebada y maíz.

Corte de caja

El primero de enero de 1994, al entrar en operación el TLCAN, el EZLN se levantó en armas contra un tratado emblema de la injusticia que ofende a los mexicanos. Nueve años después, cuando los alzados chiapanecos se han identificado principalmente con la causa autonomista de los pueblos indios, el movimiento campesino retoma la bandera inicial: la lucha contra una globalización salvaje cuyos primeros damnificados son los indios y los pequeños agricultores.

El nuevo milenio es crucial para los campesinos: o debilitamiento rápido, irreversible y final, o acciones heroicas propias de trances extremos. Al desmantelamiento de los agraristas, de

capa caída desde los '80, se suman en los '90 la ruina, descapitalización, migración, envejecimiento, desilusión, descomposición social y erosión organizativa que aquejan a unas agrupaciones productivas cuya presunta "mayoría de edad" resultó acta de defunción.

Pero las siete plagas no acabaron del todo con los campesinos, quienes en la inminencia de la extinción han decidido vender cara su vida.

La inesperada energía que despliega un sector largamente sangrado proviene de que las diferencias de gremio, proyecto, táctica o filiación política, que por décadas separaron a los tomatierros de los productivos, a los viables de los desahuciados, a los autoconsumitivos de los mercantiles, a los del mercado interno de los exportadores, a los indios de los mestizos, a los autónomos de los políticamente afiliados, pasaron a segundo plano frente a un modelo *agrocida* que a todos vapulea. Y es que la exclusión es emparejadora, diluye las diferencias, unifica a los diversos.

La sorpresiva amplitud de las recientes jornadas se explica también porque la veinteañera promesa neoliberal de que el mercado nos haría libres, justos y democráticos resultó falaz.

Hoy están arruinados los "carentes de potencial", condenados de arranque, pero también los presuntamente "viables". Más aún, a la hora de la verdad, resultó que los más pobres, que practican el autoabastecimiento, resistieron mejor el vendaval que los puramente comerciales. Por si fuera poco, la abrupta apertura comercial devastó también a la micro, pequeña y mediana industria, y si bien los sectores trasnacionalizados se beneficiaron del vuelco, el conjunto de la economía no creció. Así, la presunta entrada al "Primer Mundo" vía globalización norteaña ya no tiene credibilidad, ni en el campo ni en ninguna parte.

El desconcierto político con que arrancó el milenio también favorece al movimiento. El viejo régimen priísta ejercía un eficiente control corporativo sobre los campesinos que se diluyó con la administración de Fox, un gobierno derechista que retoma la política neoliberal del PRI pero carece de los operadores, amarres y fidelidades agrarias del viejo régimen. Así, la CNC y los priístas del CAP aún no habían logrado un acomodo satisfactorio con las debutantes autoridades agrarias, lo que propició su alianza circunstancial con el movimiento campesino. Sin duda lo que buscan los priístas es restaurar el viejo clientelismo, pero para lograrlo se han tenido que embarcar en una reforma de los paradigmas, hábitos y políticas agrarias del estado que ellos mismos ayudaron a construir. ¿Hasta cuándo?

Si por su despliegue y composición la actual lucha campesina es la más extensa e incluyente de las últimas décadas, por su contenido es el cuestionamiento social más directo y explícito que se haya dado al modelo neoliberal que inspira las políticas públicas desde hace veinte años; mentís que —bien visto— se extiende al absolutismo mercantil que inspira la globa-



© Marcelo Rodríguez

lización salvaje. Y es que los pequeños y medianos agricultores son los mayores perdedores de la globalización. Ciertamente el TLCAN no tiene toda la culpa; pero en su articulado está el epitafio de los campesinos, de modo que al confrontarse con la letra y el espíritu del tratado, el movimiento retoma la declaración de guerra al tratado comercial con que se alzarón hace nueve años los indios chiapanecos. Cuestionamiento que no se queda en asuntos de mercadeo, pues al ser abismal nuestra asimetría con el Norte, los campesinos y la agricultura de por acá no son defendibles sin apelar sus funciones sociales, ambientales y culturales; sin reivindicar la polifonía de un agro que cosecha café pero también aire, tierra y agua, que produce maíz pero

igualmente seguridad y soberanía alimentarias, que genera materias primas al tiempo que empleos, que es un sector de la producción económica pero también un reproductor de cultura, de identidad, de solidaridades. Y admitir esto es reconocer los límites infranqueables y terminales del absolutismo mercantil, un sistema desafinado de las diversidades humanas y ambientales, donde lo que no produce ganancia no tiene valor.

Algunos piensan que el espíritu de la época está en las luchas reactivas e informales que se confrontan desde fuera con el orden económico, social o político. Batallas espectaculares pero efímeras que brillan, concitan extensas solidaridades y se apagan al enfrascarse sus animadores en trajines menos vistosos. Las jornadas campesinas han sido un mentís a tal predicción. Como el movimiento indígena de los últimos años, la presente lucha es una "protesta con propuesta", como dicen sus animadores. Así como el

Congreso Nacional Indígena dispone de un elaborado planteamiento autonómico y busca su reconocimiento constitucional, las organizaciones campesinas saben bien lo que quieren y sus planteos programáticos son más consistentes, específicos y argumentados que las recetas de los neófitos burócratas agrarios que nos aquejan. Y si hasta diciembre de 2002 cada sector y cada organización tenían sus propias demandas y propuestas particulares, hoy se han articulado en un consistente programa unitario. Un planteo comprehensivo y estratégico que permitió romper con los habituales bilateralismos divisionistas y emprender una negociación multilateral con el gobierno.

Las recientes jornadas campesinas son valiosas en sí mismas, pero también porque le desbrozan el camino a la futura movilización de contingentes obreros. Fuerzas que ya se desplegaron en las acciones solidarias con los campesinos pero tienen su propia agenda clasista y nacional: en primer lugar detener la reforma patronal y corporativa a la Ley Federal del Trabajo, pergeñada por la iniciativa privada, los charros y el gobierno, al tiempo que impulsan un proyecto de ley democratizador y favorable a los asalariados; en segundo lugar, impedir la privatización silenciosa de la producción, distribución y comercialización de electricidad, que es el primer paso en la entrega del petróleo y otros energéticos al capital trasnacional.

En la misma línea de ideas, las rústicas revueltas de 2003 son importantes en el tránsito de resistir las reformas anti-populares y antinacionales del “gobierno del cambio” a impulsar reformas justicieras. Hasta ahora la izquierda social y la izquierda política han logrado detener las iniciativas fiscales, energéticas, laborales y educativas de Vicente Fox. En cambio, el movimiento campesino ha conseguido también formular e impulsar su propia reforma. Una mudanza que no se impondrá de un día para otro, pero avanzará paulatinamente en tanto lo permita la correlación de fuerzas. Reforma en curso y sostenida desde abajo, que desacredita las visiones en el fondo apocalípticas de quienes creen que resistiendo y confrontando desde fuera llegaremos por arte de magia —o por cualquier otra vía— a un vuelco definitivo del sistema.

La lucha campesina ayudó a colocar en la agenda política uno de los temas identificados por la Consulta sobre Prioridades Nacionales que a fines de 2002 impulsaron diversas fuerzas políticas y sociales, y cuya importancia se ratifica ahora, ya no con el peso del voto sino con la contundencia de la movilización. Y esta agenda, sustentada en las opiniones y acciones de una sociedad organizada y participativa, le da sentido democrático y compromiso real a la participación de la izquierda en los inminentes comicios; en particular en los que definirán la composición de la cámara de diputados, pieza clave en las futuras batallas por la reforma del estado. El nuevo pacto para el campo mexicano se tendrá que empujar desde abajo, pero también desde arriba, y es importante que los campesinos amarren compromisos con diputados y senadores progresistas. Pero al mismo tiempo esto obliga a que los partidos de izquierda redefinan su función y, en vez de ver como fines en sí mismos el triunfo en los comicios y la conquista de puestos públicos, los asuman como compromisos programáticos socialmente vigilados.

Costa Rica

[cronología enero-abril 2003]

ENERO

DOMINGO 19 Se realizan las elecciones a alcaldes en 10 cantones del país tras haber sido suspendidas el 1 de diciembre pasado por las inundaciones registradas en esa fecha. El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) obtiene 5 alcaldías, el Partido Liberación Nacional (PLN) alcanza 4, y el Partido Renovación Costarricense (PRC) logra 1. El abstencionismo llega al 75%.

VIERNES 24 La Asociación Sindical de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (ASTRAA) paraliza sus labores en rechazo a las supuestas intenciones de privatizar el servicio de agua del país.

El gobierno decreta el alza de 5.200 pesos costarricenses en el salario de los empleados públicos del país, luego de que fracasaran 3 intentos de negociación con dirigentes sindicales. El incremento se hará efectivo a partir de la primera quincena de marzo con carácter retroactivo al 1 de enero. Las organizaciones sindicales amenazan con utilizar medidas de presión para rechazar el monto y la forma unilateral en que se estableció el aumento.

LUNES 27 La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), la Mesa Nacional Campesina, la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), la Asociación de Lucha Antipetrolera (ADELA) y el Frente Interno de Trabajadores y Trabajadoras (FIT) del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entre otras organizaciones, marchan desde el Parque Nacional hasta las afueras del Hotel Real Intercontinental (San José) para rechazar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA). Allí se llevan adelante las negociaciones que culminarán el próximo viernes. Los manifestantes exigen excluir a algunos sectores del tratado y defienden el monopolio estatal de la energía, las telecomunicaciones, el agua potable, los seguros y la seguridad social.

MIÉRCOLES 29 Más de 14 mil trabajadores nucleados en el FIT del ICE se concentran frente a la sede principal de la institución (Sabana Norte) y marchan hasta la Casa Presidencial en protesta por el tope del 5,9% que impuso el gobierno al crecimiento del gasto en el ICE para este año, por el aumento salarial de 5.200

pesos costarricenses por decreto sin consulta a los sindicatos y para que el gobierno excluya a las telecomunicaciones del CAFTA.

FEBRERO

- LUNES 10** Los representantes del FIT se retiran de la sala de reuniones de la Casa Presidencial tras rechazar las propuesta del gobierno de reducir el presupuesto en 156 millones de pesos, lo cual implica la paralización de proyectos en energía y telecomunicaciones, el despido de 4 mil empleados y el deterioro de los servicios brindados.
- SÁBADO 15** Cientos de personas se concentran frente al Teatro Nacional, pleno centro de San José, para rechazar el eventual ataque de EE.UU. contra Irak.
- DOMINGO 16** Luego de dos semanas de arduas negociaciones, el gobierno, la dirección del ICE y los sindicatos de la entidad llegan a un acuerdo sobre los recortes presupuestarios por ejecutar en el instituto, que establece una posposición de 86 millones de pesos del presupuesto para este año que no implicará bajo ninguna circunstancia el despido de trabajadores ni la suspensión de contratos administrativos. También se permitirá la aprobación de préstamos para ejecutar programas de energía y telecomunicaciones.

MARZO

- MARTES 18** Unos 2 mil taxistas nucleados en la Cámara Sindical de Taxistas de Costa Rica marchan con sus vehículos hasta la Casa Presidencial (San José) para exigir al gobierno la eliminación inmediata del servicio de los ilegales o piratas. Por la tarde, dirigentes del sindicato y funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) suscriben un acuerdo que contempla la renovación de la flota y la lucha contra los vehículos piratas, entre otros puntos.
- SÁBADO 22** Estudiantes universitarios y miembros del Sindicato de Trabajadores de la Caja del Seguro Social, entre otros, protestan frente a la embajada de EE.UU. (San José) en rechazo a la guerra contra Irak. Los manifestantes arrojan huevos y desperdicios contra la fachada del edificio. Luego, una columna se dirige a la Casa Presidencial, a pocas cuadras de allí, para repudiar el apoyo que el presidente Abel Pacheco le dio al enfrentamiento bélico.
- MARTES 25** Los docentes de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) realizan un paro de labores en todo el país y una concentración frente al Ministerio de Educación Pública (MEP) en San José para exigir el pago de los salarios adeudados.

VIERNES 28 Varias organizaciones sociales marchan por la paz desde el Gimnasio Nacional hasta la embajada de EE.UU. (San José). Exigen al presidente Abel Pacheco que destituya al ministro de Relaciones Exteriores y Culto por adoptar y reforzar la posición del gobierno a favor de apoyar el ataque norteamericano a Irak.

ABRIL

MIÉRCOLES 2 Estudiantes secundarios y universitarios nucleados en la organización “No más guerras” realizan un simulacro de bombardeo a Irak frente a la Cancillería. Exigen a las autoridades que rectifiquen su posición de apoyo a la guerra, sacar a Costa Rica de la lista de los integrantes de la Coalición y que el gobierno solicite un alto el fuego, para lo cual demandan la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

VIERNES 4 La Sala IV anula la reforma constitucional de 1969 que prohibía la reelección presidencial.

LUNES 28 Unos 3.500 agricultores de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios se manifiestan por las calles de San José contra las negociaciones comerciales entre Centroamérica y EE.UU. para la suscripción del TLC. Exigen que EE.UU. acepte la exclusión de los productos sensibles como papa, pollo, arroz, frijoles, carne, leche, aceite y huevos, entre otros.

GLOSARIO DE SIGLAS

ADELA	Asociación de Lucha Antipetrolera
ANDE	Asociación Nacional de Educadores
ANEP	Asociación Nacional de Empleados Públicos
ASTRAA	Asociación Sindical de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados
CAFTA	Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EE.UU. (sigla en inglés)
FECON	Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente
FIT	Frente Interno de Trabajadores y Trabajadoras
ICE	Instituto Costarricense de Electricidad
MEP	Ministerio de Educación Pública
MOPT	Ministerio de Obras Públicas y Transportes
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PLN	Partido Liberación Nacional
PRC	Partido Renovación Costarricense
PUSC	Partido Unidad Social Cristiana
TLC	Tratado de Libre Comercio

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Florencia Ayala.
Fuentes: diarios Prensa Libre, La Nación y La República.*

El Salvador

[cronología enero-abril 2003]

ENERO

MIÉRCOLES 8 Un grupo de 20 personas conformado por miembros del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISS), de la Asociación de Empleados Judiciales, de las Brigadas Revolucionarias Estudiantiles (BRES) y empleados de la Alcaldía de Soyapango ocupa la Catedral Metropolitana de la ciudad de San Salvador para protestar contra la privatización de la salud, la militarización de los hospitales y en oposición a la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. Mientras, unos 200 manifestantes, pertenecientes a la Alianza Ciudadana, se concentran en las puertas de la Catedral en apoyo a los ocupantes. Cerca del mediodía una marcha protagonizada por miembros del Sindicato de Médicos y Trabajadores del ISSS (SIMETRISS) llega al lugar y se suma a los manifestantes.

Unos 90 trabajadores de la maquila New Tex, despedidos en las últimas semanas, toman las instalaciones de la empresa ubicada en la localidad de Comalana para exigir el pago de sus respectivas indemnizaciones, aguinaldos y vacaciones.

JUEVES 9 Tras mantener ocupada la Catedral Metropolitana por más de 24 hs, el grupo de 20 personas se retira de la misma por su propia cuenta. Los ocupantes exigen la no privatización del Seguro Social, la desmilitarización de los hospitales, el reintegro de los despedidos y la pronta instalación de una mesa de negociación.

MIÉRCOLES 22 Sindicalistas aglutinados en diferentes organizaciones pertenecientes al Foro de la Sociedad Civil bloquean la autopista a Comalapa en protesta contra el proyecto de privatización de la salud y suscripción de tratados de libre comercio entre Centroamérica y EE.UU.

MIÉRCOLES 29 Un grupo de 60 efectivos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) ingresa, dividido en dos grupos, a las instalaciones de la Unidad Médica Santa Anita y del Hospital Psiquiátrico, y desaloja a los trabajadores del ISSS que mantienen la ocupación de los centros médicos en protesta contra la privatización de la salud. En el operativo resultan detenidos 21 trabajadores acusados de desórdenes, actos terroristas y coacción.

JUEVES 30 Vendedores ambulantes nucleados en la Asociación de Vendedores y Comerciantes Siticons queman llantas y se enfrentan en el centro de San Salvador con efectivos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) en resistencia al desalojo de sus puestos de venta, ordenado por las autoridades.

FEBRERO

JUEVES 6 En la ciudad de San Salvador se realiza la quinta marcha blanca, convocada por el STISS, SIMETRIS y el Colegio Médico, para rechazar toda posibilidad de privatización de la salud. Miembros de las BRES y del Frente Unido Roque Dalton (FURD), pertenecientes a la Universidad de El Salvador (UES), se suman a la movilización y realizan pintadas contra el gobierno.

MIÉRCOLES 12 Un grupo de 50 trabajadores del servicio de recolección de basura de Ahuachapán, nucleados en el Sindicato de Trabajadores Municipales (SITRAM) y la Asociación de Trabajadores Municipales (ATRAM), inicia un paro de actividades por tiempo indefinido y se manifiesta frente al edificio municipal para exigir un aumento salarial de 500 colones y la dotación de implementos de limpieza.

SÁBADO 15 Cientos de personas se movilizan por el centro de San Salvador hacia la embajada estadounidense para manifestar su rechazo a la guerra contra Irak declarada por EE.UU. La marcha comienza con la recolección de firmas contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el TLC entre Centroamérica y EE.UU. y el Plan Puebla Panamá (PPP), y concluye con la realización de un festival contra el neoliberalismo.

JUEVES 20 Alrededor de 150 médicos y trabajadores de la salud se manifiestan en las puertas del edificio central del ISSS para expresar su rechazo a la privatización de la salud. Unos 30 manifestantes ingresan al lugar y ocupan las instalaciones hasta que los efectivos de la UMO los desalojan mediante disparos de balas de goma y gases lacrimógenos. Como consecuencia de los acontecimientos, un médico es detenido y 26 personas son demandadas por la dirección del Instituto.

DOMINGO 23 La Alcaldía de Ahuachapán y los trabajadores del servicio de recolección de residuos firman un acuerdo que pone fin al conflicto por el reclamo salarial. El documento establece un aumento de 175 colones en el salario de los empleados municipales y la dotación de materiales de trabajo.

MIÉRCOLES 26 El presidente Francisco Flores expresa su apoyo a la guerra contra Irak declarada por EE.UU.

MARZO

- MIÉRCOLES 5** Trabajadores de la salud del ISSS marchan, convocados por la Asociación Médica Nacional (AMENA), desde los hospitales Rosales, Maternidad, Especialidades, Oncología y Médico-Quirúrgico, de San Salvador, hacia el Ministerio de Salud para exigir la renuncia del titular del área y rechazar la privatización del servicio.
- MARTES 11** Un grupo de afiliados al Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones de El Salvador (SITTEL) bloquea la calle Rubén Darío en el centro capitalino en protesta por el despido de 50 empleados, la reducción generalizada de salarios y en rechazo al alza de las tarifas decretado por la empresa Telecom, la cual maneja el 90% de la red telefónica del país.
- JUEVES 13** Miles de personas –médicos, trabajadores de la salud, estudiantes, obreros, campesinos y transportistas– recorren las principales calles del centro de San Salvador en la denominada sexta marcha blanca, organizada por el gremio médico y un conjunto de organizaciones sociales para manifestar su rechazo a la privatización de la salud.
- LUNES 24** Cientos de estudiantes de la UES, con el apoyo de la Asociación de Académicos de la Universidad de El Salvador (ASAUES), se movilizan por las calles de San Salvador para expresar su rechazo a la intervención militar de EE.UU. a Irak iniciada el pasado 19 de marzo.
- MIÉRCOLES 26** La Asociación Departamental de Comunidades Afectadas por el Anillo Periférico realiza una marcha por la ciudad de San Salvador en la que decenas de ciudadanos manifiestan su rechazo a la construcción de la autopista, dado que el desarrollo de las obras implica la destrucción de un gran número de viviendas.

ABRIL

- MIÉRCOLES 2** Militantes de diversos partidos de izquierda, junto a diputados y alcaldes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), trabajadores, campesinos, empleados públicos y miembros del recién creado Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre (MPR-12), marchan desde el centro de San Salvador hacia el hotel en el que se realiza la tercera ronda de negociaciones para la firma de un TLC entre Centroamérica y EE.UU., para expresar su repudio al acuerdo comercial y a la guerra contra Irak. En las inmediaciones del hotel efectivos de la UMO impiden el desplazamiento de los manifestantes, por lo que se producen enfrentamientos entre ambos sectores. Luego de los incidentes se realiza un acto en una plaza céntrica, para terminar en las puertas del Hospital Médico Quirúrgico en apoyo a la huelga de los médicos y trabajadores del ISSS.

- LUNES 7** Cientos de ciudadanos marchan por el centro de San Salvador y se concentran frente al Hospital Médico Quirúrgico en apoyo a la huelga protagonizada por médicos y trabajadores del ISSS en rechazo a la privatización de la salud y en repudio a la guerra que la coalición liderada por EE.UU. lleva adelante contra Irak.
- VIERNES 11** La Asamblea Legislativa aprueba el decreto de amnistía presentado por el Presidente de la República por el cual los médicos que se encuentran en huelga podrán volver a sus puestos de trabajo sin recibir sanciones ni descuentos.
- MIÉRCOLES 23** Integrantes del SIMETRISSS se concentran frente a las oficinas administrativas del ISSS para reclamar que el decreto que garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores del Instituto aprobado hace 13 días sea sancionado y publicado en el boletín oficial a fin de que entre en vigencia.

GLOSARIO DE SIGLAS

ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
AMENA	Asociación Médica Nacional
ASAUES	Asociación de Académicos de la Universidad de El Salvador
ATRAM	Asociación de Trabajadores Municipales
BRES	Brigadas Revolucionarias Estudiantiles
CAM	Cuerpo de Agentes Metropolitanos
FMLN	Frente Forobundo Martí para la Liberación Nacional
FURD	Frente Unido Roque Dalton
ISSS	Instituto Salvadoreño del Seguro Social
MPR-12	Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre
PPP	Plan Puebla Panamá
SIMETRISSS	Sindicato de Médicos y Trabajadores del ISSS
SITRAM	Sindicato de Trabajadores Municipales
SITTEL	Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones de El Salvador
STISSS	Sindicato de Trabajadores del ISSS
TLC	Tratado de Libre Comercio
UES	Universidad de El Salvador
UMO	Unidad de Mantenimiento del Orden

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios La Prensa, Colatino y El Diario de Hoy.*

Guatemala

[cronología enero-abril 2003]

ENERO

LUNES 20 Cuando debía iniciarse el ciclo lectivo, los maestros de todo el país, nucleados en la Asamblea Nacional de Magisterio (ANM), comienzan un paro indefinido para reclamar mayor presupuesto para el Ministerio de Educación (MINEDUC), mejoras en los edificios escolares, creación de 7 mil plazas faltantes y aumento salarial del 100%. Realizan manifestaciones y cortes de ruta en numerosas zonas del país.

MIÉRCOLES 22 Mientras continúa el paro docente, más de 30 mil maestros de todo el país, encabezados por la ANM y la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), bloquean por varias horas las arterias que rodean al Congreso y la Casa Presidencial en reclamo de aumento salarial y mejoras en la educación.

VIERNES 24 Los dirigentes docentes rechazan la oferta del ministro de Educación, que contempla un aumento de 100 quetzales en bonos mensuales a costa de afectar el presupuesto de algunos programas educativos, y proclaman que siguen con el paro.

MARTES 28 Unos 10 mil maestros realizan una marcha hasta el Congreso en rechazo a la postura tomada por el gobierno. Padres, docentes y ONGs, a quienes las autoridades les recortaron los subsidios para poder cubrir los 100 quetzales ofrecidos como aumento a los maestros, protestan frente al MINEDUC.

MIÉRCOLES 29 En lo que denominan La Gran Marcha por la Dignidad, unos 40 mil maestros de todo el país convergen frente al Palacio Nacional de la Cultura en demanda de mayor presupuesto para el MINEDUC. A su vez, unos 2.500 maestros de 16 municipios de Alta Verapaz, realizan una caminata de apoyo a la marcha magisterial de la capital.

VIERNES 31 Estados Unidos niega a Guatemala la certificación de cooperación en la lucha contra el narcotráfico debido a las pocas acciones emprendidas por el gobierno nacional durante el último año contra el tráfico de drogas y por los supuestos vínculos de funcionarios del estado con esta actividad ilícita.

FEBRERO

- MARTES 4** Estudiantes de institutos de nivel medio de la capital comienzan una huelga indefinida. Reclaman que el gobierno asigne menos dinero al Ministerio de Defensa y más a Educación y Salud.
- MIÉRCOLES 5** Los maestros del Magisterio Unido de Guatemala (MUG) se suman a la huelga magisterial. De este modo, los institutos de educación básica y diversificada también dejan de abrir sus puertas.
- VIERNES 7** Cientos de maestros en huelga toman por varias horas el MINEDUC y obstruyen las 4 entradas principales a la capital. Los docentes del interior instalan barricadas, cerrando el paso de vehículos a las cabeceras departamentales y a todos los pasos fronterizos.
- LUNES 10** Militantes de la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media marchan por las calles de la capital hasta el Congreso en apoyo a los maestros en huelga. En San Sebastián, Retalhuleu, maestros, padres y estudiantes de secundaria bloquean la ruta al Pacífico, km 179, jurisdicción de San Sebastián. Son reprimidos con bombas lacrimógenas por la Policía Nacional Civil (PNC). Una maestra del barrio La Libertad, Monjas, Jalapa, es atacada a balazos.
- Setenta y cinco familias invaden las fincas Bella Vista y Santa Teresita, en Tukurú, Alta Verapaz, debido a que los trabajadores fueron despedidos sin el pago de prestaciones. Respaldados por la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) reclaman que se les pague o dé tierras, como compensación.
- MARTES 11** Mientras corre una alarma de bomba en el Ministerio de Trabajo, cientos de maestros protestan frente al lugar y 32 dirigentes se encierran en el edificio luego de que los ministros de Educación y Trabajo abandonan la mesa de diálogo, tras la presentación de los docentes de un memorial con 73 mil firmas en rechazo a la propuesta hecha por las autoridades.
- MIÉRCOLES 12** Mientras el ministro de Educación formaliza la suspensión del pago de salarios al personal docente en huelga, millares de maestros, padres y alumnos de la capital y el interior rodean el Ministerio de Finanzas y ocupan el Ministerio de Trabajo, para luego concentrarse frente al MINEDUC, la Casa Presidencial y el Congreso. En San Marcos y Huehuetenango miles de docentes bloquean las fronteras Guatemala-México, ocupando en San Marcos la Dirección Departamental de Educación (DDE) y tomando como rehén al gobernador departamental en Huehuetenango; en Sololá, Quetzaltenango, Chiquimula, Totonicapán, Escuintla, Jutiapa, Jalapa, El Progreso, Alta y Baja Verapaz e Izabal organizan masivas marchas y ocupaciones de edificios públicos. En Retalhuleu y Suchitepéquez realizan bloqueos de carreteras. Reciben la solidaridad de numerosos movimientos sociales.

JUEVES 13 Pese a que el gobierno saca el Ejército a las calles para que junto con la PNC rodee los edificios públicos, más de 20 mil maestros de la capital y 22 departamentos del país, con el apoyo de padres de familia, estudiantes de la Universidad de San Carlos (USAC) y de enseñanza media, ocupan las inmediaciones de los ministerios de Finanzas y Trabajo, así como el Congreso y la Casa Presidencial, en protesta por la cesación del pago de sus salarios ordenada por el gobierno. En el interior, los docentes ocupan aduanas y edificios gubernamentales en Zacapa, Chiquimula, Cobán, Escuintla, San Marcos y Huehuetenango.

VIERNES 14 Por tercer día consecutivo maestros de todo el país permanecen concentrados frente al Ministerio de Finanzas y otros edificios públicos para que el gobierno acceda a sus peticiones. En el resto del país continúan las tomas de edificios públicos, marchas y cortes de ruta.

SÁBADO 15 Cientos de activistas de derechos humanos, sindicalistas, víctimas del conflicto armado interno y miembros de la ex guerrilla marchan hasta la embajada de EE.UU. en contra de la invasión estadounidense a Irak.

MARTES 18 Aunque el paro sigue, los maestros reinician el diálogo con el gobierno en el Palacio Arzobispal.

Cientos de pobladores de los municipios de Chapul, Nebaj, San Juan Cotzal y Uspantán, departamento de Quiché, protestan frente al edificio de la gobernación departamental para exigir que se cumplan los acuerdos de paz.

JUEVES 20 El Juzgado Quinto de Trabajo declara la ilegalidad de la huelga docente y fija un plazo de 5 días para que los maestros regresen a sus puestos de trabajo.

LUNES 24 En tanto debe suspenderse la cuarta jornada de diálogo entre maestros y el gobierno, ya que el ministro de Educación no se hace presente en el Palacio Arzobispal, las movilizaciones magisteriales toman aún más fuerza en todo el país. Más de 3 mil maestros de 12 departamentos de Petén y organizaciones campesinas que apoyan la lucha bloquean el acceso al aeropuerto Santa Elena, Flores. En ciudad Tecún Umán, San Marcos, unos 4 mil maestros de 29 municipios toman control de la aduana Tecún II. En Quetzaltenango, cientos de maestros toman la DDE. En el km 179 de la ruta al Pacífico, en El Zarco, San Sebastián, Retalhuleu, un grupo de docentes y alumnos bloquea el puente Castillo Armas. En Alta Verapaz, docentes de 16 municipios ocupan edificios del estado. Más de 1.800 maestros de Río Dulce, Livingston, Amates y Morales, Izabal, cortan la ruta que conduce a Puerto Barrios, km 293. En Jalapa, cientos de docentes acordonan los edificios de la Procuraduría de Derechos Humanos y el Ministerio Público. Las fronteras de Anguiatú, Agua Caliente y El Florido también son ocupadas por el movimiento en lucha. Miles de maestros participan, además, de la Gran Caminata por la Dignificación de la Educación Nacional, que parte de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, rumbo a la capital.

MARTES 25 Mientras las medidas de lucha de los maestros, alumnos, padres de familia y demás sectores que los apoyan continúan con tanta fuerza como el día anterior, el gobierno envía una nómina de 50 mil maestros al Ministerio de Finanzas para que se les suspenda el pago de sus salarios de febrero.

VIERNES 28 La Gran Marcha de la Dignidad iniciada el lunes por maestros de Huehuetentango, a la que se suman otros miles de huelguistas en los tantos lugares donde pasa la caravana, arriba a la capital y realiza un mitin frente al Palacio Nacional de la Cultura. Con todo, la Corte de Apelaciones respalda la resolución anterior de la Justicia y declara la ilegalidad de la huelga.

Culmina en la ciudad norteamericana de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, la segunda ronda de negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y EE.UU. Surgen diferencias dado que EE.UU. pretende aplicar salvaguardia para sus productos textiles, agroquímicos y medicinales, lo cual es contrario a los intereses de los países centroamericanos.

MARZO

LUNES 3 Unas 20 mil personas de distintos sectores en lucha marchan por la capital hasta el Congreso y la Plaza de la Constitución para dar apoyo al movimiento magisterial y pedir mejoras en el programa de desarrollo rural, entre otros puntos. Por otra parte, padres de familia cortan varias rutas en el interior del país, pidiendo al gobierno que resuelva el conflicto con los maestros y que se inicien las clases lo antes posible.

MARTES 4 La Coordinadora Nacional, Sindical y Popular (CNSP) y el CONIC organizan cortes de carreteras en el norte, occidente, sur y centro del país en apoyo al magisterio y en reclamo de los derechos de los campesinos.

JUEVES 6 La Corte de Constitucionalidad (CC) falla en contra de los maestros en lucha, por lo que éstos tienen hasta el miércoles para presentarse a sus labores o de lo contrario serán destituidos.

VIERNES 7 Es asesinado a quemarropa el hermano del dirigente de la ANM Moisés Fuentes, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. Se conoce que días atrás también fue asesinado el profesor Edvin Arrecis.

SÁBADO 8 Cientos de mujeres de unas 15 organizaciones feministas y de la CONIC realizan una marcha desde la municipalidad capitalina hasta la Plaza de la Constitución en conmemoración por el Día Internacional de las Mujeres. Se expresan además a favor de las demandas del magisterio y en oposición al ataque de EE.UU. contra Irak.

- LUNES 10** Entre un 10 y un 15% de los maestros que permanecían en huelga retornan a sus labores sin tomar en cuenta lo que se viene resolviendo en asamblea.
- MARTES 11** Aunque el magisterio aún no ha firmado un acuerdo con las autoridades, miles de docentes inauguran el ciclo escolar con un acto en la Plaza de la Constitución y en las cabeceras departamentales luego de 51 días de paro.
- MIÉRCOLES 12** Los maestros y el gobierno firman un acuerdo de 9 puntos a través del cual se establece la creación de una instancia para mejorar programas educativos, la participación del magisterio en la planificación del presupuesto de Educación 2004, el apoyo de la ANM en el proceso de reforma educativa, la reposición por parte de los docentes de mil horas de trabajo, el aumento salarial de 150 quetzales, el retorno a clases a partir de la fecha del acuerdo, el pago de febrero según la ley, la creación de una comisión bipartita para analizar las sanciones que aplicó el gobierno, y un cronograma de actividades para dar cumplimiento a todos estos puntos.
- SÁBADO 15** Decenas de personas se manifiestan frente a la embajada de EE.UU. para oponerse al ataque norteamericano contra Irak.
- LUNES 17** El Ejecutivo crea el Sistema para la Descentralización de la Gestión Educativa (SIDEGE) en reemplazo del Programa Nacional de Autogestión Educativa (PRONADE) y de los Comités Educativos (COEDUCAS). La ANM se opone y lo califica como parte de la privatización del sistema educativo.
- MARTES 18** El presidente Portillo anuncia que, debido a que el estado no cuenta con dinero suficiente, sólo 250 mil ex Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) de los 628 mil que lo solicitaron recibirán la compensación económica ofrecida por el gobierno. También informa que el pago no será de 20 mil quetzales como había prometido, sino de 5 mil quetzales en tres pagos.
- DOMINGO 23** Unos 400 empleados de la Compañía Bananera Independiente de Guatemala (COBIGUA) bloquean la carretera hacia Honduras, km 87, denunciando que la empresa está violando 20 artículos del pacto colectivo de trabajo y en reclamo de sus prestaciones laborales.
- LUNES 24** Los choferes del servicio urbano de la empresa Bolívar de la capital paralizan sus labores en protesta por el asesinato de un compañero.
- LUNES 31** Miles de ex PAC se movilizan en todo el país, exigiendo al gobierno el pago de 20 mil quetzales. En Escuintla cierran la ruta al Pacífico a la altura de Palín y bloquean la autopista hacia Puerto Quetzal; en Alta Verapaz cortan varias carreteras. En Petén toman el aeropuerto de Santa Elena, cierran la llave de paso del petróleo de la empresa Perenko, en Las Pozas, municipio de Sayaxché, y rompen el oleoducto que va hasta el departamento de Izabal.

ABRIL

- MIÉRCOLES 2** El pleno del Congreso aprueba una amnistía laboral para todos los docentes que participaron en la huelga magisterial, por lo que se les restituirán a todos los maestros sus derechos como trabajadores del Estado. El Ministerio de Finanzas, a su vez, formaliza el aumento prometido.
- JUEVES 3** Miles de ex PAC retiran las barricadas y dejan libre el paso de unos 30 sectores que mantuvieron cerrados hasta hoy, tras conseguir que se conforme una comisión de alto nivel para analizar su situación. Por otra parte, en Suchitepéquez, los ex paramilitares toman 9 alcaldías municipales y anuncian que las desalojarán recién cuando reciban los 5 mil quetzales ofrecidos por el gobierno.
- VIERNES 4** El sacerdote maya y activista por los derechos humanos Diego Xon Salazar es secuestrado y aparece muerto a balazos en el cantón Comanchaj, Chichicastenango, Quiché.
- VIERNES 11** El Ministerio de Finanzas legaliza el pago a los ex PAC. Establece como definitiva la cantidad de 5.241,60 quetzales para cada ex paramilitar, que será otorgada mediante 3 desembolsos.

GLOSARIO DE SIGLAS

ANM	Asamblea Nacional de Magisterio
CC	Corte de Constitucionalidad
CNSP	Coordinadora Nacional, Sindical y Popular
COBIGUA	Compañía Bananera Independiente de Guatemala
COEDUCAS	Comités Educativos
CONIC	Coordinadora Nacional Indígena y Campesina
DDE	Dirección Departamental de Educación
MINEDUC	Ministerio de Educación
MUG	Magisterio Unido de Guatemala
PAC	Patrullas de Autodefensa Civil
PNC	Policía Nacional Civil
PRONADE	Programa Nacional de Autogestión Educativa
SIDEGE	Sistema para la Descentralización de la Gestión Educativa
TLC	Tratado de Libre Comercio
UASP	Unidad de Acción Sindical y Popular
USAC	Universidad de San Carlos

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana Fassi.

Fuentes: Servicio Informativo del Centro de Estudios Guatemala (CEG), días - rios La Hora y Prensa Libre.

Honduras

[cronología enero-abril 2003]

ENERO

MARTES 21 Cerca de mil pobladores del Valle de Siria protestan en los bajos del Congreso Nacional contra la compañía minera Entremares, que extenderá la explotación en 5 comunidades del sector, por la escasez de agua y por los problemas de salud que están enfrentando debido al uso indiscriminado de cianuro en la explotación de minas.

LUNES 27 El presidente Ricardo Maduro anuncia en cadena de radio y televisión el congelamiento de todos los salarios del gobierno central durante el año en curso. Esta medida se toma con el objeto de reducir el gasto público, una de las principales exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para firmar el acuerdo con Honduras.

MARTES 28 Cerca de 5 mil habitantes del departamento de Santa Bárbara cortan la carretera que conduce hacia occidente. La medida es en protesta contra la municipalización del agua y la privatización de los servicios públicos y la educación, entre otras cosas. También se realizan tomas de carretera en El Progreso, Olanchito, Olancho, La Ceiba, Aguán y Tegucigalpa.

JUEVES 30 Más de 1.500 personas pertenecientes a unas 50 organizaciones gremiales, maestros, amas de casa y grupos indígenas, entre otros, confluyen en una marcha organizada por el Bloque Popular hasta los bajos del Palacio Legislativo en Tegucigalpa en protesta contra las privatizaciones, la empresa minera Entremares, la instalación de la transnacional eléctrica AES, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la falta de cumplimiento del Estatuto del Docente, los elevados costos en salud y educación y el alza de los impuestos.

FEBRERO

LUNES 3 Unos 400 empleados de la Compañía Bananera Hondureña SA (COBAHSA) toman el puente La Democracia en El Progreso, Yoro, demandando al gobierno el pago de salarios, vacaciones, decimotercer mes, becas para los hijos de los obreros y alquileres que se les adeudan.

- SÁBADO 8** Miles de trabajadores afiliados a las organizaciones gremiales pertenecientes a la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) se unen en una marcha por las principales calles de San Pedro Sula para protestar por la crisis y las medidas económicas tomadas en los últimos días.
- LUNES 10** Más de 500 trabajadores de COBAHSA vuelven a cortar el puente La Democracia al no obtener respuesta del Estado a sus exigencias de que les paguen las deudas salariales.
- JUEVES 13** Alrededor de 200 médicos residentes en 17 especialidades del primer centro asistencial, del Hospital San Felipe y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Tegucigalpa paralizan sus actividades, atendiendo sólo a los pacientes con cuadros graves, para exigir un aumento que duplique la beca de estudios que reciben.
- VIERNES 14** Más de 9.800 enfermeras auxiliares de hospitales públicos de diferentes ciudades del país paralizan sus labores y se reúnen en asambleas informativas para decidir las acciones que tomarán contra el gobierno por congelarles los salarios variables.
- SÁBADO 15** Más de 1.500 personas convocadas por distintas organizaciones populares, de mujeres, colegios magisteriales y representaciones indígenas, participan de una marcha hasta la embajada de los Estados Unidos promovida por el Foro Social Mundial de Porto Alegre, Brasil, bajo la consigna "No a la Guerra Contra Irak".
- MIÉRCOLES 19** Conductores de taxis, buses y equipo pesado protestan en las calles de San Pedro Sula contra las constantes alzas al combustible, las multas estipuladas en el plan del arbitrios y exigiendo reformas a las leyes de tránsito y transporte. Al finalizar la protesta, los miembros del Sindicato Nacional de Motoristas de Equipo Pesado de Honduras (SINAMEQUIPH) toman el peaje de salida a Puerto Cortés, iniciando un paro por tiempo indeterminado en reclamo de diversas reivindicaciones salariales.
- JUEVES 20** Cientos de docentes de enseñanza media se movilizan por las calles de Comayagüela hasta el Ministerio de Educación exigiendo el respeto al Estatuto del Docente, el cese de las medidas económicas, no más aumento al costo de servicios básicos, cancelación de sueldos retrasados y respeto al concurso para cargos.
- SÁBADO 22** El SINAMEQUIPH suspende la toma del peaje de salida a Puerto Cortés a fin de entablar un diálogo con las compañías navieras y poner fin al conflicto.
- DOMINGO 23** Más de 8.500 enfermeras auxiliares paralizan los 28 hospitales públicos del país en demanda de mejoras salariales y en repudio a la decisión del gobierno de congelar los sueldos para disminuir el gasto público.

JUEVES 27 El SINAMEQUIPH y las compañías navieras finalizan una serie de negociaciones y acuerdan tasar en 12 lempiras la nueva tarifa por km recorrido. Además las navieras asumen el compromiso de absorber las alzas a los combustibles, conceder el 50% de los viajes al extranjero a transportistas hondureños y respetar todos los puntos establecidos en los convenios firmados en febrero de 2000.

VIERNES 28 Cientos de maestros de secundaria y primaria de todo el país, apoyados y acompañados por dirigentes del Bloque Popular, protestan en las calles de Tegucigalpa y Comayagüela por la decisión del Ministerio de Educación de suspender la deducción que se hace a los docentes como aportación mensual para las arcas del colegio profesional al cual pertenecen. Reclaman también el pago del salario correspondiente a enero de más de 5 mil compañeros, y protestan porque no se han realizado los concursos de las direcciones departamentales y sus estructuras a nivel nacional.

MARZO

MARTES 4 La Asociación Nacional de Enfermeras Auxiliares de Honduras (ANEAH) del hospital Mario Catarino Rivas abandona los turnos de la noche en la sala de hospitalización debido a que no ha recibido una respuesta afirmativa a sus demandas.

MIÉRCOLES 5 Unos 10 mil empleados de la salud afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (SITRAMEDHYS) y de la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud (UNTRAS) se unen al paro iniciado hace 11 días por las enfermeras auxiliares en demanda de la derogación de un documento que congela el salario de los trabajadores.

VIERNES 14 Luego de que el gobierno desistiera de cancelarles algunas de las conquistas obtenidas en negociaciones anteriores, las enfermeras auxiliares se reincorporan a sus sitios de trabajo a nivel nacional.

MARTES 18 Los presidentes centroamericanos, reunidos en Roatán, departamento de Islas de la Bahía, acuerdan comenzar un proceso de desarme y reducción de armamento de guerra en la región como medida para avanzar en la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU.¹

Más de 700 médicos especialistas y generales suspenden las consultas externas a nivel de los hospitales y centros de salud de la región metropolitana durante 6 horas como medida de presión al gobierno para que éste cumpla con la aplicación del Estatuto del Médico Empleado. Entre las violaciones al estatuto, según los médicos, está la negativa del Ministerio a practicar un concurso para 130 plazas y para 400 cargos de dirección departamentales.

MIÉRCOLES 19 Las autoridades del Colegio Médico de Honduras (CMH) determinan extender la suspensión de la asistencia en la consulta externa de los hospitales y centros de salud de Tegucigalpa a los departamentos de Cortés y Yoro.

DOMINGO 23 Los médicos residentes normalizan la asistencia en el Hospital Escuela y el IHSS tras lograr un acuerdo con el gobierno que contempla una ampliación de la beca de especialización a 17 residentes del Seguro Social, un financiamiento extra reembolsable con interés de acuerdo al monto pagadero a 10 años y la dotación de equipo mínimo para atención a pacientes y equipo audiovisual.

LUNES 24 Maestros de media, sindicalistas, pobladores, mujeres e indígenas protestan frente a la embajada de EE.UU. contra la guerra declarada a Irak quemando una bandera de aquel país. En El Progreso, Yoro, organizaciones populares, con el apoyo de estudiantes de secundaria, marchan hasta el parque Ramón Rosa, donde realizan una vigilia de protesta contra la guerra.

Al no existir un punto de acuerdo en torno a las demandas de respeto al estatuto médico y el concurso de unas 130 plazas anunciado en 2002, el CMH inicia una huelga general paralizando los servicios de especialidad y las consultas externas en todos los hospitales nacionales.

MIÉRCOLES 26 El CMH decide profundizar el conflicto suspendiendo las cirugías selectivas en todos los hospitales nacionales, realizándose solamente las de emergencia.

SÁBADO 29 La junta directiva del CMH decide descartar las medidas de presión, restableciéndose las cirugías selectivas y las emergencias de adultos y menores, luego de que el gobierno nombrara una comisión para dialogar.

A B R I L

JUEVES 3 El Congreso Nacional aprueba la Ley de Equidad Tributaria, un nuevo paquete de medidas económicas bautizado por sus opositores como "Paquetazo II". Algunas de las medidas que incluye la ley son la ampliación de la base de contribuyentes que pagan el impuesto sobre la renta, cancelación del 60% de las plazas en el gobierno, eliminación de exención al Impuesto Sobre Ventas (ISV) de 500 productos incluidos en la canasta básica de alimentos, y aplicación del 12% del ISV al consumo de energía eléctrica superior a los 300 Kw.

SÁBADO 5 En un motín, producto de un enfrentamiento entre miembros de la pandilla mara 18 y el resto de la población de la Granja Penal del municipio El Porvenir, Departamento de Atlántida, mueren 68 personas y más de 30 resultan heridas.

JUEVES 10 Tras una reunión en Washington, EE.UU., para avanzar en las negociaciones tendientes a lograr un TLC, los mandatarios de Costa Rica, Guatemala,

Honduras, El Salvador y Nicaragua reafirman su respaldo a EE.UU. en la guerra contra Irak, llegando a ofrecer los presidentes de los tres últimos países el envío de personal militar a la zona del conflicto.

MARTES 29 Cerca de 3 mil campesinos e indígenas encabezados por los dirigentes del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH) protestan ante la Casa de Gobierno, exigiendo un veto inmediato a la Ley de Fortalecimiento al Productor Agropecuario que según argumentan condona las deudas a terratenientes, diputados, falsos productores y sobre todo salva a los bancos.

Más de 950 trabajadores del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) de los distintos centros del país realizan un paro de labores para exigir los aumentos correspondientes al reajuste salarial acordado a fines del año pasado y el pago por el tiempo trabajado en jornadas extraordinarias y días feriados durante noviembre y diciembre, entre otras cuestiones.

MIÉRCOLES 30 El gobierno norteamericano aprueba la extensión por 18 meses del Estatus de Protección Temporal (TPS), que habilita el envío de remesas familiares desde EE.UU. hasta el 5 de enero de 2005.

GLOSARIO DE SIGLAS

ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
ANEAH	Asociación Nacional de Enfermeras Auxiliares de Honduras
CMH	Colegio Médico de Honduras
COBAHSA	Compañía Bananera Hondureña SA
COCOCH	Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras
CTH	Confederación de Trabajadores de Honduras
CUTH	Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras
FMI	Fondo Monetario Internacional
IHNFA	Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia
IHSS	Instituto Hondureño de Seguridad Social
ISV	Impuesto Sobre Ventas
SINAMEQUIPH	Sindicato Nacional de Motoristas de Equipo Pesado de Honduras
SITRAMEDHYS	Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares
TLC	Tratado de Libre Comercio
TPS	Estatus de Protección Temporal
UNTRAS	Unión Nacional de Trabajadores de la Salud

¹ Publicado en el periódico El Nuevo Diario de Nicaragua
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.
Fuentes: diarios La Prensa, La Tribuna y Tiempo.

[cronología enero-abril 2003]

ENERO

MIÉRCOLES 1 Alrededor de 20 mil tzotziles, tzeltales, choles, tojobales y zoques de 40 municipios autónomos marchan en San Cristóbal de las Casas y realizan una concentración en la cual los comandantes zapatistas critican las amenazas de desalojo en Montes Azules, la militarización, la contrainsurgencia y la política general del gobierno foxista.

Entran en vigencia las reducciones tributarias al ingreso de productos agropecuarios e industriales contempladas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Un centenar de miembros de El Campo no Aguanta Más y de El Barzón bloquea el puente internacional Córdoba-Las Américas. El gobierno ofrece una modalidad de negociación a las organizaciones campesinas.

LUNES 6 A iniciativa del gobierno se inician en Los Pinos las actividades de 7 mesas de trabajo de cara a la Convención Nacional Agropecuaria con el objetivo de aprobar el Acuerdo Nacional para el Campo. Los secretarios de Gobernación, Economía y Agricultura, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y dirigentes de El Campo no Aguanta Más, El Barzón y el Consejo Agrario Permanente (CAP) acuden al encuentro. Las organizaciones integrantes de El Campo no Aguanta Más inician movilizaciones en el Distrito Federal (DF) y las ciudades de Veracruz y Tampico, en la capital de Durango y los estados de México, Aguascalientes y Chiapas.

MARTES 7 El gobierno invita a participar en las mesas de diálogo al Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la CONCAMIN, entre otras organizaciones.

MIÉRCOLES 8 El Barzón bloquea junto a 3.500 campesinos el puente internacional fronterizo de Talismán, ubicado en el estado de Chiapas.

VIERNES 17 Alrededor de 25 mil personas marchan junto al Frente de Sindicatos y Organizaciones Democráticas de Oaxaca (FSODO) por la capital del estado para reclamar por la liberación de líderes sindicales, el cese de los hostigamientos contra militantes sociales y la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN.

LUNES 20 Distintas organizaciones campesinas se pliegan a una convocatoria de lucha lanzada por El Barzón, El Campo no Aguanta Más y algunas organizaciones del CAP. Campesinos y pequeños propietarios del agro realizan movilizaciones en el DF y las ciudades de Culiacán, Tapachula, Puebla, Monterrey, Guanajuato, Chilpancingo, Michoacán y Cuernavaca.

Cerca de 1.150 trabajadores de la mina de Cananea del Grupo México reinician una suspensión de labores a fin de reclamar por un aumento de 5,25%, el otorgamiento de un bono de productividad y la reincorporación de 10 compañeros.

JUEVES 23 El Parlamento Centroamericano (PARLACEN) clausura sus sesiones en el Palacio Legislativo de San Lázaro con un acuerdo en el cual el centenar de legisladores de Honduras, Panamá, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana que lo integra resuelve impulsar un mecanismo de consulta en torno al Plan Puebla Panamá (PPP).

DOMINGO 26 Las secretarías de Agricultura, Economía y Gobernación emiten la convocatoria al Diálogo por una Política de Estado para el Campo, consistente en la implementación de 8 mesas de trabajo. Las 25 organizaciones que integran el CAP, El Campo no Aguanta Más y El Barzón rechazan el ofrecimiento oficial por unanimidad y afirman que esperan la realización de la Convención Nacional Agropecuaria.

VIERNES 31 El Campo no Aguanta Más, El Barzón y el CAP encabezan una marcha multitudinaria del Ángel de la Independencia al zócalo capitalino en la que participan más de 50 mil personas provenientes de todos los estados del país. La movilización se realiza para exigir la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN, por un nuevo trato del estado para con el campo mexicano y por la soberanía alimentaria, e incluye a miembros de la Confederación Nacional Campesina (CNC), integrante del CAP en disidencia. Otras movilizaciones se realizan en Coahuila, Durango y Chilpancingo.

FEBRERO

MIÉRCOLES 5 Alrededor de 2 mil miembros de la CNC de 43 municipios de Tamaulipas marchan en Ciudad Victoria. Otro millar de integrantes cenecistas marcha en Navojoa, Sonora, para reclamar por la revisión del TLCAN y la declaración de situación de emergencia para el agro.

Los trabajadores de la mina de Cananea resuelven en asamblea extraordinaria aceptar un ofrecimiento del Grupo México consistente en el pago de un bono de productividad de 32% y el 50% de los salarios caídos correspondientes a los 16 días de huelga.

JUEVES 6 Se realiza en la Secretaría de Gobernación (SG) la reunión inicial de la comisión organizadora del Diálogo por una Política de Estado para el Campo, en la que participan los secretarios de Agricultura, Gobernación, Economía y Reforma Agraria, el presidente del CNA, dirigentes de organizaciones campesinas, gobernadores y legisladores nacionales.

Alrededor de 600 comuneros de los poblados mixtecos de San Pedro Yosotato y Santa Catarina Yosonotú arriban a la ciudad de Oaxaca tras marchar desde el lunes y se manifiestan frente al palacio de gobierno del estado, que se compromete a garantizar la seguridad pública en las comunidades y acepta reconocer la posesión legal de las tierras en disputa con el municipio vecino de Santa María Monteverde.

Cerca de 1.500 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) marchan hacia la SG y el zócalo capitalino para conmemorar el desalojo violento con el que la policía puso fin a la huelga de 1999 y 2000. Otros 700 jóvenes de la preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM marchan hacia su rectoría. Los manifestantes de ambas protestas reclaman una amnistía para los presos políticos y la liberación inmediata de los hermanos Cerezo.

LUNES 10 Es inaugurada oficialmente la mesa titulada el Papel del Campo en el Proyecto de Nación, en el capitalino Centro Social y Deportivo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con la ausencia de las dirigencias del CAP, El Barzón, El Campo no Aguanta Más y la CNC, quienes se pronunciaron contra la elección del predio por considerarlo proclive a acarreos de personas. El presidente Fox y 5 secretarios conforman la delegación oficialista junto al presidente del Partido Acción Nacional (PAN) y el coordinador de la bancada albiazul en el senado. Las organizaciones pertenecientes al CAP –entre las que está la CNC– constituyen la fracción priísta presente en la reunión. El CNA asiste en representación del sector de medianos y grandes empresarios.

MARTES 11 Los secretarios de Agricultura y Economía se reúnen con el coordinador ejecutivo del CAP y delegados de la CNC, El Barzón y El Campo no Aguanta Más para acordar la repetición en Culhuacán del encuentro realizado el lunes y su prolongación en el Archivo General de la Nación (AGN) del 6 al 8 de marzo.

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Comisión de Derechos Humanos del estado y otras organizaciones sociales se movilizan en Culiacán hacia las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exigir una reducción en las tarifas eléctricas.

MIÉRCOLES 12 Se vuelve a realizar en Culhuacán la mesa Papel del Campo en el Proyecto de Nación con la participación de un líder del CAP y dirigentes de El Campo no

Aguanta Más, además de representantes del gobierno, el sector empresarial y las organizaciones de productores que estuvieron presentes el pasado lunes.

JUEVES 13 Alrededor de 6 mil médicos, especialistas y demás trabajadores del sector Salud del estado de Chiapas inician una jornada de trabajo bajo protesta junto a la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTS) en reclamo por un aumento de presupuesto para el sector y denunciando la muerte de 33 personas por falta de insumos.

SÁBADO 15 Se realizan manifestaciones en todo el país en el marco de la convocatoria por el Día Mundial de Movilización contra la Guerra en Irak lanzada en Porto Alegre en la tercera edición del Foro Social Mundial (FSM). Alrededor de 50 mil personas participan en una marcha hacia el Ángel de la Independencia junto a sindicatos de tranviarios, electricistas, telefonistas, empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), miembros del Frente Popular Francisco Villa (FPFV), campesinos de Atenco, integrantes del Consejo General de Huelga (CGH), el Comité Rigoberta Menchú y la Red de Acción Mexicana Frente al Libre Comercio. Otras protestas suceden en las ciudades de San Cristóbal de las Casas, Monterrey, Cuernavaca, San Luis Potosí, Jalapa, Veracruz, Chihuahua, Tijuana, Aguascalientes y Mérida, además de realizarse acciones en el puente internacional Santa Fe.

LUNES 24 Es inaugurada la mesa El Campo y la Gobernabilidad en el Estado de Derecho, donde el secretario de Gobernación recibe pedidos de amnistía para medio millar de presos políticos de las organizaciones campesinas. El funcionario ofrece la revisión caso por caso de las detenciones.

Cerca de 5 mil integrantes de la Casa del Pueblo marchan en Venustiano Carranza, Chiapas, en demanda por la liberación de un dirigente y 27 detenidos el pasado miércoles. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) libera a 13 de los campesinos encarcelados y decreta la detención provisional a otros 16 por el mes de proceso judicial.

MARTES 25 Cerca de 20 mil personas acuden a una marcha convocada por los 27 alcaldes del sur de Veracruz que tiene lugar en Coatzacoalcos. La manifestación cuenta con la presencia de representaciones de cámaras empresariales, organizaciones campesinas y agrupaciones civiles además de legisladores federales y estatales que se dirigen hacia oficinas de la CFE a realizar un bloqueo simbólico en reclamo por el establecimiento de una tarifa preferencial por el servicio.

JUEVES 27 Habitantes de 6 municipios de Sinaloa ocupan dependencias de la CFE exigiendo una rebaja en las tarifas. Un millar de personas participa en la manifestación realizada en la ciudad de Culiacán junto a organismos de derechos humanos, partidos políticos, sindicatos y el colegio de abogados local.

VIERNES 28 Cerca de 80 comuneros del municipio autónomo zapatista Primero de Enero ocupan la finca Emerald Ranch, terreno particular abandonado de 10 ha en Ocosingo, Chiapas, lo que motiva patrullajes de soldados y efectivos de la policía estatal y del municipio.

MARZO

JUEVES 6 Con un encuentro de cierre en el AGN finaliza la primera parte del Diálogo por una Política de Estado para el Campo, donde las organizaciones campesinas reclaman un pronunciamiento presidencial por la paz ante Naciones Unidas.

VIERNES 7 Alrededor de 15 mil integrantes del FSODO marchan en reclamo por la liberación de 16 militantes y la cancelación de 5 órdenes de aprehensión.

DOMINGO 9 Se realizan los comicios municipales en San Salvador Atenco, en los que obtiene más sufragios el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) impide la instalación de la mitad de las 36 casillas electorales.

LUNES 10 Un centenar de habitantes del ejido zacatecano de Bernalejo de la Sierra se desplaza hacia los Pajaritos tras ser desalojado por 250 indígenas tepehuanos de Santa María Ocotán, Durango, quienes reclaman como propias 5 mil ha de la zona.

MARTES 11 Simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ocupan el predio de 8 ha Gabino Barrera, ubicado en el municipio chiapaneco de Altamirano, para lo cual deben desalojar a familias tojobales de la organización Yachil Atel que demandan la intervención del gobernador.

MIÉRCOLES 12 Medio millar de uniformados de la Policía Federal Preventiva (PFP), 200 soldados y 100 efectivos de la policía estatal arriban a Pajaritos, lo que motiva que los invasores bloqueen el camino de acceso al poblado a la altura de Canoas.

JUEVES 13 El gobernador de Durango acuerda con los indígenas tepehuanos su retiro de Bernalejo de la Sierra y Pajaritos en una negociación en la que estuvieron presentes representantes de los comuneros, la SG, la procuraduría agraria y la policía ministerial de la provincia.

VIERNES 14 Alrededor de 10 mil personas, junto a la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), miembros de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) y estudiantes de educación básica, marchan por las calles de la ciudad para pronunciarse a favor de una salida pacífica al conflicto en Irak.

SÁBADO 15 Alrededor de 15 mil personas marchan del zócalo al Ángel de la Independencia bajo el lema No a la Guerra, No en Nuestro Nombre para exigir un voto contrario de México ante las Naciones Unidas. El contingente es integrado, en su mayor parte, por jóvenes de la UNAM, la Liga Espartaco, Comunidades Eclesiales de Base, la comunidad punk y darketos.

LUNES 17 Alrededor de 3.500 trabajadores de la Secretaría de Salud oaxaqueña inician una huelga por 72 hs que afecta a 13 hospitales, 250 centros sanitarios y 6 jurisdicciones para reclamar la asignación de nuevas plazas y un aumento en los recursos del sector.

El presidente Fox forma parte del bloque mayoritario que se expide contra la guerra ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante la sesión ocurrida en la ciudad de Washington.

MARTES 18 Cerca de 2 mil maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) provenientes de 11 estados del país marchan hacia el zócalo del DF, donde demandan un aumento salarial de 100%, la fijación del presupuesto educativo en un 12% del Producto Bruto Interno y el esclarecimiento de un centenar de desapariciones de militantes. En Oaxaca, los docentes que se pliegan a la huelga suman cerca de 60 mil y levantan un pedido de cancelación de 12 averiguaciones previas contra dirigentes sindicales.

MIÉRCOLES 19 El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México valida los comicios realizados en Atenco el pasado 9 de marzo.

JUEVES 20 Soldados estadounidenses participan en operativos militares del ejército mexicano en la costa chiapaneca.

VIERNES 21 Alrededor de 2 mil lesbianas marchan del Monumento a la Revolución al zócalo del DF junto a miembros de la comunidad gay, familiares y amigos para reclamar la creación de agencias especializadas en delitos por discriminación a las minorías sexuales y la implementación de campañas abiertas contra la homofobia. Rechazan además la guerra aliada en Irak.

MIÉRCOLES 26 Alrededor de 40 mil personas marchan en la ciudad de Puebla en rechazo a la invasión aliada en Irak. El contingente de manifestantes está integrado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), miembros de ONGs, del PRI, del PAN y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y por luchadores sociales y líderes religiosos.

VIERNES 28 Indígenas zapatistas crean el municipio autónomo Magdalena de la Paz, ubicado en la zona fronteriza con Guatemala en las cercanías de Aldama.

ABRIL

- MARTES 1** La Secretaría de Economía (SE) propone a las organizaciones campesinas la exclusión del maíz y el frijol del TLCAN.
- MIÉRCOLES 2** Ejidatarios de San Salvador Atenco, miembros del PPFV y del CGH marchan del zócalo al Ángel de la Independencia, a la embajada estadounidense y a locales de empresas del país vecino del norte en protesta contra la intervención militar en Irak.
- JUEVES 3** Las partes integrantes de la comisión de redacción del Acuerdo Nacional para el Campo resuelven incluir la revisión del proceso de desgravación del maíz blanco y el frijol establecido en el TLCAN y reemplazarlo por un sistema permanente de administración de importaciones.
- VIERNES 4** El municipio autónomo San Manuel denuncia que, junto al inicio de la guerra en Irak se dio comienzo a la Operación Centinela, movimiento de tropas que implicó incrementos de patrullajes aéreos y terrestres en Chiapas afectando a las comunidades de media docena de delegaciones rebeldes.
- LUNES 7** Los campesinos desplazados de Bernalejo de la Sierra aceptan una indemnización de 51 millones de pesos ofertada por la SG por las más de 5 mil ha que serán entregadas a indígenas tepehuanos de Durango.
- Trabajadores sindicalizados de la empresa Fertinal inician un bloqueo indefinido de los accesos al puerto michoacano de la ciudad de Morelia exigiendo a los gobiernos federal y estatal y a los directivos de la empresa que destraben más de 41 millones de pesos que deben ser destinados al pago de sus indemnizaciones por despido.
- MARTES 8** El senado aprueba por unanimidad las modificaciones al artículo 26 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, facultando a la CFE a cobrar el servicio eléctrico en forma diferida en casos de imposibilidad de pago en comunidades pobres.
- MIÉRCOLES 9** Los trabajadores despedidos de Fertinal vuelven a tomar los accesos al puerto de Morelia junto a trabajadores docentes, mineros y del ayuntamiento local. Efectivos del Grupo de Operaciones Especiales intentan, sin éxito, impedir la medida. Los cerca de 500 manifestantes levantan la protesta tras acordar con directivos de la empresa el pago de los 41 millones de pesos bloqueados.
- JUEVES 10** Campesinos de El Campo no Aguanta más, El Barzón y el CAP junto a sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), con quienes conforman el Frente Sindical, Campesino y Social (FSCS), marchan del Ángel de la

Independencia a Los Pinos para conmemorar el 84º aniversario de la muerte de Emiliano Zapata. Los cerca de 20 mil manifestantes reclaman por una reforma estructural del sector y la implementación de subsidios adicionales, y rechazan el proyecto oficial de reforma laboral. La medida es acompañada por un paro nacional de 50 mil trabajadores telefónicos.

Alrededor de 40 mil campesinos, maestros e integrantes de organizaciones sociales e indígenas se movilizan en Tuxtla Gutiérrez para recordar al prócer mexicano y protestar contra la globalización, la política de los gobiernos estatal y federal y la intervención aliada en Irak.

VIERNES 11 Los secretarios de Economía, Gobernación, Agricultura y Reforma Agraria responden con una negativa al pedido de excluir del TLCAN al maíz y al frijol, y ofrecen un subsidio de 2.800 millones y la creación de un mecanismo de administración de importaciones que, según las normativas contempladas en el acuerdo comercial, permita limitar el ingreso de las semillas al país.

SÁBADO 12 Alrededor de 50 mil personas marchan hacia la Plaza de la Constitución siguiendo una convocatoria realizada por senadores del PAN, el PRI y el PRD. El contingente es constituido por trabajadores universitarios, telefonistas, tranviarios, electricistas, amas de casa y demás habitantes de la ciudad capital, quienes solicitan a Fox una actitud más firme contra la ocupación en Irak ante Naciones Unidas. Ejidatarios del FPDT, miembros del PPFV, estudiantes y jóvenes anarcopunks y del CGH participan en una contramarcha del zócalo capitalino a la embajada estadounidense en la que critican la intervención armada. La movilización es reprimida con gas pimienta por granaderos que detienen a 27 manifestantes.

DOMINGO 13 Alrededor de 40 campesinos choles ingresan con machetes y armas de fuego al poblado chiapaneco de Nuevo San Rafael e intentan, sin éxito, desalojar a las bases de apoyo zapatista que habitan la zona.

LUNES 14 Dos centenas de comuneros de Santa María Chimalapa ingresan al paraje La Esmeralda, situado en los límites con la colonia Cuauhtémoc, e inician trabajos de delimitación en el predio de 13 mil ha en disputa con productores ganaderos de la localidad vecina.

JUEVES 17 Los productores ganaderos de la colonia oaxaqueña de Cuauhtémoc bloquean los accesos a la localidad y retienen a 10 funcionarios federales y estatales en reclamo por el desalojo de comuneros de Santa María Chimalapa.

VIERNES 18 Los pequeños propietarios de Cuauhtémoc detienen a 180 comuneros de Santa María Chimalapa que mantienen cercadas tierras en disputa tras haber liberado a los funcionarios secuestrados desde el jueves.

SÁBADO 19 Los colonos de Cuauhtémoc liberan a 118 de los comuneros zoques apresados.

LUNES 21 Cerca de 400 efectivos policiales de los 3 niveles de gobierno arriban a Santa María Chimalapa y a la colonia Cuauhtémoc.

JUEVES 24 Representantes de El Campo no Aguanta Más, el CAP, la CNC y El Barzón se reúnen con funcionarios de las secretarías de Reforma Agraria y Gobernación para discutir la realización de modificaciones al artículo 27 de la Constitución que versa en torno a la propiedad de tierras y aguas. El CNA, la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR) y la Confederación Nacional Ganadera expresan su rechazo al cambio de la normativa.

Indígenas zoques de Santa María Chimalapa realizan una asamblea en el poblado en la que resuelven cerrar sus negociaciones con los gobiernos del estado y federal.

LUNES 28 Con la asistencia de funcionarios del poder ejecutivo y de dirigentes del CAP, el Barzón, la CNC y 8 de las 12 organizaciones integrantes de El Campo no Aguanta Más se firma el Acuerdo Nacional para el Campo, que contempla la aplicación de programas de emergencia, subsidios y presupuestos multianuales, además de una partida presupuestaria adicional de 2.800 millones de pesos y un compromiso de apelación a los mecanismos de defensa prescritos en el TLCAN para compensar las desventajas comparativas de los productores nacionales de maíz blanco y frijol. La Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), el Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCh), el Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano (FNDCM) y la Unión Nacional de Organizaciones en Forestería Comunitaria expresan haber rechazado el acuerdo por la negativa oficial a revisar el TLCAN y el artículo 27, a declarar una ley de amnistía y por considerar insuficientes las restricciones prometidas a la importación de maíz y frijol.

MIÉRCOLES 30 Ganaderos de Cuauhtémoc, comuneros de Santa María Chimalapa y funcionarios estatales y federales se reúnen en la ciudad de Oaxaca por iniciativa del gobernador. Las partes comienzan a discutir un pacto de no agresión.

GLOSARIO DE SIGLAS

AGN	Archivo General de la Nación
CAP	Consejo Agrario Permanente
CGH	Consejo General de Huelga
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CNA	Consejo Nacional Agropecuario
CNC	Confederación Nacional Campesina
CNPR	Confederación Nacional de Productores Rurales
CNTE	Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

CONCAMIN	Confederación de Cámaras Industriales
EZLN	Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FDCCh	Frente Democrático Campesino de Chihuahua
FNDCM	Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano
FPDT	Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
FPFV	Frente Popular Francisco Villa
FSCS	Frente Sindical, Campesino y Social
FSODO	Frente de Sindicatos y Organizaciones Democráticas de Oaxaca
FSM	Foro Social Mundial
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
IPN	Instituto Politécnico Nacional
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PAN	Partido Acción Nacional
PARLACEN	Parlamento Centroamericano
PFPP	Policía Federal Preventiva
PGJE	Procuraduría General de Justicia del Estado
PPP	Plan Puebla Panamá
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido Revolucionario Institucional
SAGARPA	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SE	Secretaría de Economía
SG	Secretaría de Gobernación
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTS	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud
TLCAN	Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UAM	Universidad Autónoma Metropolitana
UAP	Universidad Autónoma de Puebla
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
UNORCA	Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas
UNT	Unión Nacional de Trabajadores
USET	Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.*

Nicaragua

[cronología enero-abril 2003]

ENERO

- JUEVES 2** Obreros en huelga de la empresa Tritón Minera SA, en Mina El Limón, junto con pobladores del lugar, bloquean el acceso a la entrada de la misma en reclamo del reintegro de los casi 250 trabajadores despedidos y del reinicio de las negociaciones, suspendidas luego de que el gobierno declarara ilegal la huelga realizada durante el mes de octubre pasado.
- MIÉRCOLES 8** Se inician oficialmente en Washington DC las negociaciones dirigidas a conformar un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Centroamérica.
- VIERNES 10** Trabajadores agremiados a la Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo (URECOOTRACO) realizan un plantón frente al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), en Managua, para exigir al gobierno subsidios y permiso para aumentar la tarifa del servicio.
- Representantes de los obreros y miembros de Tritón Minera SA acuerdan ante el Ministerio de Trabajo (MITRAB) la reanudación de las labores en la mina, la recontractación del 70% de los trabajadores despedidos por hacer huelga, la entrega de un bono de gratificación y el compromiso de la empresa de reintegrar, en algún momento, al 30% de los empleados que quedaron fuera de los acuerdos. Una delegación de unos 50 mineros, junto con el secretario general del Sindicato Pedro Roque, manifiesta su disconformidad con el acuerdo y sostiene que continuarán con la huelga hasta que se reincorpore a la totalidad de los obreros despedidos.
- MARTES 21** Los trabajadores del MTI marchan hasta la Asamblea Nacional (AN), en Managua, en rechazo al recorte presupuestario y para exigir el pago de los salarios y viáticos de enero.
- MIÉRCOLES 22** El ejecutivo, siguiendo los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI), aprueba un veto parcial al Presupuesto 2003 que contempla una reducción del déficit fiscal mayor a la aprobada en diciembre, afectando al sector de salud, a la educación, a los trabajadores de la AN y a otros trabajadores estatales.

Trabajadores agremiados a la Asociación de Jubilados del Sector Salud (AJUSS) protestan ante el MITRAB, en Managua, para exigir que se les permita participar como integrantes en las negociaciones del convenio colectivo.

Habitantes de León, convocados por la Asociación de Consumidores, realizan una marcha y diversos plantones frente a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL) y Unión Fenosa, contra el alza de los servicios públicos y para denunciar irregularidades.

JUEVES 23 Obreros de Mina El Limón realizan un paro por 2 horas para exigir a Tritón Minera SA el reintegro del 30% de los mineros que no fueron reincorporados y contra la decisión de contratar nuevos empleados violando los acuerdos suscritos en el mes de enero.

MARTES 28 Más de mil trabajadores de la maquiladora taiwanesa Presitex Corp SA, en Sébaco, inician una huelga contra el despido de 2 obreras que fueron expulsadas por denunciar violaciones al convenio colectivo y para exigir que se respeten sus derechos.

JUEVES 30 La Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD) inicia un paro nacional por 48 hs y plantones frente a hospitales y centros de salud contra el veto presidencial del presupuesto que quita 120 millones de córdobas para aumento salarial del sector y para exigir más medicamentos, así como la participación de los jubilados en el convenio colectivo.

VIERNES 31 Los trabajadores de la maquiladora Presitex levantan la huelga luego de reunirse con autoridades del MITRAB y de la empresa y acordar una próxima reunión.

FEBRERO

MARTES 4 Taxistas de 12 cooperativas, como la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxis (FENICOTAXI), realizan plantones frente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la AN, el Instituto Regulador de Transporte Municipal de Managua (IRTRAMMA) y la alcaldía de esta capital para protestar contra la negativa del Ministerio de Hacienda de entregar el plan para exoneraciones tributarias y contra el incumplimiento, por parte del IRTRAMMA, de la Ley de Moratoria de Transporte.

VIERNES 7 Decenas de organizaciones agrupadas en el Bloque de Lucha Social y Popular, convocadas por la Coordinadora Civil, marchan hasta la AN, en Managua, contra el veto presupuestario que contempla un ajuste en la salud y la educación, así como el aumento de la canasta básica y despidos.

- JUEVES 13** Trabajadores de la empresa Tritón Minera SA, autoridades de la misma y el MITRAB acuerdan la reincorporación del 30% de los obreros despedidos, la entrega de la canasta navideña del año anterior y el bono productivo correspondiente a octubre, entre otras cuestiones.
- VIERNES 14** Cerca de 7 mil personas entre trabajadores, universitarios y jubilados de distintas regiones del país, convocados por el Frente Nacional de Trabajadores (FNT), realizan una marcha en Managua contra el veto del gobierno al presupuesto de la nación y en defensa del 6% del presupuesto para las universidades y del mantenimiento de las asignaciones salariales.
- SÁBADO 15** Más de mil personas, convocadas por el movimiento Nicaragua Joven, realizan una protesta en Managua en repudio a la intervención militar estadounidense en Irak. Confluyen con esta manifestación protestas contra el alza de las tarifas y la privatización de los servicios públicos.
- MARTES 18** Más de 100 personas, convocadas por el Colectivo Feminista y el Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana, entre otras organizaciones, protestan en Managua contra la ministra de Salud y los obispos por no permitir el aborto terapéutico a una niña de nueve años que fue violada.
- MIÉRCOLES 19** Cientos de estudiantes realizan una manifestación en Managua y lanzan morteros frente a las instalaciones de la Jefatura Nacional de la Policía para exigir el 6% del presupuesto a las universidades. La policía reprime con gases y balas de goma, a lo que los estudiantes responden con morteros y piedras, produciéndose fuertes enfrentamientos que dejan un saldo de 4 universitarios, 4 policías y 1 reportera heridos. Por la tarde, 2 buses llenos de estudiantes de la Universidad Nacional Agraria llegan como refuerzos al lugar de combate.
- Más de 600 taxistas de la Unidad de Cooperativas Adelante Nicaragua, entre otras, realizan una protesta frente a la alcaldía de Managua para exigir al ITRAMMA que suspenda el decomiso de concesiones de placas y el cobro en los mercados, entre otras cuestiones.
- VIERNES 21** Miembros del Consejo Nacional de Universidades (CNU), representantes estudiantiles y diputados que conforman la Junta Directiva del Parlamento firman un compromiso por parte de la junta de incorporar al presupuesto universitario cerca de 51 millones de córdobas. Los estudiantes establecen una tregua en sus protestas.
- JUEVES 27** Mujeres del Comité Nacional Feminista (CNF) realizan un plantón frente a la Catedral Metropolitana de Managua en protesta por la decisión de la jerarquía católica de excomulgar a los padres de la niña violada a la que la semana anterior se le realizara un aborto terapéutico y para exigir la destitución de las ministras de Salud y de la Familia.

MARZO

- JUEVES 13** El Banco Mundial (BM) aprueba el desembolso de un crédito de 15 millones de dólares y otros recursos para un programa de financiamiento.
- MARTES 18** Cerca de 8 mil comerciantes de los mercados de Managua realizan una marcha hasta la AN contra el aumento de los impuestos por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI). Posteriormente, se producen disturbios con la policía que dejan un saldo de 2 detenidos y varios heridos.
- MIÉRCOLES 19** El gobierno de Nicaragua ofrece a EE.UU. su apoyo político y también ayuda humanitaria posconflicto en Irak.
- Más de 20 organizaciones aglutinadas en el Movimiento Social Nicaragüense –entre las que se encuentran el CNU y la Asociación Nicaragüense por la Paz– protestan frente a la embajada de EE.UU. en Managua contra la guerra en Irak y en repudio al gobierno nicaragüense por su respaldo a la acción militar.
- JUEVES 20** En Managua, estudiantes de la Universidad Centroamericana realizan plantones frente a la embajada de EE.UU. y a un Mc Donald’s en rechazo a la invasión de este país a Irak. Pobladores de los barrios de la capital y de Matagalpa también realizan protestas contra la guerra.
- MARTES 25** Alrededor de 200 taxistas de Managua, Masaya y León realizan un paro y marchan hasta la AN para exigir a los diputados que aprueben la Ley General de Transporte, se reforme la Ley de Importación de Vehículos Usados, se reduzca hasta en un 50% el Impuesto Específico al Consumo (IEC) y se revise el manejo de las concesiones.
- VIERNES 28** Trabajadores de la empresa Yu Jin, del Complejo de Maquila Saratoga, realizan un plantón en las afueras de la planta, ubicada en el km 13,5 de la nueva carretera a León, para exigir el reintegro de los trabajadores despedidos por haber formado un sindicato y respeto a la libertad de expresión y sindical.

ABRIL

- MARTES 1** Trabajadores de la hacienda Buena Esperanza, en San Ramón, inician un paro en reclamo del pago de varios meses de salarios adeudados. Un grupo de campesinos de la ex Resistencia Nicaragüense (RN) y obreros agrícolas respaldan a los campesinos manteniendo tomada la finca.
- VIERNES 4** En Managua, más de mil personas convocadas por el FNT y diversos organismos sociales del país, como el movimiento pacifista de los años ‘60 y comu-

nidades eclesiales de base, entre otros, realizan una marcha hacia la embajada de EE.UU. en protesta por la guerra de este país contra Irak.

DOMINGO 6 Trabajadores del Centro de Salud del municipio de San Rafael del Sur, afiliados al Sindicato Méndez González, inician un paro para exigir al Ministerio de Salud (MINSA) la entrega de los viáticos de alimentación correspondiente al mes de marzo.

LUNES 7 La policía intenta desalojar a los campesinos y ex miembros de la RN que ocupan la finca Buena Esperanza, produciéndose fuertes enfrentamientos.

JUEVES 10 Los presidentes centroamericanos se reúnen con Bush en Washington para seguir avanzando en la puesta en marcha de un TLC entre ambas partes.

MIÉRCOLES 16 Centenares de campesinos y personas de la ex RN ocupan la finca La Pineda y mantienen tomadas otras en Jinotega y Matagalpa.

JUEVES 24 Pobladores de Santo Tomás, en Chontales, realizan una marcha contra ENACAL por los malos servicios prestados y para exigir una solución inmediata a la crisis del agua.

VIERNES 25 El gobierno de EE.UU. condona a Nicaragua casi 30 millones de dólares en pagos vencidos de la deuda externa.

Personas de la ex RN toman más fincas en los departamentos de Matagalpa y Jinotega y exigen al gobierno que les dé las tierras que les prometió hace 13 años, cuando se desarmaron. La policía da plazo hasta el domingo próximo para que los campesinos y desmovilizados de la RN que ocupan desde el miércoles 16 la finca La Pineda la desalojen.

MARTES 29 La AN aprueba una reforma a la Ley General de Presupuesto de la República, beneficiando con partidas extras a los sectores Salud, Educación, Ejército y Policía, entre otros.

Luego de frustradas negociaciones realizadas el pasado lunes, la policía ocupa la hacienda La Pineda sin que se produzcan enfrentamientos, ya que los campesinos se han ido del lugar.

GLOSARIO DE SIGLAS

AJUSS	Asociación de Jubilados del Sector Salud
AN	Asamblea Nacional
BM	Banco Mundial
CNF	Comité Nacional Feminista

CNU	Consejo Nacional de Universidades
DGI	Dirección General de Ingresos
ENACAL	Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
ENITEL	Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones
FENICOTAXI	Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxis
FETSALUD	Federación de Trabajadores de la Salud
FMI	Fondo Monetario Internacional
IEC	Impuesto Específico al Consumo
IRTRAMMA	Instituto Regulador de Transporte Municipal de Managua
FNT	Frente Nacional de Trabajadores
MINSA	Ministerio de Salud
MITRAB	Ministerio de Trabajo
MTI	Ministerio de Transporte e Infraestructura
RN	Resistencia Nicaragüense
TLC	Tratado de Libre Comercio
URECOOTRACO	Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo

Panamá

[cronología enero-abril 2003]

ENERO

- MARTES 7** La Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá (ASEUPA), que se encuentra en paro desde hace 35 días en reclamo de que se liberen las partidas para un ajuste salarial, que según el Ministerio de Economía fueron entregadas y según las autoridades universitarias no levanta la medida tras llegar a un acuerdo con las directivas.
- La Comisión de la Verdad, acompañada de familiares de desaparecidos durante la dictadura, entrega al Ministerio Público, en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, los expedientes de 6 casos de desaparecidos para que ese organismo reabra las investigaciones sobre los crímenes cometidos por la dictadura militar en el poder entre los años 1968 y 1989.
- JUEVES 9** En el día en que se conmemora el 39º aniversario de la revuelta popular en reclamo de soberanía en la que 21 estudiantes murieron en enfrentamientos con militares estadounidenses, se realizan protestas en distintas ciudades del país. En la capital, un grupo de manifestantes, entre los que se encuentra la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá marcha hasta la embajada de EE.UU. para repudiar el colonialismo de ese país y protestar contra la decisión del gobierno de establecer esta fecha como feriado. Son interceptados por la policía, que les impide el paso a las inmediaciones de la sede diplomática. Integrantes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) y estudiantes universitarios inician una marcha desde el Parque Porras hasta el cementerio Amador y, al pasar por la sede del gobernante Partido Arnulfista (PA), se enfrentan con militantes de esa agrupación.
- JUEVES 16** Tras la disposición de las autoridades indígenas de la comarca de Ngöbe Bugle, más de 80 familias de Villa del Indio, asentamiento creado hace más de 20 años como albergue temporal en la ciudad de David, son desalojadas por la policía. Se producen enfrentamientos y son detenidas unas 7 personas.
- VIERNES 17** Unos 1.400 trabajadores de la Dirección de Aeronáutica Civil (DAC) protestan frente a esa entidad en la zona de Albrook en rechazo a los proyec-

tos de reestructuración del área aeronáutica que se discuten en la Asamblea Legislativa y que, según ellos, implica la privatización de los aeropuertos nacionales y cientos de despidos en el sector sin las indemnizaciones correspondientes.

SÁBADO 18 Un grupo armado saquea el poblado indígena de Paya, Darién, fronterizo con Colombia, asesinando a 4 autoridades kunas de la zona. Además, secuestran a 2 ciudadanos estadounidenses y a 1 canadiense. Según los pobladores, los atacantes habrían sido miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. Tras el ataque, cientos de habitantes de la comunidad y del poblado de Púculo huyen a la zona de Boca de Cupe.

JUEVES 23 El gobierno solicita ayuda al ejército de EE.UU., que lleva a cabo el operativo militar “Nuevos Horizontes” en la comarca indígena Ngöbe Buglé de Chiriquí, para que brinde apoyo humanitario a la población refugiada en Boca de Cupe tras el ataque sufrido el sábado pasado. En tanto, el contingente de soldados norteamericanos llega a la zona de conflicto fuertemente armado.

SÁBADO 25 Unos 300 indígenas y campesinos miembros del Movimiento 10 de Abril y la Coordinadora Campesina Contra los Embalses (CCCE) bloquean la vía Interamericana a la altura del río Tabasará, en el límite entre Chiriquí y Veraguas, para exigir que el gobierno elimine 2 proyectos hidroeléctricos en ese río y en el Vigú por los efectos ambientales que producirían. Además, solicitan la presencia de la presidenta Mireya Moscoso. Tras arribar al lugar el gobernador de Chiriquí y fracasar el diálogo se producen enfrentamientos con la policía, con un saldo de más de 50 detenidos.

MARTES 28 Unos 1.300 transportistas realizan un paro de más de 7 horas y marchan por las calles de David, provincia de Chiriquí, hasta la gobernación, en protesta por la habilitación incontrolada de licencias por parte de un legislador. Los manifestantes entregan un pliego de peticiones que contempla la revisión de las tarifas y la entrega de créditos a bajo interés. Además, dan un plazo de 8 días a la presidenta Mireya Moscoso para que los reciba.

VIERNES 31 Entran en vigencia 3 leyes que reestructuran la aviación civil aprobadas por la Asamblea Legislativa días atrás. La primera regula la aviación civil de forma tal que quedan sometidos a las leyes del país los hechos ocurridos en naves nacionales o extranjeras que se encuentren en territorio panameño; la segunda crea la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), que, como una unidad autónoma del estado, tendrá la facultad de prohibir o restringir los vuelos sobre zonas determinadas; y la tercera privatiza el aeropuerto de Tocumen y permite la corporatización de los aeropuertos nacionales.

FEBRERO

- LUNES 3** Trabajadores desocupados de la Unión de Trabajadores y Desempleados Colonenses (UTRADECO) y del Movimiento de Emancipación Colonense toman las instalaciones del Fondo de Inversión Social (FIS) para exigir el pago de 2 quincenas atrasadas de 450 empleos temporales y la extensión de éstos. Tras el compromiso de las autoridades de dar una respuesta para el jueves próximo, levantan la ocupación.
- La presidenta Mireya Moscoso sanciona las leyes que habilitan el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Panamá y Centroamérica y el Protocolo Bilateral del TLC con El Salvador.
- JUEVES 6** El Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía (MONADESO) marcha desde la Plaza Porras hasta el Palacio Legislativo en protesta por la operación “Nuevos Horizontes” del ejército norteamericano, que realizará labores de ayuda humanitaria en Chiriquí y Bocas del Toro. Además, manifiesta su repudio frente a la posible guerra que impulsa EE.UU. contra Irak.
- MARTES 11** Los presidentes de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Colombia y el canciller de Argentina se reúnen en el Palacio de Las Garzas y aprueban la Declaración de Panamá, catalogando como terroristas a las organizaciones armadas colombianas, tanto paramilitares como guerrilleras.
- VIERNES 14** El Movimiento por Carretera Cerro Punta-Boquete realiza una caravana por David, provincia de Chiriquí, en apoyo al proyecto de construcción de una carretera que una estas dos regiones, que genera muchas controversias por los daños ambientales que podría provocar.
- SÁBADO 15** En adhesión a la convocatoria internacional en contra de la guerra de EE.UU. contra Irak, cientos de personas –estudiantes, sindicatos, miembros de la iglesia y de la comunidad árabe– marchan por la capital, desde el Parque Porras hasta la Plaza 5 de Mayo.
- JUEVES 27** La presidenta Mireya Moscoso y la embajadora de EE.UU. en Panamá participan de la inauguración del proyecto militar “Nuevos Horizontes 2003” que el ejército norteamericano desarrolla en la comarca indígena de Ngöbe Buglé, provincia de Chiriquí. Esta misión es la primera que militares de EE.UU. realizan en territorio panameño desde el fin de la ocupación del país en 1999.
- VIERNES 28** Habitantes de Arraiján ocupan las instalaciones del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y, tras el ingreso de los funcionarios, bloquean sus accesos en protesta por la falta de agua potable en sus comunidades. Más tarde cierran calles en las cercanías de la entidad. Finalmente se presenta en el lugar el alcalde del corregimiento, que acuerda con los

manifestantes el suministro de agua a partir del día siguiente, por lo que éstos levantan la medida.

MARZO

LUNES 10 Más de 600 productores de todo el país, nucleados en el Frente Nacional por la Defensa del Sector Agropecuario, se concentran en Divisa, provincia de Herrera, para exigir a la ministra de Desarrollo Agropecuario la ejecución de programas para el sector ya aprobados por ley. Luego de presentarse en el lugar, la ministra expresa que sólo negociará con una comisión en la ciudad de Santiago, y se retira. Los productores cortan la vía Interamericana exigiendo la presencia de la ministra. Más tarde ésta retorna y dialoga con los manifestantes, que le entregan un pliego de peticiones. Se conforma una comisión integrada por directores del ministerio para atender las demandas de los productores y reanudar así las negociaciones. Finalmente, los manifestantes levantan la medida.

MIÉRCOLES 12 Unos 300 trabajadores de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), agrupados en la Coalición de Sindicatos del Canal de Panamá realizan una protesta frente a la Asamblea Legislativa y entregan una carta en rechazo a la reforma de la sección de la Constitución Nacional que refiere al canal, por la cual perderían derechos y estabilidad laboral.

Transportistas de la Coordinadora de Transporte de Carga de Colón y de la Cámara Nacional de Transporte de Colón, junto a integrantes de la Alianza de Desempleados Colonenses, realizan una caravana por la provincia. Reclaman rebajas en el precio del combustible, la creación de puestos de trabajo y una nueva terminal de buses, entre otras cuestiones.

JUEVES 13 Grupos ambientalistas, indígenas, integrantes de la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) y del Sindicato de Trabajadores de las Bananeras Independientes de Chiriquí (SITRABICH), entre otras organizaciones, protestan frente a la Feria de San José de David, provincia de Chiriquí, ante la presencia de la presidenta Mireya Moscoso, en rechazo a la posible privatización de la Caja de Seguro Social (CSS), la construcción de la carretera Boquete-Cerro Punta y el proyecto hidroeléctrico sobre el río Tabasará.

SÁBADO 15 El Comité Panameño por la Paz marcha por la capital hasta la Plaza 5 de Mayo para exigirle al gobierno que no sea cómplice de la guerra contra Irak que impulsan el gobierno de EE.UU. y sus aliados.

LUNES 17 En el día en que se inicia el año escolar se realizan varias protestas en diferentes establecimientos educativos. En el Richard Neumann, los docentes

paran en protesta por el mal estado de las instalaciones. En el primario General José de San Martín, de Cerro Batea, padres de familia no envían a sus hijos a clase en rechazo a la construcción de una carretera cerca de la escuela, lo que consideran un peligro para los estudiantes. Padres de familia del colegio Tomás Gabriel Altamirano Duque cierran la avenida Justo Arosemena tras el anuncio de la clausura de la escuela. Dado que ya habían pagado las matrículas, exigen la devolución del dinero para matricular a sus hijos en otros establecimientos.

MIÉRCOLES 19 Residentes de la barriada Juan Demóstenes Arosemena, junto al Movimiento de Desempleados Colonenses (MODESCO) y Reacción Tres, cortan la vía Transísmica Boyd Roosevelt, en Colón, para exigir la construcción de dos puentes peatonales y arreglos de calles de la comunidad. Son reprimidos por la policía, produciéndose enfrentamiento, con un saldo de 15 detenidos y varios heridos.

JUEVES 20 Cientos de personas marchan desde la Gran Estación de San Miguelito hasta la entrada de San Antonio para rechazar la guerra contra Irak iniciada el día anterior por EE.UU. y sus aliados.

VIERNES 21 Se desarrolla en Colón el segundo día de reuniones por el Plan Puebla Panamá (PPP).

JUEVES 27 Unos 2 mil estudiantes del Colegio Abel Bravo marchan por las principales calles de la provincia de Colón para exigir la paz en oposición a la guerra de EE.UU. contra Irak.

A B R I L

MARTES 1 Durante el día se suceden protestas de desempleados en la ciudad de Colón. Por la mañana, integrantes del movimiento Reacción Tres, junto a moradores de Villa del Caribe, cierran la vía Transísmica en reclamo de la construcción de 2 puentes, 1 escuela y la generación de 2 mil puestos de trabajo. Tras enfrentarse con la policía, son arrestados 4 dirigentes del movimiento. Más tarde, miembros de la Alianza de Desempleados –integrada por UTRADECO, Emancipación Colonense y el Movimiento de Desempleados de Cristóbal (MODECRIS)– ocupan las oficinas del FIS para exigir la creación de 600 puestos de trabajo y el pago de salarios adeudados a unas 300 personas del plan de empleos temporales. Tras una hora de ocupación, se retiran y realizan un piquete en la corregiduría de Cristóbal exigiendo la liberación de los detenidos de Reacción Tres.

MARTES 15 El programa “Nuevos Horizontes” es clausurado por la embajadora de EE.UU. Sin embargo, el último contingente de soldados norteamericanos dejará el país a principios de mayo.

LUNES 21 La Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos (FENAMERI) inicia un paro por tiempo indefinido en reclamo de la reglamentación de su actividad, que debería haber entrado en vigencia el 1 de enero, y del pago de horas extras.

Más de 250 familias que en marzo ocuparon unos terrenos para la construcción de viviendas en el sector de San José, corregimiento de Las Lomas, distrito de David, y que fueron desalojadas con el argumento de que éstos pertenecían a la Corporación Financiera Nacional (COFINA), vuelven a ocupar las fincas. Consideran que esos terrenos pertenecen al estado, ya que en el desalojo no les presentaron los papeles de propiedad.

MARTES 22 Padres de familia y estudiantes del Ciclo Básico Stella Sierra de Arraiján, Panamá, en paro desde hace más de 10 días en reclamo del nombramiento de un docente como director, que el día anterior se enfrentaron con la policía cuando ésta intentó ingresar al plantel, marchan hasta Loma Coba en rechazo a la decisión del Ministerio de Educación de clausurar la escuela. Luego cortan un carril de la vía Interamericana. La policía reprime y se producen enfrentamientos, con un saldo de 7 detenidos. Tras presentarse en el lugar el alcalde de Arraiján, que propone nombrar al docente como director provisorio hasta que se realicen los concursos correspondientes, algunos manifestantes son liberados.

JUEVES 24 Médicos de la FENAMERI que desde el lunes se encuentran en paro en reclamo de la reglamentación de sus labores y el pago de horas extras marchan junto a estudiantes de medicina hasta el Palacio Justo Arosemena, donde se reúnen con el presidente de la Asamblea Legislativa. Acuerdan formar una comisión negociadora integrada por representantes del gremio, la Asamblea Legislativa, la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, la CSS, el Ministerio de salud y estudiantes de medicina.

LUNES 28 Estudiantes, profesores y padres de familia del colegio Stella Sierra de Arraiján, Panamá, que desde hace 18 días se encuentran en paro, marchan hasta la presidencia, donde son recibidos por la ministra de Educación. Entregan un pliego de peticiones en el que solicitan, entre otras cosas, transparencia en los concursos de elección de directores de escuelas a realizarse en junio y levantan la medida.

MARTES 29 Médicos de la FENAMERI, que desde hace 9 días se encuentran en paro exigiendo la reglamentación de su actividad, levantan la medida horas antes de que se inicie el último debate sobre este tema en la Asamblea Legislativa. Luego, la regulación del trabajo de los galenos es aprobada como ley de la República.

GLOSARIO DE SIGLAS

AAC	Autoridad Aeronáutica Civil
ACP	Autoridad del Canal de Panamá
ANFACSS	Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social
ASEUPA	Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá
CCCE	Coordinadora Campesina Contra los Embalses
COFINA	Corporación Financiera Nacional
CSS	Caja de Seguro Social
DAC	Dirección de Aeronáutica Civil
FENAMERI	Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos
FIS	Fondo de Inversión Social
IDAAN	Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
MODECRIS	Movimiento de Desempleados de Cristóbal
MODESCO	Movimiento de Desempleados Colonenses
MONADESO	Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía
PA	Partido Arnulfista
PPP	Plan Puebla Panamá
SITRABICH	Sindicato de Trabajadores de las Bananeras Independientes de Chiriquí
SUNTRACS	Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares
TLC	Tratado de Libre Comercio
UTRADECO	Unión de Trabajadores y Desempleados Colonenses

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Gustavo Gibert.
Fuentes: diarios Crítica, El Panamá América y La Prensa.*

Puerto Rico

[cronología enero-abril 2003]

ENERO

VIERNES 10 El secretario de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, Gordon England, entrega al Congreso una certificación anunciando el cese de las maniobras bélicas en la Isla Nena a partir del 1 de mayo de 2003.

Una brigada de 3 miembros del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) ingresa a los terrenos restringidos por la Marina en Vieques para intentar detener las maniobras que comenzarán el próximo lunes.

SÁBADO 11 La Coalición EcuMénica Pro Vieques, el Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques (CPRDV) y Todo Puerto Rico con Vieques, entre otras organizaciones, convocan a la Caminata por la Paz y la Vida en Vieques que parte desde Fajardo y llegará al día siguiente al Capitolio para exigir la salida de la isla de la Marina de Guerra de EE.UU. y rechazar el inicio de las maniobras militares.

DOMINGO 12 En apoyo a las prácticas militares los Viequenses Pro Marina levantan, a pasos del principal campamento de oposición a la Marina de Guerra de EE.UU., su primer campamento, llamado Jacinto Gutiérrez en memoria de un cadete que falleció durante los conflictos en la Universidad de Puerto Rico en la década del '70. Se produce el primer altercado entre ambos grupos cuando un militante Pro Marina intenta izar una bandera de EE.UU. frente al Campamento de Los Gigantes de Carolina, opuesto a la presencia militar.

LUNES 13 La Marina de Guerra de los EE.UU. reanuda las prácticas militares en la Isla Nena, que incluyen lanzamiento por aire y mar de bombas sin explosivos hacia el polígono y aguas de la costa de Vieques. Cinco desobedientes civiles del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) ingresan en los terrenos restringidos por la Marina en Vieques para intentar detener las maniobras bélicas. Son arrestados por la Policía Militar y sentenciados a cumplir 20 días de prisión.

MARTES 14 Los 3 integrantes del MST que ingresaron el viernes pasado a los terrenos restringidos de la Marina son arrestados sin poder detener las maniobras bélicas.

Los grupos anti Marina realizan una marcha frente al cuartel de la Policía para exigir la libertad de los desobedientes civiles detenidos. Luego se movilizan hasta Monte Carmelo, pero se encuentran con el paso bloqueado por la policía, por lo que deciden bajar al Campamento Luisa Guadalupe, localizado frente a la verja que demarca la instalación militar de la Marina. Los militares ubicados en el Campamento García comienzan a lanzar gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma a los manifestantes.

MIÉRCOLES 15 El superintendente de la Policía llega a un acuerdo verbal con el alto rango de la Marina de Guerra de los EE.UU. y con un grupo de opositores a la Armada para evitar incidentes como el ocurrido el martes por la noche. Los militares se comprometen a no patrullar la carretera que linda con el Campamento Luisa Guadalupe, y los desobedientes civiles a no tumbar la verja que los separa del área militar y a no arrojar piedras y otros objetos a los terrenos restringidos.

VIERNES 17 Un grupo de desobedientes civiles marcha desde el Campamento Milivy hasta el Campamento Luisa Guadalupe, pasando por los campamentos Justicia y Paz y el pro Marina Jacinto Gutiérrez, para exigir el cese de las prácticas militares.

MIÉRCOLES 22 Cientos de Trabajadores de la Unión Independiente de Empleados Telefónicos (UIET) salen a las calles durante la hora del almuerzo, paralizando el tránsito frente a las oficinas de la Telefónica en la Avenida Roosevelt, en protesta por la interrupción en la negociación del convenio colectivo. El diálogo se rompe cuando los representantes de la Puerto Rico Telephone Company (PRTC) presentan como oferta final un aumento de 50 centavos por hora. Los representantes de la UIET buscan un incremento de 1 dólar con 25 centavos. Además, los trabajadores rechazan una cláusula mediante la cual los jubilados son obligados a pagar la mitad del importe de su plan médico.

JUEVES 30 Los trabajadores de la UIET paralizan sus labores en las oficinas de la Parada 25 en Santurce y Trujillo Alto para reclamar una nueva negociación sobre las cláusulas económicas del convenio colectivo.

VIERNES 31 Un grupo de 4 desobedientes civiles de la organización Cayo La Yayí ingresa a los terrenos del Campamento García y coloca una pancarta en una montaña y una bandera de Puerto Rico en la torre de comunicaciones.

FEBRERO

DOMINGO 2 Se realiza una nueva reunión entre el gobierno, directivos de PRTC y representantes de la UIET, en la que no se llega a ningún acuerdo. La gerencia de la compañía elimina las licencias sindicales a los miembros de la Junta de Directivos de la UIET, dejándolos sin sus salarios mientras duren las protestas.

Los trabajadores realizan una manifestación frente a los portones de La Fortaleza para exigir la intervención en el conflicto de la gobernadora Sila María Calderón.

El grupo de desobedientes civiles pertenecientes a la organización Cayo La Yayí que ingresó en los terrenos restringidos de la Marina el viernes pasado logra salir de los mismos sin ser arrestado.

MIÉRCOLES 5 Decenas de empleados agrupados en la UIET protestan frente a las oficinas del Banco Popular, uno de los accionistas de la PRCT, en Hato Rey.

JUEVES 6 Estudiantes de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) protestan frente al tribunal federal en Hato Rey por la sentencia que el juez federal José A. Fusté impuso al presidente del Consejo de Estudiantes de la escuela, Israel Medina Colón. La sentencia es de 120 días de cárcel por traspasar los terrenos de la Marina en Vieques.

Directivos de la PRTC, funcionarios del Departamento de Trabajo y representantes de la UIET se reúnen en la sede del bufete de abogados Fiddler & González, en Hato Rey, en donde llegan a un acuerdo que permite levantar el estancamiento en la negociación del convenio colectivo. En el acuerdo se manifiesta que la empresa está dispuesta a cubrir la totalidad del costo del plan médico de los empleados jubilados si éstos encuentran un seguro más económico que el que se les ofrece a los empleados activos. Los jubilados que prefieran el mismo plan que los trabajadores activos tendrán que pagar la mitad de su costo. Por otro lado, la UIET acepta la propuesta de un incremento de 60 centavos por hora por los 3 años que dure el convenio.

MARTES 11 La Unión de Trabajadores de la Industria y Riego (UTIER) realiza una jornada de protesta en todo el país para repudiar el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

SÁBADO 15 Representantes de más 20 organizaciones políticas, religiosas, estudiantiles y anti Marina participan de la Jornada Mundial Contra la Guerra en Irak.

MARTES 18 Empleados de la AEE nucleados en la UTIER realizan protestas en Ponce para oponerse a un posible intento de privatización de la entidad.

MIÉRCOLES 26 La Asociación de Profesores de Arecibo (APDA) y Universitarios por la Paz se concentran en el vestíbulo de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo (UPRA) y marchan por los alrededores del recinto universitario, en San Juan, en rechazo a la guerra contra Irak.

MARZO

- MIÉRCOLES 5** Decenas de estudiantes universitarios se concentran en la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la UPR para manifestarse en contra de una posible guerra contra Irak.
- MARTES 11** Los gobiernos de Puerto Rico y Panamá firman un acuerdo multisectorial a partir del cual se crearía una comisión para evaluar las alternativas a fin de estrechar las relaciones entre ambos países. El acuerdo firmado por el secretario de Estado de Puerto Rico y por el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá contempla asuntos económicos, comerciales, culturales, académicos, turísticos, deportivos y agropecuarios.
- MARTES 18** Docentes de la organización Educadores Puertorriqueños en Acción (EPA) realizan un piquete frente a las oficinas centrales del Departamento de Educación (DE) en demanda de un aumento salarial de hasta 800 pesos mensuales retroactivo a 2001.
- VIERNES 21** Más de 500 estudiantes, profesores y trabajadores de la UPR realizan marchas partiendo de las diferentes facultades para manifestarse a favor de la paz y en contra de la guerra de EE.UU. contra Irak. Se movilizan hasta la entrada del fuerte Buchanan, en donde realizan un piquete bajo las mismas consignas.
- DOMINGO 23** Unas 50 mil personas (según los organizadores) convocadas por más de 60 organizaciones pacifistas, religiosas y sindicales marchan hasta el Monumento de la Mujer Taína en Caguas para protestar por el conflicto bélico en Irak bajo la consigna Paz en la Tierra, No a la Guerra.

ABRIL

- JUEVES 3** Empleados de la UTIER realizan piquetes frente a las instalaciones de la AEE en distintos puntos de la isla en protesta por la subcontratación de empresas privadas para labores que les corresponden a ellos.
- MARTES 8** Empleados de la UTIER paralizan las labores de la cogeneradora de energía Cambalache, en Arecibo, en protesta por la contratación de una empresa norteamericana para reparar un compresor.
- SÁBADO 12** Decenas de personas convocadas por organizaciones religiosas, sindicales, políticas y civiles marchan desde el cuartel de la Guardia Nacional hasta la Fortaleza, en San Juan, contra la guerra en Irak.

GLOSARIO DE SIGLAS

AEE	Autoridad de Energía Eléctrica
APDA	Asociación de Profesores de Arecibo
CPRDV	Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques
DE	Departamento de Educación
EPA	Educadores Puertorriqueños en Acción
MST	Movimiento Socialista de Trabajadores
PIP	Partido Independentista Puertorriqueño
PRTC	Puerto Rico Telephone Company
UIET	Unión Independiente de Empleados Telefónicos
UPR	Universidad de Puerto Rico
UPRA	Universidad de Puerto Rico en Arecibo
UTIER	Unión de Trabajadores de la Industria y Riego

República Dominicana

[cronología enero-abril 2003]

ENERO

- MARTES 14** La Unión Nacional de Servicios de Enfermería (UNASE), la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (UNASED), la Asociación Dominicana de Enfermeras Graduadas (ADEG) y la Asociación de Enfermeras del Instituto Dominicano de Seguros Sociales paralizan por 3 hs sus labores en los hospitales de la capital en demanda de un aumento salarial del 50% y la asignación de transporte, entre otras cosas.
- MARTES 28** Las enfermeras agrupadas en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (SINATRAE), la Asociación Odontológica Dominicana (AOD), la Asociación Dominicana de Profesionales del Laboratorio Clínico (ADOPLAC), la Asociación Farmacéutica Dominicana y el Sindicato Nacional de Técnicos de la Salud realizan un paro de 24 hs a nivel nacional en demanda de un aumento salarial del 100%, medicamentos y material descartable para los hospitales, equipamiento para los laboratorios, transporte y pago de incentivos.
- VIERNES 31** Choferes afiliados en la Federación de Transporte de Cibao (FETRACI), que agrupa a 36 sindicatos de transporte urbano e interurbano de Santiago, marchan hasta las oficinas de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) en demanda del cese de los apagones y la reducción de las altas tarifas del servicio.

FEBRERO

- MARTES 4** Se realiza la jornada nacional de protesta resuelta en el Segundo Encuentro Nacional por la Unidad y la Coordinación de Luchas en enero pasado, de la que participan el Colectivo de Organizaciones Populares y la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), entre otros. Demandan que el gobierno reduzca los precios de los combustibles y la canasta familiar y realice un cambio en la política económica. En Santo Domingo, las escuelas públicas paralizan las actividades. En Baní paralizan el transporte y la docencia. En Barahona el paro es llevado adelante por la casi totalidad de la población. Se producen enfrentamientos con la policía en distintos lugares, con un saldo de 15 heridos y 174 detenidos.

LUNES 10 El presidente Mejía anuncia medidas económicas como el recargo a las importaciones no indispensables, entre otras, para enfrentar el alza del precio del petróleo.

VIERNES 14 El presidente de la República descarta un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para resolver la situación económica producida por el alza del precio del petróleo.

MARTES 18 Las enfermeras y bioanalistas de todos los hospitales públicos pertenecientes al SINATRAE, la AOD, la ADOPLAC, la Asociación Farmacéutica Dominicana (AFD) y el Sindicato Nacional de Técnicos de la Salud (SINATESA), todos integrantes de la Coordinadora Nacional del Sector Salud, inician un paro de labores por 48 hs en demanda de un aumento del 100% de sus sueldos.

MARTES 25 Los maestros de las escuelas y liceos públicos de la capital inician un paro por 48 hs convocado por el Comité del Distrito Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en demanda de un aumento salarial, entre otros reclamos.

MARZO

LUNES 3 Decenas de jubilados del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) realizan un piquete en los pasillos del Palacio Municipal en demanda del pago de las pensiones de febrero.

MIÉRCOLES 5 Los profesores integrantes de la ADP de las provincias María Trinidad Sánchez, La Vega, Espaillat, Sánchez Ramírez, Duarte y Salcedo, de la región del Cibao, comienzan un paro de 48 hs demandándole al gobierno el cumplimiento del aumento salarial y que se les mantenga el seguro médico, entre otras cuestiones.

JUEVES 6 Se realiza el segundo encuentro del Consejo de Comercio e Inversión República Dominicana-Estados Unidos en el que ambas partes acuerdan buscar opciones para expandir el comercio bilateral y la anexión de República Dominicana al Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica con los EE.UU.

DOMINGO 9 Los dirigentes de la UNASED, la UNASE, la ADEG y la Asociación de Enfermeras Graduadas del Seguro Social se reúnen con el presidente Mejía y el secretario de Salud Pública y acuerdan la aprobación de la mayoría de las demandas que venían realizando, como la adquisición de viviendas, incentivos por antigüedad y revisión de las jubilaciones.

MIÉRCOLES 12 Miembros de la Coordinadora de Organizaciones Populares, Sindicales, Choferiles y Campesinas se concentran en las afueras del Palacio Nacional,

donde entregan un documento en el que solicitan al gobierno la reposición del subsidio al gas propano, aumento salarial, la salida del país de las tropas norteamericanas y detener las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Centenares de personas de todo el país (jóvenes y organizaciones religiosas, culturales, políticas, sindicales y profesionales) se concentran en el Parque Colón en Santiago y realizan una vigilia en rechazo a la guerra inminente de los EE.UU. contra Irak.

MARTES 18 Jóvenes de Salcedo protestan en demanda del restablecimiento del servicio de agua potable. La policía los reprime, resultando muerto un joven dirigente del Movimiento Ernesto Che Guevara. Se paralizan en su totalidad las actividades comerciales, educativas, de transporte y agrícolas.

VIERNES 21 Los huelguistas de Salcedo levantan el paro luego de que el Movimiento Ernesto Che Guevara decide otorgar un plazo de 72 hs a las autoridades para que trasladen desde San Francisco de Macorís (SFM) al policía acusado de asesinar al joven manifestante.

Cerca de 110 médicos residentes del Hospital Francisco Moscollo Puello del Distrito Nacional inician un paro por 48 hs en demanda del pago de 6 meses de incentivos y del equipamiento del hospital. También se manifiestan los residentes del hospital Padre Billini y los de Santiago.

DOMINGO 23 Los habitantes de Salcedo reinician el paro de actividades tras el fracaso de una reunión entre autoridades y dirigentes comunitarios representantes del joven asesinado el pasado martes. El desacuerdo radica en que los habitantes piden trasladar del destacamento al policía acusado, mientras que las autoridades solicitan una tregua para profundizar la investigación.

MIÉRCOLES 26 Los docentes de las escuelas públicas de Baní, provincia de Peravia, y de Barahona, inician un paro por 72 hs convocado por la ADP, demandando al gobierno un aumento del salario en 5 mil pesos dominicanos por tanda, y que se apliquen los incentivos.

SÁBADO 29 Diferentes organizaciones populares, entre ellas la Coordinadora y Unidad del Pueblo, realizan una marcha desde el parque Independencia hasta la Embajada de los EE.UU. en rechazo a la guerra contra Irak. La policía impide el paso y golpea a los manifestantes, produciéndose enfrentamientos de los que resultan varios heridos.

LUNES 31 Los médicos del hospital Salvador B. Gautier en Santo Domingo, pertenecientes a la Asociación Médica del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (AMIDSS), inician un paro indefinido y marchan junto a pacientes

hacia las oficinas administrativas del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) en demanda de medicamentos, material descartable y la renuncia del director del Instituto.

ABRIL

JUEVES 3 Los médicos de los hospitales Presidente Estrella Ureña de Santiago y Jaime Oliver Pino de San Pedro de Macorís se unen al paro del Hospital Salvador B. Gautier, demandando el abastecimiento de medicamentos y material descartable.

LUNES 7 Los médicos del Hospital Salvador B. Gautier de Santo Domingo levantan el paro por 72 hs para dar un tiempo a las autoridades a buscar soluciones. La decisión se toma en una asamblea encabezada por el presidente de la Asociación Médica Dominicana (AMD) y el presidente de la AMIDSS con la presencia del director del IDSS.

El gobierno de los EE.UU. propone a República Dominicana entrar al Tratado de Libre Comercio (TLC) junto a Centroamérica.

MARTES 8 Los residentes de la comunidad La Madeja y del barrio Juan Alberto Espiola realizan un llamado a huelga en reclamo del arreglo de las calles. Un grupo de jóvenes se moviliza en SFM en apoyo a la medida. La policía reprime a los manifestantes resultando, muerto un joven y gravemente herido otro. Más tarde se realizan manifestaciones en los barrios San Martín y Pueblo Nuevo por el asesinato del manifestante. También son reprimidas por la policía.

MIÉRCOLES 9 Las organizaciones sindicales y populares de Licey declaran indefinido el paro de 48 hs convocado por el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), el Comité Unido para Vencer (CUPAVE) y el Comité Lucha y Progreso de la Reyna (COLUPONA) luego de que otro joven resultara gravemente herido por la policía en SFM al ser reprimidos quienes regresaban del entierro del manifestante asesinado en una movilización el día anterior.

MARTES 15 República Dominicana y Canadá firman 7 proyectos, 4 de los cuales implican una inversión de unos 500 millones de dólares en República Dominicana para mejorar la cooperación en el comercio, producción de energía, construcción y energía renovable. Son aprobados los proyectos del acueducto para la zona sur, la mina de oro de Placer Dome, la cuenca hidrográfica del río Artibonito, y uno de mejoramiento de la respuesta al VIH/SIDA.

LUNES 28 Varias organizaciones políticas, como los Partidos Comunistas del Trabajo (PCT), de los Trabajadores Dominicanos (PTD), Unión Patriótica Antiimperialista (UPA) y el Movimiento Unidad y Cambio (MIUCA), todos

integrantes de la Unidad del Pueblo, marchan desde la avenida Bolívar hasta la embajada de EE.UU. donde entregan un documento de protesta de las políticas coloniales de dicho país en ocasión de cumplirse el 38º aniversario de la intervención norteamericana de 1965.

GLOSARIO DE SIGLAS

ADEG	Asociación Dominicana de Enfermeras Graduadas
ADN	Ayuntamiento del Distrito Nacional
ADOPLAC	Asociación Dominicana de Profesionales del Laboratorio Clínico
ADP	Asociación Dominicana de Profesores
AFD	Asociación Farmacéutica Dominicana
ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
AMD	Asociación Médica Dominicana
AMIDSS	Asociación Médica del Instituto Dominicano de Seguros Sociales
AOD	Asociación Odontológica Dominicana
CNTU	Central Nacional de Transportistas Unificados
COLUPONA	Comité Lucha y Progreso de la Reyna
CUPAVE	Comité Unido para Vencer
EDENORTE	Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
FALPO	Frente Amplio de Lucha Popular
FETRACI	Federación de Transporte de Cibao
FMI	Fondo Monetario Internacional
IDSS	Instituto Dominicano de Seguros Sociales
MIUCA	Movimiento Unidad y Cambio
PCT	Partidos Comunistas del Trabajo
PTD	Partido de los Trabajadores Dominicanos
SFM	San Francisco de Macorís
SINATESA	Sindicato Nacional de Técnicos de la Salud
SINATRAE	Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería
TLC	Tratado de Libre Comercio
UNASE	Unión Nacional de Servicios de Enfermería
UNASED	Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana
UPA	Unión Patriótica Antiimperialista

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Fuentes: diarios Listín y Última Hora.*

Debates

La guerra imperial y el movimiento de resistencia global

José María Gómez

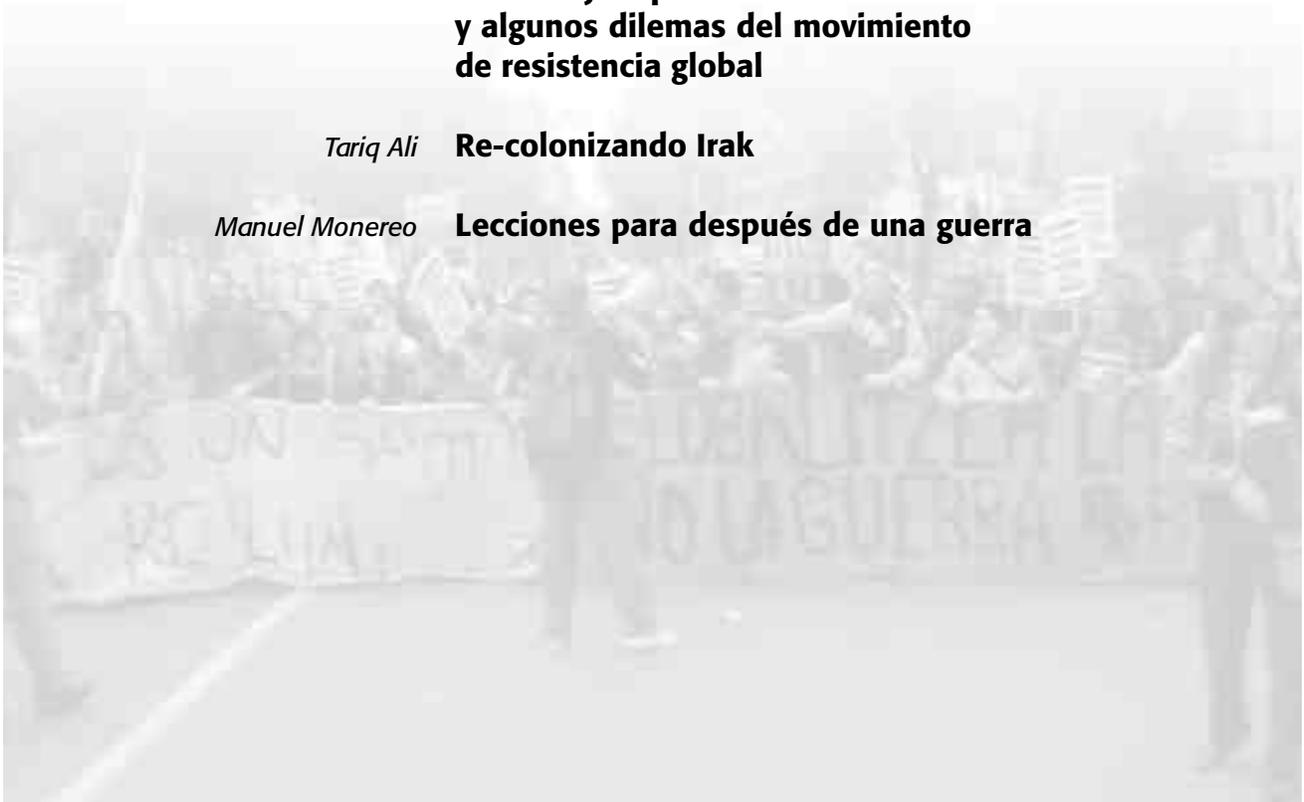
**El Leviatán imperial,
el caso “jurisprudencial” de Irak
y algunos dilemas del movimiento
de resistencia global**

Tariq Ali

Re-colonizando Irak

Manuel Monereo

Lecciones para después de una guerra



El Leviatán imperial, el caso “jurisprudencial” de Irak y algunos dilemas del movimiento de resistencia global

José María Gómez*

* *Profesor e investigador
del Instituto de Relações
Internacionais de la
Pontifícia Universidade
Católica de Rio de Janeiro
(IRI-PUC/Rio).*

Tres semanas de combate bastaron a la ofensiva estadounidense para derrotar al ejército iraquí y derribar al régimen de Saddam Hussein. Un resultado militar tan contundente cuanto previsible, si se recuerda la disparidad brutal de fuerzas existente antes de la deflagración del conflicto entre la máquina bélica más poderosa de la historia y la del país invadido. Es cierto que a la victoria militar de Estados Unidos aún le falta el codiciado trofeo de las cabezas reales del exdictador y de la mayoría de los jefes del régimen depuesto.

Además, no se han encontrado las supuestas armas de destrucción masiva, principal justificación del ataque, y gruesos errores de cálculo se han puesto en evidencia sobre la capacidad de resistencia del ejército iraquí y del propio régimen o sobre el recibimiento festivo que la población daría a las tropas invasoras. Sin embargo, nada de ello afecta la magnitud del triunfo. Los “halcones” del gobierno de Bush que desearon y planearon la guerra lo sa-

ben muy bien; por eso exultan y celebran sin moderación. Es que los motivos sobran: fue rápida, tuvo pocas bajas propias, se testearon con éxito armas de tecnología avanzada y una nueva concepción estratégica, se anuló la crítica a la conducción de la guerra proveniente de sectores de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y, sobre todo, se creó la condición necesaria para proseguir con sus proyectos.

Concluida la fase convencional de la guerra, se abre ahora la llamada "reconstrucción" política y económica de Irak, un proceso mucho más complejo e imprevisible que la propia guerra, aunque con todas las marcas y legados del período en que ésta se gestó y se llevó a cabo. La guerra no muestra sólo vencedores y vencidos entre los combatientes: deja tras de sí un país devastado por el sufrimiento humano, la pérdida de vidas inocentes, la destrucción de la infraestructura y del patrimonio cultural, y el caos generalizado que acompañó el desmoronamiento del régimen y la disolución del Estado. Y deja también, además de turbulencias extremas en la región más explosiva del planeta, una crisis grave y sin precedentes en el sistema internacional y en la política mundial de los últimos cincuenta años. De ahí que surjan preguntas inevitables a propósito de qué guerra es ésta, por qué ocurrió, qué pone en juego y cuál es su significado y alcance. Desde luego, dada la inmediatez del acontecimiento y la incertidumbre radical que envuelve el futuro de Irak, de Oriente Medio y del pretendido orden mundial en gestación en el cual se inscribe, estas notas se limitarán a plantear algunas cuestiones sobre la naturaleza de esta segunda Guerra del Golfo y sus consecuencias e impactos, en particular sobre el movimiento de resistencia global, comprometido, normativamente, con la construcción de un orden global alternativo.

Una guerra ilegal

Cuando el 20 de marzo pasado Estados Unidos y Gran Bretaña iniciaron los ataques contra Irak sin autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en nombre de una guerra "preventiva" que eliminase la supuesta amenaza del uso de armas de destrucción masiva y sustituyese un régimen dictatorial por una democracia liberal, no sólo se violaba de manera flagrante el derecho internacional, sino que también se asestaba un golpe mortal al conjunto de principios y normas del sistema internacional implantado en la post-Segunda Guerra Mundial, un sistema que hace de las Naciones Unidas el *locus* institucional por excelencia de la producción de la ley y de la legitimidad internacional, especialmente en lo concerniente al uso de la fuerza en las relaciones entre estados soberanos. En efecto, el derecho internacional no admite la figura de una hipotética "legítima defensa preventiva" ni ampara intervenciones armadas destinadas a cambiar regímenes políticos, por más crueles y odiosos que éstos sean, para implantar una forma democrática de gobierno (aunque la guerra "humanitaria" de Kosovo emprendi-

“La guerra no muestra sólo vencedores y vencidos entre los combatientes: deja tras de sí un país devastado por el sufrimiento humano, la pérdida de vidas inocentes, la destrucción de la infraestructura y del patrimonio cultural, y el caos generalizado que acompañó el desmoronamiento del régimen y la disolución del Estado.”

da por la OTAN ya había abierto un precedente) (Ramonet, 2003). La Carta de las Naciones Unidas establece que todo acto de fuerza de un Estado contra otro que no cuente con el respaldo explícito del Consejo de Seguridad constituye una agresión ilegal, a no ser en caso de legítima defensa y en respuesta a un ataque armado. Y éste no era el caso de Irak, como lo ha demostrado el fracaso diplomático de los partidarios de la acción bélica en vencer a la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad –y no sólo a Francia y Rusia, principales opositores y miembros permanentes con derecho a veto– de que dicho país representaba una amenaza inminente a los estados vecinos, a Estados Unidos y a la comunidad internacional.

A partir del momento que la única superpotencia reivindica para sí el derecho de usar la fuerza a su antojo y, al ejercerlo, entra en la ilegalidad, lo que se pone al descubierto es una gravísima ruptura de los consensos que cimentaron la arquitectura del sistema internacional de post-guerra y la cristalización de divisiones inéditas en el seno de Naciones Unidas, de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea. Se trata de una situación de crisis inédita que a su vez tiende a intensificarse a medida que se refuerza la postura de prepotencia y desprecio del derecho internacional y de las instancias multilaterales que hoy prevalece en la conducción de la política externa del gobierno de Bush. De hecho, tal postura ya se delineaba antes de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, con el rechazo de una serie de tratados y convenciones internacionales importantes de cuya elaboración Estados Unidos había participado (entre otros, el Tribunal Penal Internacional y el Protocolo de Kyoto). Pero fue después de ellos que la misma se consolida y sigue su marcha ascendente hasta culminar en la crisis actual.

Por un lado, en nombre de la seguridad nacional e internacional amenazada, se crearon dispositivos domésticos y globales que constituyen verdaderas aberraciones jurídicas de control y sanción que pasan por encima de ba-

rreras y limitaciones legales de protección a los derechos más elementales de las personas, ya sean ciudadanos nacionales o extranjeros. El "modelo Guantánamo" aplicado a los detenidos de Al-Qaeda y a los talibanes afganos –considerados "combatientes ilegales" y no prisioneros de guerra para evitar la protección de las Convenciones de Ginebra– es, en ese sentido, el símbolo emblemático de lo que tal vez constituya el ataque más regresivo dirigido al régimen internacional de derechos humanos desde su nacimiento.

Por otro lado, no quedan dudas del escaso valor que la superpotencia atribuye a instituciones internacionales que no domina por completo cuando uno de los más influyentes ideólogos de los "halcones" belicistas de la Casa Blanca y del Pentágono, Richard Perle, afirma la caída de la ONU y la formación de coaliciones voluntarias que, "lejos de menospreciar(las) como una amenaza contra un nuevo orden mundial, deberíamos reconocer que son, por defecto, la mejor esperanza para ese orden y la verdadera alternativa a la anarquía causada por el triste fracaso de Naciones Unidas" (*El País*, 2003[a]). Con tal claridad de propósitos, no causa sorpresa que el presidente Bush, tras anunciar repetidas veces el riesgo de irrelevancia que pesaba sobre Naciones Unidas si no se plegaba a su voluntad, haya finalmente conseguido crear las condiciones de realización de la profecía. Pero con ello, como subraya Jürgen Habermas, "la autoridad normativa de Estados Unidos está hecha pedazos" (*Folha de São Paulo*, 2003[a]).

Una guerra inmoral

La ilegalidad de la guerra se combina con su abierta inmoralidad. Se trata de una guerra injusta por definición, pues constituye una agresión unilateral preventiva sin respaldo en la legítima defensa, sin ser respuesta a un ataque inminente. Pero más que preventiva, y al igual que la guerra de Afganistán contra los talibanes y Bin Laden (o contra Noriega en Panamá), ésta es una guerra de "rectificación" (Ortega, 2003), en tanto los enemigos de hoy son los aliados estratégicos de ayer, con derecho por entonces a armas –incluso de destrucción masiva– y financiamiento. La inmoralidad salta a la vista cuando se verifica la dosis elevada de cinismo, hipocresía y mentiras que se han movilizad para justificarla con relación a liberar al pueblo iraquí de la tiranía, derrocar el régimen baasista en razón de sus conexiones con Al-Qaeda y con el terrorismo internacional, y principalmente eliminar la amenaza del uso de armas químicas, biológicas y nucleares. Que la dictadura de Saddam Hussein fuera abyecta y merecedora de su destino (como tantas otras, por lo demás, que apoyan la llamada coalición anglo-norteamericana) no implica que se justifique la imposición de la democracia y de los derechos humanos a través de una guerra cruenta y desde afuera. Hay en ello una incompatibilidad absoluta entre principios y medios.

Además, excepto por parte de los kurdos, la mayoría de los iraquíes no parece tener un sentido de la liberación coincidente con el de las fuerzas de invasión, como lo demuestran las crecientes manifestaciones religioso-políticas de chiítas reivindicando la reconstrucción de un Irak sin ocupación extranjera. Tal vez lo que se está diseñando no sea un régimen democrático propiamente dicho, sino un gobierno más o menos representativo de las principales comunidades y grupos étnicos, religiosos y tribales, pero bajo control absoluto de Estados Unidos. En todo caso, el poderoso Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, ya anticipó que Estados Unidos jamás admitirá un resultado electoral futuro que dé lugar a la implantación de un estado islámico, de inevitable perfil anti-norteamericano. Asimismo, la denuncia de las conexiones entre el régimen depuesto y los atentados terroristas del 11 de septiembre, aunque goce de gran aceptación en el público norteamericano como resultado de la propaganda y la desinformación diseminadas por el gobierno y los medios de comunicación, no resiste el menor análisis. Basta simplemente recordar la animosidad histórica que oponía un régimen de origen secular y nacionalista a organizaciones terroristas transnacionales embebidas de fundamentalismo islámico. Sin embargo, es a propósito de las armas de destrucción masiva que las mentiras llegaron al paroxismo.

Como si no fuese suficiente el hecho de que se interrumpieron los trabajos de inspección a cargo de la ONU en el preciso momento en que se reconocían importantes avances (y ninguna prueba de la existencia de tales armas), se ha confirmado por intermedio de Hans Blix, jefe de los inspectores, que Estados Unidos y el Reino Unido utilizaron documentos falsos para defender la acción militar (*Folha de São Paulo*, 2003[c]; *El País*, 2003[c]). Si ya era chocante que las tropas de ocupación no hubiesen encontrado ningún vestigio de armas, esta acusación se torna aún más grave con el rechazo actual de Estados Unidos a permitir la vuelta de los inspectores de la ONU y su insistencia en que la investigación será llevada adelante por sus propios especialistas, al mismo tiempo que propone el levantamiento del bloqueo económico resuelto por la ONU hace doce años atrás, cuya suspensión está condicionada a la inexistencia comprobada de dichas armas. A su vez, ¿cómo justificar la guerra en función de una amenaza no comprobada y recurrir a una parafernalia de armas *high-tech* –misiles intercontinentales, bombas “inteligentes” y de fragmentos en zonas urbanas, municiones con uranio empobrecido–, no menos mortíferas y devastadoras que aquellas que se intenta eliminar, al servicio de una táctica militar “quirúrgica” que adoptó el sugestivo nombre de “choque y terror”? ¿Por qué la prioridad de atacar a Irak, teniendo en cuenta que otros países –como es el caso de Corea del Norte– se muestran de manera ostensiva implicados en la proliferación de armas nucleares, así como en la decisión de testarlas, exportarlas o usarlas conforme sea la reacción norteamericana?

Una guerra imperial

Si los argumentos esgrimidos por la coalición anglosajona para justificar la guerra contra Irak carecen de credibilidad, ¿cuáles son entonces los motivos reales que la impulsaron? Una respuesta recurrente apunta a los intereses norteamericanos en el petróleo iraquí. Desde luego, a nadie se le escapa que la riqueza petrolera del país –nada menos que la segunda mayor reserva del mundo luego de Arabia Saudita– desempeña un papel crucial en el conflicto, por la simple razón de que este recurso energético es esencial al funcionamiento del conjunto de la economía mundial (cuyo consumo se calcula que aumentará cerca de 20% en la próxima década) y, en particular, de la tríada Estados Unidos-Europa-Japón, fuertemente dependiente de ese tipo de importaciones. Para cualquier potencia, pero sobre todo para la hiperpotencia, tener control sobre el suministro, la regulación de los precios y la lucrativa explotación del petróleo por parte de sus empresas de origen se torna una cuestión estratégica fundamental. En ese sentido, el Golfo Pérsico y la región del Mar Caspio ocupan un lugar privilegiado. Diversos documentos internos de la administración Bush (sea en torno del Departamento de Defensa o en grupos de trabajo como el que, presidido por el vicepresidente Dick Cheney, elaboró el Plan Energético Nacional sometido a discusión en el Congreso de EE.UU.) así lo indican (Navarro, 2003).

Si bien en términos generales Estados Unidos ya ocupa una posición confortable de dominio en esos tres ámbitos (Wallerstein, 2003), no cabe duda de que la invasión militar a Irak permitirá reforzarla aún más. Por ejemplo, en materia de regulación del precio, sería un duro golpe a la OPEP si Irak saliese de la organización; pero aún así, aunque aumentase su producción –algo que no será ni fácil ni rápido, dado el volumen substancial de inversiones requeridas–, el país no podría, en un horizonte cercano, alcanzar o sustituir a Arabia Saudita, país con el cual por otro lado Estados Unidos tiene relaciones bastante conturbadas. A su vez, en materia de explotación, el triunfo militar permitirá implantar nuevas reglas (tal vez la privatización) y, más importante aún, redistribuir las cartas de los futuros beneficiarios y perjudicados (en el primer caso, las corporaciones norteamericanas y británicas Exxon/Mobil, BP, Chevron/Texaco, Royal Dutch/Shell, y en el segundo las francesas, rusas y chinas, con contratos ya firmados con el régimen de Saddam Hussein) (Tuquoi, 2003; Khahn, 2003). De hecho, toda la fase de reconstrucción económica y política de Irak pasa por el petróleo, por quién y cómo participará no sólo de la producción directa sino también del financiamiento de las obras infraestructurales que su exportación permita, una vez que se levanten el embargo y las sanciones de la ONU impuestos desde 1991. Verdadero botón de guerra, él está hoy en el centro de las disputas que de nuevo se traban en el Consejo de Seguridad de la ONU: por un lado, Francia y Rusia, los líderes de la “coalición de los derrotados” contra la guerra (con quienes el antiguo régimen había contraído además pesadas deudas), reivindicando para la ONU un papel no sólo humanitario sino también político en la gestión de la transición de la ocupación militar a la instalación de un gobier-

no iraquí representativo; por el otro, Estados Unidos, que se opone a reconocerle tal papel a la ONU, que reivindica para sí el derecho del vencedor sin necesidad de negociar o rendir cuenta a nadie —incluso acaba de asignar los principales contratos a empresas norteamericanas de reconocidos vínculos con la administración Bush—, y que encima advierte a Francia que quedará afuera de la reconstrucción en represalia a su postura anterior. La ironía de la historia es que el empeño norteamericano en levantar con urgencia las sanciones y el embargo al petróleo para iniciar la reconstrucción lo hace tropezar de nuevo con la misma institución que considera inútil.

De las consideraciones anteriores, sin embargo, no se debe concluir que el motivo principal de esta segunda Guerra del Golfo fue el petróleo, ya que el costo financiero y económico —para no hablar del político y diplomático— no lo justifica. Basta recordar que, en el cuadro de la grave crisis económica en que está inmerso, Estados Unidos gastará en el

conflicto mucho más de lo que podrá obtener con los rendimientos líquidos del petróleo (el Congreso aprobó cerca de 80.000 millones de dólares para financiar la guerra, mientras que los rendimientos del petróleo iraquí difícilmente superen la cifra de 15.000 millones de dólares al año) (*Folha de São Paulo*, 2003[e]). Como dice Immanuel Wallerstein, “precisamente porque Bush y Cheney han estado en el negocio del petróleo, son conscientes de cuán pequeña podría ser la ventaja. El petróleo puede ser a lo sumo un beneficio colateral de una empresa acometida por otros motivos” (*Folha de São Paulo*, 2003[e]).



© Martín Fernández

En realidad, los atentados terroristas del 11 de septiembre le abrieron al núcleo duro de los neoconservadores belicistas del gobierno de Bush una oportunidad estratégica única para materializar sus ideas e imprimirle a la política externa norteamericana un giro radical. En rigor, no hay novedad en las ideas. Tampoco en los funcionarios e ideólogos que las diseminan e impulsan, quienes, con absoluta convicción y determinación, confían en la fuerza como medio disciplinador privilegiado de un proyecto de poder que asegure la preeminencia de Estados Unidos en todos los órdenes y en escala planetaria¹. La novedad viene entonces por cuenta de aquel acontecimiento inédito y del significado que se le atribuye como divisor de aguas entre la problemática transición inicial

del contexto de post-guerra fría por un lado, y por el otro la necesidad del reordenamiento del mundo sobre nuevas bases que la superpotencia sin rival, al sentirse invencible pero vulnerable², se propone llevar adelante con asumida ambición imperial. La llamada "Doctrina Bush", proclamada oficialmente en septiembre del año pasado, no podría ser, en ese sentido, más elocuente. En ella se afirma la identidad de la unión de los valores e intereses nacionales con los objetivos de la humanidad ("libertad política, la democracia y la libertad de empresa") y el propósito estadounidense de extender "los beneficios de la libertad a todo el orbe", incluso exportando su modelo de capitalismo al resto del mundo; se sustenta que la amenaza no proviene ya de cualquier otro estado, en tanto que victorioso de la guerra fría, y disfrutando de "una fuerza e influencia sin precedentes en el mundo", no admitirá que su supremacía militar sea desafiada –superada o igualada– por potenciales adversarios; en fin, ante la verdadera amenaza de las redes de terrorismo global que combinan radicalismo con tecnología catastrófica, Estados Unidos se atribuye el derecho exclusivo a lanzar ataques preventivos en sus nidos o en estados "renegados" y "fracasados" que pueden ser objeto de fácil utilización.

En la nueva concepción estratégica quedan sepultadas las doctrinas de contención y disuasión de la Guerra Fría y el principio de la no proliferación de armamentos basado en negociaciones y en tratados. En nombre de la lucha contra un enemigo evanescente que encarna "el Mal", se consagra la contra-proliferación activa y la guerra infinita –puesto que no conoce limitaciones territoriales y temporales ni acepta barreras jurídicas e instancias multilaterales– para todas las situaciones en que los intereses nacionales de seguridad estén en juego o bajo amenaza directa. De ese modo, al decir de Arthur Schlesinger Jr., Estados Unidos se convierte en "juez, jurado y verdugo del mundo por designación propia" (*El País*, 2003[d]). O sea, bajo reglas no escritas, se instituye un estado de excepción global permanente, frente al cual no pueden sino retroceder o suspenderse los derechos humanos y las libertades democráticas, como clásica solución hobbesiana del dilema entre el orden y la libertad. Es la consagración de un Leviatán imperial en que un único Estado reivindica para sí el derecho de la fuerza y el deber de policía del mundo, como expresiones de una soberanía absoluta que transforma la soberanía de todos los otros estados en un atributo relativo y contingente. De la mano del neoconservadurismo, vuelve así la afirmación del "imperialismo benigno" de los años '80, pero con mucho más vigor y menos pudor. En un libro reciente, William Kristol y Lawrence Kaplan lo señalan con todas las letras: "La misión comienza en Bagdad (...) Estamos al borde de una nueva era histórica (...) Este es un momento decisivo (...) Claramente esto va más allá de Irak. Incluso va más allá de Medio Oriente y de la guerra al terrorismo. Tiene que ver con el tipo de rol que Estados Unidos pretende ejercer en el siglo XXI"³. Por eso, esta guerra rápida y fácil contra Irak, decidida hace bastante tiempo atrás⁴, está llamada a funcionar como un caso "jurisprudencial" que pedagógicamente debe inducir al comportamiento "debido", no sólo del estigmatizado "eje del Mal", sino del resto del mundo (Ci-

rincione, 2003). Por eso también, junto a la globalización de la guerra como mecanismo privilegiado de solución de conflictos, se afirma la continuidad de la globalización económica neoliberal, difundiendo y reforzando un modelo de capitalismo basado en políticas clasistas extremas (aquel que con no poca ironía *The New York Times* llamó “la lucha de clases desde arriba”, con sus conocidas medidas de reducción de impuestos a los más ricos, contención de gastos sociales, aumento de gastos militares y de seguridad, desmantelamiento de los derechos sociales, etc.)⁵, aunque también es preciso reconocer que tanto una como otra han desencadenado y fortalecido la globalización de las resistencias sociales “desde abajo” en distintas partes del mundo, incluidos Estados Unidos y los demás países partidarios de la aventura guerrera.

Una guerra ineficaz

La victoria aplastante alcanzada en el plano militar se ha traducido en un importante triunfo político de los “halcones” en el seno de la administración Bush y del Partido Republicano, y consecuentemente ha creado las condiciones de continuidad de la estrategia implementada. La naturaleza imperial de esta última, y la demostración de fuerza del poderío militar norteamericano, han desencadenado un cambio sustancial en el mapa geopolítico del Medio Oriente y una acelerada reconfiguración de las relaciones de poder que atraviesan las principales instancias globales y regionales (ONU, Unión Europea, OTAN), además de las relaciones bilaterales con determinadas potencias. Según Donald Rumsfeld, Irak se convirtió en un “gigantesco laboratorio” en el que el conjunto de las Fuerzas Armadas estadounidenses aprende “cosas muy necesarias” para futuras campañas bélicas, ayudando así a consolidar lo que se considera una histórica “revolución estratégico-militar” en marcha (González, 2003). La ocupación de este país clave dará lugar a bases militares permanentes que permitirán proyectarse e incrementar la capacidad de presión diplomática sobre todo el Medio Oriente (en particular Siria e Irán, que están en la mira y rodeados). De ese modo se ha dado un paso decisivo en la dinámica expansiva militar que, iniciada en la primera Guerra del Golfo y ampliada con la guerra de Afganistán, hoy abarca Asia Central y Asia Oriental. Desde el punto de vista de la presencia y despliegue de fuerzas, no hay duda de que el imperio global ha salido fortalecido.

Sin embargo, si se vuelve la mirada hacia otras implicaciones y consecuencias, cabe preguntarse hasta qué punto esta guerra preventiva puede considerarse eficaz con relación a los objetivos que persigue. Lejos de tomar el mundo más ordenado y pacífico, como no se cansa de anunciarlo Bush en sus discursos de celebración, despuntan señales inquietantes que lo muestran cada vez más inestable y peligroso, haciendo caer toda la responsabilidad en Estados Unidos. En efecto, mientras la llamada opinión pública internacional manifiesta su oposición a la guerra en unos niveles y extensión nunca antes vistos, que-

da en el aire la terrible pregunta: ¿quién será el próximo de la lista? ¿Corea del Norte? ¿Irán? ¿Siria? En el corto plazo, parece poco probable que se decida otra acción bélica en virtud de la complicada agenda doméstica que el gobierno norteamericano enfrenta (elecciones presidenciales en el 2004, límites en la manipulación del sentimiento patriótico de la población y, sobre todo, la gravedad de la crisis económica, con expectativas futuras nada optimistas)⁶. Pero aunque no fuera así, hay fuertes chances de que la política agresiva de contra-proliferación resulte menos eficaz que la anterior de no proliferación, pues para los estados recalcitrantes apuntados, si hay una lección a sacar del tratamiento diferenciado entre Irak y Corea del Norte, ella consiste en acelerar la adquisición o los programas ya existentes de armamento (Wallerstein, 2003).

Irak ha pasado de una guerra cruenta y devastadora a una paz caótica, en la que el vacío de poder, después de décadas de dictadura, puede hacer explotar la caldera de tensiones etno-religiosas, con proyección hacia países vecinos (los kurdos y Turquía, los chiítas e Irán), mientras el espectro afgano de "conquista y negligencia" (Krugman, 2003), estimulado por los desaciertos de la ocupación, intensifica el descontento y el anti-americanismo. Por otro lado, los planes de remodelación del cuadro político de Medio Oriente, que contemplarían la exportación de democracia, cambios educacionales y libre comercio, junto a los resentimientos generados por dos agresiones sucesivas y victoriosas, preanuncian la desestabilización de la región —en especial, de los aliados estratégicos Jordania, Arabia Saudita y Egipto— y la radicalización de "la calle árabe" y de amplios sectores de la población de países musulmanes, lo cual incentiva el fundamentalismo islámico y las organizaciones terroristas. Como observa Noam Chomsky, "el ataque norteamericano a Irak es una respuesta a las oraciones de Bin Laden" (*Folha de São Paulo*, 2003[b]).

Los daños colaterales de la guerra en la estructura de poder global han sido inmensos, pero no hay duda de que de las tres fracturas expuestas —Consejo de Seguridad de

"Irak ha pasado de una guerra cruenta y devastadora a una paz caótica, en la que el vacío de poder, después de décadas de dictadura, puede hacer explotar la caldera de tensiones etno-religiosas, con proyección hacia países vecinos..."

la ONU, Unión Europea y OTAN— la de la Alianza Atlántica concentra las mayores preocupaciones de Estados Unidos. Mantener una ONU desmoralizada e irrelevante en la función específica de garantizar la paz y la seguridad internacional puede ser funcional a los intereses norteamericanos desde el punto de vista de la legitimación, a condición de restringir su actuación a acciones humanitarias⁷. La división en el seno de la Unión Europea tampoco les resulta desfavorable, pues al haber contado con el apoyo de miembros de peso y de los recién incorporados países de Europa del Este (contra la firme oposición de los dos principales propulsores de la experiencia integradora, Francia y Alemania), se pone en evidencia la enorme dificultad del bloque europeo para alcanzar una política exterior y de seguridad común. Más aún en un cuadro de aguda crisis del capitalismo a escala global, en el que se acentúan los conflictos comerciales, de inversión y de monedas al interior de la tríada, con inevitables implicaciones geopolíticas. Pero en contrapartida, el unilateralismo a ultranza de la estrategia preventiva del gobierno de Bush logró precipitar, en pocos meses, no sólo el cisma con los dos aliados más fuertes de la Europa continental, sino la formación de la única coalición que Estados Unidos se había empeñado tanto en impedir durante los últimos cincuenta años: la de Francia, Alemania y Rusia (Wallerstein, 2003), que, en la tentativa de establecer un contrapeso a la ofensiva del hegemon, levanta la defensa del multilateralismo y del derecho internacional. Las repercusiones de esta confrontación sobre la alianza militar occidental son graves y directas, porque ponen en juego nada menos que su presencia militar en Europa, la posibilidad de convertir a la OTAN —con Rusia incluida, Francia aislada y Alemania realineada— en una fuerza internacional de desplazamiento que mire hacia el Sur, o la emergencia definitiva de una fuerza militar europea autónoma.

Ante esta grave fisura del bloque imperial global en materia de seguridad, no sorprende que voces que alientan y aprueban la “Doctrina Bush” ahora se eleven para alertar sobre la necesidad urgente de desmontar el eje París-Berlín-Moscú y reconstituir, sobre bases y objetivos comunes, un instrumento considerado clave en la estrategia de reordenamiento global en curso. Según Henry Kissinger, “el trabajo de reconstrucción de Irak en la posguerra tendrá que reconocer que una base internacional amplia es deseable, pero también admitir la imprudencia de utilizarse el multilateralismo como slogan y la ONU como institución para aislar Estados Unidos (...) Tenemos una agenda extensa por delante: frenar la proliferación de armas de destrucción masiva, discutir las implicaciones políticas de la globalización, acelerar la reconstrucción de Medio Oriente (...) e iniciar una discusión de los principios que reconozca la necesidad ocasional de una acción preventiva sin, entretanto, permitir que cada país la defina por su cuenta (...) Estados Unidos puede esforzarse para traducir su hegemonía en un fomento sistemático del consenso internacional” (Kissinger, 2003). Robert Kagan, a su vez, señala que hay que evitar algunas “tentaciones peligrosas”, tales como castigar a los antiguos aliados que se opusieron a la guerra, estimular la división de Europa y disminuir la intensidad de la campaña di-

plomática. Debería hacerse lo contrario, ya que "la habilidad de Estados Unidos para liderar eficazmente el futuro dependerá mucho de cómo el mundo entiende y recuerda esta guerra" (*El País*, 2003[b]). En realidad, esas declaraciones revelan tres errores de cálculo inmanentes al proyecto estratégico norteamericano: primero, que con la postura de gladiador se obtendrá respeto y temor generalizados y el resto del mundo –estados y pueblos– estarán dispuestos a ponerse en fila, disciplinadamente; segundo, que la superpotencia prescinde de reglas e instituciones internacionales porque se basta a sí misma en las tareas exclusivas de ordenar el mundo a su imagen y semejanza; y tercero, que la supremacía militar será el recurso suficiente para mantener y reforzar su dominio en otros ámbitos (económico, político, ideológico, cultural) que no presentan la misma disparidad de poder⁸.

¿Cómo se detiene al Leviatán imperial?

Concluyendo estas notas quisiera destacar dos cuestiones cruciales, íntimamente vinculadas entre sí, que desde luego no podrán ser desarrolladas. La primera plantea que la coerción sin hegemonía –entendida esta última en el sentido gramsciano de "espiritualización de la dominación"– permite vislumbrar, en el mediano y largo plazo, fragilidades y contradicciones regionales y globales de una estrategia imperial sustentada en el despliegue de una fuerza descomunal, pero disociada o en abierta confrontación con la legalidad y la búsqueda de legitimidad. Ello reactualiza, a otro nivel de complejidad e incertidumbre, la polémica discusión sobre la declinación de Estados Unidos⁹.

La segunda cuestión se refiere a la pregunta de quién y cómo ha de detener al Leviatán imperial en su vertiginosa marcha de control, represión y dominio, frente a todo lo que percibe como amenaza real o imaginaria a sus intereses, a la vez nacionales y mundiales. O sea, qué hacer para que Estados Unidos redescubra y respete al menos, lo más rápido posible, el derecho internacional, los principios de la contención y del multilateralismo, y el valor efectivo, para todos, de aquello por lo cual dice luchar: democracia, derechos humanos, estado de derecho, paz y seguridad internacional. En el plano doméstico, la posibilidad de cambio pasa en lo inmediato por la derrota electoral de un gobierno que, aliando el fundamentalismo de la libertad de los mercados a la paranoica expansión de las estructuras represivas del estado y la involución de las libertades democráticas, enfrenta una crisis económica profunda que alimenta el descontento social y el castigo político. En el plano internacional, el surgimiento del eje París-Berlín-Moscú, junto a las limitaciones financieras, políticas y estratégicas crecientes que le depare el rol de policía exclusivo del mundo, tal vez lo fuercen a recomponer alianzas y prestar mayor atención a la legalidad y a la legitimidad internacional. Ello puede ocurrir aún cuando no parezca cercana la emergencia de un contrapeso real que equilibre fuerzas (los antiguos

aliados que se tornan adversarios asumidos, o la confirmación del despuntar de China con aspiraciones hegemónicas), y a pesar –o a raíz– de que Francia, Alemania y Rusia, con bastante probabilidad, bajen el tono opositorista y pasen a negociar el botín de guerra de la reconstrucción iraquí, la revitalización de la Alianza Atlántica y una posición reconocida en el bloque imperial de poder del ordenamiento global en gestación. A su vez, la onda pacifista sin precedentes que se configuró antes y durante la guerra en distintas partes del mundo, pero de manera notable en Estados Unidos y en los países europeos que le dieron apoyo (en Gran Bretaña, España e Italia las multitudinarias manifestaciones de repudio a la guerra y a la posición de los respectivos gobiernos tuvieron amplia acogida en las opiniones públicas nacionales), también puede jugar un papel importante en los planos domésticos e internacional, presionando o castigando electoralmente a gobiernos y socavando cualquier tentativa de justificación de la Doctrina Bush y de eventuales ataques preventivos futuros.

Pero es al movimiento social de resistencia global –que desde Seattle a Porto Alegre, pasando por Génova, Florencia y una larga cartografía, no ha cesado de crecer geográfica, social y sectorialmente– que le cabe la responsabilidad mayor de llevar adelante el debate y la lucha política contra la emergencia de un orden mundial que combina el dispositivo policial de la guerra imperial con la continuidad cada vez más deslegitimada de la globalización capitalista neoliberal. Ante el cuadro regresivo y desarticulador de la política mundial causado por la respuesta de la superpotencia a los atentados terroristas del 11 de septiembre, los problemas de seguridad y del uso de la fuerza en las relaciones internacionales –incluso los problemas de las armas de destrucción masiva y la realidad incontestable del terrorismo transnacional– se han tornado prioritarios, debiendo ser incorporados al análisis de los principales conflictos en curso y en la búsqueda de estrategias alternativas a las dominantes. Lo mismo ocurre con relación al desmantelamiento actual del sistema multilateral creado después de la Segunda Guerra Mundial. No se trata de reivindicar la vuelta de la preponderancia de la ONU en su formato actual, sino de reconstituirla sobre bases completamente diferentes y al interior de un sistema democrático de gobernanza global, a los fines de no ignorar una trayectoria histórica de deserciones, ineficacia y parcialidades escandalosas en favor de los más poderosos. Basta simplemente recordar que la autorización del Consejo de Seguridad para iniciar la guerra preventiva contra Irak no la hubiera convertido en legítima. La inmoralidad de esa guerra, aunada a su obscuro carácter imperial, fue el motivo de las movilizaciones masivas y del renacimiento del pacifismo. Pero esto también implicó una pronunciada despolitización (simbolizada en el recorte negativo de las consignas, primero “no a la guerra” y luego “no a la ocupación”) de la cual el movimiento social global contrahegemónico debe tomar distancia para no sumergir su trabajosa dinámica de confluencias y objetivos en parálisis y desagregación. Más que nunca es preciso politizar la posguerra, articulando los no tan “nuevos” problemas de seguridad con los nunca “viejos” problemas de la

agenda anti-neoliberal, sin perder de vista los niveles de acción regional, nacional y local. La dinámica del III Foro Social Mundial de Porto Alegre tomó esa dirección y los foros regionales la continúan. Al final de cuentas, y para no dejar de mencionar a América Latina, el ALCA está ahí, y el Plan Colombia también. Sin duda la fuerza social y política acumulada no está todavía a la altura de las responsabilidades, las tareas y los desafíos trazados. Pero lo cierto es que el "movimiento de los movimientos" se presenta como el único vector de democratización de la política mundial que comenzó a andar, aunque no sepa bien el camino que está abriendo ni hacia dónde lo conduce éste.

Bibliografía

- Barker, Gerard 2003 "Calendário econômico e político trabalha contra nova guerra", en *Folha de São Paulo* (São Paulo) 15 de abril.
- Cirincione, Joseph 2003 "Bush rend le monde plus dangereux", en *Alternatives Internationales* (Paris) N° 7, mars-avril, p. 19.
- El País* 2003[a] "La caída de Naciones Unidas" (Madrid) 14 de abril.
- El País* 2003[b] "Resistiendo superpoderosas tentaciones" (Madrid) 14 de abril.
- El País* 2003[c] (Madrid) 8 de abril.
- El País* 2003[d] "La buena política exterior de Estados Unidos, víctima de la guerra" (Madrid) 1 de abril.
- Folha de São Paulo* 2003[a] "A guerra e seus juízos" (São Paulo) 27 de abril.
- Folha de São Paulo* 2003[b] "Nasce um pária internacional" (São Paulo) 26 de abril.
- Folha de São Paulo* 2003[c] (São Paulo) 23 de abril.
- Folha de São Paulo* 2003[d] "Entrevista a Robert Brenner" (São Paulo) 20 de abril.
- Folha de São Paulo* 2003[e] "Editorial" (São Paulo) 10 de abril.
- Frachon, Alain y Vernet, Daniel 2003 "Le stratège et le philosophe", en *Le Monde Diplomatique* (Paris) 15 de abril.
- Golub, Philip S. 2003 "Comment s'est décidée l'offensive contre Bagdad", en *L'Empire contre l'Irak* (Paris: Le Monde Diplomatique) N° 67, Manière de voir.
- González, Enric 2003 "La transición en Irak. Las repercusiones", en *El País* (Madrid) 18 de abril.
- Khahn, Annie 2003 "Les deuxièmes réserves du monde", en *Le Monde Diplomatique* (Paris) 12 de abril.
- Kissinger, Henry 2003 "Para que o mundo não volte ao século 19", en *Folha de São Paulo* (São Paulo) 13 de abril.
- Krugman, Paul 2003 "Conquista e negligência", en *Folha de São Paulo* (São Paulo) 12 de abril.
- Kupchan, Charles 2003 "La alianza atlántica yace entre escombros", en *El País* (Madrid) 15 de abril.

Le Monde Diplomatique 2003 "Entrevista a Paul Kennedy" (París) 10 de abril.

Navarro, Vincençs 2003 "¿Por qué Irak y por qué ahora?", en *El País* (Madrid) 18 de abril.

Ortega, Andrés 2003 *El País* (Madrid) 14 de abril.

Ortega, Andrés 2002 "Invencible y vulnerable", en *El País* (Madrid) 21 de septiembre.

Rai, Milan 2003 *Iraque. Plano de guerra* (São Paulo: Ed. Bertrand Brasil).

Ramonet, Ignace 2003 "Illégale agréssion", en *Le Monde Diplomatique* (Paris) abril.

Rieff, David 2003 "La crisis humanitaria", en *El País* (Madrid) 30 de abril.

Tuquoi, Jean-Pierre 2003 "Une éponge imbibée d'or noir", en *Le Monde Diplomatique* (Paris) 12 de abril.

Wallerstein, Immanuel 2003 "La guerra de los justos", 16 de febrero, <www.nodo50.org>

Wallerstein, Immanuel 2002 "Os Estados Unidos en declínio?", en *O fim do mundo como o concebemos* (Rio de Janeiro: Editora Revan) Prefacio de la edición brasileña.

Zizek, Slavoj 2003 "Irake: pró e contra", en *Folha de São Paulo* (São Paulo) Caderno Mais, 30 de março, p. 13.

Notas

- 1 Sobre las raíces intelectuales de los principales personajes —que no pueden ser confundidos con aquellos que provienen de la vertiente fundamentalista cristiana, y que también le imprimen ciertos trazos característicos a la gestión y al discurso del gobierno de Bush—, ver Frachon y Vernet (2003).
- 2 Según la expresión de Pierre Hassner, *¿Estados Unidos: el imperio de la fuerza o la fuerza del imperio?* (citado en Ortega, 2002).
- 3 *The war over Irak* (Ed. Encounter) 2002 (citado por Zizek, 2003).
- 4 Ver Rai, 2003; ver igualmente Golub, 2003.
- 5 Citado por Vincençs Navarro, op. cit.
- 6 Ver Barker, 2003. Sobre la gravedad de la crisis económica y el futuro previsible de estancamiento —o peor aún, recesión— que la guerra contra Irak no originó ni tiene condiciones para revertir, ver la entrevista de Robert Brenner (*Folha de São Paulo*, 2003[d]). Como sostiene este autor, "la combinación resultante de capacidad ociosa y severa presión de baja sobre los precios perpetuó, hasta ahora, la desastrosa caída de las ganancias. Esa crisis de ganancia es la fuente primordial de la debilidad económica actual de Estados Unidos".
- 7 Sobre los constantes riesgos de cooptación y recuperación de las acciones humanitarias de la ONU y de las ONGs internacionales ver Rieff, 2003.
- 8 Sobre los dos primeros errores ver Kupchan, 2003.
- 9 Ver Wallerstein, 2002; ver también *Le Monde Diplomatique*, 2003.

Re-colonizando

Irak¹

Tariq Ali*

* *Miembro
del comité editorial
de New Left Review*

*Traducido por:
Florencia Enghel*

*Revisión técnica:
José Seoane*

El 15 de febrero de 2003, más de ocho millones de personas marcharon por las calles de cinco continentes en contra de una guerra que no había comenzado aún. Esta primera movilización verdaderamente global –sin precedentes en tamaño, alcance o escala– buscó evitar la ocupación de Irak que estaba siendo tramada en el Pentágono. La concurrencia en Europa occidental rompió todos los records: tres millones en Roma, dos millones en España, un millón y medio en Londres, medio millón en Berlín, más de cien mil en París, Bruselas y Atenas. En Estambul, donde las autoridades locales vetaron una marcha de protesta en nombre de la “seguridad nacional”, el movimiento por la paz llamó a una conferencia de prensa para denunciar la prohibición –a la cual asistieron diez mil “periodistas”. En Estados Unidos hubo demostraciones masivas en Nueva York, San Francisco, Chicago y Los Ángeles, y asambleas más pequeñas en virtualmente cada estado capital: más de un millón de personas en total. Otro medio millón marchó en Canadá. El ala del movimien-

to situada al otro lado del mundo reunió 500.000 personas en Sydney y 250.000 en Melbourne.

El 21 de marzo, mientras las fuerzas británicas y norteamericanas se dirigían a la frontera iraquí, las largas y quietas calles árabes, inspiradas por estas protestas globales, despertaron a la vida con demostraciones masivas espontáneas en Cairo, Sanaa y Amman. En Egipto, el régimen mercenario de Hosni Mubarak entró en pánico y arrestó a más de 800 personas, algunas de las cuales fueron maltratadas con encono en prisión. En Yemen, más de 30.000 personas marcharon contra la guerra; un contingente de proporciones llegó hasta la embajada de Estados Unidos y debió ser detenido a balazos.

Dos personas fueron asesinadas y muchas otras heridas. En el protectorado israelí-norteamericano de Jordania, la monarquía ya había aplastado un virtual levantamiento en un pueblo de frontera y ahora procedía a tratar brutalmente a los manifestantes en la capital. En el mundo árabe el tono de las calles era desafiantemente nacionalista –“¿dónde está nuestro ejército?” clamaban los manifestantes en el Cairo. En Pakistán los partidos religiosos sacaron provecho de la instancia pro-norteamericana de la Liga Musulmana y el PPP [Partido del Pueblo de Pakistán] para dominar las movilizaciones en contra de la guerra en Peshawar y Karachi. Los islamistas en Kenya y Nigeria hicieron lo mismo, aunque con mayor efecto: las embajadas norteamericanas en ambos países debieron ser evacuadas. En Indonesia, más de 200.000 personas de diferentes experiencias políticas marcharon a través de Yakarta.

Menos de un siglo atrás, más de ocho millones de personas habían dado sus votos a los partidos socialdemócratas europeos, inspirando el único intento preexistente de una acción coordinada para evitar una guerra. En noviembre de 1912 fue convocada una conferencia de emergencia de la Internacional tras los arcos góticos de la vieja catedral en Basilea, en un esfuerzo por evitar la catástrofe de la Primera Guerra Mundial, que amenazaba con surgir. A medida que

“Los más de ocho millones que marcharon no compartían una perspectiva programática común. Provenientes de trasfondos políticos y sociales diferentes, estaban unidos sólo por su deseo de evitar la invasión imperialista de un país árabe rico en petróleo...”

los delegados ingresaban los recibía una interpretación de la misa de Bach en B Menor, que marcó el punto más alto del encuentro. Los líderes socialistas, alemanes, británicos y franceses se comprometieron a oponerse a cada una de las políticas de agresión de sus respectivos gobiernos. Se acordó que, llegado el momento, los parlamentarios votarían en contra de los créditos para la guerra. El llamado de Keir Hardie a “una huelga revolucionaria internacional contra la guerra” fue aplaudido, aunque no se lo sometió a votación. Jean Jaurès fue ovacionado ruidosamente cuando señaló que “una revolución implicaría un sacrificio mucho más pequeño si se lo compara con la guerra que ellos están preparando”. Víctor Adler leyó a continuación la resolución, que fue aprobada por unanimidad. Concluía así: “Que el mundo capitalista de explotación y muerte en masa sea enfrentado por el mundo proletario de paz y hermandad internacional”.

Para agosto de 1914 estos honorables sentimientos se habían hecho trizas ante el estallido del clarín nacionalista. La claridad programática mostrada en Basle se evaporó a medida que la alarma congregaba a los ciudadanos de cada estado para la guerra. No se denegó ningún crédito; no se llamó a ninguna huelga ni fomentó ninguna revolución. En medio de una tormenta creciente de histeria chauvinista, Jaurès fue asesinado por un fanático proguerra. Mientras que una valiente y difamada minoría se reunía sin ser notada en el pueblo sueco de Zimmerwald para llamar a transformar la guerra imperialista “en una guerra civil, contra la reacción en la propia casa”, la mayoría de los líderes socialdemócratas se mantuvieron rígidamente en posición de firmes mientras sus partidarios vestían sus respectivos colores y procedían a masacrarse unos a otros. Más de diez millones murieron en los campos de batalla europeos en defensa de sus respectivos capitalismo, en un conflicto que vio a una nueva Gran Potencia hacer su entrada en el escenario mundial. Un siglo más tarde, los Estados Unidos de América habían dicho adiós virtualmente a cada rival para tomarse el actor principal –y a menudo el único– en el drama internacional.

Los más de ocho millones que marcharon este año no fueron movilizados por ninguna Internacional, ni compartían una perspectiva programática común. Provenientes de trasfondos políticos y sociales diferentes, estaban unidos sólo por su deseo de evitar la invasión imperialista de un país árabe rico en petróleo en una región ya partida en dos por una guerra colonial en Palestina. Instintivamente, la mayoría de los que marcharon lo hicieron porque rechazaban las justificaciones oficiales para el derramamiento de sangre. Es difícil para aquellos que las aceptan como “plausibles” entender la profundidad de la resistencia que provocaron y el odio experimentado por mucha gente joven contra sus propagadores. Fuera de los Estados Unidos, pocos creen que el ferozmente secular partido Ba’ath de Irak tenga ninguna conexión con Al-Qaeda. Y en lo que respecta a las “armas de destrucción masiva”, el único depósito de almacenamiento nuclear está situado en Israel; y tal como la misma Condoleezza Rice lo señalara en el último año de la administración Clinton, incluso si Saddam Hussein

tuviera tal arsenal, no podría desplegarlo: "Si adquieren armas de destrucción masiva, éstas serán inutilizables porque cualquier intento de usarlas traería la obliteración nacional" (*Foreign Affairs*, 2000). Inutilizables en el 2000, tres años más tarde, para evitar que utilizara estas mismas armas, ¿Saddam debió ser removido mediante el envío de una fuerza expedicionaria anglo-norteamericana masiva y el bombardeo en forma de *clusters* de las ciudades iraquíes? El pretexto no sólo no logró convencer sino que más bien sirvió para alimentar una oposición de amplia base en cuanto millones vieron venir la mayor amenaza a la paz no de los agotados arsenales de las dictaduras en decadencia, sino del corazón corrompido del imperio norteamericano y sus sátrapas, Israel y Gran Bretaña. Es la conciencia de estas realidades lo que ha comenzado a radicalizar a una nueva generación.

La ofensiva imperial

La administración republicana ha utilizado el trauma nacional del 11 de septiembre para encarar una audaz agenda imperial, de la cual la ocupación a Irak promete ser sólo el primer paso. El programa que busca implementar fue dado a publicidad por primera vez en 1997 bajo la rúbrica "Proyecto para el nuevo siglo norteamericano". Entre sus firmantes estaban Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Jeb Bush, Zalmay Khalilzad, Elliott Abrams y Dan Quayle, al igual que ornamentos intelectuales tales como Francis Fukuyama, Midge Decter, Lewis Libby y Norman Podhoretz. El Imperio Americano no pudo permitirse ser complaciente con el final de la Guerra Fría, argumentaron: "Pareciéramos haber olvidado los elementos esenciales del éxito de la Administración Reagan: un ejército que es fuerte y está preparado para hacer frente a los desafíos tanto presentes como futuros; una política exterior que de manera osada y decidida promueve los principios americanos en el exterior; y un liderazgo nacional que acepta las responsabilidades globales de los Estados Unidos". El lenguaje de esta camarilla, comparado con los eufemismos de la era Clinton, es admirablemente directo: para preservar la hegemonía de los Estados Unidos, se usará la fuerza en todo momento y lugar en que sea necesario. El retorcerse de manos europeo no altera este hecho.

El ataque al World Trade Centre y al Pentágono en el 2001 fue por lo tanto un regalo del cielo para la administración norteamericana. Al día siguiente, una reunión del National Security Council discutió si atacar Irak o Afganistán, eligiendo al último luego de un debate considerable. Un año más tarde, los objetivos delineados en el "Proyecto" fueron fácilmente transferidos a la "Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América", promulgada por Bush en septiembre de 2002. La expedición a Bagdad fue planeada como la primera curvatura de la nueva posición². Doce años de bloqueo de las Naciones Unidas y bombardeo anglo-americano no habían logrado destrozar al régimen

Ba'ath o desplazar a su líder. No podría haber mayor demostración del cambio hacia una estrategia imperial más ofensiva que hacer ahora de ellos un ejemplo. Si no hay una única razón que explique el hecho de que se apunte a Iraq, hay escaso misterio respecto de la gama de cálculos por detrás de ello.

Económicamente, Irak posee las segundas más grandes reservas de petróleo barato en el mundo. La decisión de Bagdad en el 2000 de facturar sus exportaciones en euros en vez de en dólares implicó el riesgo de que Chávez en Venezuela y los mullahs iraníes quisieran imitarlos. La privatización de los pozos iraquíes bajo control norteamericano ayudaría a debilitar a la OPEP. Estratégicamente, la existencia de un régimen árabe independiente en Bagdad siempre había sido un fastidio para el ejército israelí –aún cuando Saddam era un aliado de Occidente, el Ejército de Defensa Israelí suministraba repuestos a Teherán durante la guerra entre Irán e Irak. Con la instalación de fanáticos republicanos allegados al Likud en posiciones claves en Washington, la eliminación de un adversario tradicional se tornó un objetivo atractivo apremiante para Jerusalén. Por último, del mismo modo que el uso de armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki había sido una demostración del poder norteamericano dirigida a la Unión Soviética, hoy una guerra relámpago rodando velozmente a través de Irak serviría para demostrar a todo el mundo, y quizás en particular a los estados en el Lejano Oriente –China, Corea del Norte, incluso Japón– que llegado el momento de decisión Estados Unidos tiene, en última instancia, los medios para imponer su voluntad.

El pretexto oficial para la guerra, que era vital eliminar las temibles armas de destrucción masiva de Irak, era tan endeble que debió ser descartado como una vergüenza cuando incluso inspectores de Naciones Unidas fenomenalmente serviles –un grupo abiertamente penetrado por la CIA– fueron incapaces de encontrar rastro alguno de ellas, y se vieron limitados a implorar más tiempo. Esto no evitará su “descubrimiento” luego del evento, pero pocos asignan ya alguna importancia a este andrajoso espantapájaros. La justificación para invadir a Irak se ha desplazado ahora a la necesidad imperiosa de introducir la democracia en el país, disfrazando a la agresión de liberación. Pocos en el Medio Oriente, amigos o enemigos de la administración norteamericana, se engañan con ello.

Los pueblos del mundo árabe ven la Operación Libertad a Irak como una grotesca charada, un velo para el antiguo estilo europeo de ocupación colonial construido como sus predecesores sobre el más inestable de los cimientos –innumerables engaños, codicia y fantasías imperiales. El cinismo de la actual pretensión norteamericana de estar llevando la democracia a Irak puede medirse en los comentarios de Colin Powell a un *briefing* de prensa en 1992, cuando era Presidente de los Jefes de Estado Mayor Conjuntos bajo la administración de Bush padre. Esto es lo que dijo acerca del proyecto que ahora está ostensiblemente en marcha:

Saddam Hussein es una persona terrible, es una amenaza para su propio pueblo. Creo que su gente estaría mejor con un líder diferente, pero existe este tipo de noción romántica de que si un colectivo atropellara a Saddam Hussein el día de mañana, algún demócrata jeffersoniano estaría esperando entrar en escena para celebrar elecciones populares [risas]. Van a obtener –adivinen qué– probablemente otro Saddam Hussein. Les llevará algo de tiempo volver a pintar todas las imágenes sobre las paredes nuevamente –[risas]– pero no debiera haber ilusiones acerca de la naturaleza de ese país o de su sociedad. Y el pueblo americano y todos aquellos que nos critican ahora hubieran estado indignados si hubiéramos avanzado hacia Bagdad y nos hubiéramos encontrado con soldados norteamericanos patrullando las calles dos años más tarde, todavía tratando de encontrar a Jefferson [risas]³.

Esta vez Powell se asegurará de que se envíe a los demócratas jeffersonianos con aire acondicionado y el resto de los suministros necesarios. Él sabe que podrían tener que ser custodiados día y noche por escuadrones norteamericanos de matones a sueldo, como el títere Karzai en Kabul.

Viejos mastines y nuevos satélites

Por un lado, una vasta protesta popular contra la invasión de Irak. Por otro lado, una administración norteamericana fría y abiertamente decidida con respecto a ésta desde el principio. Entre ambas, los gobiernos del resto del mundo.

¿Cómo han reaccionado? Londres, como era de esperar, actuó como un sangriento asistente de Washington de principio a fin. El imperialismo laborista es de larga tradición, y Blair ya había mostrado en la Guerra de los Balcanes que podía comportarse más como un mezquino mastín, gruñéndole a su correa, que como un mero caniche. Dado que Gran Bretaña ha estado bombardeando a Irak continuamente desde que el Nuevo Laborismo accediera al poder, codo a codo con Estados Unidos, sólo los ingenuos podrían sorprenderse ante el envío de una tercera parte del ejército a la que antes fuera la más grande colonia en Medio Oriente, o ante el regateo de las firmas de los “rebeldes” en la Cámara de los Comunes de la estampa de Cook o Short, lamentando la violencia pero deseando éxito a sus perpetradores.

Berlusconi en Italia y Aznar en España –los dos gobiernos más a la derecha de Europa– fueron partenaires apropiados para conseguir unir a la causa a países más pequeños como Portugal y Dinamarca, mientras que Simitis ofreció instalaciones griegas para los aviones de espionaje norteamericanos. Los estados de Europa del Este, dando un nuevo

significado al término “satélite”, que anteriormente habían disfrutado durante largo tiempo, se alinearon cual si fueran uno detrás de Bush. Los partidos ex-comunistas en el poder en Polonia, Hungría y Albania se distinguieron en su celo por mostrar su nueva lealtad –Varsovia enviando un contingente a luchar en Irak, Budapest proporcionando los campos de entrenamiento para los exiliados iraquíes, incluso la pequeña Tirana alistando gallardos no combatientes para el campo de batalla.

Francia y Alemania, por otra parte, protestaron durante meses, absolutamente opuestos a un ataque de Estados Unidos a Irak. Schroeder había debido su estrecha reelección a un compromiso de no apoyar una guerra sobre Bagdad, aún cuando fuera autorizada por las Naciones Unidas. Chirac, armado del veto en el Consejo de Seguridad, fue aún más locuaz, con declaraciones de que un asalto al régimen Ba’ath jamás sería aceptado por Francia. Juntos, París y Berlín instaron a Moscú a expresar su desacuerdo con los planes norteamericanos. Incluso Pekín emitió unos pocos y cautelosos sonidos de postergación. Las iniciativas franco-alemanas despertaron tremenda efervescencia y consternación entre los comentaristas diplomáticos. Aquí, sin duda, había una fisura sin precedentes en la Alianza Atlántica. ¿Qué habría de suceder con la Unión Europea, con la OTAN, con la “comunidad internacional” misma si tan desastrosa división persistía? ¿Podría el concepto mismo de Occidente sobrevivir? Tales temores debían ser aliviados rápidamente. Al mismo tiempo que los misiles Tomahawk iluminaban el horizonte nocturno en Bagdad, y los primeros civiles iraquíes eran reducidos por los Marines, Chirac se apresuraba a explicar que Francia aseguraría el paso sin inconvenientes de los bombarderos norteamericanos a través de su espacio aéreo (como no lo había hecho, siendo Primer Ministro, cuando Reagan atacó Libia), y les deseó un “rápido éxito” a los ejércitos norteamericanos en Irak. El cadáver verde alemán, ministro de Relaciones Exteriores Joschka Fischer, anunció que su gobierno también deseaba sinceramente el “rápido colapso” de la resistencia al ataque anglo-americano. Putin, para no ser menos, explicó a sus compatriotas que “por razones económicas y políticas” Rusia sólo podía desear una victoria decisiva de los Estados Unidos en Irak. Los partidos mismos de la Segunda Internacional no podrían haberse comportado más honorablemente.

Yendo incluso más lejos, la escena era muy similar. En Japón, Koizumi anunció más rápidamente que sus colegas europeos el pleno apoyo a la agresión anglo-americana, y prometió generosidad por parte de los contribuyentes japoneses, que atraviesan momentos difíciles, para ayudar a financiar la ocupación. El nuevo Presidente de Corea del Sur, Roh Moo-hyun, elegido con grandes esperanzas por la juventud del país como un radical independiente, entró en desgracia inmediatamente al ofrecer no sólo aprobación a la guerra norteamericana en el Medio Oriente, sino también tropas para pelear en ella, en la infame tradición del dictador Park Chung Hee en la Guerra de Vietnam. Si éste ha de ser el nuevo Seúl, Pyongyang haría bien en avanzar con sus preparativos militares en



contra de cualquier repetición del mismo tipo de aventura en la península coreana. En América Latina, el régimen del PT en Brasil se circunscribió a mascarar unas pocas reservas con la boca enharinada, mientras que en Chile el presidente socialista Ricardo Lagos —débil incluso en los estándares de la socialdemocracia sub-ecuatorial— envió un cable desesperado a su

embajador ante Naciones Unidas, quien irresponsablemente había dejado deslizar la palabra “condena” en una charla con periodistas, para que emitiera una corrección oficial de inmediato: Chile no condenaba, meramente lamentaba la invasión anglo-americana.

En Medio Oriente, el paisaje de hipocresía y connivencia es más familiar. Pero en medio de la abrumadora oposición de la opinión pública árabe, ningún régimen clientelista falló en presentar su tributo al pagador general. En Egipto Mubarak dio paso libre a la marina estadounidense a través del canal y espacio aéreo libre a la Fuerza Aérea, mientras su policía apaleaba y arrestaba a cientos de manifestantes. La monarquía saudí invitó a los misiles crucero a pasar a través de su territorio, y a los centros de mando estadounidenses a operar normalmente en su suelo. Hace tiempo ya que los estados del Golfo se han vuelto anexos militares de Washington. Jordania, que había logrado permanecer más o menos neutral en la primera Guerra del Golfo, esta vez suministró en forma entusiasta bases para que las fuerzas especiales norteamericanas merodearan la frontera. Los mullahs iraníes, tan opresivos en su propia casa como estúpidos afuera, colaboraron con las operaciones de la CIA al estilo de Afganistán. La Liga Árabe se superó a sí misma como expresión colectiva de ignominia, anunciando su oposición a la guerra aún cuando la mayoría de sus miembros estaban participando en ella. Es ésta una organización capaz de decir que la Kaaba es negra mientras que la roca de rojo, blanco y azul.

La realidad de la “comunidad internacional” —léase la hegemonía global norteamericana— nunca ha estado tan claramente desplegada como en este funesto panorama. Los pocos —muy pocos— actos de resistencia genuina se destacan frente a tal trasfondo de connivencia y traición general. El único cuerpo electo que realmente intentó detener la guerra fue el parlamento turco. El recientemente elegido régimen AKP [Partido de la Justicia y el Desarrollo] no tuvo una *performance* mejor que la del resto de sus contra-

partes en otros lugares, regateando de manera pusilánime sobornos más grandes para permitir que Turquía fuera usada como plataforma para un ataque por tierra de los EE.UU. sobre el norte de Irak. Pero las presiones masivas, reflejos de orgullo nacional o remordimientos de conciencia impulsaron a una cantidad suficiente de miembros de su propio partido a rebelarse y bloquear esta transacción, desbaratando los planes del Pentágono. El gobierno de Ankara se apuró a abrir el espacio aéreo para los misiles norteamericanos y el descenso de paracaidistas, pero la acción del parlamento turco –desafiando a su propio gobierno, para no hablar de los Estados Unidos– alteró el curso de la guerra, a diferencia de los euro-gestos sin costo que se evaporaron en el aire cuando la lucha comenzó. En Indonesia, Megawati llamó intencionadamente la atención hacia las ropas del emperador al convocar a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para condenar la expedición anglo-americana. Naturalmente, luego de meses de malhumorados resoplidos de París, Berlín y otros lugares acerca de la santidad de la autoridad de las Naciones Unidas, la respuesta fue el silencio absoluto. En Malasia, Mahathir –rompiendo un tabú democrático, no por primera vez– demandó en forma terminante la renuncia de Kofi Annan por su rol de estúpida espera de la agresión americana. Estos políticos entendieron mejor que otros en el Tercer Mundo que el Imperio Americano estaba usando su enorme arsenal militar para dar una lección al Sur en términos del poder del Norte, para intimidarlo y controlarlo.

Síndrome colaboracionista

La guerra de Irak fue planeada partiendo de la línea establecida por sus predecesores en Yugoslavia y Afganistán. Está claro que los políticos y generales en Washington y Londres esperaban que el modelo Kosovo-Kabul pudiera ser repetido en esencia: bombardeos aéreos masivos, llevando al oponente a ponerse de rodillas sin la necesidad de un combate serio en tierra⁴. En cada uno de estos casos no había resistencia real, sólo los B-52 y los *daisy-cutters* habían hecho su trabajo. Pero para asegurar el resultado adecuado estaban a mano también los “aliados” indispensables de los regímenes mismos a los que se apuntaba. En los Balcanes, los emisarios de Yeltsin, que persuadieron a Milosevic de poner su cabeza en la horca norteamericana al retirar sus tropas intactas de sus *bunkers* en Kosovo. En Afganistán, fue Musharraf quien garantizó que la mayoría de las fuerzas talibán y sus “asesores” desaparecieran una vez que la Operación *Enduring Freedom* comenzó. En ambos países, fue el patrón externo de quien los regímenes locales habían confiado obtener protección quien les sacó la alfombra de abajo de los pies.

En Irak, sin embargo, la dictadura Ba'ath había sido siempre una estructura más resistente y elástica. Había recibido distintos apoyos diplomáticos y militares del exterior en los diferentes estadios de su carrera (incluyendo, por supuesto, a los Estados Unidos y Rusia),

pero nunca había dependido de ellos. Confiada, a pesar de esto, de que su comando superior era frágil y sobornable, Washington intentó persistentemente sobornar a los generales iraquíes para que cambiaran de abrigo, o en caso de fallar esto, simplemente asesinaran al mismo Saddam.

Una vez que todos esos intentos –aún a las once horas de comenzada la guerra– demostraron ser un fiasco, el Pentágono no tuvo otra opción que lanzar una campaña convencional por tierra. La fortaleza económica y militar del Imperio Americano siempre fue tal que –a falta de una rebelión local o una intifada árabe extendida que propagara la guerra a lo largo de toda la región– podía confiar en imponer una ocupación militar de Irak. Lo que no pudo hacer fue predecir con alguna certeza el resultado final de semejante acto de fuerza masiva.

Al final resultó que la armada árabe no se desintegró al primer disparo; había escasas señales de una ampliamente generalizada gratitud popular por la invasión y más bien signos de resistencia guerrillera, y –a medida que las muertes civiles a causa de los misiles, morteros y ofensivas con bombardeos aumentaban– de creciente indignación en el mundo árabe. Transitoriamente, las tropas Crusader tuvieron éxito en convertir a Saddam Hussein en un héroe nacionalista, y su retrato se multiplicó en las demostraciones en Amman y Gaza, Cairo y Sanaa. Al momento de escribir este artículo, los hospitales de Bagdad están repletos de heridos y moribundos, al tiempo que la ciudad está separada por tanques americanos. “Lo poseemos todo”, declara un coronel de los EE.UU., examinando la capital hecha pedazos a la manera de cualquier comandante Panzer en 1940⁵. Detrás de las columnas blindadas, el Pentágono tiene un régimen de ocupación en espera, dirigido por el ex general de los EE.UU. Jay Garner, un *dealer* de armas cercano al lobby sionista en su país de origen, con traidores surtidos –falsificadores y charlatanes de feria como Ahmed Chalabi y Kanan Makiya– en su tren de equipaje. No estará más allá de las autoridades estadounidenses el configurar lo que pueda

“...el Imperio Americano estaba usando su enorme arsenal militar para dar una lección al Sur en términos del poder del Norte, para intimidarlo y controlarlo.”

apodar un régimen representativo, con elecciones, una asamblea y demás, mientras que la “administración de transición” sin duda será financiada con la venta de activos iraquíes. Pero cualquier ilusión de que ese será un asunto fácil o tranquilo ya se ha desvanecido. Será necesaria una fuerte represión para vérselas no sólo con miles de militantes leales de Ba’ath sino también con los sentimientos patrióticos iraquíes de todo tipo, para no hablar de los requisitos para proteger a los colaboradores del desquite nacionalista.

Ya la falta de toda bienvenida espontánea por parte de los Shiitas y la feroz resistencia de los soldados irregulares armados han impulsado la teoría de que los iraquíes son “un pueblo enfermo” que necesitará un tratamiento prolongado antes de que pueda confiársele su propio destino (si es que ello sucede alguna vez). Tal fue la línea del columnista pro-Blair David Aaronovitch en el *Observer*. Del mismo modo, George Mellon en el *Wall Street Journal* advierte: “Irak no se recuperará fácilmente del terror de Saddam: luego de tres décadas de regir el equivalente árabe de *Murder Inc*, Irak es una sociedad muy enferma”. Desarrollar una “sociedad organizada” y re-energizar (privatizar) la economía llevará tiempo, insiste. En la primera plana del *The Sunday Times*, su reportero Mark Franchetti citó a un oficial del ejército americano: “Los iraquíes son un pueblo enfermo y nosotros somos la quimioterapia”, dijo el sargento Ryan Dupre. “Estoy empezando a odiar este país. Esperen a que agarre a un maldito iraquí. No, no lo voy a agarrar. Directamente lo voy a matar”. El informe –en el diario insignia de Murdoch– continúa describiendo cómo su unidad mató no a uno sino a muchos civiles iraquíes horas más tarde (*The Sunday Times*, 2003). Sin duda la teoría de la sociedad enferma adquirirá mayor sofisticación, pero está claro que los pretextos están a mano para una mezcla de Guantánamo y Gaza en estos nuevos territorios ocupados.

Naciones Unidas de América

Habrá, por supuesto, súplicas de los gobiernos europeos para que Naciones Unidas se haga cargo de las conquistas del ejército americano, que Blair, más eficaz que Bush en lo que respecta a la verborragia untuosa, apoyará por razones propias. Se escuchará hablar mucho de ayuda humanitaria, la urgencia de aliviar el sufrimiento de los civiles y la necesidad de que la comunidad internacional “vuelva a reunirse”. Mientras que no se le ceda ningún poder real, EE.UU. tiene todo para ganar de una bendición *ex post facto* otorgada a su agresión por Naciones Unidas, de manera similar a lo que sucedió en Kosovo. Los meses de lucha en las sombras en el Consejo de Seguridad –mientras, con pleno conocimiento de todas las partes, Washington alistaba su laboriosa logística para atacar a Irak– le costaron poco. Una vez que tuvo la Resolución 1441 en el bolsillo, aprobada por voto unánime –incluyendo a Francia, Rusia y China, para no hablar de Siria– el resto fue decorativo. Incluso el embajador francés en Washington, Jean-David Levitte,

había instado a los EE.UU. a no avanzar con la segunda resolución: “Semanas antes de que fuera puesta sobre la mesa fui al Departamento de Estado y la Casa Blanca a decir ‘No lo hagan... No lo necesitan’” (*Financial Times*, 2003[b]).

Fue, por supuesto, la hipocresía en Londres más que la obstinación en Washington lo que arrastró al mundo a la farsa de mayor “autorización”, sin éxito. Pero la advertencia de Levitte pone el foco sobre la naturaleza real de las Naciones Unidas que, desde el final de la Guerra Fría, ha sido poco más que un instrumento descartable de la política norteamericana. El momento decisivo en esta transformación fue la destitución de Boutros-Ghali como Secretario General, a pesar del voto a su favor por parte de cada miembro del Consejo de Seguridad excepto EE.UU., por haberse atrevido a criticar la concentración occidental en Bosnia a expensas de tragedias mucho mayores en África. Una vez que Kofi Annan –el Waldheim africano, premiado por ayudar a la administración Clinton a desviar la ayuda y la atención del genocidio en Rwanda– tomó posesión del cargo en su lugar, a requerimiento de Washington, la organización estuvo con total seguridad en manos americanas.

Esto no significa que se pueda confiar en que cumpla los deseos de los EE.UU. sobre todos los asuntos, tal como lo ha demostrado el fracaso de sus esfuerzos por asegurar un placebo para Blair. No hay necesidad de ello. Todo lo que se necesita –y está ahora disponible indefectiblemente– es que Naciones Unidas cumpla con los deseos de EE.UU., o les ponga un sello de goma después. La única cosa que no puede hacer es condenarlos u obstruirlos. El ataque a Irak, al igual que el ataque a Yugoslavia antes, es desde un punto de vista una violación descarada del estatuto de Naciones Unidas. Pero ningún estado miembro del Consejo de Seguridad soñó con llamar a una reunión de emergencia por ese tema, y mucho menos impulsar una resolución condenando la guerra. En otro sentido, hubiera sido hipócrita hacerlo, dado que la agresión se derivó en forma lo suficientemente lógica de la totalidad del encuadre vengativo del bloqueo de Naciones Unidas a Irak desde la Guerra del Golfo, que ya había agregado cientos de miles de muertos más a la reputación del Consejo de Seguridad desde su rol en Rwanda, siguiendo instrucciones americanas⁶. Apelar a partir de los EE.UU. a la autoridad de las Naciones Unidas es como esperar que el mayordomo despida al amo.

Señalar estas verdades obvias no es ignorar las divisiones que han surgido en la “comunidad internacional” respecto de la guerra en Irak. Cuando la administración Clinton decidió lanzar su ataque sobre Yugoslavia, no pudo obtener la autorización del Consejo de Seguridad porque Rusia se echó atrás, de modo que avanzó de todas formas mediante la OTAN, en la creencia correcta de que Moscú se sumaría más tarde, y que las Naciones Unidas ratificarían la guerra una vez que estuviera terminada. Esta vez la OTAN misma estaba partida en dos, de modo que no pudo ser usada como sustituto. Pero sería poco sensato asumir que el resultado será muy diferente.

Por otra parte, ésta es la primera vez desde el fin de la Guerra Fría que un desacuerdo entre el núcleo interno de la Unión Europea y los Estados Unidos explota en una fisura pública, se ve en TV y ayuda a polarizar a la opinión pública a ambos lados del Atlántico. Pero sólo una memoria periodística de corto alcance podría olvidar que una disputa incluso más dramática surgió durante la Guerra Fría misma, ocasionada por el mismo tipo de aventura en la misma región. En 1956 una expedición “unilateral” anglo-francesa, en connivencia con Israel, intentó operar un cambio de régimen en Egipto –provocando la furia de Estados Unidos, que no había sido consultado previamente y temió que la aventura abriera la puerta a la influencia comunista en Medio Oriente. Cuando Rusia amenazó con usar proyectiles para ayudar a Nasser, Eisenhower ordenó que Gran Bretaña se retirara de Egipto bajo amenaza de severas represalias económicas, y el asalto tripartito debió ser abandonado. Esta vez los roles han sido revertidos en gran medida, con Francia y Alemania protestando contra una expedición americana a la cual Gran Bretaña –el eterno perro de ataque– se ha unido.

La diferencia, por supuesto, es que ahora no hay Unión Soviética que considerar en el cálculo de la agresión, y de todos modos la mayoría abrumadora de poder reside en Estados Unidos, y no en Europa. Pero las lecciones de 1956 no han perdido su relevancia. Agudas disputas internacionales son perfectamente compatibles con la unidad básica de intereses entre las potencias capitalistas líderes que rápidamente se reafirman entre sí. El fracaso de la expedición de Suez impulsa a Francia a firmar el Tratado de Roma estableciendo la Comunidad Económica Europea, concebida en parte como contrapeso a los EE.UU. Pero el mismo EE.UU. apoyó la creación de la Comunidad Europea, cuya expansión sirve hoy a sus propósitos, mientras que la élite francesa se torna consciente de ello con gran inquietud, aunque sea muy tarde para hacer nada al respecto. El sentimiento de descontento probablemente permanezca entre Washington y París o Berlín luego de las fricciones públicas de los meses recientes, incluso si, tal como nos lo aseguran repetidamente, todas las partes se esfuerzan por dejarlo atrás. En el interior mismo de la Unión Europea, el rol de Gran Bretaña, apoyando a EE.UU. en contra de Alemania y Francia, mientras fingía ser un mediador, la ha expuesto nuevamente como el caballo de Troya de la Comunidad. Pero los días en que De Gaulle podía genuinamente combatir a América se han ido para siempre. Chirac y Blair se besarán y harán las paces muy pronto.

¿Qué es lo que debe hacerse?

Es inútil mirar en dirección a las Naciones Unidas o Eurolandia, y menos aún a Rusia o China, como obstáculos serios a los designios americanos en Medio Oriente. ¿Dónde debiera comenzar la resistencia? Antes que nada, naturalmente, en la región misma. Allí, es de desear que los invasores de Irak sean eventualmente hostilizados hasta tener que

retirarse del país por una reacción nacional creciente a la ocupación del régimen que instalen, y que sus colaboradores enfrenten el destino de Nuri Said antes que ellos. Tarde o temprano, el círculo de tiranías corruptas y brutales alrededor de Irak se romperá. Si hay un área en la que pueda demostrarse que está equivocado el cliché de que las revoluciones son cosa del pasado, es en el mundo árabe. El día que los Mubarak, Hashemite, Assad, Saudi y otras dinastías sean barridos por la indignación popular, la arrogancia americana e israelí se habrá terminado.

En la tierra imperial misma, mientras tanto, la oposición al sistema dominante debiera tomar impulso a partir del ejemplo del propio pasado norteamericano. En los últimos años del siglo diecinueve, Mark Twain, shockeado por las reacciones chauvinistas a la rebelión Bóxer en China y el embargo norteamericano de las Filipinas, hizo sonar la alarma. Había que oponerse al imperialismo, declaró. En 1899 una gigantesca asamblea en Chicago estableció la Liga Americana Anti-Imperialista. Al cabo de dos años la cantidad de miembros había crecido a más de medio millón e incluía a William James, W. E. B. DuBois, William Dean Howells y John Dewey. Hoy, cuando Estados Unidos es la única potencia imperial, se necesita una Liga Anti-Imperialista. Pero es el componente estadounidense de un frente tal el que sería crucial. La resistencia más efectiva de todas empieza por casa. La historia del ascenso y la caída de los imperios nos enseña que es cuando sus propios ciudadanos pierden la fe en la virtud de la guerra infinita y las ocupaciones permanentes que el sistema entra en retirada.

Hasta ahora, el Foro Social Mundial se ha concentrado en el poder de las corporaciones multinacionales y las instituciones neoliberales. Pero éstas siempre han descansado sobre los cimientos de la fuerza imperial. De manera consistente con ellos, Friedrich von Hayek, el inspirador del Consenso de Washington, era un firme creyente de las guerras para afianzar el nuevo sistema, apoyando el bombardeo de Irán en 1979 y de Argentina en 1982. El Foro Social Mundial debiera aceptar ese desafío. ¿Por qué no hacer campaña para el cierre de todas las bases e instalaciones norteamericanas en el exterior en las cuales Estados Unidos actualmente estaciona tropas, aviones o suministros? ¿Qué otra justificación tiene esta vasta expansión octópoda, que no sea ejercer el poderío americano? Las preocupaciones económicas del Foro no se contradicen con tal ampliación de su agenda. La economía, después de todo, es sólo una forma concentrada de política, y la guerra una continuación de ambas por otros medios.

Por el momento, estamos rodeados de políticos y expertos, prelados e intelectuales, haciendo desfilar sus conciencias en forma impresa o radial para explicar que se oponían a la guerra, pero una vez que ésta ha comenzado, la mejor manera de demostrar su amor por la humanidad es llamar a una veloz victoria de los Estados Unidos, de modo que se evite a los iraquíes todo sufrimiento innecesario. Típicamente, tales figuras no se

oponían al régimen de sanciones criminales y su dosis acompañante de bombardeos anglo-americanos semanales, que apilaron miserias sobre la población iraquí durante los doce años anteriores. El único mérito de este coro enfermante es dejar claro, por contraste, lo que implica la oposición real a la conquista de Irak.

Las tareas inmediatas que enfrenta un movimiento anti-imperialista son el apoyo a la resistencia iraquí frente a la ocupación anglo-americana, y la oposición a todo esquema que intente hacer ingresar a las Naciones Unidas en Irak como un encubrimiento retrospectivo de la invasión y el servicio post-venta de Washington y Londres. Dejemos que los agresores paguen los costos de sus propias ambiciones imperiales. Todo intento de disfrazar la re-colonización de Irak como un nuevo mandato de la Liga de las Naciones, al estilo de 1920, debiera ser puesto en evidencia. Blair estará a cargo de liderar la acción a este respecto, pero no faltarán extras europeos tras de él. Por debajo de esta campaña obscena, cuyo inicio ya puede verse en los canales de TV de Murdoch, la BBC y la CNN, está el deseo urgente de reunificar a Occidente. La vasta mayoría de las opiniones oficiales en Europa, y una parte substancial en Estados Unidos, está desesperada por comenzar el "proceso de sanación" post-guerra. La única respuesta posible a lo por venir es el lema escuchado en las calles de San Francisco esta primavera: "Ni su guerra ni su paz".

Bibliografía

Blecher, Robert 2003 "'Free People Will Set the Course of History': Intellectuals, Democracy and American Empire", in *Middle East Report Online*, march <www.merip.org>

Financial Times 2003[a] (Londres) 2 de abril.

Financial Times 2003[b] (Londres) 26 de marzo.

Foreign Affairs 2000 "Promoting the National Interest", enero-febrero.

Los Angeles Times 2003 (Los Angeles) 7 de abril.

New Left Review 2000 "Throttling Iraq" (Londres) Nº 5, septiembre-octubre, Editorial.

New York Times 2003 (New York) 2 de marzo.

The Sunday Times 2003 (Londres) 30 de marzo.

Notas

1 El presente artículo fue publicado en *New Left Review* 2003 (Londres) Nº 21, mayo-junio.

2 En *The Right Man*, David Frum, ex redactor de los discursos de Bush, sostiene que: "Un derrocamiento de Saddam Hussein liderado por EE.UU. –y un reemplazo de la dictadura radical Ba'ath por un nuevo gobierno más estrechamente alineado con EE.UU.– pondría a América más integralmente a cargo de la región que ninguna otra fuerza desde los Otomanos o quizá los Romanos".

3 Citado por Robert Blecher (2003).

4 Cuando a Kanan Makiya se le dio audiencia en la Oficina Oval en enero pasado, aduló a Bush al prometerle que “las tropas americanas invasoras serían recibidas con ‘caramelos y flores’”. La realidad resultó ligeramente diferente. Ver *New York Times*, 2003.

5 Anuncio en *Los Angeles Times* (2003). Las analogías con la guerra relámpago de Hitler en 1940 son derivadas sin remordimiento por los que vivan su apoyo a la guerra. Ver Max Boot en *Financial Times* (2003[a]): “Los franceses pelearon duro en 1940 –al principio. Pero eventualmente la velocidad y ferocidad del avance alemán llevó a un colapso total. Lo mismo sucederá en Irak”. Lo que tuvo lugar en Francia después de 1940 podría llevar a estos entusiastas a detenerse a pensar.

6 Para este trasfondo de la guerra, ver *New Left Review* (2000).

Lecciones para después de una guerra

Manuel Monereo*

* *Jurista.*

*Director de la Fundación
Europa de los Ciudadanos,
España*

Introducción

Como era de esperar, las fuerzas militares anglo-norteamericanas han conseguido destrozarse en pocos días las debilitadas defensas iraquíes y han ocupado el territorio de Iraq, que sólo metafóricamente podríamos considerar como un Estado soberano. La resistencia ha sido algo más dura de lo previsto y el supuesto de la mayoría chiíta no se ha producido. Todo apunta, pues, a que la "normalización" del país no va a ser fácil y a que los riesgos de extensión regional del conflicto siguen existiendo.

En esto, como en muchas otras cosas, las palabras usuales no son capaces de expresar la cantidad y la cualidad de los nuevos fenómenos y sus contextos. Llamar guerra a lo que ha ocurrido en Iraq supone, en principio, un engaño: la desigualdad de fuerzas es tan brutal que el agredido sabe con certeza que no podrá ganar nunca al agresor, a no ser que las condiciones políticas internacionales cambiasen

radicalmente. Este es el tipo de guerra que se impone: la superpotencia hegemónica usa su descomunal fuerza para resolver sus litigios políticos internacionales, asegurándose previamente la victoria y garantizando en todo momento que su preeminencia no se pone realmente en peligro. Como ha dicho Emmanuel Todd, se trata de guerras obscenas contra países débiles o debilitados que, precisamente porque no tienen armas de destrucción masiva, no suponen un peligro para el agresor. Robert Kagan lo ha dicho aún más claro: con Corea del Norte tenemos que negociar porque ya tiene la bomba (atómica).

Detrás de todo esto hay un problema real que Immanuel Wallerstein señaló hace años: la inevitable “democratización” de los arsenales militares, incluyendo los nucleares, biológicos y químicos. El problema reside en que esta cuestión no se resuelve por medio de la guerra, máxime cuando la gran superpotencia y sus amigos son los que detentan la supremacía en estas armas de destrucción masiva.

Estado de excepción y proceso constituyente

Algunos de nosotros venimos defendiendo desde hace tiempo que, después del 11 de septiembre, el gobierno de extrema derecha que hoy dirige EE.UU. declaró un estado de excepción, en el triple significado que este concepto tiene: como suspensión-supresión de la legalidad internacional vigente y de sus órganos; como predominio del uso de la fuerza en las relaciones internacionales; para convertir ésta en la fuente de legitimidad de una nueva constitución internacional. Ciertamente, como es sabido, ésta es una concepción que viene de lejos, representativa de un entramado de poder que engarza a multinacionales, al complejo militar industrial y a ideólogos republicanos reunidos en torno al denominado “Proyecto nuevo siglo americano”.

El objetivo de este diseño estratégico es claro: garantizar la supremacía económica, política y cultural de EE.UU. frente a sus aliados, a las potencias emergentes y al Sur

“Este es el tipo de guerra que se impone: la superpotencia hegemónica usa su descomunal fuerza para resolver sus litigios políticos internacionales, asegurándose previamente la victoria y garantizando en todo momento que su preeminencia no se pone realmente en peligro.”

del mundo. Para ello era necesario “aprovechar la ventaja” y sacar partido de la supremacía militar enormemente favorable en la correlación internacional de fuerzas.

La nueva doctrina militar norteamericana se ha organizado en torno a estos objetivos políticos: primero, impedir la aparición de una superpotencia rival que cuestione la hegemonía norteamericana; segundo, el desarrollo cuantitativo y sobre todo cualitativo de unas fuerzas armadas integradas, dotadas de una tecnología de máximo nivel y capaces de intervenir decisivamente en cualquier parte del mundo; tercero, conseguir los recursos naturales estratégicos y el predominio geopolítico; y cuarto, el control de Eurasia, que tras la desintegración del sistema soviético se ha convertido en el objetivo estratégico fundamental, asegurando el predominio, en lo que los estrategas americanos llaman el sudeste del mismo, en torno al Mar Caspio, el Golfo Pérsico y el Mar Negro.

La guerra preventiva, su concepto, implica por un lado la violación sustancial de la actual legalidad internacional, y por otro lado convertir a la guerra en un modo normal y normalizado de resolver los conflictos a nivel político internacional. El soberano (EE.UU.) impone el estado de excepción, define quién es amigo o enemigo y cuáles los términos y la legitimidad del conflicto. Volviendo a Robert Kagan, el centro del mundo debe ser EE.UU. y no el órgano jurídico determinado por la Carta de las Naciones Unidas.

Escenarios para después de una guerra

Todo apunta a que después de esta primera guerra de la globalización capitalista se articulan al menos dos escenarios previsibles, con consecuencias políticas claramente diferenciadas.

El primer escenario podría denominarse de guerra-antídoto, que consistiría básicamente en “amansar a la fiera” (EE.UU.), llevándola al redil de la legalidad internacional, intentando convertir esta guerra en algo excepcional, aminorando los daños, cediendo ante el poderoso con el objetivo de ganar tiempo a la espera de mejores condiciones. Este primer escenario tiene también un componente normativo que intenta fundar una estrategia política que haga de la guerra de agresión contra Irak un antídoto frente a conflictos futuros.

Un segundo escenario pone el acento en el carácter no coyuntural, básico, de la estrategia político-militar norteamericana. La globalización imperante requeriría en esta fase el uso de la fuerza, justamente en lo que tiene de apertura de un proceso constituyente, romper sustancialmente con un determinado régimen internacional e imponer otro más favorable. Lo decisivo es su carácter global, en varios sentidos: defender posiciones,

siempre en peligro, y apostar por unas reglas del juego (económicas, políticas, militares e ideológicas) que consoliden la hegemonía imperial norteamericana, en el sentido que Susan Strange ha analizado cuando define a una superpotencia hegemónica por su capacidad de imponer unas reglas del juego que le beneficien estructuralmente.

Como antes se indicó, ambos escenarios implican estrategias profundamente diferenciadas, aunque puedan coincidir coyunturalmente. De hecho, parece que se están sumando al primer escenario las potencias críticas europeas (Francia y Alemania) y una parte de la socialdemocracia, que de una u otra forma se ha opuesto a la estrategia político-militar norteamericana. Como es sabido, nada ayuda más a “convencer” que una victoria militar, y no hay mejor propaganda que aquella que se consigue tras el triunfo obtenido por las armas, con unos medios de comunicación siempre dispuestos a olvidar a las víctimas o, lo que es peor, a desligar los sufrimientos actuales del pueblo iraquí de una agresión injusta e ilegítima.

A la izquierda transformadora europea, al movimiento pacifista y, sobre todo, al movimiento antiglobalización, le corresponde en este momento, frente al reflujó natural que se está produciendo, avanzar en recomposición social, en organización y en crítica solvente a la militarización de las relaciones internacionales que está suponiendo y que va a suponer esta fase de la globalización imperialista. Esto hay que hacerlo con habilidad táctica, tirando al máximo de los aliados moderados y forjando relaciones estrechas con los miles de hombres y mujeres jóvenes que han protagonizado las luchas sociales y que han supuesto la emergencia de una nueva generación en la lucha política.

Consecuencias: el mundo no será como antes

Todavía es pronto para evaluar con toda su amplitud las consecuencias que para nuestro planeta va a tener esta guerra, aunque es posible, con trazo grueso, individualizar tendencias básicas sobre las que hay que volver una y otra vez para concretarlas y rastrear sus ramificaciones.

La primera consecuencia parece obvia, pero sería suicida no tenerla en cuenta: la correlación de fuerzas político-militares se ha hecho mucho más favorable a EE.UU. El tipo de guerra, o mejor dicho, la agresión realizada, ha tenido costes militares e internos escasos y consolida una superioridad estratégica de EE.UU. en una zona vital que, como antes se indicó, se ha convertido en una prioridad indiscutible de la reestructuración internacional en curso.

Una segunda consecuencia es que el movimiento antiglobalización se ha convertido en un actor internacional indiscutible. Ha sido capaz de generar políticas de alianzas amplias



© Martín Fernández

de carácter pacifista y ha señalado con mucha precisión el carácter no coyuntural de esta guerra y su relación intrínseca con la globalización capitalista.

La tercera consecuencia tiene que ver con Europa en general y con la Unión Europea en particular. La división producida y la articulación de dos bloques frente al hegemonismo

norteamericano ilustran mucho sobre las contradicciones del proyecto europeo y obligan a la izquierda transformadora a una reflexión de fondo. De un lado, queda claro que las contradicciones en el seno del bloque imperialista se han hecho evidentes y que no parece que vayan a disminuir en el futuro; por otro lado, la ampliación al Este, que ingenuamente la mayoría de la izquierda ha apoyado, va a tener como consecuencia inmediata un retroceso del desarrollo político de la integración y un nuevo "caballo de Troya" de EE.UU. en la Unión Europea.

El problema no residía en oponerse sin más a la ampliación, sino en la necesidad de realizar las reformas políticas, económicas y ecológicas imprescindibles para que la ampliación no significase un bloqueo político y una más que previsible "guerra entre pobres". La izquierda debería huir de subestimar las contradicciones inter-imperiales, así como también de sobreestimarlas. Que las contradicciones existen, no cabe la menor duda; pero que éstas lleven a un antagonismo entre las superpotencias, es otra cosa bien distinta. Es más, si no se sabe defender la propia autonomía, se corre el peligro de convertirse en la base de masas de la burguesía propia.

La cuarta consecuencia tiene que ver con las Naciones Unidas y con el ordenamiento constitucional internacional. El peligro que se corre es que las Naciones Unidas acaben por convertirse en un instrumento de legitimación de la política exterior norteamericana, es decir, que se ocupen de todo y que los EE.UU. decidan lo fundamental. Basta leer el reciente libro de Robert Kagan (2003), así como las opiniones de gente como R. Perle o W. Mosley, para comprender que la administración norteamericana no va a admitir ningún freno a sus decisiones de guerra preventiva y que considera natural que el Consejo de Seguridad se pliegue a ellas. Cualquier otra actitud la considera inaceptable e imposible de asumir. El movimiento de los movimientos y la izquierda deberían poder com-

binar la defensa clara de la legalidad internacional con la necesaria democratización de Naciones Unidas, en lo que podríamos llamar una estrategia de “defensa crítica”.

Ciertamente, el nuevo escenario internacional que se está configurando va a significar un incremento sustancial de los presupuestos militares, un nuevo impulso de la carrera armamentística y una militarización acelerada de las relaciones internacionales. Parece también claro que después de esta guerra a los llamados “estados canallas” no les queda otra alternativa que hacerse con armas de destrucción masiva lo antes posible, con el objetivo implícito de evitar una agresión norteamericana.

Ahora bien, EE.UU. sale victorioso en lo que podemos llamar guerras desiguales, pero aparecen en el horizonte, con más fuerza que antes, lo que se ha dado en llamar los conflictos asimétricos. Como es sabido, con este nombre se denomina a aquellos conflictos que no siguen las reglas normales de la guerra, que golpean al enemigo en centros económicos, tecnológicos y mediáticos, y que configuran a la retaguardia del contendiente como lugar posible de intervención.

No es casual que quienes se han dedicado a llamar la atención sobre la emergencia de un nuevo tipo de conflictos existentes cuando la superpotencia tiene una superioridad militar indiscutible y la usa sean dos destacados estrategas militares chinos, Qiao Liang y Wang Xiangsui, en su libro *Guerra sin límites*.

Globalización, guerra y sujetos alternativos

La guerra contra Irak ha configurado dos grandes partidos en el mundo en torno a los cuales se han formado bloques político-sociales en una oposición manifiesta.

De un lado, el partido de la guerra, organizado en torno a los EE.UU., defensor de la guerra preventiva, del uso permanente de la fuerza militar para resolver los conflictos internacionales, marginando implícita o explícitamente una legalidad internacional que considera superada por los nuevos tiempos.

De otro lado, el partido de la paz, aglutinado en torno al movimiento antiglobalización, defensor de una paz basada en la justicia, en la legalidad internacional y en unas relaciones internacionales democráticas e igualitarias. En medio, estados con contradicciones entre sí y una opinión pública que ha visto en el partido de la paz la primera oposición real a la globalización imperialista. De lo que se trata ahora es de consolidar este bloque de oposición en lo que ha sido su mejor activo: la crítica sustancial al desorden existente, la propuesta alternativa y la movilización social.

El movimiento de los movimientos está expresando demandas y necesidades sociales que requieren de una convergencia activa con la izquierda que continúa siéndolo y que no se ha dejado neutralizar por las cantinelas de la globalización y del pensamiento neoliberal.

La primera cuestión que emerge es que estamos, por primera vez, ante un movimiento internacional que defiende una política internacionalista. La lucha por la paz, por el desarme, por nuevas relaciones económicas más justas y por la superación real del subdesarrollo, del hambre y de la pobreza, debe ser el punto central de una estrategia que tenga como objetivo la liberación de la especie humana.

En segundo lugar, emerge la demanda de una nueva relación entre la ética y la política. La consigna no es otra que partir del supuesto de que en los medios están los fines, y que el realismo debe combinarse con una plataforma ética que haga de la política la actividad cotidiana de los colectivos humanos en su larga lucha por la emancipación.

En tercer lugar, las consignas que expresamente denunciaban la existencia de una crisis de representación política que reclama urgentemente una democratización sustancial del poder en contextos de unos sistemas en procesos de oligarquización crecientes, sitúan el problema de la democracia participativa en el centro del debate público. Si no se intentan formas nuevas de agregación e intervención de las poblaciones, se seguirá produciendo una separación creciente entre éstas y la política, bloqueando cualquier posibilidad de cambio y propiciando una derrota más del movimiento.

Por último, habría que señalar que el movimiento también exige una nueva forma de compromiso político. Para decirlo con claridad, sin ejemplaridad, sin coherencia entre lo que se piensa y se hace, no habrá regeneración de la política y las relaciones con los movimientos serán pura palabrería electoralista. La gente no va a perdonar la mentira y la hipocresía.

Bibliografía

Kagan, Robert 2003 *Poder y debilidad* (Madrid: Taurus).

Liang, Qiao y Xiangsui, Wang 2001 *Guerra sin límites* (Editorial Goriziana).

Documentos

Declaración del Iº Encuentro Hemisférico frente a la Militarización

**San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas, México
9 de mayo de 2003**

Por la humanidad y contra el neoliberalismo fue el llamado zapatista que convocó al mundo entero a reunirse en la selva Lacandona en 1996, para compartir esperanzas y utopías, análisis y experiencias, preocupaciones y voluntades. Las resistencias al modelo único de dominación y pensamiento, que se remontan a más de 500 años en la historia de nuestros pueblos, se han multiplicado desde entonces. La rebelión contra el imperio, contra el empobrecimiento de nuestros pueblos en tierras de gran riqueza, contra la desaparición de nuestras culturas y capacidad de autodeterminación, ha enfurecido a los grandes poderes. Militarización general es su respuesta a nuestra rebeldía; organización, resistencia y lucha es la nuestra.

Por la desmilitarización de las Américas es el grito que hoy nos convoca a estas generosas tierras chiapanecas. Hemos venido desde 28 distintos países para reiterar la voluntad de autodeterminación y defensa de nuestros territorios y recursos, la decisión de construir una paz justa y digna para todos los pueblos, para compartir y celebrar las experiencias de resistencia en América Latina y el Caribe, como la salida de la Marina estadounidense de Vieques, y para reiterar el compromiso de seguir luchando hasta lograr la desmilitarización del Continente.

Nosotros y nosotras, los 929 participantes al Iº Encuentro Hemisférico frente a la Militarización¹, realizado en San Cristóbal de las Casas del 6 al 9 de

mayo de 2003, representantes de organizaciones y movimientos sociales comprometidos con la construcción de sociedades igualitarias, solidarias, pacíficas y amantes de la diversidad, hemos conjuntado ideas y voluntades para delinear alternativas de paz frente a los renovados afanes bélicos estadounidenses, que marcan las características del escenario con el que se inicia el siglo XXI: la guerra infinita y la militarización son la otra cara de la competencia y la economía de mercado. Sus medios de expresión más elocuentes son los ejércitos y las instituciones financieras internacionales, como el FMI y el Banco Mundial. Las políticas de ajuste, privatización generalizada y endeudamiento creciente de los países latinoamericanos y caribeños; los bloqueos como el impuesto a Cuba, embargos y crisis inducidas, así como la colaboración y sometimiento de los ejércitos regionales a las disposiciones e intereses de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, son las principales herramientas con las que el sistema de poder intenta doblegar la resistencia de los pueblos y saquear sus riquezas, generalmente con la complicidad entusiasta de los gobiernos locales.

La militarización conlleva graves violaciones de los derechos humanos, donde las mujeres suelen llevar la peor parte; destruye comunidades tradicionales de los pueblos indígenas; incrementa la migración forzada de millones de personas; la destrucción del medio ambiente; y la represión de los movimientos populares y los procesos democráticos y soberanos. Los pueblos luchamos por la vida, la militarización siembra muerte.

El proceso de militarización regido por las fuerzas de seguridad estadounidenses vulnera la soberanía de los pueblos, propiciando intervenciones, ejercicios y patrullajes, entrenamiento de efectivos nacionales, instalación de radares, sistemas de vigilancia e inteligencia satelitales y terrestres, cuando no instalación directa de bases militares en todo el continente.

El poderío militar de Estados Unidos apunta al control y saqueo de recursos naturales como petróleo, agua, biodiversidad y otros, en los que América Latina guarda invaluables riquezas. Mediante ese saqueo se devasta comunidades humanas y naturales, se depreda el medio ambiente y se cancelan posibilidades de futuro a nuestros pueblos.

La invasión a Irak es la barbarie más reciente de esta estrategia. Es un crimen contra el pueblo iraquí, contra el pueblo y la ancestral cultura árabe y contra la humanidad. Los yacimientos de petróleo y la voluntad de permanecer insu- miso, condenó a ese pueblo a la destrucción más salvaje. La arremetida contra los países colocados en el llamado "eje del mal" tiene un claro perfil de guerra neocolonial. Todos somos carne para el imperio, todos somos iraquíes.

Con explícitos intereses de imponer su dominación, Estados Unidos ha desatado una verdadera cruzada contra los pueblos, países y movimientos que luchan por autodeterminación. Las ocupaciones e intervenciones económicas y militares, como el Plan Colombia, Plan Puebla Panamá, Plan Dignidad, TLCAN, ALCA e Iniciativa Andina buscan doblegar la insurgencia, mantener el dominio de las grandes corporaciones sobre los recursos naturales y regir los destinos de la región.

Con el convencimiento de que “un mundo de paz es posible” nosotros y nosotras hacemos un llamado urgente a los pueblos y gobiernos de la región a asumir conjuntamente el compromiso de:

Exigir el retiro inmediato de todas las bases y efectivos militares (de operación e inteligencia) de Estados Unidos que se encuentran actualmente en territorio latinoamericano y caribeño.

Exigir la cancelación de todos los ejercicios y entrenamientos militares supervisados por las fuerzas armadas de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

Impedir la creación de cuerpos de seguridad privados, militares, paramilitares y policíacos en nuestros países. Exigir que los ejércitos nacionales respeten los derechos humanos, actúen con transparencia y en el marco de las constituciones nacionales.

Rechazar, y exigir lo mismo de los gobiernos de la región, el argumento de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico como justificación para la intervención de los Estados Unidos en las políticas y territorios de nuestros países.

Impulsar el desarme inmediato y la reorientación de los recursos multimillonarios que se invierten en armas hacia las necesidades de los pueblos, tales como educación, salud, y el fomento de la diversidad y la igualdad entre los géneros.

Defender los principios de soberanía, cultura de paz y justicia económica y social, como ejes centrales para el delineamiento de todo proyecto nacional e internacional.

Restablecer la comunidad de naciones como organismo promotor de la paz mundial y el desarrollo, regida por principios de igualdad entre los Estados y de respeto integral a los derechos humanos.

Desarrollar acuerdos de solidaridad e intercambio que atiendan a los intereses y necesidades de los pueblos de la región y no al interés de un solo país. Tal

es el caso del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas –ALCA–, que no sólo vulnera los intereses de los pueblos sino también los derechos humanos.

Cuestionar el deplorable papel que juegan los medios de comunicación masiva al servir como instrumento de propaganda bélica solapando el atropello que se perpetra en Irak, Palestina y tantas otras partes. Exigirles prácticas éticas y transmisión de información responsable, basada en fuentes múltiples y fidedignas y fortalecer los medios de comunicación democráticos y alternativos.

Nosotros y nosotras, representantes de 28 países² presentes en este Iº Encuentro Hemisférico frente a la Militarización, nos comprometemos a continuar luchando por un mundo de paz impulsando *la Campaña por la desmilitarización de las Américas y la construcción de una paz a la altura de la dignidad de nuestros pueblos*.

¡Para callar las armas, hablemos los pueblos!

Una América desmilitarizada es posible

Notas

1 Convocado por el Grito de los Excluidos/as, Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas, Jubileo Sur/Américas, Nonviolence International, Red Chiapaneca Frente al Neoliberalismo.

2 República Dominicana, Haití, Cuba, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Canadá, Estados Unidos, México, Italia, Inglaterra, España, Francia, Grecia, Filipinas, Palestina y Nigeria.

El Consenso de Paz de Yakarta

Yakarta, 21 de mayo de 2003

Introducción

A pesar de toda la muerte y destrucción causada por la invasión estadounidense a Irak, la misma ha dado origen a un movimiento mundial antibélico verdaderamente sorprendente e histórico, al que incluso el New York Times se vio obligado a llamar "la otra superpotencia mundial". No hay mejor demostración de la innegable significación de este movimiento que las marchas masivas coordinadas internacionalmente, que ocurrieron el pasado 15 de febrero en el mundo entero. Tras la invasión y ocupación de Irak a manos de una de las superpotencias, hubo en Yakarta una inmediata reunión de representantes de esta otra superpotencia con el fin de evaluar la coyuntura actual, delinear sus próximos planes e idear su estrategia futura.

La conferencia organizada de apuro que se llevó a cabo en Yakarta, Indonesia, entre el 19 y el 21 de mayo de 2003 estaba abierta a todos. Algunos de los participantes vienen de algunas de las mayores coaliciones y agrupaciones por la paz nacionales y regionales de todo el mundo.

Entre ellas se encontraron representantes de la Alianza Asiática por la Paz, una extensa red de organizaciones contra la guerra de toda Asia; la coalición británica *Stop the War*, que organizó las históricas manifestaciones de Londres;

Unidos por la Paz y la Justicia, la mayor coalición antibelicista de Estados Unidos; el Foro Social Italiano, organizadores clave de la marcha de un millón de personas del año pasado durante el Foro Social Europeo; la coordinadora *No to War* de Estambul, responsable de las movilizaciones masivas de Turquía; y *Books not Bombs*, un movimiento de estudiantes de secundaria de Australia, así como un abanico de otras coaliciones antibélicas nacionales.

También estuvieron representados los activistas iraquíes por la democracia, los organizadores del próximo Foro Social Mundial de India, delegadas de la Marcha Mundial de las Mujeres, sindicatos de Indonesia, el Foro Sudafricano Antiprivatización, *Greenpeace*, *Focus on the Global South* y Jubileo Sur. También quisieron concurrir, pero se les negó la visa para entrar a Indonesia, delegados de Pakistán y Palestina y un exiliado iraquí en Japón.

Los participantes provenían de los siguientes países: Afganistán, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Corea, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Hong Kong, India, Indonesia, Irak, Israel, Italia, Japón, Líbano, Malasia, Nicaragua, Países Bajos, Reino Unido, Sudáfrica, Timor Oriental, Túnez y Turquía.

Luego de tres días de intensos debates y discusiones, los participantes forjaron en conjunto el "Consenso de Paz de Yakarta", una declaración de unidad y un plan de acción específico que han acordado proponer a los movimientos mundiales por la paz y la justicia. El Consenso se traducirá al árabe, al francés, al castellano, al bahasa indonesio, al italiano, etc., y se presentará ante la próxima reunión antibélica internacional en Evian, este 31 de mayo.

Declaración de unidad

Los abajo firmantes, activistas por la paz y la justicia en representación de movimientos y redes sociales de 26 países de Asia, Europa, Australia, África, Latinoamérica y América del Norte, nos hemos reunido en Yakarta, Indonesia. Durante los tres últimos días hemos expresado nuestro agravio ante la escalada de la agresión militar liderada por el gobierno de EE.UU., más recientemente contra Irak.

Declaramos que la guerra y la invasión de Irak son injustas, ilegales e ilegítimas, y llamamos a la comunidad internacional a condenar esta agresión encabezada por EE.UU. Exigimos el retiro inmediato de todas las fuerzas extranjeras de Irak y que se permita a los iraquíes determinar su futuro de acuerdo con el principio de autodeterminación. Esta conferencia exhorta a todos los gobiernos a no reconocer ningún régimen establecido en Irak por los ocupantes estadounidenses.

Proponemos a los movimientos por la paz y la justicia establecer un tribunal popular internacional para juzgar a quienes perpetraron la guerra e investigar crímenes de guerra. Los aliados para la guerra deben asumir la responsabilidad política, moral y económica de sus crímenes.

Esas responsabilidades incluyen pagarle directamente a los iraquíes indemnizaciones de guerra, ya que deben ser ellos mismos quienes administren la reconstrucción de su país independientemente del control de corporaciones extranjeras, el Banco Mundial, el FMI y la ONU. De modo similar, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU deben asumir la responsabilidad por los efectos de más de diez años de sanciones. Reclamamos la anulación de toda la deuda iraquí. Al mismo tiempo señalamos la hipocresía del gobierno de EE.UU. cuando pide esta cancelación para beneficiar sus propios objetivos, mientras exige el pago de onerosas deudas a todos los demás países en desarrollo.

Mientras los tanques y las bombas destruían Irak, en la no muy lejana Palestina las fuerzas armadas israelíes apoyadas por EE.UU. continuaban asesiando, acosando y encarcelando al pueblo palestino con medidas que recordaban la Sudáfrica del *apartheid*. Nos comprometemos a la lucha internacional por el fin de la ocupación colonial de Palestina, y llamamos al dismantelamiento de todos los asentamientos israelíes y el derecho de retorno para todos los refugiados palestinos. Condenamos la continua interferencia estadounidense en Palestina y exigimos el reconocimiento de los derechos nacionales palestinos como condición previa para la paz justa y por lo tanto duradera en la región.

A nuestros ojos la invasión de Irak es parte de una guerra económica permanente contra los pueblos del Sur. Sometido a las normas del FMI/Banco Mundial y la OMC, nuestro mundo está tornándose cada vez más injusto y desigual. La conferencia de la OMC en Cancún, México, en septiembre, será otro foro en el que los dirigentes del mundo imperialista planificarán sus estrategias. Están sumiendo el mundo en una serie de guerras en busca de petróleo, de hegemonía económica y política, y para garantizar la sumisión de la clase obrera y las masas empobrecidas.

En nombre de la lucha contra el "terrorismo" el gobierno de EE.UU. ha creado un concepto imposible de defender, la guerra preventiva. Bajo este estandarte atacó a Afganistán ayer, a Irak hoy, mientras que los blancos del mañana pueden ser Siria, Irán, Corea del Norte, Venezuela, Colombia, Cuba o cualquier otra nación que EE.UU. considere como opuesta a sus intereses políticos y económicos.

Notamos con preocupación la creciente militarización del mundo, expresada en guerras tanto abiertas como encubiertas y en la proliferación de bases militares estadounidenses y mayores presupuestos y operaciones militares. También nos oponemos a los actos de agresión, sean contra el pueblo de Aceh, Mindanao, Cachemira o Kurdistán.

En este ambiente de militarismo, aumenta el acoso policial a las comunidades marginadas, los inmigrantes y las minorías étnicas. Llamamos al desarme global. En particular exigimos el decomiso de todas las armas nucleares. Apoyamos el llamado a convertir a Medio Oriente en una zona sin armas de destrucción masiva, sin olvidar a Israel, el Estado con mayor capacidad destructiva.

Estamos resueltos a seguir construyendo el movimiento internacional por la paz y la justicia, que demostró su fuerza de forma tan contundente entre el 14 y el 16 de febrero de 2003, cuando millones de personas marcharon en todo el mundo contra la guerra de invasión a Irak.

Nuestros principios abarcan la construcción de un internacionalismo auténtico desde abajo, donde estableceremos una nueva comunidad internacional basada en la equidad y la democracia. Nuestro trabajo es internacional, pero también desafiaremos a nuestros propios gobiernos nacionales cuando sus políticas contribuyan a la guerra, al militarismo y al neoliberalismo.

Nos oponemos a la guerra en todas sus formas, sea abierta y declarada entre Estados o contra los movimientos sociales, económica contra los pueblos pobres del mundo, o contra activistas políticos y opositores al orden dominante. Nuestro objetivo es mantener la unidad más amplia posible entre nuestras diversas organizaciones, incluyendo organizaciones de la comunidad islámica, grupos ecologistas y movimientos contra el racismo y el sexismo.

Nuestro trabajo estará enlazado con los crecientes movimientos sociales y clasistas que resisten la globalización neoliberal, puesto que la guerra con bombas y fusiles es apenas la expresión más sangrienta de la dominación del neoliberalismo y el imperialismo.

Exhortamos a todas las organizaciones, movimientos sociales y personas que comparten nuestro análisis y plan de acción a unirse a nuestros esfuerzos comunes orientados a la creación de una red mundial de solidaridad por la paz global en el futuro, en particular durante las reuniones en Evian (cumbre del G-8), Cancún (Conferencia de la OMC), los foros sociales regionales y el próximo Foro Social Mundial de Mumbai.

Creemos que un mundo sin guerras, explotación, desigualdad, pobreza y represión es posible. Vemos la realidad de esta alternativa en los crecientes movimientos de jóvenes, mujeres, trabajadores, estudiantes, migrantes, desempleados, activistas por la paz y la justicia y ciudadanos que están aportando su espíritu, energía y trabajo a la lucha por la auténtica paz basada en la justicia global para todos los pueblos del mundo.

Plan de acción frente a la globalización y el militarismo

Apoyamos el llamado de la Asamblea Hemisférica y Global contra el ALCA y la OMC a una semana de acciones contra la OMC durante su conferencia ministerial en Cancún, México. Exhortamos en particular a que las organizaciones antibélicas y populares se movilicen contra la OMC el 9 de septiembre y contra la globalización y la guerra el 13 de septiembre. Apoyamos el llamado de la reciente conferencia de Chiapas contra la militarización para un “boicot dirigido” a Coca Cola, McDonald’s, Texaco, CNN y Fox durante esa semana de protesta.

Condenamos la creciente atmósfera macartista promovida en Estados Unidos por el gobierno de Bush. Llamamos a una campaña de “El mundo le dice no a Bush” que culmine durante la convención republicana que se realizará en septiembre de 2003 en Nueva York. Esta campaña tendría como objetivo movilizar a millones de personas de todo el mundo en un plebiscito mundial contra la legitimidad del “emperador” Bush.

Llamamos a centrarnos estratégicamente en el asunto de la proliferación de bases militares estadounidenses en todo el mundo. Nos comprometemos a trabajar hacia un día mundial de acciones contra estas bases en el primer semestre de 2004, que será coordinado por la Alianza Asiática por la Paz.

En respuesta a la escalada mundial de los gastos militares, exhortamos a una campaña mundial por el desarme general. Invitamos a los grupos por la paz y por el desarme que no estuvieron representados en Yakarta a comunicarse con nuestra red para facilitar iniciativas coordinadas, entre las que podría contarse un día mundial de acciones.

Apoyamos la realización de un día de acciones contra las compañías saqueadoras, en particular Halliburton y Bechtel, así como sus empresas subsidiarias. Esta acción se coordinará mediante un grupo de trabajo surgido de esta conferencia.